Gaceta Parlamentaria

LXI LEGISLATURA Segundo Receso, Primer Año	Miércoles 28 de Julio de 2010	*No.13* *TOMO I*

CONTENIDO TOMO I

ORDEN DEL DÍA……..……..…….. **7**

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR……..…….. **17**

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Gobernación

Ocho oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. …….……..…….. **26**

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:

Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …….……..…….. **32**

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 211 y 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, 644 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. **34**

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las actas de las reuniones de trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; y de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional de dicho Parlamento, celebradas los días 8 y 9 de julio del año en curso, en Panamá. …….……..…….. **36**

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

De los Diputados Lorena Corona Valdés, Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Carlos Ramírez Marín y del Sen. Javier Orozco Gómez, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan

las fracciones IX al artículo 14 y XV al artículo 33 de la Ley General de Educación. …..…….. **37**

Del Dip. César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 415 del Código Penal Federal. ..……..**58**

De la Dip. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. …. **61**

Del Sen. Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social. ……..…. **77**

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 y se deroga el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera y se derogan las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos. ……..…. **82**

Del Dip. Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo, la fracción I y el inciso c) y la fracción II del artículo 20 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 33 de la Ley de Nacionalidad. ……..…. **84**

Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..…. **93**

Del Sen. Rogelio Rueda Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 69-E, 69-G y 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ……..…. **97**

De la Dip. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal. …….……. **102**

Del Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ….……..……. **107**

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE, Sen. Carlos Navarrete Ruiz**; VICEPRESIDENTE,** Sen. Francisco Agustín Arroyo Vieyra; **VICEPRESIDENTE,** Sen. José González Morfín; **SECRETARIO,** Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez; **SECRETARIO,** Dip. Óscar Saúl Castillo Andrade; **SECRETARIO,** Dip. Armando Ríos Piter; **SECRETARIO.** Dip. Pablo Escudero Morales**.**

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

Diez, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en Mérida. ……..……..……. **112**

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se considera que han quedado superadas diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al reciente proceso electoral. ……..……..……. **131**

Por el que se exhorta a los diputados del LIX legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala a actualizar su legislación, específicamente las disposiciones que sancionen el abuso, violación y explotación sexual infantil. ……..……..……..……. **139**

Por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal a implementar las acciones necesarias para restaurar el orden público y el estado de derecho en el municipio de San Juan Copala. ……..……..……. **144**

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación investigar y atender de manera pronta y expedita, los casos de intolerancia religiosa denunciados en municipios con una alta población indígena. ……..……..……. **149**

Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a promulgar diversas leyes y ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión. ……..……..……. **153**

Por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada entidad federativa a implementar las acciones legislativas pertinentes que permitan expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar sus códigos penales, buscando la adecuada armonización con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia. ……..……..……. **156**

Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a garantizar el debido proceso legal que se sigue en contra de Osvaldo Aristóteles Morgan Colón, presunto responsable del homicidio cometido en contra de la joven Alí Dessiré Cuevas Castrejón. ……..……. **162**

Por el que se da por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a transparentar el proceso de licitación pública por el que se contrataron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, adquisición de material y documentación electoral para el proceso electoral del estado. ……..……..……. **165**

Con relación a las agresiones sufridas por los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Minero en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. ……..……..……. **171**

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones que la dependencia a su cargo efectúa para continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata de los CC. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. ……..……. **177**

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir la publicación inmediata del Decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 - 1964, aprobadas el 29 de abril de 2010. ……..……. **181**

Con relación a los procesos penales en contra de los expolicías de Hidalgo y los centros penitenciarios y de readaptación social. ……..……. **184**

Por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía un informe detallado sobre los medios con que se dará certeza a la población de la confiabilidad del manejo de su información, veracidad, mecanismos de seguridad, resguardo y validación de la información del censo de población y vivienda 2010. ……..……. **192**

Por el que se solicita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe pormenorizado sobre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación que esa institución ha proporcionado a los niños que resultaron con lesiones graves como producto del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. ……..……. **196**

Por el que se exhorta a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a emitir un informe detallado de los trabajos que ha realizado la dependencia a su cargo para la elaboración del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.. **199**

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incluir a las niñas y niños huérfanos del país como beneficiarios del Programa Oportunidades. ……..……. **202**

Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo tanto Federal como locales a informar sobre los montos y criterios de asignación y contratación de publicidad gubernamental con los distintos medios de comunicación escritos y electrónicos, durante sus respectivos mandatos. ……. **208**

Por el que la Comisión Permanente se congratula y envía una cordial felicitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ocasión del vigésimo aniversario de su creación. …. **212**

En torno a las barrancas en el Distrito Federal. …….. **215**

Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar y rendir un informe detallado sobre la injerencia del crimen organizado en la Cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado “Gigante Uno”. ….. **220**

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del Presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o close caption. ……... **224**

Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información sobre si legisladores de la LXI Legislatura han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia

organizada, de acuerdo a una publicación de circulación nacional en su edición del 13 de junio del presente. ……... **227**

Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atraer y resolver conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales. ……... **230**

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no extender invitación a efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia y España. …….……... **234**

En torno al caso del C. Raúl Hernández Abundio. …….……... **237**

Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de las autoridades federales y del estado de México en el caso de San Salvador Atenco. …….……... **242**

Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los 16 órganos político-administrativos a instrumentar acciones dentro de los centros de desarrollo infantil del Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de protección civil, seguridad y administración de riesgos. …….…….……... **247**

Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo relativo a la renuncia y nombramiento de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ……... **252**

Por el que se exhorta a las autoridades competentes del Distrito Federal a garantizar el respeto al uso de suelo de área verde para el polígono que comprende el Parque Reforma Social. ……... **254**

Por el que la Comisión Permanente externa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su preocupación por la definición de la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 85/2010, que establece un límite superior al salario base de cotización de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal aplicable en el cálculo de las pensiones por otorgar, que puede perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al IMSS. …….…... **257**

De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades a implementar las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud relacionadas con la erradicación mundial del sarampión en el 2015. …….…... **261**

Por el que la Comisión Permanente manifiesta su preocupación y rechazo a los actos cometidos en contra de nuestros connacionales por una organización en Utah, Estados Unidos de América denominada "Ciudadanos preocupados por Estados Unidos". …….…... **265**

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública un informe detallado sobre los resultados obtenidos del Programa Escuela Segura en el período 2007-2009. …….…... **268**

Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia establecer un sistema de atención vía telefónica, a través de un número nacional único, para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; y se exhorta a las entidades federativas a integrar en sus planes y programas de trabajo la prevención y atención de la violencia contra la niñez. …….... **271**

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud un informe sobre la negativa de diversos hospitales y centros de salud a realizar la prueba de diabetes gestacional a mujeres embarazadas. **275**

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud un informe antes de que inicie el ciclo escolar 2010-2011 sobre las acciones que tomarán para reducir los casos de padecimiento auditivos en niños. …….…….... **278**

De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se cita a comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente al Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, al Director General de la estación de televisión XEIPN Canal 11 y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. …….…….... **280**

Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a aplicar el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102. 3 de FM. ……... **285**

En torno al patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC., relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación. …….…….... **289**

Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que coordinen esfuerzos con el Gobierno del estado de Chiapas para canalizar los apoyos necesarios y atender las afectaciones causadas por la onda tropical número 12, que ha provocado daños en las regiones Costa y Soconusco de dicha entidad. …….…….... **294**

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe de los programas y proyectos de prevención y mitigación en las zonas de alto riesgo de las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla. ……..…….…….... **298**

CONTINÚA TOMO II

ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones y correspondencia.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Gobernación

Ocho oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:

Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 211 y 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, 644 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las actas de las reuniones de trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; y de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional de dicho Parlamento, celebradas los días 8 y 9 de julio del año en curso, en Panamá.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

De los Diputados Lorena Corona Valdés, Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Carlos Ramírez Marín y del Sen. Javier Orozco Gómez, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX al artículo 14 y XV al artículo 33 de la Ley General de Educación.

Del Dip. César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 415 del Código Penal Federal.

De la Dip. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Del Sen. Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social.

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 y se deroga el primer párrafo del artículo 16

de la Ley de Inversión Extranjera y se derogan las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos.

Del Dip. Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo, la fracción I y el inciso c) y la fracción II del artículo 20 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 33 de la Ley de Nacionalidad.

Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Sen. Rogelio Rueda Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 69-E, 69-G y 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la Dip. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.

Del Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

Diez, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en Mérida.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se considera que han quedado superadas diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al reciente proceso electoral.

Por el que se exhorta a los diputados del LIX legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala a actualizar su legislación, específicamente las disposiciones que sancionen el abuso, violación y explotación sexual infantil.

Por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal a implementar las acciones necesarias para restaurar el orden público y el estado de derecho en el municipio de San Juan Copala.

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación investigar y atender de manera pronta y expedita, los casos de intolerancia religiosa denunciados en municipios con una alta población indígena.

Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a promulgar diversas leyes y ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión.

Por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada entidad federativa a implementar las acciones legislativas pertinentes que permitan expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar sus códigos penales, buscando la adecuada armonización con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.

Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a garantizar el debido proceso legal que se sigue en contra de Osvaldo Aristóteles Morgan Colón, presunto responsable del homicidio cometido en contra de la joven Alí Dessiré Cuevas Castrejón.

Por el que se da por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a transparentar el proceso de licitación pública por el que se contrataron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, adquisición de material y documentación electoral para el proceso electoral del estado.

Con relación a las agresiones sufridas por los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Minero en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones que la dependencia a su cargo efectúa para continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata de los CC. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir la publicación inmediata del Decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 - 1964, aprobadas el 29 de abril de 2010.

Con relación a los procesos penales en contra de los expolicías de Hidalgo y los centros penitenciarios y de readaptación social.

Por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía un informe detallado sobre los medios con que se dará certeza a la población de la confiabilidad del manejo de su información, veracidad, mecanismos de seguridad, resguardo y validación de la información del censo de población y vivienda 2010.

Por el que se solicita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe pormenorizado sobre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación que esa institución ha proporcionado a los niños que resultaron con lesiones graves como producto del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Por el que se exhorta a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a emitir un informe detallado de los trabajos que ha realizado la dependencia a su cargo para la elaboración del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incluir a las niñas y niños huérfanos del país como beneficiarios del Programa Oportunidades.

Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo tanto Federal como locales a informar sobre los montos y criterios de asignación y contratación de publicidad gubernamental con los distintos medios de comunicación escritos y electrónicos, durante sus respectivos mandatos.

Por el que la Comisión Permanente se congratula y envía una cordial felicitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ocasión del vigésimo aniversario de su creación.

En torno a las barrancas en el Distrito Federal.

Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar y rendir un informe detallado sobre la injerencia del crimen organizado en la Cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado “Gigante Uno”.

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del Presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o close caption.

Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información sobre si legisladores de la LXI Legislatura han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada, de acuerdo a una publicación de circulación nacional en su edición del 13 de junio del presente.

Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atraer y resolver conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales.

Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no extender invitación a efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia y España.

En torno al caso del C. Raúl Hernández Abundio.

Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de las autoridades federales y del estado de México en el caso de San Salvador Atenco.

Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los 16 órganos político-administrativos a instrumentar acciones dentro de los centros de desarrollo infantil del Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de protección civil, seguridad y administración de riesgos.

Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo relativo a la renuncia y nombramiento de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Por el que se exhorta a las autoridades competentes del Distrito Federal a garantizar el respeto al uso de suelo de área verde para el polígono que comprende el Parque Reforma Social.

Por el que la Comisión Permanente externa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su preocupación por la definición de la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 85/2010, que establece un límite superior al salario base de cotización de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal aplicable en el cálculo de las pensiones por otorgar, que puede perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al IMSS.

De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades a implementar las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud relacionadas con la erradicación mundial del sarampión en el 2015.

Por el que la Comisión Permanente manifiesta su preocupación y rechazo a los actos cometidos en contra de nuestros connacionales por una organización en Utah, Estados Unidos de América denominada “Ciudadanos preocupados por Estados Unidos”.

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública un informe detallado sobre los resultados obtenidos del Programa Escuela Segura en el período 2007-2009.

Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia establecer un sistema de atención vía telefónica, a través de un número nacional único, para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; y se exhorta a las entidades federativas a integrar en sus planes y programas de trabajo la prevención y atención de la violencia contra la niñez.

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud un informe sobre la negativa de diversos hospitales y centros de salud a realizar la prueba de diabetes gestacional a mujeres embarazadas.

Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud un informe antes de que inicie el ciclo escolar 2010-2011 sobre las acciones que tomarán para reducir los casos de padecimiento auditivos en niños.

De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

Por el que se cita a comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente al Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, al Director General de la estación de televisión XEIPN Canal 11 y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a aplicar el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102. 3 de FM.

En torno al patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC., relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación.

Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que coordinen esfuerzos con el Gobierno del estado de Chiapas para canalizar los apoyos necesarios y atender las afectaciones causadas por la onda tropical número 12, que ha provocado daños en las regiones Costa y Soconusco de dicha entidad.

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe de los programas y proyectos de prevención y mitigación en las zonas de alto riesgo de las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 a las universidades públicas en todo el país, con el propósito de ampliar la cobertura en el número de estudiantes matriculados.

Del Dip. José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Durango a que asuma la responsabilidad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a emitir un acuerdo que explique

los alcances de la jurisprudencia 2a./J.85/2010 por contradicción de tesis, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se disminuye la cuantía de las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de 25 a 10 veces el salario mínimo.

Del Dip. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y evaluar el cumplimiento el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, en relación con el sistema penitenciario.

Del Dip. Mario Di Costanzo Armenta, de Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, del Interventor Liquidador de Luz y Fuerza del Centro y del Director del organismo público descentralizado en liquidación Luz y Fuerza del Centro, a fin de que expliquen el proceso de entrega recepción derivado del decreto del 11 de octubre de 2009, por el cual se liquida el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

De los Diputados Sebastián Lerdo de Tejada y Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, los Comisionados de la misma, el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Secretario de Hacienda y Crédito Público comparezcan ante esta Soberanía con el fin de explicar la situación prevaleciente en la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 1710-1770/2110-2170 MHz, denominada LICITACIÓN 21.

De la Dip. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita al Secretario de Finanzas y al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal para informar de los avances de las expropiaciones realizadas, las indemnizaciones entregadas, el proyecto ejecutivo, los riesgos de terminación anticipada por retrasos en la entrega del derecho de vía y los efectos financieros en el presupuesto del Distrito Federal, en el marco de la concesión denominada “Autopista Urbana”.

De los Diputados Agustín Guerrero Castillo y José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a suspender el engrose de la jurisprudencia 85/2010, en relación al tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Del Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aclarar las diferencias que se presentan en los documentos que dan cuenta de los gastos del gobierno en el rubro de publicidad.

De los Diputados Sergio Tolento Hernández y José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar una campaña informativa sobre los lineamientos a los que estará sujeta la venta y suministro de antibióticos.

De los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a incluir el tema migratorio en sus agendas legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Del Dip. Luis Videgaray Caso, a nombre propio y de diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se instruye al Presidente de

la Comisión Permanente para que promueva juicio de controversia constitucional en contra el titular del Ejecutivo Federal, con motivo de la aceptación de la renuncia del C. Héctor Osuna Jaime como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la designación del C. Mony de Swaan Addati como nuevo comisionado.

De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia con respecto a la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo.

Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto al dictamen que emitió la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con relación a los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

Del Dip. Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Soberanía al Coordinador Ejecutivo Nacional de las Conmemoraciones de 2010, a fin de que informe sobre gasto del fideicomiso destinado a los festejos de este año patrio.

Del Sen. Luis A. Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes de las regiones afectadas por el huracán “Jimena”.

Del Dip. Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Ing. Jorge Gutiérrez Vera, último director general de la hoy extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el fin de que informe respecto de las acciones que emprendió durante su administración para evitar la quiebra de dicha entidad paraestatal,

Del Dip. Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo relativo al proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe detallado en el que se expliquen las causas del incremento en el endeudamiento público.

De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón y Francisco Alcibíades García Lizardi, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal información sobre las afectaciones al sector agrícola y ganadero del país y se destinen recursos inmediatos para apoyar a los productores agrícolas y ganaderos que se han visto afectados por las recientes contingencias climatológicas.

Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar que se les condonen los adeudos pendientes a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, Baja California Sur que fueron sancionados y no son sujetos de recibir recursos federales.

De la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Conferencia Nacional Penitenciaria un informe sobre los acuerdos tomados para evitar la comisión de delitos por personas privadas de su libertad, en los centros penitenciarios del país.

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para combatir y erradicar el trabajo jornalero infantil.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión Permanente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informe sobre las actuaciones de dicha Comisión en los diagnósticos anuales a los Centros de Readaptación Social Federales y Locales.

De Diputados por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de las diversas Secretarías de Estado que están participando en las acciones de reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán "Alex" en el estado de Nuevo León, a que todas aquellas contrataciones de obras y prestación de servicios de asignación directa, se les otorguen a los empresarios establecidos en dicho estado, a fin de reactivar la economía del mismo.

De los Diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a dotar de una mayor infraestructura a los puestos de control o revisión militar, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, así como el situado en el kilómetro 1.5 de la carretera federal No. 2 San Luis Río Colorado-Mexicali.

De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que refuerce la estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada desplegando más elementos de las fuerzas policiales federales en Zacatecas, a fin evitar que en la entidad la inseguridad alcance mayores dimensiones.

Del Dip. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo relativo a los bioenergéticos de segunda y tercera generación.

De Diputados por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se condonen los cobros o, en su defecto, se establezcan tarifas preferenciales en energía eléctrica y de gas para quienes resultaron directamente afectados de manera importante en su patrimonio, derivado de los efectos del huracán "Alex", en el estado de Nuevo León.

Del Dip. Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión a presentar en sus respectivas agendas legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, iniciativas puntuales sobre los temas laboral, hacendario y reforma política.

De la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública establezca en las escuelas del país la impartición de la materia de educación sexual y género, implemente un programa nacional de capacitación para los docentes de primaria y secundaria del país, así como se elaboren libros y materiales actualizados, a efecto de que el magisterio tenga una profesionalización pertinente en la impartición de esa asignatura.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo con relación a los subejercicios que se vienen presentando en la Administración Pública Federal.

De Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, la que contiene punto de acuerdo en relación con la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América.

De la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a los Secretarios Educación Pública y de Salud cumplan con su compromiso de prohibir en los planteles educativos la venta de productos *chatarra*; y se cita al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relacionado con la actuación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Del Dip. Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a dar celeridad a las investigaciones y sancione a los funcionarios y actores políticos responsables de los presuntos hechos violatorios de disposiciones constitucionales y legales durante el pasado proceso de elección de gobernador en el estado de Durango.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el nombramiento del C. Mony de Swaan Addati como Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De los Senadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a designar a la brevedad al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Del Dip. Morelos Canseco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados se avoque a realizar el análisis del ejercicio de atribuciones de la Comisión Nacional del Agua en la Cuenca del Río Bravo, con motivo de la emergencia suscitada por el huracán “Alex”.

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer un programa temporal de repatriación en el caso de que la Ley Arizona entre en vigor.

Del Dip. Morelos Canseco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados a que proceda a integrar la Sección Instructora, con el propósito de conocer la denuncia presentada con respecto a presuntos ilícitos penales federales en que ha incurrido el C. Juan Francisco Molinar Horcasitas.

Del Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de la Función Pública presentar por escrito un informe detallado que explique las adecuaciones presupuestarias; así como al Subsecretario de Egresos de la SHCP un informe detallado sobre los recursos autorizados y ejercidos para la conmemoración del Bicentenario.

De los Senadores Emma Lucia Larios Gaxiola y Lázaro Mazón Alonso, así como de la Comisión de Salud del Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue en el estado de Guerrero.

Del Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, así como al Secretario

de Hacienda y Crédito Público a retirar el nombramiento del C. Gustavo Adolfo Merino Juárez, como nuevo director de la Financiera Rural.

De los Senadores Emma Lucia Larios Gaxiola y Lázaro Mazón Alonso, así como de la Comisión de Salud del Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar una revisión exhaustiva en el hospital general de Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

De los Diputados Yolanda de la Torre Valdez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique los términos financieros y administrativos en que el Gobierno Federal recuperará los quebrantos de la inversión realizada en satélites mexicanos.

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a culminar a la brevedad y de manera conjunta con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el proceso para la dictaminación final sobre los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica.

De la Sen. Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que se incluyan en el Presupuesto de Egresos para 2011 recursos para la creación de un fondo de rescate para los derechohabientes de INFONAVIT, así como la creación de una comisión especial que de seguimiento a la problemática que enfrentan los derechohabientes.

Del Dip. Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a reforzar las estrategias de apoyo para los niños y jóvenes hijos de inmigrantes que se encuentran en edad de estudiar, respecto de las consecuencias de la Ley SB 1070.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES

Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2010.

Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de mayo de 2010.

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la sanción impuesta por el Instituto Federal Electoral al titular del Ejecutivo Federal.

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los procesos electorales e impugnaciones.

Del Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al sistema penitenciario en México.

C I T A .

Acta de la Sesión Anterior

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles veintiuno de julio de dos mil diez, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles catorce de julio de dos mil diez.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 23 al 26 del actual, con el objeto de atender la invitación del Presidente de la Unión Africana y del Presidente de Uganda para asistir como invitado de honor a la apertura de la 15ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Unión Africana (UA), que se llevará a cabo a nivel de Jefes de Estado en Kampala, Uganda.- *Quedó de enterado. Se remitió copia de la documentación a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente; a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.*

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, tres oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- *Se turnaron a la Primera Comisión.*

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2009.- *Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.*

(Comunicaciones)

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, informe correspondiente al primer trimestre de 2010, sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho Instituto.- *Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.*

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 199 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, a celebrarse el viernes 30 de julio, en esta ciudad.- *Se designó en Comisión al Diputado Carlos Torres Piña.*

(Comunicaciones) Se recibió de la Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, comunicación la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de julio de 2010.- *Fue aprobada en votación económica.*

(Comunicaciones) Se recibió del Diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, comunicación por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de julio de 2010.- *Fue aprobada en votación económica.*

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Informe de su asistencia a la XXII Reunión del Comité Ejecutivo del Foro Interparlamentario de las Américas, realizada en Asunción, Paraguay los días 4 y 5 de junio de 2010.- *Quedó de enterado.*

(Comunicaciones) Se recibió del Senador José Julián Sacramento Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, oficio por el que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 21 de julio de 2010.- *Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.*

(Iniciativas) El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

(Iniciativas) El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

(Iniciativas) La Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 218, 219, 220 y 227 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- *Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Senador Alejandro González Alcocer, a nombre propio y de los Diputados José Luis Ovando Patrón y César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.- *Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Senador Alejandro González Alcocer, a nombre propio y de los Diputados José Luis Ovando Patrón y César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) Los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.*

(Iniciativas) El Senador Carlos Sotelo García, a nombre propio y del Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y del Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c) de la fracción II del artículo 2º y la fracción IV del artículo 8º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Diputado José Luis Ovando Patrón, a nombre de los Diputados Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.- *Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XXIX-P al artículo 73 y una fracción IV al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Comercio.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) Los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Javier Orozco Gómez y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.*

(Iniciativas) El Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal.- *Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.*

(Iniciativas) El Diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Protección Civil.- *Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.*

(Dictamen de Primera Lectura) Se dio primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al Ciudadano Sergio Antonio Sarmiento y Fernández de Lara para aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de España.- *Con dispensa de segunda lectura, fue aprobado por 29 votos. Se turnó al Ejecutivo Federal.*

(Dictámenes a Discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a contemplar una partida especial al Instituto Nacional de Pesca para la adquisición de un buque de investigación oceanográfica pesquera y a incrementar sustancialmente el presupuesto de dicho Instituto, en la formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2011.- *Se aprobó en votación económica.*

(Dictámenes a Discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a exentar a los usuarios del tramo Salamanca-Irapuato de la autopista de cuota Querétaro-Irapuato, del pago de la tarifa de peaje, hasta que terminen las obras de rehabilitación y se restaure su capacidad operativa.- *Se aprobó en votación económica.*

(Dictámenes a Discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a intervenir y mediar en la solución del conflicto laboral suscitado entre la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa canadiense Gammon Gold, por el cierre de la mina "El Cubo" en la ciudad de Guanajuato.- *Intervinieron los legisladores: Senador Francisco Arroyo Vieyra del PRI; y Diputado Mario Di Costanzo Armenta del PT. Se aprobó en votación económica.*

(Proposiciones) El Diputado Morelos Canseco Gómez, a nombre de los Diputados de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, presentó punto de acuerdo para exhortar al Presidente Felipe Calderón Hinojosa para que amplíe el decreto del pasado día 15 de julio de 2010, en el que otorga beneficios fiscales a los contribuyentes de esos estados.- *Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.*

(Proposiciones) El Diputado Leonardo Guillén Medina, a nombre propio y de los Diputados Julio Castellanos Ramírez, Óscar Saúl Castillo Andrade y Leonardo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Michoacán para que instruya a la Entidad de Fiscalización Superior Local a realizar con carácter de urgente, una auditoría a fondo sobre la situación que guarda el posible desvío de recursos públicos estatales a campañas electorales.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) El Diputado Agustín Guerrero Castillo, a nombre propio y de los Diputados José Luís Jaime Correa y Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a designar en esta sesión a un grupo plural de Senadores y Diputados para que actúe como intermediario entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal a fin de lograr un acuerdo justo que permita salvar la vida de los trabajadores del SME en huelga de hambre, especialmente a los trabajadores Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra Jiménez.
Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputado Pablo Escudero Morales del PVEM; Senador Rubén Camarillo Ortega del PAN; Diputado Manuel Cadena Morales del PRI, quien presentó propuesta de adición; Diputado Mario Di Costanzo Armenta del PT; Senador Pablo Gómez Álvarez del PRD; Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva del PRI; Senador Carlos Sotelo García del PRD; Diputado Agustín Guerrero Castillo del PRD; y Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD.
Las propuestas del Diputado Cadena se aceptaron. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

(Proposiciones) El Senador Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, remitió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a publicar en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual, los libros "Un Viaje por la Historia de México" e "Historia de México".- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

(Proposiciones) El Diputado Manuel Cadena Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo sobre el atentado ocurrido en Ciudad Juárez el 15 de julio del año en curso.- *Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.*

(Proposiciones) El Senador Rubén Camarillo Ortega, a nombre propio y del Senador José Luis García Zalvidea, presentó proposición con punto de acuerdo sobre la excarcelación de presos políticos en Cuba.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva y de los Grupos Parlamentarios por el que la Comisión Permanente, a través de su Mesa Directiva, propiciará el desahogo, ante la Tercera Comisión, de las diversas comparecencias aprobadas por el pleno.- *Fue aprobado en votación económica.*

(Proposiciones) El Diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce al Señor Roberto González Barrera por su solidaridad y compromiso con los mexicanos y en especial con los afectados por el paso del huracán "Alex" en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.- *Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. Intervino el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI.*

(Proposiciones) El Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente acuerda interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal por la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

El Presidente dio turno a comisiones a las siguientes proposiciones:

(Proposiciones) Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre la estación de Pemex "Gigante 1".- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) Del Diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y aporte los recursos actuarialmente necesarios para cubrir el déficit financiero del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) De la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a tomar en cuenta la opinión ciudadana de los vecinos cercanos al predio en cuestión antes de realizar cualquier cambio de uso de suelo.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) Del Senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer e iniciar un procedimiento de investigación de responsabilidades administrativas en contra de los comisionados integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los comisionados de la COFETEL con relación al nombramiento de su Presidente.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) De la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales para que incorporen en los planes y programas educativos el respeto a los derechos humanos de las mujeres.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

(Proposiciones) Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de explique los mecanismos a través de los cuales se implementará el decreto presidencial sobre la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) De la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que adecuen sus respectivas legislaciones locales a fin de implementar las reformas constitucionales en materia penal de 2008.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) De la Diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a decretar una exención en materia tributaria en Ciudad Juárez, Chihuahua, dando una prórroga de impuestos y condonación de multas para estimular la economía.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) Del Diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, al gobierno del estado de Sonora y al gobierno municipal de Hermosillo a emitir un informe y convenio de estrategias para solucionar de manera urgente el problema de escasez de agua potable en el estado de Sonora.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) De las Senadoras Blanca Judith Díaz Delgado y Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso, a que evalúen y sancionen el desempeño del comité municipal electoral de Río Bravo, Tamaulipas, durante el pasado proceso electoral.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) De los Diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Rubén I. Moreira Valdez, a nombre de los Diputados del estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública a establecer un diálogo continuo y proactivo con el gobierno de Coahuila a fin de diseñar una estrategia integral para reducir la violencia y restablecer la paz en la ciudad de Torreón y enviar inmediatamente los elementos de la Policía Federal Preventiva necesarios para colaborar en la lucha en contra de la delincuencia organizada.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) Del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre padecimientos del oído en estudiantes.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

(Proposiciones) De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe detallado sobre el estado que guarda la recomendación 32/2010 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) De los Diputados Agustín Guerrero Castillo y Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que proceda a reinstalar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad; asimismo, se llama a comparecer a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Comisión Federal de Electricidad y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) De la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el

que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América una investigación sobre los hechos ocurridos en el estado de Utah, relativos a la difusión de una lista sobre información privada de 1,300 indocumentados hispanos radicados en ese estado, en la que se exige a diversas autoridades su detención y deportación inmediata.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

(Proposiciones) De los Senadores Lázaro Mazón Alonso y Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación elaborar y distribuir un manual que establezca las medidas sociales de prevención en caso de desastres naturales.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) De la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a promover una mayor coordinación regional respecto a la dinámica regional del tráfico y trata de personas, especialmente entre Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, así como a elaborar acuerdos bilaterales y multilaterales en áreas prioritarias de cooperación entre las agrupaciones policíacas y las autoridades migratorias de la región.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

(Proposiciones) De las Diputadas integrantes de Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir con lo establecido en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre de 2009, en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas del Caso Campo Algodonero.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Proposiciones) De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a aplicar el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, como es el caso específico de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102. 3 de FM.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) Del Diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo relativo a la evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México por el encallamiento de un buque tanque con bandera liberiana con 3 mil toneladas de sosa cáustica, afectando el arrecife del Puerto de Tuxpan, Veracruz.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Proposiciones) Del Diputado Gerardo del Mazo Morales, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social a instrumentar los mecanismos necesarios y urgentes, con el fin de que el Fondo de Desastres Naturales compense la pérdida patrimonial de las familias afectadas por las inundaciones provocadas por el huracán “Alex” en los estados

de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

(Excitativas) Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación a dos proyectos de decreto por los que se reforma la fracción III del artículo 109 de la ley del Impuesto sobre la Renta.- *Se remitió a la Cámara de Diputados.*

(Excitativas) De la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a firmar a la brevedad el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo.- *Se remitió a la Tercera Comisión.*

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiocho de julio, a las once horas.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

OCHO OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2235/10
México, D.F., a 22 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08410, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Osear Melchor Ramírez, pueda aceptar y usar la Medalla al Logro Naval y Cuerpo de Marines, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Medalla de referencia.

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2271/10
México, D.F., a 26 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08610, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Oscar Cruz Barney, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz Distinguida de Primera Clase, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2218/10
México, D.F., a 22 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08229, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Lorenzo Francisco Meyer Cossio, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda con Insignia, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2236/10
México, D.F., a 22 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08409, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración Orden del Mérito Naval con Medalla al Servicio Distinguido en su Primera Categoría, que le otorga el Gobierno de la República Dominicana.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2273/10
México, D.F., a 26 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08603, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Bernardo Manuel Sepúlveda Amor, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2262/10
México, D.F., a 23 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08556, la Cons. María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para que Juan Antonio Jasso Martínez, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Servicio que le otorga el Gobierno de Israel.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2272/10
México, D.F., a 26 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1098/10, la Lie. Betina Claudia Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

NOMBRE	**PUESTO**	**LUGAR DE TRABAJO**
Lourdes Patricia Gómez González	Asistente de Visas	Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua
Cristina Ayalo Takahashi Tomatani	Auxiliar en la Sección Consular	Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las Actas de Nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

A T E N T A M E N T E

EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/2160/10
México, D.F., a 22 de julio de 2010

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 06859, el Emb. Jorge Castro Valle Kuehne, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Roberto Guzmán Torrecilla, pueda aceptar y usar la Medalla Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa de Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así. como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Medalla de referencia. .

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

NUMERO OF-DPL 252-LIX

DIP. LIC. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E .

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 275-LIX-10, en el que se aprueba remitirles la iniciativa que propone reformar el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en términos que refiere el acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del Acuerdo Legislativo de referencia, para los efectos legales procedentes

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, no Reelección.
GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE JULIO DE 2010

MTRO. CARLOS ALBERTO CORONA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACUERDO LEGISLATIVO

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en uso de las facultades que le confiere los artículos 7 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 153, párrafo 1,2,3 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, aprueba remitir al Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

De la I a la III……..

IV……..

De la a) a la c)……

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refiere el inciso a), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona, o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los inmuebles de propiedad federal y de los estados no estarán exentos del pago de derechos provenientes de la presentación de servicios públicos municipales.

De la V a la X……

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor una vez cumplidos los términos de la legislación vigente.

TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el anterior precepto.

CUARTO.- Solicítese al Honorable Congreso de la Unión estudie la propuesta a que se refiere el punto anterior.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6, 211 Y 225 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 644 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

NUMERO OF-DPL 253-LIX

C. DIP. LIC. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E .

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 276-LIX-10, en el que se aprueba remitirles la iniciativa que propone la reforma y adición de los artículos 6, 211, 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, 644 de la Ley General de Salud y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en términos descritos en el acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del Acuerdo Legislativo de referencia, para los efectos legales procedentes.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, no Reelección.
GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE JULIO DE 2010

MTRO. CARLOS ALBERTO CORONA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACUERDO LEGISLATIVO

ÚNICO,- Se APRUEBA el acuerdo legislativo para solicitar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, !a reforma y adición de los artículos 6. 211, 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, 464 de la Ley General de Salud y el artículo 194 del código Federal de Procedimientos Penales, con ia propuesta de redacción y contenido indicado, con motivo y fundamento en las consideraciones vertidas en el presente dictamen para quedar de manera siguiente:

Ley de Propiedad industrial.

Artículo 6.- El instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I a IV

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; así como presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal en los casos previstos por el artículo 211, último párrafo de esta ley.

Artículo 211...

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto, y tratándose de los hechos relativos al artículo 232 fracciones II y III, deberá presentar de oficio denuncia ante el Ministerio Público Federal.

Artículo 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles, y deberá denunciar de oficio ante el Ministerio Público Federal.

Ley General de Salud.

Artículo 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Tratándose de bebidas alcohólicas, se consideraran adulteradas, falsificadas, alteradas o contaminadas cuando no cumplan con la Norma Oficial Mexicana.

ATENTAMENTE,
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a de junio de 2010.

LA COMISION LEGISLATIVA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS.

DIP. JESÚS CASILLAS ROMERO.
PRESIDENTE.

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO BRISEÑO PALOMINO.
PRESIDENTE.

DIP. CARLOS ALBERTO BECERRA.
VOCAL.

DIP. LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ.
VOCAL.

DIP. MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ.
VOCAL.

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículos 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I a XIV,

XV. De la Ley General de Salud, los previstos en el artículo 464, en las fracciones I, II y II del artículo 464 Ter, y en los artículos 475 y 476.

XVI a XVII...

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

UNA, DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, VICEPRESIDENTE POR MÉXICO ANTE EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CON LA QUE REMITE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS; Y DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL DE DICHO PARLAMENTO, CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN PANAMÁ.

PARLAMENTO LATINOAMERICANO
VICEPRESIDENCIA
MÉXICO

Ciudad de México, a 16 de Julio de 2010
VPMPL/304/10

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y COORDINADOR DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
H. CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E

Estimado Señor Presidente,

En mi carácter de Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, remito anexas al presente, Actas correspondientes a las reuniones de trabajo de Comisiones del Parlamento Latinoamericano que se enlistan a continuación, y que se efectuaron los pasados 8 y 9 de julio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

Se informa lo anterior para conocimiento de los miembros de la H. Cámara de Senadores y su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

SEN. JORGE A. OCEJO MORENO
VICEPRESIDENTE POR MÉXICO ANTE EL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

LAS ÁCTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

DE LOS DIPUTADOS LORENA CORONA VALDÉS, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ Y JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN Y DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX AL ARTÍCULO 14 Y XV AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.



SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ



DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
LXI LEGISLATURA

Los que suscriben, Diputada **LORENA CORONA VALDÉS**, Diputado **JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ**, Senador **JAVIER OROZCO GÓMEZ** del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el Diputado **JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN** del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62, 179 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones IX al artículo 14 y XV al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de habilidades informáticas e idiomas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Introducción

Considerando la importancia actual de los derechos humanos, cuya base son los derechos y libertades para todos los hombres y, por lo tanto, la garantía de una vida digna, se han creado instituciones y celebrado tratados internacionales incluyendo, directrices, criterios y resoluciones que forman parte de la normatividad interna de cada país firmante; no obstante, en algunos casos, la comunidad internacional ha generado presión por medio de recomendaciones, y en ocasiones, realiza señalamientos o impone obligaciones internacionales, de acuerdo a los compromisos asumidos en esta materia.

Para ejemplificar lo anterior, recordemos que la *Carta de las Naciones Unidas* encomienda a la Asamblea General la función de "fomentar la cooperación internacional en materias de carácter [...] cultural y educativo [...] y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión"[1].

[1] México, Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, *Diario Oficial de la Federación,* 17 de octubre de 1945. Artículo 13.
Disponible en:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=117&depositario=0&PHPSESSID=eb070d560221c9d0c4ebcb727f1fe76a

Asimismo, la Asamblea General proclamó en 1948 la *Declaración Universal de Derechos Humanos* "como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos [...]"[2]; además, precisa que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales [...]"[3].

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene como función principal el promover la observancia y la defensa de estos derechos "formulando recomendaciones para la adopción de medidas progresivas en favor de los mismos; elaborar estudios; solicitar informes; y operar como órgano de consulta"[4]. Así, existen gran variedad de organismos internacionales creados para la defensa de estos derechos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

De esta forma, no debemos perder de vista que a la par del consenso internacional proteccionista de derechos fundamentales, se han innovado tecnologías que nos permiten allegarnos de información útil en diversos temas; y, que en su ausencia, no entenderíamos lo que significa formar parte de un mundo crecientemente global, cuya tendencia resulta inevitablemente en la adopción de estos criterios humanistas, y de los avances tecnológicos, económicos, sociales y culturales que nos determinan; logrando con ello formar individuos conscientes, tolerantes y competitivos. En consecuencia, es imposible apartarnos del avance mundial en el cual se encuentra México inmerso y precisamente esta globalización motiva la creación de requisitos conexos a los estándares internacionales que México no debe ignorar.

En este contexto humano, global y científico, consideramos oportuno abordar el tema educativo en nuestro país, con el propósito de asegurarnos que nuestro sistema genere de manera efectiva las herramientas necesarias para integrar a los mexicanos adecuadamente con la sociedad de nuestro tiempo.

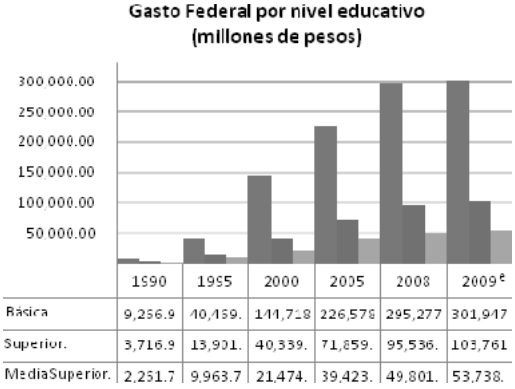
II. Panorama educativo actual en México

La mayor parte de los estudios elaborados en materia educativa revelan los retos que nuestro país tiene pendiente, entre ellos, primordialmente satisfacer el acceso de todos los mexicanos a la educación básica; garantizar la continuidad entre los distintos niveles educativos, y más importante aún, la inclusión de los estándares suficientes de calidad educativa que doten al estudiante de habilidades y conocimientos adecuados para afrontar los desafíos y competitividad que la globalización exige.

De acuerdo a esta consideración, recordemos que garantizar el acceso de todos a la educación básica es una obligación constitucional para el Estado. En congruencia, desde 1990 los recursos se han destinado al cumplimiento de este mandato; sin embargo, se ha olvidado la importancia de llevar a cabo acciones para crear un sistema educativo integral y continuo; de esta forma, se ha abandonado la tarea de facilitar el paso de la educación básica a la media superior, no apoyando de manera plenamente satisfactoria a los estudiantes que han concluido el nivel básico y que deben transitar al siguiente nivel educativo.

[2] ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/
[3] *Ibídem.* Artículo 26.
[4] México, Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", *Diario Oficial de la Federación*, 7 de mayo de 1981. Artículo 41.
Disponible en:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1278&depositario=0&PHPSESSID=eb070d560221c9d0c4ebcb727f1fe76a

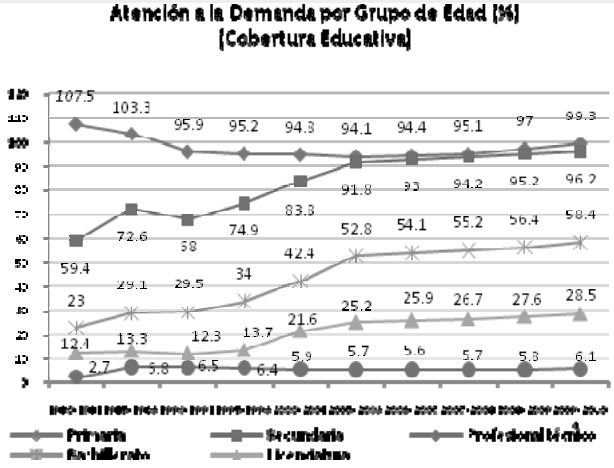


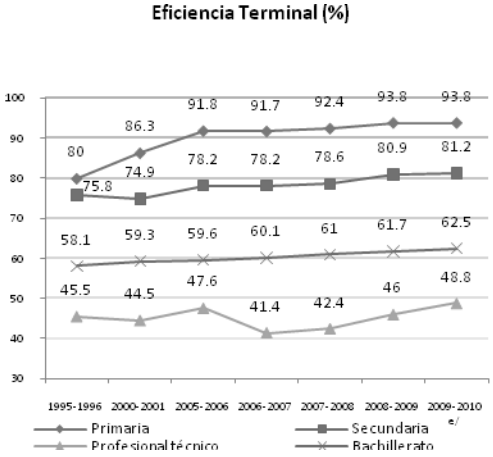


***Otras**. Incluye el gasto destinado a la capacitación para el trabajo, alfabetización, educación primaria y secundaria para adultos, al fomento de la cultura y el deporte, así como los gastos de la administración central. Para el año 1995 se incluyeron 433.7 millones de pesos del Fondo Nacional.

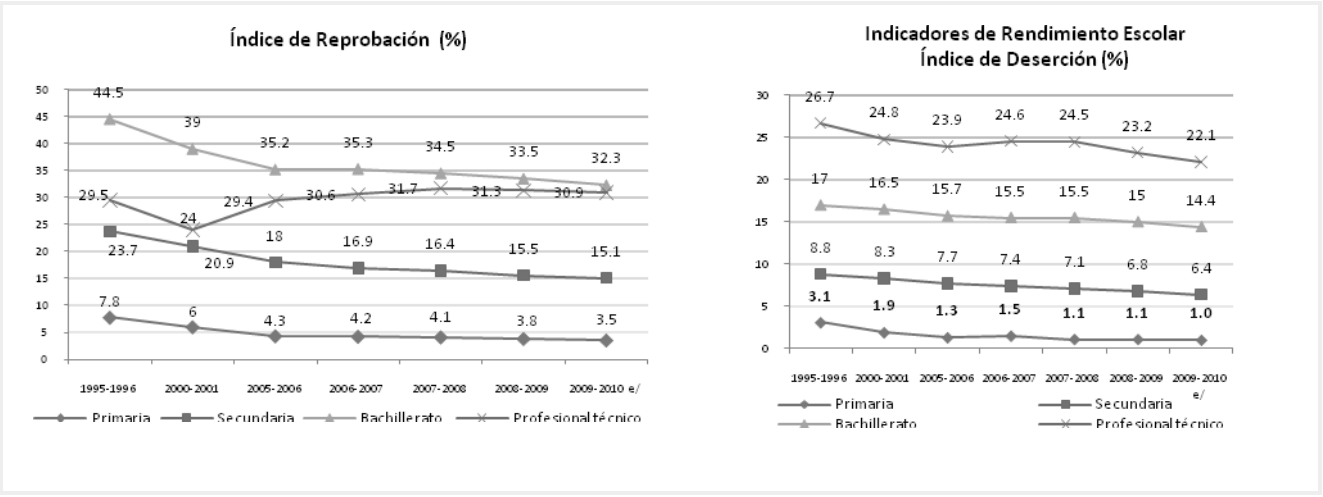
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, p.p. 282.

Es indiscutible que se han generado grandes triunfos en el acceso a la educación básica, entre ellos destaca por su magnitud, las estimaciones para el 2009-2010 incluidas en el *Tercer Informe de Gobierno* relativas al 99.3% de cobertura educativa, 93.8% de eficiencia terminal, 3.5% de tasa de reprobación y el 1% de deserción escolar. Tal como se indica en las siguientes tablas:





Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, p.p. 50,169 y 170.



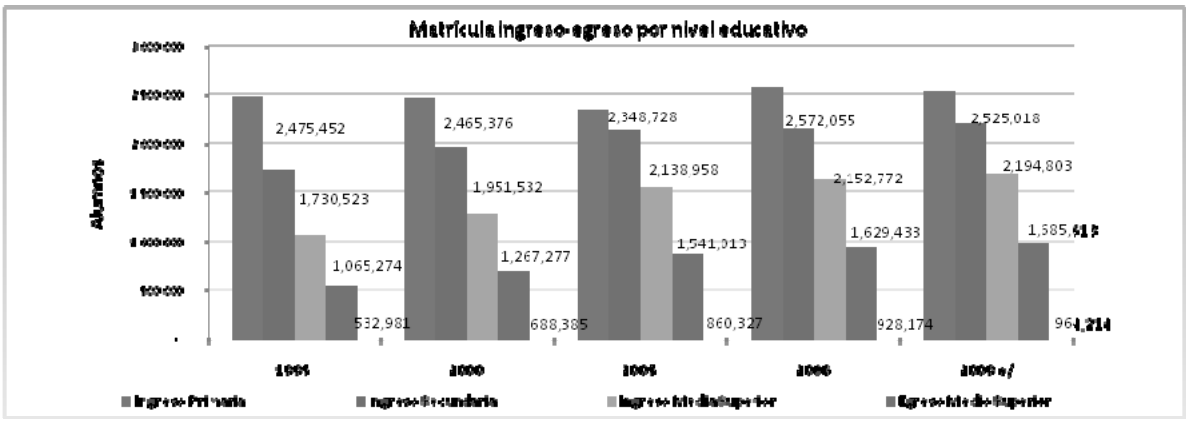
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, p.p. 50,169 y 170.

No obstante los anteriores porcentajes, hay que reconocer la incapacidad del Estado Mexicano para asegurar un trayecto educativo regular para todos los estudiantes; especialmente en los grados que brindan más oportunidades remuneratorias como el ***bachillerato*** cuya cobertura educativa representa el 58.4%, una tasa de eficiencia terminal del 62.5%, 32.3% de reprobación y 14.4% de deserción escolar; el ***profesional técnico*** con el 6.1% de cobertura, eficiencia terminal del 48.8%, tasa de reprobación de 30.9% y 22.1% de deserción; además de la ***licenciatura*** con una atención a la demanda de 28.5%.

Esta irregularidad por parte de las autoridades educativas, ha fomentado la creación de un perfil juvenil académicamente insuficiente, caracterizado por la ausencia de capacidades y aptitudes, lo cual limita las opciones de obtener un empleo estable, útil, bien remunerado y satisfactorio. Por el contrario, la deserción escolar genera actitudes devastadoras que terminan subordinando al individuo, empobreciéndolo económica y anímicamente, eliminando toda posibilidad que genere un patrimonio digno, en vista de que la mayor parte de su ingreso tendrá que destinarse a satisfacer sus necesidades básicas.

El acceso a la educación es el primer elemento a cubrir para garantizar este derecho, su ejecución y continuidad debe acompañarse forzosamente de un sistema educativo de calidad, que permita desarrollar las potencialidades de cada persona a través de aprendizajes relevantes, rentables y pertinentes a las exigencias y características de los individuos, así como de los contextos en los que se desenvuelven. En esta cuestión, creemos que **no se trata únicamente de que todos asistan a la escuela, sino que su estancia se refleje positivamente en su aprendizaje**.

Por otra parte, no debemos dejar de lado la preocupación referente a la continuidad educativa, principalmente en el nivel medio superior, por tratarse de un grupo minoritario y tomando en cuenta que para el ciclo escolar 2009-2010 se estima que la matrícula del primer año de primaria será de **2,525,018** alumnos; mientras que la estimación relativa al ingreso al nivel medio superior es de 1,685,613 alumnos y egresarán únicamente **964,214** (**38.2%)** en contraste con la matrícula de ingreso del primer año de primaria.



Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, p.p. 50,169 y 170.

De esta suerte, parece lógico pensar que esta pequeña población estudiantil tiene que tener la posibilidad de continuar con los estudios superiores y concluirlos. Sin embargo, al no ser esta la regla general, es indispensable tener la certeza que los esfuerzos invertidos proveen al educando los conocimientos y habilidades necesarias para competir en las mismas condiciones contra aquel que pudo costear los gastos educativos de carácter privado que le dotan de estas habilidades con un alto grado de calidad.

No obstante, la realidad ha corroborado lo contrario, es decir, la situación de desventaja es inminente, los empleos están reservados para los más cualificados, lo que nos permite prever con seguridad cuáles serán los resultados de este contexto de inequidad.

En este sentido, Inés Aguerrondo[5] ha enfatizado que la educación de calidad debe permitir a todos la inclusión en el conocimiento válido para contrarrestar las tendencias de inequidad, derivadas de la sociedad de la información y acentuadas como consecuencia del nuevo capitalismo globalizado. Por esto, considera que "el foco de atención es la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado y, a partir de ellas, puedan lograr su inclusión en el conocimiento".[6]

Así, no podemos ignorar que entre las principales habilidades que un estudiante requiere para desenvolverse en este contexto global, es el manejo de una lengua adicional al español, preferentemente el inglés y el dominio de habilidades informáticas; en vista de que ambas son indispensables para interactuar con los conocimientos internacionales en diversas materias. En este sentido, pocas entidades han implementado medidas para la satisfacción de estas capacidades, entre ellas destacan:

- Hidalgo. *"la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) […] trabaja en el diseño de material didáctico que utilizará en jardines de niños […] como parte del programa* ***Enseñanza del Idioma Inglés***

[5] Consultora de la Unidad de Investigación y Asistencia Técnica Instituto Internacional de Planificación de la Educación IIPE/UNESCO. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especializada en planeamiento educativo en los EE.UU. y Europa. Ha sido consultora internacional para organismos como el Banco Mundial, OEA, PAHO y UNESCO. Es autora de numerosos artículos educacionales y libros: "Revisión de la escuela actual", "Una nueva educación para un nuevo país", "El planeamiento educativo como instrumento de cambio", entre otros. El PREDE/OEA acaba de publicar en su colección Interamer, su último estudio, "Escuela, fracaso y pobreza: ¿Cómo salir del círculo vicioso?". Actualmente es Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa en el Ministerio de Cultura y Educación de Argentina y Profesora Titular de Planeamiento Educativo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

[6] Calderón, David, *Contra la Pared*, Estudio sobre el Panorama Educativo de 2009, México, Octubre 2009, Reproducciones Fotomecánicas, pp. 15. Disponible en: http://www.mexicanosprimero.org/component/content/article/126/171-investigacion.html

en la Educación Básica *en su fase Piloto".*[7]

- Durango. Considerando que en las escuelas secundarias *"se recibe ya una cantidad muy considerable de alumnos que llegan al primer grado de secundaria con bastantes conocimientos de lengua extranjera, producto del* ***Programa de Inglés en Primaria*** ***y las iniciativas de padres de familia de enviar a sus niños a tomar cursos de inglés en centros de idiomas u otras instituciones, ha planteado retos importantes a los maestros de secundaria*** *[…]"*[8]

- Coahuila. *"pionero en la incorporación de la enseñanza del idioma inglés, Coahuila se ha distinguido en los últimos años por ofrecer en los niveles de preescolar y primaria la enseñanza de ese idioma, con la finalidad de que los alumnos de manera gratuita, obtengan las bases lingüísticas que en los niveles subsecuentes consoliden su aprendizaje, para que respondan con habilidad a los retos que les presenta el nuevo milenio. Es tal la trascendencia que ha adquirido el* ***Programa de Inglés en Educación Básica****, que se encuentra en proceso de revisión su posible generalización en el país. […]."*[9]

En este orden de ideas, el *Informe del Economist Intelligence Unit*, concerniente a las habilidades para competir en educación post-secundaria en América Latina plantea que "los profundos cambios en la economía mundial de los últimos 20 años han enredado a las empresas latinoamericanas todavía más en una red de relaciones que abarca todo el mundo. Para poder competir eficazmente […] las empresas de la región necesitan trabajadores cuyas habilidades se adapten a un lugar de trabajo globalizado, colaborativo y en red". Asimismo, reitera que "la globalización es la fuerza que impulsa la creciente importancia de las habilidades sociales, a medida que los ejecutivos latinoamericanos se han dado cuenta que necesitan un […] personal […] capaz de interactuar con otros profesionales de todo el mundo". En consecuencia, señala que "algunas **Universidades ya están exigiendo que los estudiantes pasen al menos un semestre estudiando en el extranjero. Esto sin duda los ayuda a comprender que vivimos en una economía global y qué debemos hacer para ser exitosos en el mercado**."[10]

Al parecer se ha perdido de vista lo ineludible, al carecer de mecanismos que aseguren la continuidad educativa de calidad; es decir, estudios sin calidad tienen el mismo resultado a no estudiar. No basta cursar muchos años de escolaridad, si el modelo no es el adecuado, la inversión de tiempo, empeño colectivo, desembolso familiar y social no va a ser significativa para el nivel de ingreso posterior. El sistema no logra garantizar los mismos aprendizajes en todos los niños que acuden a las escuelas públicas y privadas; por eso, en el largo plazo, alcanzar los mismos años de escolaridad puede no tener los mismos efectos para todos, los años de escolaridad de los pobres siguen sin valer lo mismo que los de aquellos estudiantes de contextos con mejor ingreso.[11]

La siguiente gráfica muestra la situación a la que se enfrentan las generaciones actuales en el plano laboral de acuerdo a su preparación profesional.

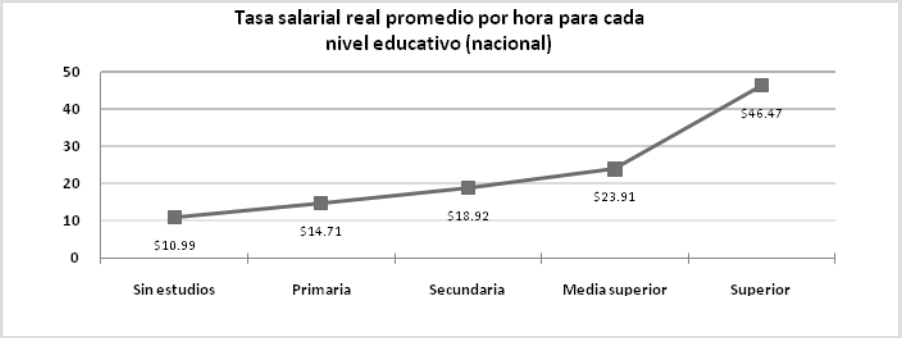
[7] "Noticias en los Estados", Revista *EDUCACIÓN 2001*, México, D.F., año XV, núm. 178, marzo 2010, pp. 45. Disponible en: http://www.comunicacionsocialseph.org.mx/index.php?BOLETAN-DE-PRENSA-2863-12-DE-FEBRERO-DE-2010

[8] *Ídem*. Disponible en: http://www.educadgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=640&Itemid=0

[9] Juárez Briseño, María Cecilia, "Política Educativa en los Estados, En Educación Coahuila Avanza", Revista *EDUCACIÓN 2001*, México, D.F., año XV, núm. 178, marzo 2010, pp. 34-43.

[10] Ogiery, Thierry, "Habilidades para competir Educación post-secundaria y sustentabilidad comercial en América Latina", Informe *ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT*, octubre de 2009, pp.3-5.

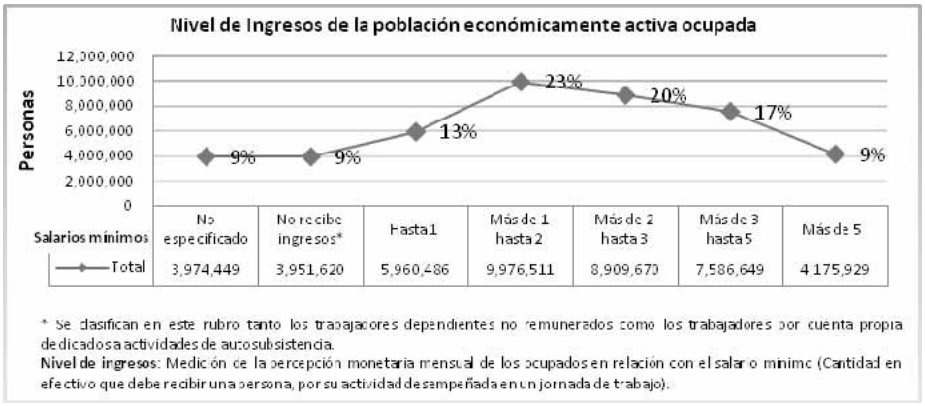
[11] Calderón, David, op. cit., pp. 17.



Fuente. Elaboración personal de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco de Indicadores Educativos (BIE).[12]

Tomando en consideración que la escolaridad promedio de la población entre 25 y 64 años de nuestro país es de 8.9 años[13], significa que estamos integrados por una sociedad que cuenta con un nivel académico menor a la secundaria, y por lo tanto se concluye que por una jornada laboral normal de 8 horas diarias, un individuo que cuenta con la primaria (concluida) percibirá únicamente alrededor de $117.6 al día.

A la par, el nivel de ingresos de la población ocupada en nuestro país es alarmante, pues 5,960,486 personas perciben 1 salario mínimo diario, es decir, de acuerdo al área geográfica[14], mensualmente obtienen $1,723.80(A), $1,675.20(B) o $1,634.10(C); mientras que 8,909,670 reciben como máximo $5,171.40(A), $5,025.60(B), $4,902.30(C) mensuales; por su parte, 3, 951, 620 no reciben ingresos; y 7,586,649 (17%) tienen como ingreso máximo $8,619(A), $ 8,376(B), 8,170.5(C); mientras que estas cantidades representan el monto mínimo que perciben los mejor remunerados (9% de la población).



Fuente. Elaboración propia apartir del Anexo de Información Estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 3.3 Nivel de Ingresos.[15]

[12] Salario relativo por hora trabajada según nivel de escolaridad (2007), Agentes y Recursos en el sistema, Banco Interamericano de Educación. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2008/PanoramaEducativoDeMexico/RE/RE06/2008_RE06__.pdf

[13] Estimaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

[14] Área geográfica "A": $57.46, Área geográfica "B": $55.84; Área geográfica "C": $54.47. Disponible en: http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/

[15] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral, Indicadores Estratégicos, Información Estadística Nacional, IV Trimestre de 2009.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/enoe/ind_trim/default.asp
Los términos pueden consultarse en el Apartado de Glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral, Indicadores Estratégicos (ENOE). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=EHENOE&nbr=Encuesta%20Nacional%20de%20Ocupaci%F3n%20y%20Empleo%20Trimestral,%20Indicadores%20Estrat%E9gicos

Consecuentemente, la posibilidad de alcanzar una vida digna parece cada vez más lejana, quedando a su alcance exclusivamente la opción de realizar actividades que no requieran habilidades intelectuales, como los trabajos de alto desgaste físico, rutinarios, sin posibilidades de ascenso, ni aprendizajes diferenciados; o en su caso, la elección de caminos más peligrosos como la delincuencia, prevaleciendo de esta forma un sistema de convivencia abusiva, violenta y perpetuando liderazgos corruptos y excluyentes.

En opinión de Pedro José Peñaloza[16] "El Estado mexicano ha fallado en la atención a los jóvenes […], sin contemplar políticas públicas de largo plazo con las que se cubrieran sus necesidades, […] los muchachos en la actualidad son uno de los grupos más vulnerables en materia de violencia, empleo y educación".[17]

En síntesis, la educación que se imparte en nuestro país debe contemplar un modelo educativo basado en el progreso científico, garantizando los derechos que tiene toda persona de gozar de sus beneficios y aplicaciones; impulsar un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico; y fomentar el desarrollo y cooperación de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

En vista de que el progreso científico se manifiesta día a día velozmente, es de suma importancia que el alumno utilice la tecnología como cualquier otro estudiante en el mundo desarrollado, por lo que el Estado Mexicano deberá implementar acciones que garanticen al educando la adquisición de habilidades computacionales y de idiomas. No podemos permitir que los empleos mejor remunerados estén reservados exclusivamente para los estudiantes que si pudieron desarrollar estas habilidades, debemos encontrar los mecanismos que promuevan altos niveles de desempeño y una distribución equitativa de las oportunidades de aprendizaje.

III. Medidas Implementadas

III.1. Ámbito Nacional

Ante este panorama educativo, el Estado Mexicano le ha conferido como misión a la Secretaría de Educación Pública (SEP) crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos a una ***educación de calidad***, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

A pesar de esto, la formación escolar prevaleciente en el nivel medio superior, no ha logrado todavía desarrollar plenamente las habilidades que le permitan al estudiante enfrentar los desafíos que se le presentan en la inserción al mercado laboral.

De acuerdo al *Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE),* en la sociedad del conocimiento, la competitividad de los países depende, en buena medida, de la fortaleza de sus sistemas educativos y de su capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos. Así, México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología los ejes de su desarrollo, en los que se encuentra la solución a los más acuciantes problemas nacionales, de ellos depende el incremento de la calidad de vida de la población.[18]

Ante esta problemática, el PSE plantea seis objetivos estratégicos, para efectos de esta propuesta se retoman únicamente los relacionados con la educación media superior en el ámbito de habilidades computacionales:

Objetivo 1. *Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.*

[16] Doctor en Ciencias Penales y de Política Criminal de la Facultad de la UNAM.
[17] García Doina, "El Estado le ha fallado a los jóvenes, dice Pedro Peñaloza", Organización Editorial Mexicana, *El Sol de México*. Disponible en: http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1558327.htm.
Última consulta: 16 de marzo de 2010.
[18] *Programa Sectorial de Educación 2007-2012*, Principales Retos, p.3.

- **Indicador.**
  - Eficiencia terminal.
- **Estrategias y Líneas de Acción.**
  - Entre otras, definir un perfil básico del egresado, por medio del cual se establezcan las competencias básicas que los alumnos deben obtener, así como vincular a los jóvenes y a las instituciones educativas con su ambiente laboral.
- **Acciones implementadas.** La *Alianza por la Calidad de la Educación* busca crear este perfil en el nivel básico a través de la capacitación a los docentes y la creación de instalaciones pertinentes para la impartición educativa.

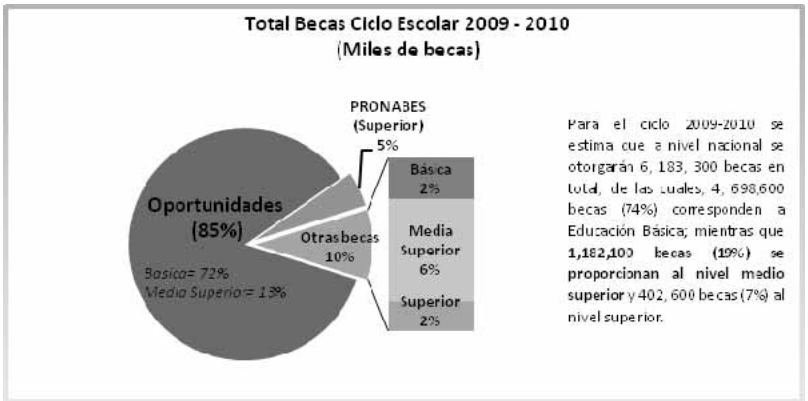
Objetivo 2. *Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.*

- **Indicadores.**
  - Becas educativas en educación media superior para alumnos que provienen de hogares cuyo ingreso familiar no rebasa la línea de pobreza patrimonial establecida por el CONEVAL y que no reciben beca del programa Oportunidades.
  - Cobertura educativa
- **Estrategias y Líneas de Acción.**
  - Consolidar los programas de becas existentes mediante el establecimiento de un sistema integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la revisión de mecanismos para asignarlas y su ampliación a los grupos de población en situación de vulnerabilidad que aún no han sido beneficiados.
  - Aumentar la cobertura de la educación media superior, dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social.
- **Acciones implementadas.**

1. *Alianza por la Calidad de la Educación*. Eje 3. Bienestar y Desarrollo Integral de los Alumnos (condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso oportuno):
  - 2008-2009. 75,000 becas adicionales al Programa de Oportunidades.
  - Diseñar el primer bloque del Programa de Capacitación sobre la concurrencia de programas de desarrollo social para el acceso y permanencia en educación básica (Plan Interinstitucional (SEP-SNTE-CONAFE-SEDESOL Oportunidades)).

2. Becas Federales
  - Programa de Becas de Nivel Medio Superior.
  - Becas para Familias en Pobreza Extrema.
  - Becas de Retención, Apoyo y Excelencia para Estudios de Bachillerato. Estas becas pertenecen al Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (No beneficiados por otro programa).
  - Programa Nacional de Becas de Apoyo a Estudiantes en Educación Media Superior y al Programa Nacional de Becas de Excelencia Académica en Educación Media Superior.
  - Becas del Programa de continuidad Educativa del CONAFE.
  - Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar.
  - Becas FONABEC.
  - Becas CONALEP.

La siguiente gráfica sintetiza lo anteriormente indicado:



Objetivo 3. *Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.*

- **Indicador.**
  - Alumnos por computadora con acceso a Internet para uso educativo en planteles federales de educación media superior.
- **Estrategias y Líneas de Acción.**
  - Capacitar al profesorado en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
  - Promover en las aulas la utilización de espacios virtuales para acercar a los docentes y estudiantes a la tecnología de punta, así como desarrollar competencias para su uso.
  - Emplear de manera sistemática en los ambientes escolares dichas tecnologías, para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida, incluyendo la educación y capacitación a distancia y el desarrollo de una cultura informática.
  - Modernizar las instalaciones, ampliar la dotación de equipos de cómputo y actualizar los sistemas operativos.
  - Establecer convenios entre escuelas para compartir instalaciones y equipos.
  - Extender el acceso de todos los planteles escolares a las redes electrónicas de información.
- **Acciones implementadas.**
  Alianza por la Calidad de la Educación. Eje 1. Modernización de los Centros Escolares:
  - Equipamiento con conectividad de centros escolares para cubrir el 75% de la matrícula de educación básica.
  - Durante el 2010 se pretende equipar 217 aulas de secundarias generales y técnicas instaladas para la fase experimental del programa "Habilidades Digitales para Todos".
  - Primer informe de la primera fase de expansión experimental (finales de 2010).

Como se puede apreciar, el PSE no contempla específicamente ninguna acción relacionada con la enseñanza de una lengua adicional al español. No obstante, el Eje 4 de la *Alianza por la Calidad de la Educación* ha creado una serie de metas para la enseñanza del inglés, calendarizadas de la siguiente forma:

2008-2009.

- Contar con los programas de estudio y realizar la prueba piloto de 3º de preescolar a 2º de primaria.
- Versión final de los programas de estudio de 3ºa 6º grado de primaria.
- Versión preliminar de los programas de secundaria.

2010-2011

- Fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en secundaria.

Para tal efecto, se aplicará una evaluación diagnóstica de 6,375 docentes por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se implementará una etapa de prueba de estancias en el extranjero para capacitar a docentes en competencias didácticas y lingüísticas en el idioma inglés. Así, los compromisos para el siguiente ciclo escolar consisten en iniciar el proceso de formación continua de 34,000 docentes de secundaria e implementar las estancias en el extranjero para capacitar en competencias didácticas y lingüísticas de este idioma.

En virtud de lo expresado con anterioridad, podemos apreciar que el estudiante de educación media superior cuenta con un mínimo de recursos a comparación de los que se otorgan a la educación básica, razón por la que nuestra propuesta se enfoca en los estudiantes de este nivel , al considerar que son el grupo al que se le debe brindar apoyo para darle continuidad y calidad a sus estudios y orientándolos para que adquieran herramientas que les ayuden a incorporarse de manera exitosa en el mercado laboral.

De acuerdo a las acciones contempladas por la *Alianza por la Calidad de la Educación*, podemos concluir que hace falta garantizar los siguientes puntos previstos en el PSE:

Contemplar acciones para la creación de un perfil educativo en el nivel medio superior, por lo cual deben crearse programas adicionales para cubrir esta deficiencia que provoca la falta de continuidad educativa.

Actualmente se destina el 19% de becas educativas al nivel de educación medio superior, de este porcentaje, el 13% corresponde al Programa de Oportunidades. En vista a esto, la *Alianza por la Calidad de la Educación* ha decidido otorgar 75,000 becas adicionales a este Programa; sin embargo, es evidente que estos recursos son insuficientes para garantizar la continuidad del nivel básico al medio superior. Además, al considerar únicamente el nivel básico, es indispensable generar un programa adicional a este Programa, mediante el cual se destinen recursos suficientes para cumplir con la creación de un perfil educativo que tenga acceso a un mayor bienestar, generando un modelo educativo que impulse el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información para media superior.

Por otra parte, la inclusión del inglés en el nivel básico, a través de la *Alianza por la Calidad de la Educación*, constituye un gran avance para la sociedad globalizada de la que México es parte, no obstante, al igual que es necesario crear un programa para desarrollar las habilidades computacionales descritas en el párrafo anterior, es necesario que este mismo programa contemple lo relativo a este idioma en el nivel medio superior.

Lo expuesto anteriormente demuestra que los recursos para la enseñanza de inglés y computación en el nivel medio superior son prácticamente inexistentes, habida cuenta que los esfuerzos se encuentran focalizados en su totalidad al nivel de educación básico; pese a esto, siguen existiendo en el mismo importantes carencias de equipo tecnológico, rezagos en la infraestructura de aulas educativas y la capacitación de los docentes en estas materias iniciará después del 2011.

Con base en las consideraciones anteriores, es prioritario que el programa que se desarrolle en materia computacional e inglés en el nivel medio superior considere un mecanismo idóneo para su implementación, tomando en cuenta diversas propuestas nacionales e internacionales para garantizar la calidad y continuidad educativa contemplada en el PSE para este nivel educativo.

III.2. Ámbito internacional

En otros países, se han implementado medidas para equiparar y brindar a todos los estudiantes las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad.

Entre ellas podemos retomar la idea expuesta por Milton Friedman -economista estadounidense ganador del Premio Nobel de Economía en 1976- en su artículo "*The Role of Government in the Education*", recogido de su obra "*Economics and the Public Interest*", relativa a una política pública, en la que el Estado entrega un Bono Educativo cada ciclo escolar, el cual cubre los gastos educativos del estudiante. De esta forma, su peculiaridad radica tanto en su carácter intransferible como en su finalidad, pues únicamente puede utilizarse para pagar la colegiatura en la escuela de su elección. La ventaja que se puede apreciar de este proyecto deviene del hecho que el Estado continúa financiando la educación gratuitamente, con la salvedad de que no invierte dinero en infraestructura pública -lo cual permite obtener beneficios en el corto plazo- sino que lo entrega directamente al beneficiario.

Acerca de esta propuesta, se ha dicho que el Bono Educativo debería otorgarse a través de la banca comercial, para que el alumno pueda cambiar de escuela si no recibe un servicio educativo adecuado o de calidad. Lo anterior, genera la necesidad de que cada institución educativa compita contra otras escuelas (sistema público y privado) y en consecuencia se incremente la calidad educacional, generando una especie de mercado educativo que dependerá únicamente de si es buena o mala escuela. Por esta razón, el alumno puede elegir entre una institución pública o privada, como lo haría cualquier estudiante que cuenta con las posibilidades económicas para optar por la escuela con mayor nivel académico. En este punto hay que recalcar que los centros privados, al adherirse a esta política, no pueden cobrar más de lo que el Bono ofrece.

El sistema del Bono Educativo se ha implementado en algunos países; como España, específicamente el caso de Valencia, donde se le conoce como *"cheque escolar"*, el cual "es un sistema de ayudas económicas a la escolarización infantil, destinadas a sufragar los gastos de enseñanza de aquellos menores empadronados en el municipio de Valencia, que reúnan las condiciones que las Bases Reguladoras del Cheque Escolar disponen anualmente. Este sistema intenta contribuir así a la importancia decisiva de dicha etapa escolar en la compensación de desigualdades en educación".[19]

En el modelo alemán, además de existir pocas escuelas privadas cuyo pago es deducible de impuestos, se contempla un sistema muy parecido al Bono Educativo, con la salvedad de que los recursos se les otorgan a los niños desde que nacen hasta que cumplen 18 años o más, siempre y cuando continúen con los estudios universitarios. El monto que se otorga varía en función del número de hijos y de la necesidad que se demuestre.

Por su parte, Milawaukee (Estados Unidos de América), únicamente destina el Bono Educativo a las familias de ingresos más bajos.

Como se puede apreciar estos modelos son muy pretenciosos, lo cual hace prácticamente imposible efectuarlo en un país como México, pero no toda política de bonos tiene que funcionar igual, ya hemos visto que la implementación ha variado dependiendo del lugar en que se lleva a cabo. El principio rector del Bono Educativo consiste en que se utiliza para mejorar el desempeño y nivel académico de los colegios públicos y privados, con la finalidad de incrementar la equidad (cuando la población beneficiaria es seleccionada bajo algún criterio de focalización como género, nivel de ingresos o pobreza, entre otros); reducir la brecha de logro académico; y, equilibrar los cupos (la tasa estudiantes por profesor) entre estos tipos de instituciones educativas.

Además, no podemos ignorar que nuestro país se enfrenta a muchas otras dificultades que superar como: la creciente disminución en el gasto educativo que destinan los hogares, situación que se acentúa en aquellos con menor ingreso; el ingreso total de los salarios se destina en su mayor proporción a la adquisición de alimentos; y los alumnos en las escuelas menos favorecidas perpetuán los círculos viciosos de la pobreza al no adquirir las capacidades indispensables en inglés y computación, para estar en condiciones equitativas de

[19] Disponible en: www.valencia.es/ayuntamiento/educacion.nsf/vDocumentosTituloAux/Cheque%20Escolar-Convocatoria09-10?opendocument&lang=1&nivel=5

competencia en el mercado laboral. Precisamente por estas razones, es claro que el fomento de estas capacidades en la generalidad de los mexicanos dotará de habilidades que convertirán a la mano de obra mexicana en un factor de trabajo mucho más competitivo en comparación a otros países en vías de desarrollo.

A pesar de que la idea genérica del Bono Educativo puede ser atractiva, nosotros estamos convencidos que la tarea del Estado Mexicano no es destinar recursos a las instituciones privadas, sino garantizar la misma calidad educativa desde el sector público, para que de esta forma se materialicen eficazmente las exigencias que hemos desarrollado en la presente Iniciativa y que resultan imperiosas en nuestro contexto actual. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que debido a la carente infraestructura educativa en la educación media superior, el objetivo parece una tarea difícil de conseguir en el corto plazo, a la par que no podemos darnos el lujo de no brindarle esta oportunidad a los estudiantes que hoy conforman el ciclo educativo, pues entre más tiempo dejemos transcurrir, la omisión acarreará más consecuencias que repercuten directamente en el desarrollo de nuestro país y en la vida de estos estudiantes.

Con la implementación de esta propuesta se estaría reforzando y por lo tanto apoyando a la continuidad y calidad de la educación media superior, al garantizar efectivamente el progreso científico; de esta manera, México habrá dado un gran paso en el ámbito de derechos humanos, sentando las bases para la competitividad de la formación, terminando con una situación que redunda en la inequidad, la desigualdad y el deterioro institucional, cumpliendo tanto con los compromisos internacionales, como con las demandas que afligen a nuestro país.

IV. Viabilidad de la Iniciativa

De acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento, nuestra propuesta consiste en incorporar al progreso científico, reconocido en tratados internacionales, traducido en educación de calidad en computación e inglés en el nivel medio superior a través de la implementación de un programa que garantice su cumplimiento.

De esta forma, hay que señalar en primer lugar, que el Estado Mexicano al reconocer *el derecho que tiene toda persona* a *gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones*, **se obligó** a *adoptar las medidas que aseguren su pleno ejercicio, entre las que figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia* y de la cultura; de acuerdo a *los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales*.

En consecuencia, se ha comprometido a adoptar providencias, *especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.*[20] Asimismo, de conformidad con la *Convención Americana Sobre Derechos Humanos,* México, de nueva cuenta, asumió el compromiso de *adoptar, […] las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que no estuviesen garantizados internamente".*[21]

Así, el sustento jurídico de esta propuesta tiene como base lo establecido en nuestra Carta Magna, la cual prevé que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados Internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ***Ley Suprema de toda la Unión***. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes

[20] México, Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", *Diario Oficial de la Federación*, 7 de mayo de 1981. Artículo 26.
Disponible en:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1278&depositario=0&PHPSESSID=eb070d560221c9d0c4ebcb727f1fe76a

[21] *Ídem*, Artículo 2.

y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados[22].

De lo antes expuesto, se desprende que "***los tratados internacionales*** [independientemente de su denominación[23]] ***se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, […] contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.".***[24]

Consecuentemente, en materia educativa, nuestro sistema jurídico a través del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye como obligación del Estado el impartir y, por consiguiente, el correlativo derecho de todo individuo a recibir un modelo educativo *con un criterio orientador que tenga como base los resultados del progreso científico y que luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios*, adicionalmente, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- *atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura*; y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.[25]

Para la consecución de estos fines previstos anteriormente, la Constitución Federal, establece que "el Congreso tiene facultad […] para *dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa* y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. […]"[26].

En concordancia, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina que: "el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara ***un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV***"[…] Esto es, ***en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.***" [27]

De esta forma, la Ley General de Educación (LGE) establece:

---

[22] México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Diario Oficial de la Federación*, 5 de febrero de 1917, Artículo 133.
[23] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t., XXV, Febrero de 2007, p. 738
[24] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t., XXV, Abril de 2007, P.6. Registro No. 172650
[25] México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Diario Oficial de la Federación*, 5 de febrero de 1917, Artículo 3º.
[26] Artículo 73, fracción XXV, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[27] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t., XV, Enero de 2002, P.1042, Jurisprudencia, Registro No. 187982.

*"**Artículo 1.** Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social."*[28]

Lo anterior significa que su objeto es la regulación de la educación del Estado en todos sus niveles, esto es emitir lineamientos o directrices para que la educación funcione en cada nivel, la LGE se divide en Capítulos que corresponden a cada una de las facultades y competencias que tiene cada autoridad, sin olvidar las facultades concurrentes que llegan a tener dichos niveles y que según se explica en el párrafo anterior la Suprema Corte de Justicia ha definido de manera clara el significado de "facultades concurrentes".

De acuerdo a este punto, el Capítulo II de la LGE titulado "Del Federalismo Educativo" establece el reparto de competencias en materia educativa del siguiente modo:

Artículo 12.- Corresponden <u>de manera exclusiva a la autoridad educativa federal</u> las atribuciones siguientes:		**Artículo 13.- Corresponden <u>de manera exclusiva a las autoridades educativas locales,</u> en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:**
I. Determinar los Planes y Programas de estudio (no incluye media superior). II. Establecer el calendario escolar III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos. IV. Autorizar el uso de libros de texto(básica) V. Fijar lineamientos para el uso de material educativo (básica) VI. Sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; VII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares;	IX. Registro nacional de instituciones integrantes (sistema educativo nacional); X. Fijar los lineamientos generales de los consejos de participación social […]; XI. Realizar la planeación y programación del sistema educativo nacional, evaluación y los lineamientos para las autoridades locales XII. Fomentar, en coordinación […] las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y	I. Prestar los servicios de educación para la formación de maestros (no incluye media superior ni superior), II. Proponer a la SEP los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio (no incluye media superior) III. Ajustar, en su caso, el calendario escolar […], con respeto al calendario fijado por la Secretaría; IV. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros (básica); V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios (no incluye media superior) para la formación de maestros de educación básica (lineamientos de la SEP), VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación (no incluye media superior) para la formación de maestros de educación básica, y VII. Otras.

[28] México, Ley General de Educación, *Diario Oficial de la Federación*, 13 de julio de 1993, Artículo 1º.

VIII. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, […];	deporte, y XIII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación (no incluye media superior)	
Artículo14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: I. Promover y prestar servicios educativos, (excepto servicios para la formación de maestros ni actualización y capacitación de los mismos); II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 (sólo media superior); III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida; IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios (media superior y superior); V. Editar libros y producir otros materiales didácticos, (no libros de texto gratuitos); VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas pública (innovación educativa, investigación científica, tecnológica y humanística; VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa; VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica; IX. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones; X. Promover e impulsar actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro; XI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias; XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y XIII. Otras El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar	**Artículo 15.- El ayuntamiento** de cada municipio podrá, ***sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14.*** […] dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. **Podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo** **Artículo 16. Distrito Federal:** Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial ***que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18.*** Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la Secretaría. El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27.	

o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.	

De acuerdo a este reparto de facultades, se advierte que la educación media superior no se contempla de manera exclusiva en ninguno de los artículos anteriores.

De una lectura puntual, se desprende que estas atribuciones se dirigen únicamente a la educación básica y todo lo relacionado con ella, omitiendo cualquier referencia a la educación media superior; sin embargo, en el artículo 14, al plantear explícitamente la concurrencia de facultades, provoca que aquello que no se contempla como exclusivo para ninguna autoridad en particular sea concurrente, de conformidad a lo dispuesto en las siguientes jurisprudencias.

Registro No. 921386
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice (actualización 2002)
Tomo I, Const., P.R. SCJN
Página: 156
Tesis: 32
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO CONTRAVIENE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.-

El artículo 3o. de la Ley General de Educación establece la obligación del Estado de prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, dentro del marco de la concurrencia prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ***conforme a la distribución de la función social educativa que establece la propia ley en mención; y el numeral 14 de dicho ordenamiento general dispone que corresponde a las autoridades educativas, federal y locales, de manera concurrente, entre otras atribuciones, la de prestar servicios educativos distintos a los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13 de tal ordenamiento, esto es, los relativos a los de educación inicial, básica, indígena, especial, normal y demás para la formación de maestros, así como los de actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica. Por tanto, el artículo 4o. de la Ley de Educación del Distrito Federal, al señalar como obligatoria la impartición de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, lejos de transgredir aquella legislación, se apega a la distribución de la función social educativa que establece.***

Novena Época:
Controversia constitucional 29/2000.-Poder Ejecutivo Federal.-15 de noviembre de 2001.-Once votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 1036, Pleno, tesis P./J. 145/2001; véase la ejecutoria y el voto en las páginas 919 y 1026, respectivamente, de dicho tomo.

Registro No. 187996
Localización:
Novena Época

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Enero de 2002
Página: 1037
Tesis: P./J. 149/2001
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL ORDEN CONSTITUCIONAL, PUES EL CRITERIO QUE ORIENTARÁ LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD ES COINCIDENTE CON DIVERSOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ESTADO ESTABLECIDOS EN LA LEY FUNDAMENTAL.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el criterio que orientará la educación que imparta el Estado, previendo que será ***democrático, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana, y señalando cómo se integran y logran esos aspectos;*** asimismo, del análisis al artículo 9o. de la Ley de Educación del Distrito Federal, se desprende que, ***aun cuando incluyen en el criterio que orientará la educación que imparta el gobierno de esa entidad, cuestiones que no prevé o refiere la Norma Fundamental, no es inconstitucional, ya que además de reiterar los principios rectores de la educación que establece el artículo 3o. constitucional, sin contravenirlos en forma alguna, al añadir otros criterios que regirán la educación local también reitera diversos principios que se contienen en los artículos 1o., 2o., 4o., 25 y 27 constitucionales, por lo que al ser coincidentes los criterios que orientarán la educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal,*** en términos del artículo 9o. de la Ley de Educación de la entidad, ***con los principios rectores del Estado establecidos en el orden constitucional, lejos de transgredirlo, se ajustan a su mandato.***

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de diciembre en curso, aprobó, con el número 149/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de diciembre de dos mil uno.

Registro No. 187999
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Enero de 2002
Página: 1035
Tesis: P./J. 146/2001
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CUMPLE CON EL MANDATO CONTENIDO EN EL DIVERSO 32 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, AL PERMITIR QUE EL GOBERNADO EJERZA EN FORMA PLENA SU DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LOGRE UNA EFECTIVA IGUALDAD EN OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

De lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Educación se desprende que la intención del legislador fue que la función de las autoridades educativas permitiera el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, así como una mayor equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, por lo que es inconcuso que si el artículo 4o. de la Ley de Educación del Distrito Federal establece la obligación de impartir la educación preescolar y media superior por parte del gobierno de dicha entidad, se cumple con ese mandato.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 146/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

En consecuencia, cabe aclarar que la modificación que proponemos, se debe incorporar en una facultad concurrente (según el termino se ha explicado), en virtud de que el nivel medio superior está actualmente compuesto por materias aisladas y será más fácil que cualquier autoridad, ya sea, federal o local implemente o ejecute esta nueva obligación con la finalidad de permitir la implementación de estas herramientas de manera eficaz.

Por lo anterior, la traspolación en la LGE de los lineamientos del progreso científico, con las características que ya se han mencionado, son imprescindibles, en el entendido de que hasta el momento su implementación se contempla en la educación secundaria pero no a nivel media superior, esto es, independientemente de que es absolutamente necesario el apoyo a la continuidad educativa que obviamente no se ha podido lograr del sexto año de primaria a la secundaria, no debemos olvidar que con el ánimo de que esta continuidad en la educación se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria es absolutamente necesario la incorporación de estos lineamientos en el nivel medio superior.

Ahora bien, para cumplir con lo que se pretende adicionar en el artículo 14, es necesario que el artículo 33 incorpore un programa que incluya estas acciones, para asegurarnos de la continuidad educativa, especialmente la media superior, apoyando el progreso científico con las herramientas tecnológicas indispensables para desarrollar habilidades computacionales y el manejo de un idioma extranjero, con la finalidad de formar estudiantes competentes en el mercado laboral, y así garantizar "el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado" para hacerse de una remuneración que proporcione, entre otras, las condiciones de existencia dignas.[29]

V. Propuesta

La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el actual marco jurídico en materia educativa, con la finalidad de permitir la implementación de acciones, que eficazmente permitan al estudiante que cursa estudios de nivel medio superior, contar con las herramientas tecnológicas indispensables para generar habilidades computacionales y el manejo de una lengua extranjera, preferentemente inglés, garantizando así condiciones de equidad e igualdad con las que cuenta aquel que procede de una escuela privada y le posicionan en una situación ventajosa en diversos campos económicos como el acceder a un empleo bien remunerado, interactuar en el ámbito de los negocios internacionales y las innovaciones científico-tecnológicas.

De esta manera, se propone incorporar en artículo 14 de la Ley General de Educación los compromisos internacionales que nuestro país ha reconocido y se ha comprometido a asumir; específicamente, los enlistados en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que a la letra señala:

> *"**Artículo 15***
> *1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:*
> *a) Participar en la vida cultural;*
> ***b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;***
> *c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.*

[29] *Ídem*, artículos 6 y 7.

> ***2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.***
> *3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.*
> ***4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales."***[30]

Lo anterior se materializará con la creación de un programa que otorgue los apoyos económicos que aseguren el desarrollo de las habilidades informáticas y de idiomas que permitan al educando interactuar en temas internacionales de carácter científico y cultural de acuerdo al progreso científico, a través de la adición de una fracción al artículo 33 de este ordenamiento.

Estamos convencidos que tras la aprobación de esta reforma, se crearán las condiciones necesarias para que los méritos académicos determinen las oportunidades laborales y no como sucede hoy en día, que en función de privilegios circunstanciales los empleos mejor remunerados son para unos cuantos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 14 y una XV al artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para implementar medidas para la calidad en la educación y el progreso científico en el nivel medio superior, fomentando primordialmente el dominio de habilidades computacionales e idiomas, a fin de garantizar el progreso científico otorgando igualdad de oportunidades y conocimientos competitivos a los mexicanos, en los siguientes términos:

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan las fracciones IX al artículo 14 y XV al artículo 33, de la Ley General de Educación, recorriéndose las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 14.-…

I a VIII…

IX. Promover e implementar dentro de la educación tipo media-superior las medidas que aseguren el derecho que tiene toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones desarrollando las habilidades informáticas y de idiomas que le permitan al educando interactuar en temas internacionales de carácter científico y cultural, a través de convenios en el ámbito de cada competencia, según lo establecido en esta Ley.

X. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;
XI. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;
XII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;
XIII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y
XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

[…]

[30]México, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Diario Oficial de la Federación*, 12 de mayo de 1981. Artículo 15. Disponible en: http://www.sre.gob.mx/tratados/Default.htm

Artículo 33.-…

I-XIV

XV. Desarrollarán los programas para otorgar los apoyos económicos correspondientes a fin de implementar las medidas que aseguren el desarrollo de las habilidades informáticas y de idiomas que le permitan al educando interactuar en temas internacionales de carácter científico y cultural de acuerdo al progreso científico de conformidad al artículo 14 de esta Ley.

XVI. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con el presente Decreto, se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

TERCERO. La implementación de los programas a que hace referencia la fracción IX del artículo 14 y XV del artículo 33 se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestal y de manera gradual con la participación coordinada de las autoridades educativas de los órdenes de gobierno correspondientes.

Comisión Permanente, Palacio de Xicoténcatl a 27 de julio de 2010.

DIP. LORENA CORONA VALDÉS **DIP. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ**

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ **DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN**

DEL DIP. CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 415 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 415 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA QUE SE IMPONGA PENA DE UNO A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN Y DE TRESCIENTOS A NUEVE MIL DÍAS MULTA, SIN DETRIMENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ORDENE LA AUTORIDAD COMPETENTE, A QUIEN SIN APLICAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN O SEGURIDAD:

EMITA, DESPIDA, DESCARGUE EN LA ATMÓSFERA, LO AUTORICE U ORDENE, GASES, HUMOS, POLVOS O CONTAMINANTES QUE OCASIONEN DAÑOS A LOS RECURSOS NATURALES, A LA FAUNA, A LA FLORA, A LOS ECOSISTEMAS, AL AMBIENTE O CONTRIBUYAN AL CAMBIO CLIMÁTICO, SIEMPRE QUE DICHAS EMISIONES PROVENGAN DE FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA FEDERAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

EMITA, DESPIDA, DESCARGUE EN LA ATMÓSFERA, LO AUTORICE U ORDENE, GASES, HUMOS, POLVOS O CONTAMINANTES QUE OCASIONEN DAÑOS A LOS RECURSOS NATURALES, A LA FAUNA, A LA FLORA, A LOS ECOSISTEMAS, AL AMBIENTE O CONTRIBUYAN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

El suscrito, **CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA**, Diputado Federal integrante de la LXI Legislatura de honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno del la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos:

La preservación de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los habitantes de la república mexicana es un objetivo que forma parte de la política del estado mexicano tutelado en el artículo cuarto Constitucional. Este derecho se confronta con la aspiración de lograr el desarrollo económico deseado y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Las economías emergentes requiere resolver prioridades como: aumentar los niveles de salud, educación, seguridad social y mayor ingreso per cápita. Generalmente la forma de cubrir estas prioridades se traducen en una presión hacia los recursos naturales. México alberga una población de aproximadamente 100 millones de personas en una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados, a pesar de lo vasto del territorio se ha visto sometido a presiones ambientales considerables.

Aunado a lo anterior, el aumento de la temperatura promedio del planeta, vinculado al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera resultado de la quema de combustibles fósiles de actividades humanas, así como la pérdida de la cubierta vegetal comprenden el cambio climático. Este fenómeno se inició a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la "Revolución Industrial" las concentraciones de CO_2 se comenzaron a elevar pasando de un máximo de 280 ppm durante 650 mil años a alcanzar los niveles actuales que son superiores a 387 ppm. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio

Climático (PICC)[31] es el principal organismo para la evaluación del cambio climático, establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para proveer al mundo una clara visión científica sobre el estado actual del los cambios del clima y sus posibles consecuencias ambientales y socio-económicas, y prevé que de alcanzarse concentraciones de 550 ppm de CO2 atmosférico, la temperatura media de la tierra subiría tres grados centígrados, situación que se considera incontrolable porque transformaría el sistema climático existente.

El cambio climático es un fenómeno global pero requiere de la actuación local para instrumentar medidas de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. Las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas son resultado de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados, para la generación de energía, estos elementos son la base del desarrollo industrial y del transporte de todos los países. Las fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el segundo párrafo del Artículo 111 BIS. establece que "se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos".

En concordancia con la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC) [32], actualmente ratificada por 192 países y el "Protocolo de Kioto[33]", firmado por México en 1998 y ratificado en el año 2000, que define seis gases de efecto invernadero: bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidroflourocarbonos (HFCs), perflourocarbonos (PFCs), hexafluoruro de azufre (SF_6) y los programas gubernamentales como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) [34], documento programático, rector del ejecutivo federal en materia de cambio climático hasta el 2012, indicando las acciones necesarias para mitigar y adaptarnos al cambio climático.

Se presenta el proyecto de iniciativa para otorgarle una mayor precisión al marco legal existente en materia de cambio climático en congruencia con los objetivos y metas de vulnerabilidad, adaptación y mitigación tanto nacionales como internacionales. Con ello los actores económicos y los mercados internacionales adquieren certidumbre de rumbo de la política pública, en materia de cambio climático, al fortalecer las medidas regulatorias que inhiben la emisión de gases de efecto invernadero.

Esta reforma al Código Penal Federal, actualiza el marco legal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental al incluir el concepto de cambio climático, invitando a las fuentes fijas de jurisdicción federal, a tomar acciones para disminuir al máximo los impactos ambientales negativos resultado de las emisiones a la atmósfera de gases, humos, polvos o contaminantes que afecten la salud de la población, el ambiente, o contribuyan al cambio climático. De acuerdo al inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 1990-2002 las emisiones de GEI[35] en el año 2002 aumentaron en un 30% respecto al año 1990, lo que suma un total de 553,329.4Gg[36]. Por ello la iniciativa propone un incremento al rango de las multas, a fin de favorecer que se opte por evitar las emisiones o, en su caso, aplicar las medidas de prevención y seguridad, antes que pagar las multas, resultado del relativo bajo costo de una multa que en su rango superior asciende a los $172,380 pesos aproximadamente[37], cantidad relativamente mínima frente al daño ambiental y afectación que se puede generar al bienestar de los ciudadanos. Por último se considera preciso puntualizar que las multas y las penas de prisión deberán aplicarse sin detrimento de las medidas preventivas y correctivas que ordene la autoridad competente.

---

[31] Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) www.ipcc.ch/
[32] Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. www. unfccc.int/2860.php
[33] Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 1998 Naciones Unidas.
[34] Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 – DOF 28/08/2009.
[35] GEI generados por emisiones del sector energía, procesos industriales, agricultura y desechos (no se consideran las emisiones de la categoría uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura).
[36] Gg: unidad de medida de masa equivalente a 10^9 gramos, empleada para las emisiones de GEI. Un gigagramo equivale a 1,000 toneladas.
[37] Cifra calculada al 20 de julio de 2010, con base en el salario mínimo vigente en el área geográfica "A".

En este sentido, el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, cuyo texto vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2009, establece en su Artículo 415.- referente los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 415 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 415.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a **nueve** mil días de multa, **sin detrimento de las medidas preventivas y correctivas que ordene la autoridad competente,** a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas, al ambiente **o contribuyan al cambio climático**, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en **nueve** mil días multa.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) www.ipcc.ch
2. Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. www. unfccc.int/2860.php
3. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 1998 Naciones Unidas.
4. Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 – DOF 28/08/2009.

DE LA DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE SUBROGACIÓN GESTACIONAL Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE SUBROGACIÓN GESTACIONAL Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

La suscrita, diputada **LETICIA QUEZADA CONTRERAS**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE SUBROGACIÓN GESTACIONAL Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La historia de la esterilidad va de la mano con la historia de la humanidad. En la antigua Mesopotamia al varón le era permitido adquirir una segunda mujer cuando la primera era estéril. En la Grecia clásica, al decir de Pausanias, la esterilidad era producto de la cólera de los dioses. En la Biblia, se escribe en el Génesis el más famoso de los casos de esterilidad humana, el de Abraham y Sara, una pareja que llegó a la ancianidad sin haber conseguido la procreación.

Recordemos que las parejas heterosexuales habían recurrido en la antigüedad a las creencias, mitos y ritos para concebir un hijo propio incluso exponiendo a la mujer a riesgos físicos y sanitarios, es gracias las técnicas de reproducción asistida se han implementado en instituciones de salud públicas y privadas de nuestro país que en los últimos 30 años, sin contar con una regulación precisa y adecuada que permita que haya certeza en los alcances reproductivos y los limites que dicha actividad conlleva en la práctica medica.

En el siglo pasado y durante el presente los avances de la biología de la reproducción humana han dado pasos agigantados para resolver los problemas de infertilidad y esterilidad, haciendo posible que miles de personas hayan podido procrear y tener acceso a la parentalidad que para algunas personas constituye uno de los principales objetivos biológicos que cumple la persona en su ciclo de vida.

La infertilidad es un padecimiento asintomático, diagnosticado cuando no se ha logrado concebir un hijo, de manera natural por lo menos durante un año. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como un a enfermedad con derecho a ser tratada, y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución a través de tratamientos médicos.

La esterilidad es la incapacidad de tener hijos por anomalía física, que puede ser un bloqueo en las Trompas de Falopio en la mujer o una disminución de la espermatogénesis en el hombre. El gameto se refiere a una célula germinal madura, femenina o masculina, es decir, ovulo o espermatozoide funcional, capaz de intervenir en la fertilización o la conjugación. A este proceso también nos podemos referir como meiosis y con esta la la gametogénesis, que es el proceso de la fecundación; por lo tanto, se puede decir que la incapacidad de llevar a cabo la gametogénesis es la puntualidad del término esterilidad.

Según cifras que aporta el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, de ahí la importancia para que sea regulado este problema de salud pública.

La reproducción humana asistida, ha sido materia de legislación en otros países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España, entre otros, en estas legislaciones se pretende garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que al igual que en nuestro país se llevan a cabo en esos casos con las prerrogativas y limites que establecen sus Estados.

En el ámbito internacional, los derechos sexuales reproductivos se encuentran consagrados en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo), en el capítulo VII, referente a los Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, inciso A) Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, preceptúa:

> **"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos…La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.**
>
> **Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.**
> **También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios…"**[38]

En el marco jurídico vigente, nuestra Constitución Política establece en su artículo 4 el derecho a planificar libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos. Reconociendo los derechos reproductivos, de las y los mexicanos:

> **CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**
>
> **Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.**
>
> **Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.**
>
> **Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.**

Es decir, corresponde al Estado, la asistencia a las personas para garantizar su derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de hijas e hijos, este reconocimiento lleva implícito el reconocimiento a los derechos reproductivos. Aunado a lo expuesto y en relación con el artículo 133 de la Carta Magna, el Estado Mexicano debe velar por el cumplimento de los instrumentos internacionales que suscribe y ratifica en materia de derecho internacional.

---

[38] **Derechos de las Mujeres, T. I, Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional.** Ed. UNIFEM, OMACNUDH y SRE. México, junio, 2006.

En la Iniciativa de Ley y de las diversas disposiciones legales aplicables, busca que se brinde certeza jurídica para acceder a los Derechos Reproductivos, entendidos estos como parte de los Derechos Humanos. Los legisladores en nuestra actividad tenemos la obligación de plasmar la realidad social en que vivimos, para muchas mujeres ejercer sus derechos reproductivos como otros derechos fundamentales es una necesidad. Las mujeres que por su condición biológica se encuentran imposibilitadas de llevar a término un embarazo saben que este hecho se puede convertir en un obstáculo que mengua otros aspectos de su vida.

En esta Iniciativa se norma la reproducción humana asistida desde uno de sus aspectos, ya que en términos de la bioética existen otras prácticas médicas relacionadas que pueden atentar contra los principios que la rigen (a la bioética). De ahí la necesidad de plasmar conceptos de lo que debemos entender por la reproducción asistida y que se manifiesta en el ámbito de interés de la bioética, considerada en la calidad de revolución de conocimientos y conceptos, este hecho se redimensiona particularmente respecto a la salud y a la intervención de la medicina para vincular propósitos con relación a los derechos humanos considerados como derechos humanos de tercera generación, por ello, el interés de reconocer y brindar certidumbre jurídica a la ingeniería genética con fines de reproducción humana asistida.

La Bioética plantea consensos, que en los términos de la filosofía práctica (John Rawls) se vincula con lo socialmente aceptado y reconocido, estos principios adoptados desde los años setenta, y que son observados para la creación de esta Norma, son los siguientes: ***Principio de autonomía, de dignidad, de universalidad, de información.*** Dichos principios son respetados y vinculados a través de la Iniciativa en todo el texto de la misma, al plantear el respeto al gameto, mórula, embrión y feto humano y a las personas que se vinculan al Instrumento de Subrogación gestacional. Otro principio vinculado y que actualmente se encuentra aun en discusión para ser establecido por consenso, es el relativo al ***utilitarismo***, dicho así, porque establece que: *es licito emprender una acción que no supone un beneficio apreciable para una persona (e incluso le podría suponer un daño), si con ella: se produce un beneficio apreciable para otro u otros, y se cuenta con el consentimiento del afectado, y se trata de una medida no degradante.*[39]

Esta Iniciativa aborda la subrogación gestacional a través de los ejes fundamentales de*:* ***la persona y la dignidad humana*.**

La ciencia define a la maternidad como "*la relación que se establece por la procedencia del óvulo a partir de la madre*", y distingue básicamente a la maternidad gestacional como a aquella que se refiere a la persona que lleva a cabo la gestación.

Por tal motivo, es propio referirnos al término subrogación gestacional, para establecer la relación de subrogar, que significa sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra, en este caso, nos referiremos a la práctica medica mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre el producto de la concepción de otra. Este término fue empleado y adoptado desde el Informe Warnock (en el Reino Unido). Esta técnica posibilita el embarazo sin necesidad de que para ello exista copula, ya que puede desarrollarse a través de la inseminación y la recepción por parte de la madre sustituta del embrión, técnica denominada Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas siglas son FIVTE y que se aplica en la variante homóloga y heterologa, que supone en el primer caso que existe identidad entre las personas que desean concebir con la carga genética, es decir, son los que aportan los óvulos y espermatozoides para la fecundación y en el segundo se recurre a terceros que aportan su material genético para que en el mismo sentido, se lleve a cabo la fecundación.

Este hecho supone que a través de la implantación de la o las mórulas humanas que se formen, existe una mujer que presta su matriz en forma gratuita (no onerosa, en términos civiles) para que se lleve a cabo la gestación y el nacimiento. Esta técnica de reproducción asistida es valiosa en tanto facilita a las mujeres que se encuentran en la imposibilidad física para llevar a término un embarazo o un parto.

[39] Atienza, Manuel. **Investigación con embriones y clonación: La Ética de la Razonabilidad.** Revista Mexicana de Bioética, Año 1, Num. 2, primer semestre, año 2004. pags. 33 a 45

En particular, la Iniciativa plantea en una estructura de cuatro títulos y siete capítulos y diversos transitorios. El primer titulo se refiere al objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento y en caso de controversia o de aplicación supletoria, se establece que serán los tribunales y las normas que rigen el Derecho Civil las que serán aplicables, en caso de duda.

Así pues, desde el artículo 1° se establece que se debe entender por subrogación gestacional a la práctica medica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer que pueden aportar o no su carga genética y que se encuentran unidos por matrimonio o que viven en concubinato, en virtud de que la mujer que forma parte de la pareja unida padece una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una mujer que será definida como mujer gestante para la Ley y que llevará en su útero el embrión humano y cuya relación concluye con el nacimiento. En el mismo artículo se establece que esta Ley se encuentra regida por los principios de dignidad humana e interés superior del menor, mismos que son referidos a lo largo de la Ley por tratarse de principios rectores. El artículo 2° establece que esta Ley no tiene fines de lucro para las partes, es decir, esta Ley no trata en si misma de una renta de úteros, sino de la posibilidad de colaborar con un fin altruista y de buena fe, para que puedan tener descendencia dos personas que así lo desean. El artículo 3° establece las definiciones de la Ley, destacando que la practica médica que rige esta Ley, es una técnica de reproducción asistida denominada Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas siglas son FIVTE en sus variantes: homologa u heterologa. En el artículo 4° se establece que la Ley será aplicable en tanto en instituciones de salud públicas, como en las privadas que posean infraestructura y certificación de autoridad sanitaria para hacer este tipo de intervenciones médicas. El artículo 5 establece la supletoriedad del Derecho Común Civil en caso de duda o controversia.

El Titulo Segundo denominado De la Subrogación gestacional, establece en general, las disposiciones que deberán atender los médicos tratantes, en particular, refiriendo principios como el secreto profesional, así como el asesoramiento médico a todas las partes que intervienen en la practica médica, explicándoles los riesgos y alcances (artículos 6 a 9). La propia Ley en sus artículos 10 y 11 establece los requisitos que deberán cubrir respecto a su salud las partes de la subrogación gestacional y en especifico los requisitos médicos que deberá cubrir la mujer gestante, quien deberá ser una mujer que goce de buena salud y cuya condición sea benéfica para el sano desarrollo del feto, en este sentido, se deberá realizar una visita domiciliaria por una trabajadora o trabajador social, quien declarará si dicha mujer tiene condiciones adecuadas de desarrollo y vida. En los artículos 12 y 13 se visibiliza que si bien la mujer gestante no es una madre biológica si es en estricto sentido una mujer embarazada, sujeta a las disposiciones que las leyes establecen, tales como no discriminación y acceso a servicios de salud.

En el Titulo Tercero denominado Del Instrumento de la Subrogación gestacional, se establece la forma y límites que tiene la subrogación gestacional. En el artículo 14 establece requisitos jurídicos, tales como la residencia en el Distrito Federal, lo que ataja la posibilidad de que exista alguna especie de "turismo con fines de procreación", también se establece que se deberá tener los certificados médicos expedidos por el especialista en reproducción humana que certifique la imposibilidad para llevar a cabo la gestación por parte de la madre subrogada, así como la certificación de que la mujer que llevará a cabo la gestación cuenta con plena salud física, planteando incluso la posibilidad de hacer exámenes complementarios, tales como el llamado antidoping, con el objeto de evitar que tenga alguna toxicomanía. Adicionalmente en el artículo 15 se blinda aún más la posibilidad de que pudiera existir alguna especie de lucro por parte de la mujer gestante, al imponer como parte del procedimiento de firma de Instrumento Jurídico, que el Notario Público, deberá consultar un registro de maternidades subrogadas, para constatar que la mujer que se compromete a gestar, no lo haya hecho en más de 2 ocasiones, protegiendo por una parte su salud física y por otra garantizando que no exista algún lucro de su parte. En el artículo 16 se establecen los límites que tienen los contrayentes para los clausulados a los que pueden vincularse y que en sus 4 hipótesis, responden a obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano en materia de protección a los infantes y a las mujeres. Es decir, restricciones para garantizar la protección de los derechos humanos, entre los que destacan el acceso a la salud pública de las mujeres, el derecho a interrumpir el embarazo hasta la décimo segunda semana, entre otros, para efectos del Derecho Penal sustantivo en cada entidad federativa.

En el artículo 17 se establece la libertad de los que firman el Instrumento para la Subrogación gestacional para que este documento contenga las cláusulas que consideren necesarias, para asegurar la integridad del embrión y posteriormente el feto, así como el bienestar integral de la mujer gestante. Así pues, en el artículo 18 se establece incluso la posibilidad de creación de un fideicomiso a favor del no nacido. Una vez suscrito el documento por las partes, el Notario Público está obligado a informar de su suscripción a la Secretaría de Salud, haciendo del conocimiento de la dependencia los datos que establece el capítulo del Registro (artículo 27). El artículo 24 establece que el Instrumento de Subrogación Gestacional formaliza el acuerdo de voluntades para la subrogación gestacional y constituye una parte indispensable para que exista, es decir, este artículo es sumamente importante porque establece el eje del acuerdo de voluntades y la protección jurídica que trae consigo.

El artículo 25 establece que el certificado de nacimiento verificará el alumbramiento mediante esta técnica de reproducción asistida, dando cuenta del hecho y atribuyendo la maternidad a la mujer subrogada, sin que existan derechos de filiación para alguno de los aportantes genéticos respecto al recién nacido. Ninguna niña o niño nacidos por esta técnica de reproducción asistida serán distinguidos por esta circunstancia en sus actas de nacimiento. Blindando cualquier posibilidad de conflicto posterior respecto a su identidad, garantizándola y protegiéndola.

La Ley dispone en el artículo 27 que la Secretaría de Salud, llevará un registro de maternidades subrogadas, con el objeto el registro -en sí mismo- y de control de los instrumentos y nacimientos. Así como de los médicos tratantes que lleven a cabo la subrogación gestacional. Este registro permitirá tener certeza y datos estadísticos respecto esta práctica médica, sacándola de la opacidad de las cifras desconocidas.

En el Título Cuarto se establecen las nulidades que pueden afectar o viciar la voluntad de las partes, no obstante el artículo 29 aclara que si bien el Instrumento pudiera ser nulo, este hecho no los exime de las responsabilidades adquiridas y derivadas de su existencia. También es en este Título, en su artículo 30, que establece la posibilidad para la mujer gestante para demandar vía civil a la madre subrogada y al padre el pago de gastos médicos, en caso de patologías que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal. Otro aspecto que regula la Ley es el posterior y derivado de la existencia del acto, en un afán por proteger a la dignidad humana, se prohíbe a los médicos tratantes, que realicen la implantación de mórulas humanas sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen o con el consentimiento que pudieran otorgar terceros involucrados. Por otra parte el artículo 33 establece que la mujer gestante que desee obtener un lucro derivado de la subrogación gestacional practicada en su cuerpo, o pretenda obtenerlo en virtud de la divulgación pública con el objeto de causar algún daño a la imagen pública de la madre subrogada le serán aplicables las sanciones que se hayan previsto en el clausulado del Instrumento de la Subrogación Gestacional o en su caso las disposiciones que establecen la legislación de cada Estado y en el caso del Distrito Federal, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal , es decir, incluso sin que exista cláusula expresa de secrecía respecto a la subrogación gestacional, por tratarse de un aspecto que tiene que ver con la imagen pública de una persona y con aspectos que solamente le atañen a la madre subrogada y al padre, esta conducta puede ser demandada civilmente y sancionable por un juez.

Finalmente, se establecen una serie de transitorios que tienen por objeto la publicidad de la Ley y el cumplimiento por parte de las autoridades a las que derivadas de la Ley se les otorga atribuciones.

Estamos legislando, por relaciones más justas y más humanas, atendiendo a las legitimas aspiraciones humanas, regulando relaciones que existen de hecho, al margen de la Ley en las que atajamos la vulnerabilidad humana y social para transparentar los hechos que ocurren, legislando para la gente y atendiendo sus anhelos humanos. Ser madre para muchas mujeres constituye un hecho de la naturaleza, concedido sin pedirlo, simplemente atendiendo a nuestra naturaleza biológica, sin embargo para otras mujeres estas condiciones biológicas no fueron favorables, hagámosles factibles la posibilidad de ser madres y cumplir como legisladoras y legisladores, con las mujeres a las que representamos.

Por expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se decreta la Ley Federal de Subrogación Gestacional, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE SUBROGACIÓN GESTACIONAL
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer y regular los requisitos y formalidades para efectuar la subrogación gestacional.

Artículo 2. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley, son relativas a la Subrogación gestacional como práctica médica auxiliar para la procreación entre un hombre y una mujer.

La subrogación gestacional se efectúa a través de la práctica medica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer unidos por matrimonio o que viven en concubinato, en cuyo caso, la mujer casada o que vive en concubinato padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de la madre subrogada y el padre, y cuya relación concluye con el fin del embarazo o el nacimiento.

Las mujeres cuyo estado civil sea solteras podrán acceder a esta práctica médica, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados para la madre subrogada en la presente Ley; para tal efecto, le serán aplicables de manera análoga en lo que corresponda dichas disposiciones.

Esta práctica médica deberá realizarse protegiendo en todo momento la dignidad de la persona y el interés superior del menor.

La subrogación gestacional se realizará sin fines de lucro para la madre subrogada, el padre y la mujer gestante y en su caso, los aportantes de gametos humanos y los terceros que tuvieren relación con alguno de los que directamente intervienen en la subrogación gestacional.

Procurará el bienestar y el sano desarrollo del producto de la fecundación durante el periodo gestacional.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se define y entiende por:

I. Código Civil: Código Civil Federal;

II. Código Penal: Código Penal Federal;

III. DIF: Al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

IV. Filiación: es la relación que existe entre el padre o la madre y su descendencia, y se encuentra sujeta a lo dispuesto en esta Ley, la legislación del orden común vigente y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano;

V. Instrumento para la Subrogación gestacional: es el instrumento suscrito ante un Notario Público, en el que se establece el acuerdo de voluntades a título gratuito mediante el cual una mujer con capacidad de goce y ejercicio se compromete gestar el producto fecundado e implantado en su útero y gestarlo hasta las 40 semanas de embarazo o antes, por existir prescripción médica. En beneficio de dos personas unidas mediante matrimonio o que viven en concubinato y que pueden o no aportar su carga o material genético a través de un ovulo y un espermatozoide fecundados e implantado en el útero de la mujer que se faculta como mujer gestante y que concluye con el fin del embarazo o el nacimiento;

VI. Interés superior del menor: la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, en los términos que establece el Derecho Internacional Público;

VII. Implantación de mórula: Implantación de mórula o huevo humano con fines de reproducción mediante la práctica médica denominada Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas siglas son FIVTE aplicada en su variantes homóloga y heterologa, entendida por la primera, aquella en que los aportantes de los gametos humanos coinciden con la madre subrogada y el padre y la heterologa es aquella que permite que exista coincidencia entre aportantes de los gametos humanos y alguno de los progenitores subrogados;

VIII. Ley: Ley Federal de Subrogación Gestacional;

IX. Ley de Salud: a la Ley General de Salud;

X. Madre Subrogada: mujer con capacidad de goce y ejercicio que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y que puede o no aportar su material genético para la fecundación. Que se compromete mediante el instrumento denominado: Instrumento para la Subrogación Gestacional desde el momento de la implantación con las reglas que dispone la legislación vigente respecto a la maternidad, procurando velar por el interés superior del menor y a ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la maternidad biológica;

XI. Mujer gestante: mujer con capacidad de goce y ejercicio que a titulo gratuito se compromete mediante un instrumento jurídico denominado Instrumento para la Subrogación gestacional a llevar a cabo la gestación del producto de la fecundación de una pareja unida mediante matrimonio o concubinato que puede o no aportar su carga o material genético y cuya obligación subrogada concluye con el fin del embarazo o el nacimiento. A quien le corresponderán los derechos derivados de la condición biológica de mujer embarazada hasta la conclusión de dicho estado o el nacimiento;

XII. Médico tratante: El médico especialista en infertilidad humana, que puede auxiliarse de más especialistas en diversas ramas de la medicina para la atención de la subrogación gestacional;

XIII. Notario Público: Profesional del derecho investido de fé pública por mandato de Ley y plenitud de competencia para dar fé del Instrumento para la Subrogación Gestacional;

XIV. Padre: hombre con capacidad de goce y ejercicio que aporta o no su material genético para la fecundación y que se compromete mediante el instrumento denominado: Instrumento para la Subrogación Gestacional desde el momento de el momento de la implantación, las reglas que dispone la legislación vigente respecto a la paternidad, procurando velar por el interés superior del menor y ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la paternidad biológica;

XIV. Personal de salud: son los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;

XV. Registro Civil: A las Oficinas del Registro Civil de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, que ejercen sus atribuciones registrales a través de los Jueces del Registro Civil;

XVI. Subrogación gestacional: la práctica médica consistente en la implantación de mórulas humanas en una mujer, producto de la unión de un ovulo y un espermatozoide fecundados que pueden ser aportados por una pareja unida mediante matrimonio o que vive en concubinato o por aportantes de gametos humanos que renuncian a cualquier derecho derivado de la filiación y la paternidad, y que aportan su carga o material genético, y que concluye con el fin del embarazo o el nacimiento;

XVII. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud Federal y las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud competentes; y

XVIII. Tutela: a la Tutela que establece el Título Noveno del Código Civil Federal vigente y que tiene por objeto la protección de los menores que nacen por subrogación gestacional, en los casos de fallecimiento del padre y la madre subrogada durante el periodo gestacional.

Artículo 4. La presente Ley se aplicará en las instituciones de salud públicas o privadas que cuenten con la certificación de la autoridad competente para realizar la implantación de mórulas humanas.

Artículo 5. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando fueren aplicables, sin contravención de otras disposiciones legales vigentes.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

CAPÍTULO UNICO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MÉDICOS TRATANTES

PARA LA PRÁCTICA MÉDICA DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 6. Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica informarán ampliamente de las consecuencias médicas y legales de la implantación de mórulas en el cuerpo de la mujer gestante.

Artículo 7. Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica actuarán con estricto apego al secreto profesional, respecto a la identidad de las personas que intervienen en la implantación.

Queda estrictamente prohibida la práctica de crioconservación de gametos humanos que no sea con el fin reproductivo, así como la conservación de gametos humanos que tenga por objeto la disposición de gametos con fines de lucro o prácticas homólogas que atenten contra la dignidad humana.

Artículo 8. El médico tratante, deberá solicitar todos los documentos que acrediten que las personas que van a intervenir cumplen con todas las formalidades, y requisitos legales y físicos.

Artículo 9. Ningún médico tratante realizará una implantación de mórula humana, sin que exista un Instrumento para la Subrogación Gestacional firmado por las partes que intervendrán en la práctica medica y una vez que el profesional medico tenga a la vista los documentos en que consten las identidades y estas coincidan plenamente con las que establezca el instrumento notarial.

Los profesionales médicos que realicen la práctica médica de la subrogación gestacional se sujetarán a las disposiciones que establezcan esta Ley, las prescripciones de la Ley de Salud y las restricciones y sanciones que establece el Código Penal Federal vigente.

Artículo 10. El médico tratante que realice la implantación de mórula humana o mórulas deberá certificar, que:

I. La madre subrogada posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y quien puede o no aportar su material genético para la implantación quien en éste caso, debe manifestar su consentimiento expreso para que sea implantado un gameto humano de otra mujer aportante.

II. El padre se encuentra plenamente convencido para aportar su material genético para la implantación o en su caso, deberá manifestar su consentimiento expreso para que sea implantado un gameto humano de un hombre aportante.

III. La mujer gestante se encuentra en buen estado de salud.

Artículo 11. El medico tratante realizará los exámenes médicos previos a la implantación y que sean necesarios de la salud física y mental de la mujer gestante para corroborar que no posee ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del embrión y posteriormente del feto durante el periodo gestacional. Ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser mujer gestante.

A la mujer gestante se le realizará una visita domiciliaria por personal de la unidad de trabajo social del Hospital tratante y en su caso, del DIF para comprobar que su entorno familiar sea estable, libre de violencia y su condición económica y entorno social sean favorables para su adecuado desarrollo.

Bajo protesta de decir verdad la mujer gestante manifestará que no ha estado embarazada durante los 365 días previos a la implantación de la mórula, ni que haya participado más de dos ocasiones en la implantación y que su intervención se hace en forma altruista y libre de lucro alguno.

Artículo 12. La mujer gestante debido al embarazo en que se sitúa le corresponderán los derechos y la protección que establecen las leyes a las mujeres que se encuentran en estado de gravidez hasta el nacimiento y durante el puerperio.

Artículo 13. La atención médica que se le proporcione por las instituciones públicas o privadas, el médico tratante y el personal de salud no discriminará su condición de mujer gestante, ni hará distinciones en su atención por este motivo.

TÍTULO TERCERO

DEL INSTRUMENTO DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS FORMALIDADES DEL INSTRUMENTO DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 14. El Instrumento para la Subrogación gestacional podrá ser suscrito, por las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que los suscribientes acrediten su ciudadanía mexicana y residencia en el País, hecho que deberá ser acreditado con credencial para votar;

II. Poseer capacidad de goce y ejercicio. En este caso, de la madre subrogada, el padre y la mujer gestante;

III. Que la madre subrogada acredite mediante certificado médico expedido por el médico tratante que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero;

IV. Que la mujer gestante otorgue su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo la implantación de la mórula, a procurar el bienestar y el sano desarrollo del embrión y posteriormente feto durante el periodo gestacional y a concluir su relación subrogada, respecto a el menor y los progenitores subrogados con el fin del embarazo o nacimiento;

V. Que la mujer gestante cumpla con los requisitos que establece los artículos 10 fracción III y 11 de la presente Ley.

Tratándose de la implantación de mórula en que se recurra a la variante heterologa de la FIVTE y los aportantes de óvulos o espermas sean un banco de gametos humanos, se deberá acreditar que se cuente con el documento que establezca la confidencialidad de los datos de los aportantes y los receptores. En los casos en que se recurra a una persona cierta y conocida, deberá intervenir y firmar el instrumento expresando su renuncia expresa a cualquier derecho en materia familiar le pueda asistir, si su estado civil fuera casada o que viva en concubinato deberán tanto el aportante como su cónyuge o concubinario expresarán su consentimiento y voluntad para renunciar a los derechos u obligaciones relativos a la filiación y al parentesco.

Para los efectos de las fracciones III y V del presente artículo, el médico tratante deberá extender los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes.

Artículo 15. El Instrumento para la Subrogación Gestacional deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos:

I. Deberá suscribirse por todas las partes que intervienen, estampando su nombre y firma en el mismo;

II. Suscribirse ante Notario Público, presentando para tal efecto los documentos descritos en los artículos 11 y 14 de esta Ley; y

III. La manifestación de las partes de que el Instrumento se suscribe sin ningún objeto de lucro, respetando la dignidad humana y el interés superior del menor;

Previa firma del Instrumento, el Notario Público deberá consultar el Registro a que refiere el artículo 27 de esta Ley, constatando que la mujer gestante no ha participado en más de un procedimiento de subrogación gestacional.

Artículo 16. El Instrumento para la Subrogación gestacional en concordancia con lo artículos precedentes y con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país no podrá contener cláusulas que contravengan las siguientes obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano en materia de protección a los infantes y a las mujeres:

I. Limitaciones al acceso de la atención sanitaria prenatal y postnatal por parte de las instituciones de salud públicas a la mujer gestante;
II. La limitación al derecho del menor para que conozca su identidad personal, que trae aparejada la obligación de que acceda a un nombre y apellidos propios y asegurar este derecho incluso mediante nombres supuestos; y
III. El derecho del menor a la protección del Estado incluso a través de la Tutela que establece el Código Civil Federal.
IV. El derecho de la mujer gestante a decidir libremente respecto a la interrupción del embarazo por las causales excluyentes de responsabilidad penal que establece la legislación penal ordinaria, en las entidades federativas que lo disponen y en el Distrito Federal hasta la décimo segunda semana en los términos que establece el artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal, sin que sea causa de responsabilidad civil, en términos de la legislación vigente.

Artículo 17. El Instrumento para la Subrogación Gestacional podrá contener las cláusulas que consideren necesarias las partes, para asegurar la integridad del embrión y posteriormente el feto, así como el bienestar integral de la mujer gestante. Entendiendo por bienestar integral aquel que busca la satisfacción de las necesidades alimentarias y de desarrollo personal en los términos que establece el Código Civil Federal y la legislación del orden común.

Artículo 18. El Instrumento para la Subrogación Gestacional podrá establecer fideicomisos que garanticen el bienestar económico del menor en caso de fallecimiento de alguno de los progenitores subrogados.

Artículo 19. El Instrumento para la Subrogación Gestacional, una vez que sea suscrito, deberá ser notificado en sus efectos a la Secretaría de Salud y al Registro Civil para que el estado del menor nacido mediante esta práctica sea contemplado en su filiación como hija o hijo desde el momento de la fecundación de la madre subrogada y el padre quienes se reputarán progenitores biológicos. En ese mismo sentido, los aportantes de gametos humanos renunciaran expresamente a los derechos de paternidad y filiación que establece el Código Civil Federal y las disposiciones que establezcan las entidades federativas y el Distrito Federal en materia de derecho familiar.

Artículo 20. El Notario Público deberá formar el Instrumento con los documentos públicos y privados que se precisen para garantizar seguridad y certeza jurídica a las partes suscribientes.

Artículo 21. La voluntad que manifiesten las partes para la realización del Instrumento de la Subrogación Gestacional debe ser indubitable y expresa.

Los derechos y obligaciones que de ella emanan son personalísimos no habiendo lugar a la representación legal para su firma.

Artículo 22. Es una excepción al artículo precedente que alguna de las partes posea una discapacidad que le impida plenamente manifestar su voluntad se deberá contar con las

herramientas humanas o tecnológicas y asentar dicha imposibilidad en el Instrumento de Subrogación Gestacional.

Artículo 23. El Instrumento de Subrogación Gestacional lo firmarán la madre subrogada, el padre, la mujer gestante, el intérprete si fuera necesario uno, el Notario Público y, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado.

Tratándose de la implantación de mórula en que se recurra a la variante heterologa de la FIVTE se realizará el instrumento con el consentimiento y firma de las personas que establece el artículo 14 último párrafo de la Ley.

Artículo 24. El Instrumento de Subrogación Gestacional formaliza el acuerdo de voluntades para la subrogación gestacional y constituye una parte indispensable para que exista.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL MENOR NACIDO MEDIANTE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 25. El certificado de nacimiento será el documento que expida el médico autorizado o tratante que haya asistido a la mujer gestante en el nacimiento del menor y que llenará el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud y que contendrá en este caso, la constancia de que la maternidad fue asistida a través de una técnica apoyo a la reproducción humana o practica medica, denominada subrogación gestacional.

Las alusiones o referencias que hace la normatividad vigente, relativas a la madre o a la identidad de la madre, se entenderán referidas a la madre subrogada.

Artículo 26. Los efectos de la subrogación gestacional son los mismos, a los casos en que por causas de fuerza mayor no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, e incluso a las denuncias hechas ante el Ministerio Público que den cuenta de una subrogación gestacional.

Para efectos legales, será imprescindible la presentación de un testimonio público del Notario Público que dio fé del Instrumento para la Subrogación gestacional.

CAPÍTULO TERCERO

DEL REGISTRO Y CONTROL DE NACIMIENTO DE LOS MENORES NACIDOS MEDIANTE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 27. La Secretaría de Salud llevará un registro de los instrumentos de subrogación gestacional y nacimientos que se hayan efectuado mediante la subrogación gestacional.

El registro deberá contener el nombre de las personas que participaron en la subrogación gestacional, nombre, edad, estado civil; fecha de suscripción del Instrumento para la subrogación gestacional, nombre y número del notario público, folio y libro en que se encuentra inscrito el Instrumento, de igual forma podrá contener el nombre del médico tratante y de la institución medica en la que se lleve a cabo dicho procedimiento.

Este registro tendrá por objeto el registro y control de los instrumentos y nacimientos. Así como de los médicos tratantes que lleven a cabo la subrogación gestacional.

TÍTULO CUARTO
DE LA NULIDAD Y LAS SANCIONES DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NULIDAD DE LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 28. Es nulo el Instrumento para la Subrogación Gestacional realizado bajo las siguientes circunstancias:

I. Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;

II. No cumpla con los requisitos y formalidades que establece esta Ley;

III. Se establezcan compromisos o clausulas que atenten contra el interés superior del menor y la dignidad humana;

IV. Se establezcan compromisos o clausulas que contravienen el orden social y el interés público;

Artículo 29. La nulidad del documento no lo exime de las responsabilidades adquiridas y derivadas de su existencia.

Artículo 30. La mujer gestante podrá demandar civilmente a la madre subrogada y al padre el pago de gastos médicos, en caso de patologías que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal.

Artículo 31. El Instrumento para la Subrogación gestacional carece de validez cuando haya existido error o dolo respecto a la identidad de los progenitores subrogados por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados y a las denuncias penales, en su caso.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS SANCIONES EN RELACIÓN CON LA SUBROGACIÓN GESTACIONAL

Artículo 32. Se harán acreedores a las responsabilidades civiles y penales aquellos médicos tratantes que realicen la implantación de mórulas humanas sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen. Siendo aplicables las penas que establecen los delitos de procreación asistida e inseminación artificial.

Artículo 33. La mujer gestante que desee obtener un lucro derivado de la subrogación gestacional practicada en su cuerpo, o pretenda obtenerlo en virtud de la divulgación pública que efectúe con el objeto de causar algún daño a la imagen pública de los progenitores subrogados le

serán aplicables las sanciones que se hayan previsto en el clausulado del Instrumento de la Subrogación gestacional o en su caso las disposiciones que establece la legislación común en las entidades federativas o en el caso del Distrito Federal, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en 90 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo.

TERCERO.- El Poder Ejecutivo Federal, deberá realizar las adecuaciones correspondientes para incorporar la subrogación gestacional y establecer el Registro a que se refiere esta Ley a más tardar en 90 días naturales posteriores a la publicación de éste Decreto.

CUARTO.- El Poder Ejecutivo Federal deberá suscribir el o los convenios de colaboración correspondientes con las asociaciones y colegios de Notarios a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y asegurar el menor costo posible de los honorarios y aranceles correspondientes al Instrumento de la Subrogación Gestacional.

QUINTO.- Las entidades federativas y el Distrito Federal, así como las instituciones públicas y privadas de salud y los demás integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán proveer en su esfera administrativa las disposiciones reglamentarias tendientes a dar cumplimiento al presente Decreto.

SEXTO.- Remítase a los Gobiernos Estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, le brinden difusión y debida observancia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan y reforman los artículos 330, 465 y 466 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD

TITULO DECIMO CUARTO

Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida

CAPITULO III
Trasplante

Artículo 330.- Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden terapéutico.

Está prohibido:
I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales, y

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales producto de abortos inducidos.

No se considerará trasplante la práctica médica que regula la Ley Federal de Subrogación Gestacional.

...

CAPITULO VI
Delitos

Artículo 465.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica **con el objeto de realizar manipulación genética** en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, **y en los siguientes supuestos:**

I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo;

II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; y

III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos.

Se le impondrá prisión de **dos** a **diez** años, **inhabilitación y** suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de **tres a ocho años**, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; **si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.**

Se impondrá de cuatro a siete años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Se equipara al delito de inseminación artificial no consentida, la falta de conocimiento o firma del cónyuge o concubino de la mujer gestante que establece la Ley de Subrogación Gestacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en 90 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo.

TERCERO.- Las entidades federativas y el Distrito Federal, así como las instituciones públicas y privadas de salud y los demás integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán proveer en su esfera administrativa las disposiciones reglamentarias tendientes a dar cumplimiento al presente Decreto.

CUARTO.- Remítase a los Gobiernos Estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, le brinden difusión y debida observancia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de julio de 2010

A t e n t a m e n t e

DEL SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

El que suscribe, **JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO**, Senador a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para hacer referencia a las personas que padecen una limitación física, mental o sensorial, la Organización Mundial de la Salud inicialmente empleaba la palabra "Inválidos"; posteriormente lo sustituyó por la de "Minusválidos" y, por considerar que estas palabras de alguna manera eran peyorativas, determinó emplear el término "Personas con Discapacidad".

En México, al iniciarse el sexenio del Presidente Vicente Fox, se empleó el término "Personas con Capacidades Diferentes", pero dado que la Organización Mundial de la Salud emplea el término "Personas con Discapacidad", el H. Congreso de la Unión al aprobar en junio de 2005 la ley que se refiere a quienes tienen una limitación física, mental o sensorial, la denominó "Ley General de las Personas con Discapacidad".

A partir de entonces, y con el propósito de ir homologando la legislación federal y la de las entidades federativas, se ha empleado preferentemente el término "Personas con Discapacidad". Así pues, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, párrafo tercero, se suprimió el término "Personas con Capacidades Diferentes" y en su lugar aparece el de "Personas con Discapacidad". Y lo mismo sucede en aproximadamente veinticinco ordenamientos federales, y en casi la totalidad de las leyes estatales.

No obstante este proceso de homologación para ir insertando el término "Personas con Discapacidad" en nuestra legislación, cuando nos referimos a quienes padecen una limitación física, mental o sensorial, actualmente, en dos de los ordenamientos federales de mayor utilidad para este grupo vulnerable, como lo son la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, siguen apareciendo los términos "Inválido" e "Invalidez" para referirse a estos seres humanos y a su condición de discapacidad.

Al respecto, conviene señalar que la palabra invalidez, es un término que regularmente también se utiliza en el ámbito laboral, y que la Ley del Seguro Social en su artículo 119 a la letra dice:

> "Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales".

Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su Artículo 118 dice:

> "Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional.

Y la Ley General de Salud, al referirse a la invalidez, en su Artículo 173 dispone:

> **"**Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez la limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social".

Se puede apreciar con suficiente claridad, que en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la palabra invalidez se aplica a un trabajador que ha perdido un determinado porcentaje de su capacidad laboral.

Mientras que en la Ley General de Salud, la palabra invalidez se aplica a cualquier persona, y no exclusivamente a un trabajador; y se refiere a la limitación en la capacidad para realizar actividades necesarias para el desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico; en este caso, tal limitación no se reduce únicamente a lo laboral.

Tratándose de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, podemos dejar la palabra "Invalidez" como un término exclusivamente del ámbito laboral.

Pero dado que en la Ley General de Salud, la palabra "Invalidez" tiene un significado diferente que, como ya dijimos, no se refiere a la pérdida de capacidad laboral de un trabajador, sino a la limitación en la capacidad de cualquier persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social"; es necesario, que en diversas disposiciones de la Ley General de Salud y en la Ley de Asistencia Social, se eliminen los términos "Invalidez", "Inválido" y "Minusválido" y en su lugar se pongan los términos "Discapacidad" y "Persona con Discapacidad" cuando se haga referencia a la limitación física, mental o sensorial de cualquier ser humano.

Así mismo, es necesario que en el artículo 173 de la Ley General de Salud, además de sustituir la palabra "Invalidez" por la de "Discapacidad", se actualice la definición de este término de conformidad con la Ley General de las Personas con Discapacidad y con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Todo esto, en congruencia con el proceso de homologación para insertar el término "Discapacidad" en nuestra legislación, y al mismo tiempo para hacer una clara distinción entre las palabras "Invalidez" y "Discapacidad".

El no hacer esa clara distinción entre "Invalidez" y "Discapacidad", nos lleva al riesgo de no atender a las personas con discapacidad como lo indican la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; ya que por la palabra "Invalidez", se pudiera considerar que dicha atención está destinada únicamente a trabajadores que han perdido cierta capacidad laboral.

Por todo lo hasta aquí expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 3º, fracción XIX; 6º, fracción III; 33, fracción III; 59, 77 bis 4, fracción IV, párrafo segundo; 100, fracción VI; 104, párrafo segundo, fracción I; 112, fracción III;

167, 168, fracciones I, II y V; 173, 174, fracciones I, II, III, IV, V, Vi; 175, 177, 178, 180 y 300; así como la denominación del título noveno de la Ley General de Salud para quedar como a continuación se indica:

Artículo 3º.- …

I. a XVIII. …

XIX. La prevención de la **discapacidad** y la rehabilitación de las personas con **discapacidad**;

XX. a XXXI. …

Artículo 6º.- …

I. a **II.**

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con **discapacidad**, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

V. a VIII.

Artículo 33.- …

I. a **II.**

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las **discapacidades** físicas o mentales, y

IV.

Artículo 59.- Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de **discapacidad** y de rehabilitación de personas con **discapacidad**.

Artículo 77 bis 4.- …

I. a **III.**

IV. …

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, personas con **discapacidad** dependientes.

Artículo 100.- …

I. a **V. …**

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, **discapacidad** o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y

VII. …

Artículo 104.- …

Párrafo segundo …

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y **discapacidad**;

II. a III. …

Artículo 112.- …

I. a **II. …**

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la **discapacidad** y rehabilitación de las personas con **discapacidad** y detección oportuna de enfermedades.

TITULO NOVENO
Asistencia Social, Prevención de **Discapacidad** y Rehabilitación de Personas con **Discapacidad**

Artículo 168.- …

I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de **discapacidad**, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con **discapacidad** sin recursos;

III. a **IV. …**

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos y personas con **discapacidad** sin recursos;

VI. a **IX. …**

Artículo 173.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por **discapacidad** la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Artículo 174.- La atención en materia de prevención de **discapacidad** y rehabilitación de personas con **discapacidad** comprende:

I. La investigación de las causas de la **discapacidad** y de los factores que la condicionan;

II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la **discapacidad**;

III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar **discapacidad**;

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con **discapacidad**, promoviendo al efecto la solidaridad social;

V. La atención integral de las personas con **discapacidad**, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con **discapacidad**, y

VII. …

Artículo 175.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de **discapacidad** y rehabilitación de personas con **discapacidad**, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.

Artículo 177.- La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el Artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de **discapacidad**, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

Artículo 178.- El Organismo del Gobierno Federal previsto en el Artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de rehabilitación, realizar estudios e investigaciones en materia de **discapacidad** y participar en programas de rehabilitación y educación especial.

Artículo 180.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas con **discapacidad**.

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con **discapacidad**, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 12 en sus fracciones I, incisos a, b y e y XII de la Ley de Asistencia Social para quedar como a continuación se indica:

Artículo 12.- …

I. …

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de **discapacidad**, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con **discapacidad** sin recursos;

c). a **d). …**

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con **discapacidad** sin recursos;

f). a **i). …**

II. a **XI. …**

XII. La prevención de **discapacidad** y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. a XIV. …

TRANSITORIO

UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEN. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de julio de 2010.

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE DEROGA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.



SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE DEROGA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

El suscrito, **ADOLFO TOLEDO INFANZÓN**, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 y se deroga el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera, y se derogan las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La economía mexicana es poco competitiva, ocupamos el lugar 51 en el mundo de acuerdo al estudio Doing Business 2010. De esta posición general tenemos rubros con peor desempeño. Por ejemplo, en la apertura de un negocio, el cual ocupamos el lugar 90.

Lo anterior se debe a una serie de normas y requisitos municipales, estatales y federales, que obstaculizan la creación de empresas, además del costo que implica su certificación y registro. Estos obstáculos limitan el desarrollo nacional y favorecen la informalidad económica.

El facilitar la constitución de sociedades y su registro puede ser un instrumento para coadyuvar al combate contra la delincuencia. Por el contrario, si existen múltiples trámites, estos desincentivan a la ciudadanía, inciden a que el Estado carezca de instrumentos para un mayor control y, a que no exista transparencia y seguridad en las operaciones entre los particulares.

Unos de esos trámites establecidos legislativamente, es el contenido en el título tercero de la Ley de Inversión Extranjera, misma que en su artículo 15 establece que *"se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de Sociedades"*.

Esta redacción no hace diferencia del tipo de sociedad, lo mismo puede ser una sociedad cooperativa o de solidaridad social, como una sociedad anónima promotora de inversión.

El artículo 13 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras complementa lo anterior:

> "El permiso para la constitución de sociedades a que se refiere el artículo 15 de la Ley se otorgará solamente cuando la denominación o razón social que se pretenda utilizar no se encuentre reservada por una sociedad distinta."

Este permiso es una traba que no se contempla en el artículo 27 de la Constitución. No se establece en la exposición de motivos de la iniciativa del Poder Ejecutivo, las razones de esta disposición y en el dictamen del Senado sólo se describe el contenido.

El trámite, de acuerdo al registro de trámites federales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dura un día hábil y se puede hacer vía Internet. Se debe cubrir el pago de $965.00 por concepto de derechos, de acuerdo al artículo 25 fracción I de la Ley Federal de Derechos.

Los recursos públicos que se generan por este derecho no son trascendentales como para modificar el presupuesto del gobierno, pero sí representan una traba importante.

Por eso proponemos la derogación de la frase *"Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de sociedades"* del artículo 15, así como del primer párrafo del artículo 16, ambos de la Ley de Inversión Extranjera.
También se propone derogar las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, para darle coherencia a lo anterior.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

D E C R E T O

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 15 y se deroga el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

> **ARTÍCULO 15.-** Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional.
>
> **ARTÍCULO 16.- (Se deroga)**
>
> (…)
>
> (…)

Artículo Segundo.- Se derogan las fracciones I y II del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

> **Artículo 25.-** Por la realización de trámites relacionados con las fracciones I y IV del artículo 27 Constitucional, se pagará derechos conforme a las siguientes cuotas:
>
> **I. (Se deroga)…**
>
> **II. (Se deroga)…**
>
> III. (…) a XIV. (…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

> **ÚNICO**.- **El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.**

ATENTAMENTE

SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
a 28 de julio de 2010.

DEL DIP. ÓSCAR SAÚL CASTILLO ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, LA FRACCIÓN I Y EL INCISO C) Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE NACIONALIDAD.



DIP. ÓSCAR SAÚL CASTILLO ANDRADE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, LA FRACCIÓN I Y EL INCISO C) Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 33, AMBOS DE LA LEY DE NACIONALIDAD. PRESENTA EL DIPUTADO OSCAR SAÚL CASTILLO ANDRADE **DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

En ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, , 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal por el Estado de Veracruz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura someto a la consideración del pleno , la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma EL PRIMER PÁRRAFO, LA FRACCIÓN I Y EL INCISO C) Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 33, AMBOS DE LA LEY DE NACIONALIDAD. Con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Fundamentos Constitucionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad expone que los artículos 30,32 y 37, son el fundamento principal de la Ley de Nacionalidad.,adicionalmente el artículo 73 faculta al Congreso "Para **dictar leyes sobre nacionalidad, condición, jurídica de los de los extranjeros ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración** y salubridad general de la República. Los artículos antes mencionados tuvieron una serie de reformas entre las cuales destacan las que se refieren al artículo 30.

I) La que se publicó el 18 de enero de 1934, en donde se modificó el concepto de "**Calidad de Mexicano**" por el de nacionalidad mexicana.

II) La publicada el 31 de diciembre de 1974, por la cual se amplió la concesión de la nacionalidad por matrimonio no sólo a las mujeres, sino también a los varones que contrajeran matrimonios con mexicanos.[40]

Finalmente el 23 de febrero de 1998 se publicó la *Ley de Nacionalidad.*

Vigente	Propuesta
Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando	**Artículo 20.-** El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos **cuatro** años

[40] Resumen del "Análisis, Fundamento Constitucional y Estructura Interna de la Ley de Nacionalidad. Sistema de Información y Análisis, Cámara de Diputados, México, 2010.

menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:	inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:
I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:	I. Bastará una residencia de **un año** inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:
a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento;	a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento;
b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento;	b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
c) Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o	c) Sea originario de un país **Iberoamericano** o de la Península Ibérica, de **la República de Irlanda** o
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. En casos excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción.	d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. En casos excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.	II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional, durante **un año inmediatamente anterior** a la fecha de la solicitud.
No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano.	No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano.
En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y	En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y
	III. Bastará una residencia de un año

III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción. La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición.	inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción. La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición.

Vigente	**Propuesta**
Artículo 33.- Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley, se sancionarán con lo siguiente: I. Se impondrá multa de trescientos a quinientos salarios, a quien ingrese o salga de territorio nacional en contravención a lo dispuesto por el artículo 12 de esta Ley; II. Se impondrá multa de cuatrocientos a ochocientos salarios: a) A quien realice las renuncias y protesta en forma fraudulenta o cometa actos que pongan de manifiesto su incumplimiento; b) A quien intente obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría con violación de las prevenciones de esta Ley o su reglamento, o presentando ante dicha Secretaría información, testigos, documentos o certificados falsos. Si se llegare a obtener la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción, y c) A quien haga uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada;	**Artículo 33.-** Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley, se sancionarán con lo siguiente: I. Se impondrá multa de trescientos a quinientos salarios, a quien ingrese o salga de territorio nacional en contravención a lo dispuesto por el artículo 12 de esta Ley; II. Se impondrá multa de cuatrocientos a ochocientos salarios: a) A quien realice las renuncias y protesta en forma fraudulenta o cometa actos que pongan de manifiesto su incumplimiento; b) A quien intente obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría con violación de las prevenciones de esta Ley o su reglamento, o presentando ante dicha Secretaría información, testigos, documentos o certificados falsos. Si se llegare a obtener la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción, y c) A quien haga uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada;

III. Se impondrá multa de quinientos a dos mil salarios, a quien contraiga matrimonio con el único objeto de obtener la nacionalidad mexicana. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, conociendo dicho propósito, celebre el matrimonio.	III. Se impondrá multa de quinientos a dos mil salarios, a quien contraiga matrimonio con el único objeto de obtener la nacionalidad mexicana. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, conociendo dicho propósito, celebre el matrimonio. **La sanción sólo se aplicará cuando la autoridad competente declare inexistente el contrato matrimonial, por falta de consentimiento y/o objeto válidos.**
Artículo 34.- En los casos no previstos en el artículo anterior, se impondrá multa de hasta mil salarios a quien cometa cualquier infracción administrativa a la presente Ley o a su reglamento.	**Artículo 34.-** En los casos no previstos en el artículo anterior, se impondrá multa de hasta mil salarios a quien cometa cualquier infracción administrativa a la presente Ley o a su reglamento.
Artículo 35.- Para los efectos de este capítulo, por salario se entiende el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.	**Artículo 35.-** Para los efectos de este capítulo, por salario se entiende el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 36.- Las multas previstas en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.	**Artículo 36.-** Las multas previstas en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.
Artículo 37.- Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor.	**Artículo 37.-** Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor.

Como se sabe, la nacionalidad es el atributo jurídico que señala a la persona como miembro del pueblo constitutivo de un Estado. *Es el vínculo legal que relaciona a un individuo con el Estado.*

La definición anterior corresponde a un concepto jurídico de nacionalidad, pero el término también tiene otras acepciones, ya que desde el punto de vista sociológico es el vínculo que une a un individuo con un grupo en virtud de diversos factores: la vida en común y la conciencia social idéntica. *La nacionalidad dinámica, vital la que desenvuelve energías y aspiraciones para alcanzar metas nacionales, no simplemente metas individuales, es la que da plenitud a una nación.*

En el caso particular de México, la unidad que nos ha caracterizado es inquebrantable. Los lazos étnicos de *idioma, cultura, historia* y *costumbres* nos hacen particularmente diferentes a otras nacionalidades. Además debemos reconocer que México es también un país de migrantes se calcula que habitan en territorio nacional 1.093.163 personas extranjeras lo que representa en 1 % de la población, con total certeza este numero se

modificará considerablemente cuando se publiquen los resultados del censo de población y vivienda 2010. El número de inmigrantes asciende a 250,250. personas aproximadamente. (Según los datos del INEGI y del INM)

Cabe resaltar que los fenómenos migratorios México-EU tienen su raíz a partir de la firma del tristemente celebre Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio, y un gran número de familias fueron divididas. En 1850, con la fiebre del oro en California y la escasez de trabajador en el oeste y suroeste de Estados Unidos, se iniciaron los movimientos migratorios provenientes de México. En 1870, los desplazamientos comenzaron a ser más numerosos, puesto que son acelerados por la contratación de contingentes de trabajadores para la construcción de las vías férreas que comunicaban al norte con el oeste de Estados Unidos. Para esas fechas no se habían puesto restricciones legales a la entrada de ningún tipo de migrantes. La primera contratación fue la del "traque", es decir, la vía. Fueron empleados para colocar rieles, construir terraplenes y dar mantenimiento a las líneas.

Durante la Guerra Cristera numerosos mexicanos, principalmente del bajío, literalmente huyeron hacia el sur de EU.

En 1942 se formó un programa, denominado programa Bracero; la presencia de los trabajadores mexicanos fue un grupo importante de inmigrantes que apuntalaron el florecimiento económico de esa región estadounidense, se explica si observamos que además de realizar las labores más penosas recibían los salarios más bajos.

Este fenómeno se agudiza cuando Estados Unidos de América, necesitado de mano de obra, firmó un acuerdo de contratación con nuestro país (programa Bracero). Gracias a ese ejército de campesinos se pudieron recoger las cosechas de los campos agrícolas que alimentaron, no sólo a los ciudadanos, si no a las fuerzas armadas que combatían en Europa; no hay que olvidar tampoco, que fue principalmente la mano de obra de mexicanos las que construyeron el ferrocarril en Estados Unidos de América al principio del siglo XX.

A la fecha, según el Banco de México, se reciben remesas mensuales aproximadas de **1,500** millones de dólares, lo que en un año nos da resultado de más de 18 mil millones de dólares anuales, salvando así a millones de familias del hambre y de la extrema pobreza. Diariamente emigran del país *1,500* personas, indican las estadísticas, existiendo hasta ahora 32 millones de hispanos en Estados Unidos, de los que 11 millones son indocumentados, siendo Los Ángeles, California, el más poblado en cuanto a migrantes mexicanos, seguido de Chicago, Illinois.

También un gran número de ciudadanos de EU ha fijado su residencia en nuestro país. Este fenómeno migratorio bien se puede explicar como efecto del tratado de libre comercio, pero también porque México se ha convertido en un lugar popular para que los jubilados norteamericanos disfruten de su pensión , especialmente pueblos pequeños y pintorescos: tan sólo en el estado de Guanajuato, en el municipio de San Miguel de Allende y sus alrededores, viven 200.000 ciudadanos estadounidenses que en muy pocos casos han solicitado la nacionalidad mexicana.
El concepto de nacionalidad ha variado, en el concierto de las naciones; el flujo constante de la población, los acuerdos comerciales, tanto lo que contemplan el libre transito de los ciudadanos de un país a otro o sólo la comercialización de bienes productos y servicios, son razones suficientes para que los legisladores mexicanos elaboremos reformas a la actual Ley de Nacionalidad.
Los movimientos migratorios en busca de mejores condiciones de vida; de mejores mercados económicos; del reagrupamiento familiar, entre otros de los muchos factores determinantes, propician que los Estados necesiten cambiar "*esquemas*" establecidos desde sus orígenes, como principios rectores que marcan sus políticas, regímenes y ordenamientos jurídicos.
"*México consagró por décadas la nacionalidad única; sin embargo, dentro del proceso evolutivo que marca a cualquier sociedad que se aprecie; con un proceso dinámico que caracteriza a una sociedad no estancada, inserta en el ritmo de los cambios sociales, económicos y políticos: México adecua su normatividad y con ésta beneficia a millones de mexicanos que radican en el exterior (en los Estados Unidos de América,*

principalmente); y se beneficia, pues aquéllos representan una excelente fuente de ingresos (tercera fuente de divisas en México). Asimismo, los mexicanos residentes en el exterior que no han optado por la naturalización en el país donde residen, por temor de perder la nacionalidad mexicana que con orgullo poseen, ya pueden hacerlo; también, aquellos mexicanos que poseen propiedades en la "faja prohibida" enunciada en el artículo 27 constitucional: "cien kilómetros en las fronteras y cincuenta en los litorales", pueden adoptar la nacionalidad estadounidense sin temor de perder tales propiedades en México."[41]

El caso más común que se manifiesta entre los inmigrantes estadounidenses es que muchos de ellos son hijos de padres mexicanos y, por ende, pueden ser ciudadanos mexicanos si así lo deciden, acorde a la ley. Cuando los padres son deportados a México, los hijos que nacieron del otro lado son reclamados por el gobierno de los Estados Unidos. **México reconoce como mexicanos aquellos ciudadanos de los estados de Nuevo México, Arizona, Texas, California y Nevada** que quedaron del lado estadounidense después del ya mencionado Tratado de Guadalupe-Hidalgo para proteger sus propiedades, fincas y ranchos aunque tuvieran que adoptar una nueva nacionalidad (estos ya fallecidos, realmente muy pocos descendientes han decidido recuperar su nacionalidad mexicana). Muchos de sus miembros tienen la doble nacionalidad y entre ellos destacan empresarios, comerciantes, artistas de todo tipo, pastores religiosos, académicos, estudiantes, etc.

Ante los recientes hechos por todos conocidos sucedidos en el estado vecino de Arizona[42], y que como todos sabemos, hasta 1848 formó parte de la nación mexicana, **debemos ajustar** nuestra ley de nacionalidad, para predicar con el ejemplo y dar un matiz humano, de solidaridad de pleno respeto a **la dignidad de la persona humana** para con los migrantes que se encuentren legalmente ó como indocumentados en nuestro territorio.

De este modo, se presentan una serie de propuestas tendientes a **facilitar la obtención de la ciudadanía a aquellas personas que por tener un vínculo ya sea familiar con ciudadanos mexicanos o histórico-cultural con nuestro país**, tengan la oportunidad de beneficiarse con las disposiciones que para tal efecto prevé la Ley de Nacionalidad.

Consideraciones

A) Es necesario reducir el tiempo de *residencia continua* en correspondencia con lo legislado en otros países. Cuatro años es un tiempo suficiente para acreditar el interés de un extranjero por convertirse en nuevo mexicano, asociado a lo anterior existen profesiones, y en el caso concreto de deportistas que su vida activa es muy limitada en años laborales.

B) Existe una tendencia en América a rebajar el número de años de **residencia continua** para solicitar la nacionalidad respectiva, según se observa en el siguiente cuadro.

Argentina	Dos años
Ecuador	Tres años
Perú	Dos años
Paraguay	Tres años
Uruguay	Tres años
Brasil	Cuatro años

Como el artículo 30 considera menores tiempos de *residencia continua*, consideramos que en correspondencia un año es un tiempo suficiente para acreditar la intención de ser considerado nuevo mexicano, como ejemplo comparativo podemos observar lo siguiente:

En la Constitución del República de El Salvador se expresan cuatro formas, como requisito, para adquirir la nacionalidad una de las cuales dice:

1º los españoles e hispanoamericanos del origen que tuvieren un año de residencia en el país.

[41] Nuria GONZÁLEZ MARTÍN, Boletín de derecho comparado No 98 "Ley de Nacionalidad"
[42] Arizona SB 1070, que violenta, el mencionado Tratado Guadalupe –Hidalgo y los posibles acuerdos migratorios

Otro ejemplo comparativo nos lo ofrece la reglamentación española la cual considera a los habitantes los antiguos virreinatos, territorios de ultramar como preferentes para el caso de solicitar la ciudadanía de aquel país:

Haber residido legalmente en España durante diez años y de forma continuada, es decir con una autorización de residencia tendrá derecho a adquirir la nacionalidad española.
El tiempo exigido será menor si se encuentra dentro de estos requisitos:

1. Todas aquellas personas que han nacido en España pueden solicitar la nacionalidad española al cumplir **un año** de residencia.
2. Los extranjeros casados con un español, siempre y cuando no estén separados de hecho o legalmente, pueden solicitar la nacionalidad española **cumplido un año de residencia legal** y continuada.
3. Los refugiados políticos o aquellos que han obtenido asilo, pueden solicitar la nacionalidad española habiendo residido legalmente y de forma continuada durante 5 años.
4. Para los extranjeros naturales de alguno de los siguientes países: Latinoamericanos, Andorra, Filipina, Guinea, Ecuatorial, Portugal o Sefardíes tendrán que tener **dos años** de residencia legal en España para solicitar la nacionalidad española.
5. **Todos los extranjeros que han nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que han sido españoles de origen, pueden solicitar la nacionalidad española con un año de residencia legal.**
6. Los extranjeros que han tenido un hijo nacido en territorio español y lleva residiendo un año, pueden solicitar la nacionalidad española para su niño.
7. Aquellos extranjeros que han estado bajo la tutela legal, guarda o acogida por un ciudadano español o por una institución española durante dos años de forma continuada o bien continuará en dicha situación en el momento de solicitar la nacionalidad española.
8. **Los viudos o viudas** de un español o española, siempre que en el momento de la muerte no existiera separación legal o de hecho y han residido de forma legal en España por un año, pueden solicitar la nacionalidad española.

c) Para el caso de matrimonios; reducir a un año el tiempo de convivencia en el domicilio conyugal, obedece a criterios de equidad, considerando que los cónyuges nacionales adquieren derechos y obligaciones al instante mismo de suscribir el contrato matrimonial, aunado a lo anterior la actual normatividad del Instituto Nacional de Inmigración concede a los extranjeros *regularizar* su estancia en el país al comprobar UN AÑO de vivir en Unión Libre.
Hacemos referencia a un párrafo mencionado al principio de la presente iniciativa en referencia una reforma constitucional al artículo 30, la cual citamos:
"Publicada el 31 de diciembre de 1974, **por la cual se amplió la concesión de la nacionalidad por matrimonio no sólo a las mujeres**, sino también a los varones que contrajeran matrimonios con mexicanas."

D) La definición de **Iberoamericano** nos dará una mejor precisión con respecto a quienes por cuestiones históricas son más cercanos a nosotros, no es una cuestión de discriminación, pues el cambio propuesto solamente es en relación a los ciudadanos extranjeros que ***pretendan*** adquirir la nacionalidad y la fracción I del articulo 20 de la Ley de Nacionalidad enumera los casos de excepción, no de regla única.

El **Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias**, en un análisis solicitado, previa elaboración de la presente iniciativa, comenta respecto al término Iberoamérica:

"*..Es un término formado a partir de las palabras Iberia y América para designar una de las regiones más grandes y culturalmente más cohesionadas del mundo*"

D) La incorporación del favorecido irlandés obedece a un reconocimiento histórico. En 1846 un grupo de soldados irlandeses se unieron a la nación mexicana en vísperas y durante la guerra con los Estados Unidos, el fin de ellos como todos sabemos fue trágico, estigmatizados por los vencedores como desertores y cruelmente ahorcados. México que no olvida a los verdaderos héroes encontrará en esta **fórmula** un signo de agradecimiento y **reconocimiento** a tan ejemplar ayuda. Señores diputados y senadores: ***El Batallón de San Patricio*** figura con *letras de Oro* en el recinto de San Lázaro.

"*El 29 de abril de 1999, el Congreso de la Unión declaró a los* ***combatientes*** *civiles y militares de la guerra de invasión estadounidense como "Beneméritos de la Patria" en grado heroico, y para honrarlos se les dio el nombre genérico de "Defensores de la Patria 1846-1848". Esa leyenda se fijó con letras de oro en el Muro de Honor del edificio sede del Poder Legislativo, junto con el nombre "Batallón* ***de San Patricio****" en homenaje a los soldados extranjeros que formaron ese memorable contingente que derramó su sangre por nuestro país".*

"No fueron desertores, eran leales a ellos mismos, leales al sueño de ser libres que los trajo al Continente Americano."

Es justo reconocer la virtud y es razón suficiente como lo es también reconocer, que de los diversos grupos étnicos que habitan en EU --de origen no hispano-- son los irlandeses la comunidad étnica con mayor afinidad hacia nuestra nación.

F) Finalmente **la sanción** mencionada en el artículo 33 de la Ley de Nacionalidad referente a quien contraiga matrimonio "*con el único fin de adquirir la nacionalidad*", es subjetiva, de difícil verificación, pero a fin de salvaguardar esta sanción proponemos que solamente se pueda aplicar ***cuando la autoridad competente declare inexistente el contrato matrimonial, por falta de consentimiento y/o objeto válidos.*** Lo anterior en consideración nuevamente con el Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias el cual señala que el Código Civil Federal no contempla la **nulidad** matrimonial cuando éste se contraiga con el único objeto de obtener la nacionalidad mexicana. Por lo tanto la inexistencia del contrato matrimonial es el referente para aplicar la sanción correspondiente.

Señores Legisladores:

Este es el principio de una **profunda revisión** a nuestra Ley de Nacionalidad la cual tendrá que adaptarse a las exigencias de un mundo globalizado y ¿Por qué no? de la gran unidad **iberoamericana**, tal como lo anunciaron Simón Bolívar en el siglo XIX y el Maestro de América José Vasconcelos quien planteó con toda seguridad que por medio de la educación y la cultura, los mexicanos tomarían conciencia de sus problemas internos, y los trascenderían en soluciones inmediatas, **hasta la conformación de un hombre nuevo**: el hombre Iberoamericano.

Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el primer párrafo, la fracción I y el inciso c) y la fracción II del artículo 20; y se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 33, ambos de la Ley de Nacionalidad

Articulo I.

Se Reforma el artículo 20 de la ley de Nacionalidad para quedar como sigue.

Artículo 20.-

…
…

I. Bastará una residencia de **un año inmediatamente anterior** a la fecha de la solicitud cuando el interesado:

a)…

b)…

c) Sea originario de un país **Iberoamericano** o de la Península Ibérica, **de la República de Irlanda** o

d)….

II... **un año inmediatamente anterior…**
…
…

III.…

Articulo II.-

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 33…:

I…

II...

a)…

b)…

c)…

III…
La sanción sólo se aplicará cuando la autoridad competente declare inexistente el contrato matrimonial, por falta de consentimiento y/o objeto válidos.)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 28 de julio, verano, de 2010.

DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ESTATUIR BASES NORMATIVAS QUE GARANTICEN UNA AUTÉNTICA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Senador **CARLOS SOTELO GARCÍA**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de estatuir bases normativas que garanticen una auténtica representación proporcional de los partidos políticos en la integración de los congresos de las entidades federativas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La iniciativa que someto a consideración de esta Soberanía propone establecer bases normativas expresas en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con tres objetivos específicos: garantizar la participación efectiva de los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de los órganos legislativos de las entidades federativas; que cada partido tenga una verdadera representación proporcional al porcentaje de su votación total, y evitar la sobre-representación de los partidos políticos dominantes.

Del contenido del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivan una serie de principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las entidades federativas.

En particular, se desprende como principio fundamental en las elecciones estatales, el de representación proporcional como sistema electoral, adicional al de mayoría relativa en los términos de las propias disposiciones, para la elección de los representantes populares.

La reforma al párrafo tercero de la fracción II del artículo 116, que obligó a los estados a que sus legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, responde al espíritu del constituyente permanente de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

Es decir, que por cuanto hace a las entidades federativas, con el artículo 116, fracción II, de la Constitución General de la República, se instituye la obligación para integrar sus legislaturas con diputados electos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

Por ello, es indudable que para efectos de desarrollar las legislaciones locales de la materia, esta disposición debe ubicarse, por razón de su contenido, en relación directa con el sustrato normativo de los artículos 52 y 54 también de nuestra Ley Fundamental, que prevén en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Así lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98 promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del decreto número 138, emitido por la Legislatura local de Quintana Roo, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de esa entidad federativa, llegó a la conclusión de que el artículo 54 de la Ley Fundamental contiene bases generales que tienen también que observar las Legislaturas de los estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en la integración de los órganos legislativos locales.

Para arribar a esa deducción, nuestro más alto tribunal se fundó en que el principio de representación proporcional, como garante de pluralismo político, tiene como objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano, siempre que tengan cierta representatividad; que cada partido alcance, en el seno del congreso o la legislatura correspondiente, una representación aproximada al porcentaje de su votación total; y evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

Consideró también, que la abundancia de criterios doctrinarios y de modelos para desarrollar el principio de proporcionalidad, ponían de manifiesto que sería difícil intentar definir la manera precisa en que las legislaturas locales debían desarrollarlo en sus leyes electorales, pero que esa dificultad se allanaba si se atendía a la finalidad esencial del pluralismo político, y a las disposiciones con que el propio poder revisor de la Constitución ha desarrollado ese principio para su aplicación en las elecciones federales.

La posición de la Suprema Corte, al resolver ese caso, fue en el sentido de que todas las legislaciones de los estados, al desarrollar el principio de representación proporcional, deben igualmente contemplar de manera obligatoria las bases previstas en el artículo 54 de la Carta Magna.

No obstante esta interpretación de nuestro Máximo Tribunal, al resolver diversos juicios de revisión constitucional electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado tesis contrarias a la emitida por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumenta la Sala Superior que no existe sustentó suficiente para considerar que las bases establecidas en el artículo 54, sean el producto de la aplicación de principios generales del orden constitucional, que resulten aplicables a las demás clases de elecciones que son objeto de alguna regulación en la propia Carta Magna. Es decir, sostiene nuestro tribunal electoral que el hecho de que el mencionado artículo 54 constitucional establezca determinadas bases que regulan la elección y asignación de diputados de representación proporcional en el ámbito federal, no implica que las legislaturas de las entidades federativas deban ceñirse a éstas, toda vez que según la Sala Superior, con base en la facultad de los estados concedida en el pacto federal de darse sus propias leyes, el artículo 116 reservó a las entidades federativas la facultad de precisar las normas que rigen tal elección, disposición que tiene preeminencia sobre el contenido del artículo 54, al ser una norma específica que contiene los lineamientos que deben seguir los estados en la conformación del Poder Legislativo local, pues si el constituyente hubiera pretendido que el sistema de representación proporcional en las entidades federativas se regulara de manera idéntica a lo previsto a nivel federal, así lo habría señalado en el texto mismo de la fracción II del artículo 116.

El resultado práctico de esta contradicción de tesis ha sido muy grave. En entidades federativas donde sus normas electorales no establecen límites similares a los previstos en la base estatuida en la fracción V del referido artículo 54, los órganos legislativos locales se integran, sin ninguna posibilidad de remedio jurisdiccional, con altos grados de sub y sobre representación a favor de los partidos políticos dominantes. Reduciendo en forma irremediable la proporcionalidad natural y, con ello, desnaturalizando el sistema mismo

de representación proporcional, al colocarlo en situación meramente simbólica y carente de importancia en la conformación de las Legislaturas.

Entonces, es evidente que para poder cumplir con el espíritu del poder revisor de la Constitución que introdujo la representación proporcional como forma de garantizar el pluralismo político, se hace necesario que todos los elementos de la proporcionalidad electoral se consagren en forma expresa y amplia en el texto mismo de la fracción II del artículo 116, a fin de que la presencia de este sistema electoral se haga efectiva de forma clara y perceptible, como uno de los dos integrantes de la formación de los cuerpos legislativos locales, con peso específico en los mismos e influencia real de representación y no meramente simbólica.

Que las legislaturas estatales gocen sí de cierta libertad para moverse dentro del compás de formas de representación proporcional, pero sin llegar en modo alguno al extremo de que la forma aceptada minimice el principio y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la Legislatura, como mera figura decorativa, o lo aleje considerablemente del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, al permitir, por ejemplo, que con un pequeño número de votos se alcance una cantidad considerable de escaños, o que con gran cantidad de votos sólo se consigan unas cuantas curules.

Así, si bien al regular un sistema electoral mixto, las legislaturas de los estados tendrían facultad absoluta para combinar los sistemas de elección de mayoría relativa y de representación proporcional, para determinar los porcentajes de votación, el número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que integren los Congresos locales, el número de distritos electorales en que se divida la entidad federativa o la fórmula electoral a aplicarse para la asignación de diputaciones de representación proporcional; también estarían obligadas a contemplar en las normas electorales locales un límite a la sobre representación, que incuestionablemente es una de las bases fundamentales indispensables para la observancia del principio.

Por tanto, conforme a la presente iniciativa se proyecta reformar el párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir diversas bases normativas que son esenciales para cumplir con el principio de proporcionalidad electoral y dar vigencia a una democracia verdaderamente representativa en la integración de los congresos de la entidades federativas, a saber:

Primera: condicionamiento del registro de la lista de candidatos de representación proporcional a que el partido político respectivo participe con candidatos a diputados por mayoría en cuando menos dos terceras partes de los distritos uninominales.

Segunda: previsión de un mínimo de dos por ciento de la de la votación estatal para la asignación de diputados de representación proporcional.

Tercera: la asignación de diputados será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación.

Cuarta: precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en la lista correspondiente.

Quinta: el tope máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales.

Sexta: establecimiento de un límite a la sobre-representación.

Séptima: establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único: se reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …
…
I.- …
II.- …
…
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes y conforme a las siguientes bases:
a). Un partido político, para obtener el registro de su lista estatal de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos dos terceras partes de los distritos uninominales;

b) Todo partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación estatal emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

c) Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de representación proporcional que le correspondan. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;

d) El máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales;

e) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del órgano legislativo que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el 8%.

…
…
…
…
III. a la VII. …

Transitorios.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez.

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA

DEL SEN. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 69-E, 69-G Y 69-J DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.



SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 69-E, 69-G Y 69-J DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El suscrito, Senador **ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ**, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Fracción II y 73 Fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta Asamblea la aprobación de la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para que México eleve su nivel de competitividad convergiendo a referentes internacionales, es necesario que cuente con un marco institucional que propicie el buen desarrollo de las actividades de los sectores productivos; este ha sido uno de los elementos fundamentales en la estrategia continua y sostenida de los países más competitivos: creación de instituciones tanto públicas como privadas, efectivas en coadyuvar al mejor funcionamiento de las economías de mercado.

La conclusión a la que llegan las diversas evaluaciones de competitividad de México sugieren la necesidad de la instrumentación de políticas orientadas a mejorar el desempeño de las instituciones públicas y privadas, y la promoción y desarrollo tecnológico, coadyuvando significativamente a incrementar la competitividad del país en los próximos años; de lo contrario, México seguirá descendiendo lugares en cuanto a nivel de competitividad se refiere y lo más preocupante: el bienestar de la sociedad irá en detrimento.

Para elevar el crecimiento de la productividad y reducir las diferencias en el nivel de vida, se requieren más reformas que promuevan el crecimiento y la evolución de los mercados. En lo relacionado con el ámbito estructural se han realizado progresos sólidos durante las últimas dos décadas. No obstante, quedan aún varios renglones en los que podrían aumentarse los esfuerzos para corregir fallas en la puesta en marcha de reformas anteriores y superar los rezagos en otras.

La reforma regulatoria ha sido un elemento central de la política gubernamental que, con un compromiso político sostenido y congruencia en su puesta en práctica puede establecer un umbral de diferencia significativo en el tratamiento de varios de los ámbitos centrales en las políticas públicas nacionales. Un mejor marco regulatorio genera un ambiente que fomenta el crecimiento, con mejores oportunidades para los inversionistas del sector privado y haciendo cumplir el Estado de Derecho de mejor manera. La modernización del marco regulatorio en sectores clave como el de energía, agua y telecomunicaciones también contribuirá a mejorar el acervo de capital de infraestructura.

Es fundamental la reducción de los costos de transacción en los mercados y de las relaciones de los particulares con las autoridades. El mejoramiento del marco regulatorio se interpreta fundamentalmente como las instituciones jurídicas apropiadas que permitan especificar claramente los derechos de propiedad y que permitan ejercer su coerción en forma efectiva. Sólo bajo este tipo de certidumbre institucional los agentes

económicos concurrirían a las actividades económicas acrecentando el potencial económico de los recursos que estos asignen.

Existe un reclamo en el sector privado, en forma tácita o manifiesta, respecto a una multitud de instituciones que inhiben diversos tipos de intercambios en los mercados. Considerando siempre que los bienes y servicios a ser intercambiados en el presente y en lo futuro conllevan crecientes complejidades técnicas y múltiples características, por lo que representan una asimetría de información entre los agentes involucrados en los intercambios de mercado sean consumidores o empresas y por tanto exigen un nivel regulatorio mínimo necesario.

Es necesario adoptar como principio, que no es el tamaño o número de las regulaciones aplicables lo que resalta como inadecuado al funcionamiento de los mercados, de hecho el exceso como la ausencia de regulaciones, pueden ser igualmente dañinos al bienestar social. El objetivo es que la regulación sea la adecuada en definir claramente el ámbito de los derechos de propiedad y que no represente un obstáculo para el ejercicio lícito y efectivo de estos derechos. El concepto de derechos de propiedad se debe de concibir en un sentido amplio, no sólo los derechos relacionados a los activos de una empresa, sino también a los adquiridos por medio de las relaciones contractuales entre los particulares y entre estos y la autoridad.

Un principio adicional e igualmente relevante es que el marco jurídico deberá garantizar la libertad de concurrencia o participación en todas las actividades económicas posibles, mientras la autoridad deberá de hacer coercibles con imparcialidad los derechos adquiridos en los contratos entre todos los agentes económicos participantes o concurrentes en las actividades de mercado, otorgando certeza jurídica, lo cual no tendría que ser impedimento al diseño de normas que otorgaran flexibilidad respecto a la evolución esperada en los mercados. Es decir el diseño de las normas deberán caracterizarse por ser compatibles con el surgimiento de nuevas transacciones y de creciente complejidad en una economía abierta al resto del mundo, de tal forma que se diseñen normas estables, que no petrificadas, respecto a la dinámica económica, su aplicación imparcial a los particulares y se eviten las existencia de regulaciones contrarios a estos principios.

Para lograr sus metas, la política regulatoria debe adoptar una perspectiva de “gobierno en su conjunto”. Lo anterior implica llevar a cabo reformas al marco regulatorio actual en áreas de infraestructura que son claves, a fin de aumentar las oportunidades para la inversión privada y mejorar la competitividad económica. Los temas sectoriales que se tratan se relacionan con los acuerdos regulatorios y de gobernabilidad de las autoridades reguladoras en actividades económicas vitales (como el agua, la energía, los servicios financieros y las telecomunicaciones).

La política regulatoria debe ser vista como una herramienta para el desarrollo social y económico. De este modo, se deben presentar las siguientes transiciones específicas:

Debe modernizarse y revisarse el marco legal de las autoridades reguladoras. Así, podría fortalecerse su diseño institucional, para garantizar su independencia de la intervención política directa y de otros intereses. Una mayor independencia deberá equilibrarse con un marco claro para la rendición de cuentas.

Los poderes de las autoridades reguladoras deben consolidarse por medio de mayores facultades de investigación y una diferenciación clara de tareas con las secretarías de Estado. Todas las autoridades reguladoras deben contar con departamentos jurídicos sólidos.

Una mayor cantidad de acuerdos sistemáticos y de cooperación con la autoridad reguladora en materia de competencia podrían mejorar la situación. La meta debe consistir en proporcionar oportunidades para una consulta pública bilateral obligatoria con los reguladores sectoriales. Asimismo el fomento a la participación de asociaciones de consumidores sólidas y de la sociedad civil en las consultas con las autoridades reguladoras. Fortalecer la coordinación al interior del gobierno entre organismos con respecto a la regulación y las prácticas regulatorias resulta toral.

En este sentido, y ya en particular, debe ampliarse el alcance del Programa de Mejora Regulatoria a los niveles inferiores del gobierno. También en el ámbito estatal y municipal debe evitarse una rigidez innecesaria en la política comercial. El gobierno federal tiene el deber de trabajar con más estados y municipios hacia la puesta en marcha del SARE, con la intención de simplificar los trámites y reducir las barreras de entrada para la apertura de empresas en todo el país. Asimismo, debería reducirse el tiempo de espera para obtener un número de registro de contribuyentes.

Es de resaltar que la simplificación de trámites no agota el objetivo de la mejora regulatoria, ni en forma alguna es su objetivo único. El objetivo primodial es el evitar la existencia de regulaciones que no tengan justificación en una demostrada falla de mercado y que tal regulación minimize los costos de tal deficiencia, así como evitar aquellas regulaciones cuyos beneficios sociales sean menores que los costos que implica su existencia.

Es necesario reconocer que son las propias dependencias de Gobierno las que son origen y pueden actúar como grupo de interés en emitir regulaciones y defender su existencia toda vez que mayores responsabilidades en la aplicación de regulaciones implican mayor influencia sobre los agentes particulares y mayores recursos presupuestales para su administración. Es por ello que el análisis beneficio costo de las regulaciones exsitentes así como las que son propuestas por las dependencias del Ejecutivo Federal deben de ser analizadas en forma objetiva sin que sobre este proceso de evaluación económica y social se ejerzan presiones del resto de los organismos del poder Ejecutivo Federal con facultades de proponer acciones regulatorias.

La COFEMER es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economia, cuyo propósito es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad.

Para contribuir al objetivo de una regulación de calidad, que incremente el bienestar social y fomente la competitividad, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:

- Revisa y dictamina los proyectos regulatorios, para que estos generen un beneficios social neto procurando sean de minimo costo en su cumplimiento;

- Recibe y toma en cuenta los comentarios del público, respecto de los proyectos de nueva regulación (i.e. bajo los principios de consulta pública y transparencia);

- Realiza propuestas de mejora al marco regulatorio vigente en sectores específicos;

- Lleva un inventario de trámites federales y busca su simplificación; y

- Promueve la mejora regulatoria y la competitividad a nivel nacional, en conjunto con el Sector Privado, los Estados y los Municipios.

Puede advertirse que el órgano descrito tiene grandes aciertos en cuanto a sus fines, pero al hacer un examen más concienzudo sobre su forma de operar y facultades, éstas resultan insuficientes. La coordinación y una participación más activa entre la Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER) con la Administración Pública Federal y Local y los reguladores sectoriales es una condición básica para integrar los principios de la competencia en la política regulatoria.

Así, en la búsqueda de la consecución de estos fines se considera necesario dotar de autonomía a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con el fin de que sus decisiones no dependan del arbitrio de autoridad alguna siendo un órgano imparcial y responsable en la materia.

En el mismo sentido se considera que este órgano autónomo cuente con las facultades necesarias de sanción para que sus resoluciones se nutran de efectividad en aras de lograr marcos regulatorios consistentes y competitivos consistentes con el panorama internacional.

Una jerarquización más clara de la regulación (actos administrativos de aplicación general) contribuiría a fomentar un marco legal más claro y eficiente, lo que atraería y retendría más inversiones. La arquitectura de las medidas legales, en su estado actual, es algo compleja y, en algunos casos, afecta la transparencia, la certidumbre legal y los esfuerzos de cumplimiento.

Podría refinarse una serie de herramientas regulatorias, como las Manifestaciones de Impacto Regulatorio de carácter vinculante para la elaboración de propuestas en lenguaje claro.

Es con base en los razonamientos anteriores que se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 69-E, 69-G Y 69-J DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 69-E, 69-G y 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, **es un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía de decisión**, que promoverá la transparencia y estricta aplicación del análisis beneficio y costo social en la elaboración y aplicación de las regulaciones, de forma que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Tendrá las siguientes atribuciones:

I…VIII

Artículo 69-G.- La Comisión tendrá un director general, quien será designado por el Titular del Ejecutivo Federal, **y ratificado por la Cámara de Senadores y en sus recesos por la Comisión permanente.** Este dirigirá y representará legalmente a la Comisión, adscribirá las unidades administrativas de la misma, expedirá sus manuales, tramitará el presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia, interpretará lo previsto en el título tercero A de esta Ley para efectos administrativos y tendrá las demás facultades que le confieran esta Ley y otras disposiciones.

…

Artículo 69-J.- La Comisión, cuando así lo estime, podrá emitir y entregar a la dependencia u organismo descentralizado correspondiente un dictamen parcial o total de la manifestación de impacto regulatorio y del anteproyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la manifestación, de las ampliaciones o correcciones de la misma o de los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo anterior, según corresponda.

El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Comisión de los sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones propuestas en el anteproyecto, atendiendo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 69-E.

Cuando la dependencia u organismo descentralizado promotora del anteproyecto no se ajuste al dictamen mencionado, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Comisión, antes de emitir o someter el anteproyecto a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que la Comisión emita un dictamen final al respecto dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Si las razones respectivas mencionadas en el párrafo anterior no son consideradas como suficientes en el dictamen final y no son acatadas las correcciones de la Comisión el servidor público responsable del anteproyecto será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal para someter los anteproyectos a consideración del Ejecutivo, deberá recabar y tomar en cuenta la manifestación así como, en su caso, el dictamen de la Comisión.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Artículo Segundo. Los nombramientos para la renovación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán ser presentados por el Titular del Ejecutivo en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, sin que, debido al cambio de naturaleza jurídica de este órgano, puedan ser considerados dentro de dichos nombramientos los comisionados en funciones hasta la publicación de la presente.

Atentamente,

SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA **SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN**

SEN. CARLOS ACEVES DEL OLMO **SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ**

SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA **SEN. AMIRA GRICELDA GÓMEZ TUEME**

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI **SEN. FRANCISO HERRERA LEÓN**

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO

DE LA DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

La suscrita, diputada **LETICIA QUEZADA CONTRERAS**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el siglo pasado y durante el presente los avances de la biología de la reproducción humana han dado pasos agigantados para resolver los problemas de infertilidad y esterilidad, haciendo posible que miles de personas hayan podido procrear y tener acceso a la parentalidad que para algunas personas constituye uno de los principales objetivos biológicos que cumple la persona en su ciclo de vida.

La infertilidad es un padecimiento asintomático, diagnosticado cuando no se ha logrado concebir un hijo, de manera natural por lo menos durante un año. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como un a enfermedad con derecho a ser tratada, y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución a través de tratamientos médicos.

La esterilidad es la incapacidad de tener hijos por anomalía física, que puede ser un bloqueo en las Trompas de Falopio en la mujer o una disminución de la espermatogénesis en el hombre. El gameto se refiere a una célula germinal madura, femenina o masculina, es decir, ovulo o espermatozoide funcional, capaz de intervenir en la fertilización o la conjugación. A este proceso también nos podemos referir como meiosis y con esta la la gametogénesis, que es el proceso de la fecundación; por lo tanto, se puede decir que la incapacidad de llevar a cabo la gametogénesis es la puntualidad del término esterilidad.

Según cifras que aporta el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, de ahí la importancia para que sea regulado este problema de salud pública.

La reproducción humana asistida, ha sido materia de legislación en otros países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España, entre otros, en estas legislaciones se pretende garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que al igual que en nuestro país se llevan a cabo en esos casos con las prerrogativas y limites que establecen sus Estados.

En el ámbito internacional, los derechos sexuales reproductivos se encuentran consagrados en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo), en el capítulo VII, referente a los Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, inciso A) Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, preceptúa:

> **"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos…La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.**

> **Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.**
> **También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios…"[43]**

En el marco jurídico vigente, nuestra Constitución Política establece en su artículo 4 el derecho a planificar libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos. Reconociendo los derechos reproductivos, de las y los mexicanos:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

> **Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.**
>
> **Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.**
>
> **Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.**

Es decir, corresponde al Estado, la asistencia a las personas para garantizar su derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de hijas e hijos, este reconocimiento lleva implícito el reconocimiento a los derechos reproductivos. Aunado a lo expuesto y en relación con el artículo 133 de la Carta Magna, el Estado Mexicano debe velar por el cumplimento de los instrumentos internacionales que suscribe y ratifica en materia de derecho internacional.

En esta Iniciativa se complementa un paquete de reformas que prevén los supuestos en los que se consideran las restricciones y las exclusiones a que haya lugar en materia de filiación y paternidad, derivadas de la aplicación de la reproducción humana asistida.

Estamos legislando, por relaciones más justas y más humanas, atendiendo a las legitimas aspiraciones humanas, regulando relaciones que existen de hecho, al margen de la Ley en las que atajamos la vulnerabilidad humana y social para transparentar los hechos que ocurren, legislando para la gente y atendiendo sus anhelos humanos. Ser madre para muchas mujeres constituye un hecho de la naturaleza, concedido sin pedirlo, simplemente atendiendo a nuestra naturaleza biológica, sin embargo para otras mujeres estas condiciones biológicas no fueron favorables, hagámosles factibles la posibilidad de ser madres y cumplir como legisladoras y legisladores, con las mujeres a las que representamos.
Por expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL

---

[43] **Derechos de las Mujeres, T. I, Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional.** Ed. UNIFEM, OMACNUDH y SRE. México, junio, 2006.

FEDERAL

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan y reforman los artículos 58, 59, 263, 324 338, 360, 369 y 383 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

LIBRO PRIMERO
De las Personas

TITULO CUARTO
Del Registro Civil

CAPITULO II
De las actas de nacimiento

…

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de progenitores desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. **En el caso de fallecimiento de ambos progenitores en los casos de subrogación gestacional durante la gestación será aplicable lo dispuesto por las disposiciones de la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.**

…

Artículo 59.- Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación. **En el caso de fallecimiento que establece la Ley Federal de Subrogación Gestacional, será aplicable lo dispuesto por dicha Ley y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.**

CAPITULO IX
De los Matrimonios Nulos e Ilícitos

Artículo 263.- Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviere encinta, se tomarán las precauciones a que se refiere el capítulo primero del Título Quinto del Libro Tercero.

En el caso de nulidad del matrimonio en el que se hayan procreado hijos mediante la práctica médica de la subrogación gestacional será aplicable lo dispuesto por la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.

TITULO SEPTIMO
De la Paternidad y Filiación
CAPITULO I
De los Hijos de Matrimonio

Artículo 324.- Se presumen hijos de los cónyuges:

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio;
II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga éste de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial.

Se exceptuará de las prescripciones de los capítulos referidos a paternidad y filiación los casos en que expresamente se haya otorgado consentimiento mediante la suscripción del Instrumento de Subrogación Gestacional; en cuyo caso, la realización de esta práctica médica o cualquier otra técnica de reproducción asistida, no produce ninguna relación de parentesco por paternidad o de maternidad entre el menor nacido y la mujer gestante, o entre los aportantes o donantes de gametos humanos, ya sean femeninos o masculinos para la reproducción asistida.

En todos los casos los derechos y obligaciones derivados de la filiación serán a favor de la madre subrogada y su cónyuge. En estos casos será aplicable lo dispuesto por la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.

…

Artículo 338.- No puede haber sobre la filiación, ni transacción ni compromiso en árbitros.

No constituirá transacción, ni compromiso en árbitros, todas las disposiciones que se establezcan a favor del menor nacido mediante una técnica de reproducción asistida y que se encuentren reguladas por lo dispuesto por la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional. En caso de duda derivada de una controversia del orden familiar, el Juez de lo Familiar resolverá bajo el principio de interés superior del menor, estableciendo medidas de protección respecto a la patria potestad, custodia y tutela.
…

CAPITULO IV
Del Reconocimiento de los Hijos Nacidos Fuera del Matrimonio

Artículo 360.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.

Se exceptua de lo dispuesto en el párrafo previo a aquellos menores que han nacido de una mujer gestante en los términos que establece la Ley Federal de Subrogación Gestacional, en este caso, tanto los derechos como obligaciones derivados de la filiación serán a favor de la madre subrogada y el padre. En estos casos será aplicable lo dispuesto por la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.

Artículo 369.- El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, deberá hacerse de alguno de los modos siguientes:
I. En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil;
II. Por acta especial ante el mismo juez;
III. Por escritura Pública;

IV. Por testamento;
V. Por Instrumento de Subrogación Gestacional; y
VI. Por confesión judicial directa y expresa.

Artículo 383.- Se presumen hijos del concubinario y de la concubina:

I. Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que comenzó el concubinato;
II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida común entre el concubinario y la concubina.

Se exceptuará de las prescripciones de los capítulos referidos a paternidad y filiación los casos en que expresamente se haya otorgado consentimiento mediante la suscripción del Instrumento de Subrogación Gestacional; en cuyo caso, la realización de esta práctica médica o cualquier otra técnica de reproducción asistida, no produce ninguna relación de parentesco por paternidad o de maternidad entre el menor nacido y la mujer gestante, o entre los aportantes o donantes de gametos humanos, ya sean femeninos o masculinos para la reproducción asistida.

En todos los casos los derechos y obligaciones derivados de la filiación serán a favor de la madre subrogada y su concubino. En estos casos será aplicable lo dispuesto por la Ley Federal de Subrogación Gestacional y las previsiones que establezcan el Instrumento de Subrogación Gestacional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 279 bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CODIGO PENAL FEDERAL
TITULO DECIMOSEXTO
Delitos Contra el Estado Civil y Bigamia
CÓDIGO PENAL FEDERAL

…

Artículo 279 Bis.- **No se considerará delito los supuestos que prevé la normatividad vigente, sin embargo en caso de violación a la Ley Federal de Subrogación Gestacional, se aplicarán los artículos 465 y 466 que dispone la Ley General de Salud.**

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en 90 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo.
TERCERO.- Remítase a los Gobiernos Estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, le brinden difusión y debida observancia.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de julio de 2010

A t e n t a m e n t e

DEL SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-C DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.



SEN. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-C DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

El suscrito, Senador **RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ**, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Fracción II y 73 Fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta Asamblea la aprobación de la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de los países, la calidad de vida de sus habitantes e inclusive su viabilidad, son cada vez más dependientes de su nivel de competitividad, si entendemos ésta como la capacidad de un país para retener y atraer más inversiones, que generen más empleos. La productividad de los factores en una economía no sólo se explica por la cantidad de capital y de mano de obra disponible, también por su calidad, es decir, por el cambio tecnológico y las capacidades crecientes de de su capital humano. Se distinguen como fuentes del crecimiento económico cuatro factores fundamentales: i) el crecimiento de la fuerza de trabajo, ii) el crecimento de la calidad de la fuerza de trabajo, iii) el crecimiento del acervo de capital por virtud de la inversión, y iv) el cambio tecnológico que causa el aumento en la productividad y por tanto la reducción de los costos de producción.

De ahí que en materia de desarrollo económico éste sea el tema de nuestro tiempo y en el caso de México, uno de los retos más urgentes que enfrentamos. En efecto, de conformidad con todos los organismos internacionales y nacionales que miden la competitividad-país, México ha caído en un rezago en esta materia en relación con otras economías en el mundo. En este sentido, elevar nuestra competitividad es una tarea impostergable para alentar el crecimiento económico y la generación de empleos.

La competitividad de la economía mexicana durante los últimos años refleja un claro retroceso en comparación con economías también catalogadas en desarrollo (Brasil, India, China, entre otras), lo anterior ha llevado a los especialistas nacionales a analizar y discutir las diferentes directrices económicas, tecnológicas e instituciones que ayudarían al país a revertir tal situación. Este trabajo presenta, discute y analiza las siete principales directrices sobre las cuales el gobierno, instituciones y sociedad deben trabajar en conjunto para lograr elevar la competitividad empresarial.

En México a partir de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la competitividad se convirtió en un concepto de uso común en todos los sectores empresariales y niveles sociales. Dicho tratado fue el inicio de una acelerada apertura comercial de México con el resto del mundo; lo que ha dado como resultado que hasta 2006 se tengan diversos acuerdos comerciales y económicos con más de 30 países.

El Índice Global de Competitividad del World Competitiveness Report ubicó a México en el lugar 45 en el 2006, en el reporte del 2010 lo ubica en el lugar 47 de un grupo de 58 economías. En el grupo de los países

latinoamericanos los mejor posicionados fueron Chile y Brasil en los lugares 28 y 38 respectivamente. Respecto a la inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB, México en el 2008 ocupó el lugar 47 con una inversión del 0.37% del PIB mientras Chile ocupó el 4to lugar y Brasil el lugar 25 con una inversión del 1.03% y del 0.57% del PIB respectivamente[44].

Pero sin importar con qué indicador o metodología se evalué la competitividad de México, la conclusión es que todos ellos sugieren la instrumentación de políticas orientadas a mejorar el desempeño de las instituciones públicas y privadas, y la promoción y desarrollo tecnológico, coadyuvando significativamente a incrementar la competitividad del país en los próximos años; de lo contrario, México seguirá perdiendo lugares en cuanto a nivel de competitividad se refiere y lo más preocupante: el bienestar de la sociedad irá en detrimento.

Nuestro país debe enfrentar de manera decidida este gran reto nacional en materia de competitividad, a fin de garantizar a la población las oportunidades necesarias para mejorar sus estándares y calidad de vida. Para ello se deberá hacer México atractivo a la inversión productiva nacional y extranjera, que permita tanto elevar los ingresos de la población como la generación de empleos. Todo esto tendrá lugar en la medida en que el país pueda brindar a sus instituciones y a las empresas, las condiciones necesarias para incrementar su eficiencia productiva y poder competir en una economía abierta y global.

En este sentido, la competitividad debe ser el punto de arranque, un medio, el cual será seguido de un impulso al crecimiento económico vía flujo de capitales, lo que a su vez generará empleos en la cantidad y en la calidad que hace falta. Es necesario tener esto muy claro, la competitividad buscará generar inversiones y tendrá como objetivo final la generación de empleos mejor remunerados.

Para que México eleve su nivel de competitividad a nivel internacional, es necesario que cuente con un marco institucional que propicie el desarrollo de las actividades de los sectores productivos; este ha sido uno de los elementos fundamentales en la estrategia continua y sostenida de los países más competitivos: creación de instituciones tanto públicas como privadas, efectivas al momento de coadyuvar al mejor funcionamiento de las economías de mercado.

Antes de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, existía la idea generalizada que debería ser un solo operador quien tuviera la infraestructura y prestara el servicio. Se pensaba que de otra manera existiría redundancia en infraestructura y los costos serían trasladados a los usuarios. El operador de telecomunicaciones como monopolio natural podría beneficiarse de las economías de escala. Generalmente el único operador era propiedad del Estado, debiendo cumplir al mismo tiempo con ciertas metas de política pública (p. ej., llevar teléfonos a zonas alejadas). El propio operador establecía los requisitos técnicos, fabricaba los equipos o tenía la exclusividad para venderlos.

Al abrir las telecomunicaciones a la competencia, se requería de una autoridad capaz de regular el nuevo mercado de telecomunicaciones para que los interesados en ingresar a éste tuvieran certeza de un nivel equitativo de condiciones entre los dominantes y los nuevos entrantes. Las Secretarías de Estado eran las encargadas de elaborar la política de telecomunicaciones y supervisar el desempeño de las empresas públicas de telecomunicaciones. El inconveniente para que se convirtieran en autoridades regulatorias era, entre otros, que tendrían presiones de continuar con la rentabilidad de la empresa pública, de cumplir con objetivos de política social y de mantener el subsidio a ciertos servicios.

En México, durante la última década, se han establecido algunas instituciones dentro del poder ejecutivo que tienen una gran influencia sobre la competitividad del país, una de ellas es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). La existencia de figuras institucionales de este tipo sólo es el primer paso ya que, no obstante que en algunas de ellas su estructura y mandato son las adecuadas y funcionales, su nivel de facultades dejan mucho que desear para llevar a cabo su objetivo principal que es el de regular áreas

[44] Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2010

especificas de la economía nacional promoviendo su tránsito a un entorno de competencia que eventualmente requiera un mínimo de regulación y permita la evolución irrestricta de sus mercados. El mandato del regulador debe de estar limitado a corregir las fallas de mercado mientras estas subsistan en el sector y no otros que puedan actuar en sentido contrario o disvirtuar su objetivo. Para ello, debería actuar sólo regulando, en caso de existir, actividades consideradas como monopolios naturales y dando prioridad a maximizar los factores que impliquen transferir mas actividades al mecanismo de mercado, permitiendo así la evolución de la competencia y la existencia de competidores cada vez mas eficientes y ágiles respecto al crecimiento del mercado. En otras palabras, procurar la entrada de nuevos operadores sin ser proteccionista, ni un obstáculo a la expansión de los competidores existentes.

La limitación de COFETEL, en cuanto al nivel de sus facultades, la hacen ver como insuficiente tanto al interior como al exterior del país; lo cual le impide constituirse como el eje de un marco institucional sólido y confiable que efectivamente regule e incentive las buenas prácticas en materia de Telecomunicaciones.

Es necesario reconocer que al sector de las telecomunicaciones le caracteriza una estrucructura de costos que implica elevadas inversiones en activos fijos de carácter hundido, es decir en activos específicos sin uso alternativo diferente al de las telecomunicaciones, con prolongados plazos de amortización y sujetas a un elevada tasa de obsolecencia tecnica dado el acelerado cambio tecnológico que experimentan y que, por lo tanto, se requiere un constante fujo de inversión en su modernización. Todo ello hace de la inversión en telecomunicaciones sea de largo plazo y sujeta a un elevado nivel de riesgo; por lo que la certidumbre jurídica es un factor central del desarrollo del sector.

Es por esa razón que los Senadores que suscribimos esta iniciativa, estamos convencidos de que el órgano regulador requiere, en primer término, independencia de los agentes regulados. De otra manera, el regulador podría comprometer la neutralidad de su función y comprometer o limitar la competencia en el mercado, sin que sea la inversión e innovación la que determine el crecimiento de los operadores de redes de telecomunicaciones.

Por otro lado, la autonomía del órgano regulador en relación a las autoridades políticas también es vital. Dadas las carateristicas anteriormente señaladas de la inversión en el sector de referencia, es fundamental dar certidumbre de largo plazo a los criterios del organo regulador, cambios en sus prioridades, criterios y herramientas regulatorias no permiten un entorno de certidumbre que favorezca la planeación de inversiones de largo plazo. Es por ello que tanto organismos internacionales como las recomendaciones del sector acadèmico internacional recomiendan que el organismo regulador tenga un mandato claro, de largo plazo y estable mediante su autonomía de los vaivenes político electorales y que pueden desvirtuar sus objetivos hacia objetivos coyunturales con sesgos hacia prioridades políticas, que le den inconsistencia en el tiempo a su desempeño en prejucio de la inversión, innovación y empleo del sector telecomunicaciones.

No podemos obviar, los actores políticos, que el desarrollo de las telecomunicaciones está íntimamente ligado al desarrollo democrático de una nación y, por ello, el uso político y discrecional del órgano regulador es inaceptable para un país que busca consolidar y ampliar los beneficios de su democracia.

En ese sentido, la autoridad reguladora debe reflejar un compromiso con la credibilidad y estabilidad de sus criterios en el largo plazo y por tanto mostrarse independiente y no subordinada a otras entidades sujetas a los vaivenes político electorales de coyuntura como lo son las Secretarías de Estado.

La evidencia económica confirma el efecto positivo de la autonomía del organismo regulador sobre los indicadores de evolución de las telecomunicaciones en diversos países. Académicos reconocidos en el ámbito internacional han encontrado evidencia cuantitativa que indica que un regulador actuando separadamente de la Secretaria, Ministerio o Departamento de Estado esta positivamente relacionado con el nivel de inversión y el nivel de penetración de las telecomunicaciones en la población.

Esta autonomía ha adquirido diferentes matices en cada país. En EUA la Federal Communications Commission es independiente del Poder Ejecutivo y responde directamente al Congreso Federal. En Alemania hasta 2005 existía un órgano regulador que respondía a un ministerio de gobierno, con una organización administrativa similar a la de COFETEL. En 2005 se creó el Bundesnetzagentur como una autoridad federal independiente y con competencia en telecomunicaciones, correo, electricidad, gas y ferrocarriles. En Brasil la autoridad reguladora es autónoma y la conformación de sus miembros de decisión es ratificada por el Senado.

Entre las facultades de los órganos reguladores están el otorgamiento de autorizaciones para el ingreso de nuevos operador de telecomunicaciones, el establecer reglas y estándares de calidad, administrar recursos fundamentales como el espectro radioeléctrico y los esquemas de númeración, el resolver disputas sobre interconexión de redes, supervisar el cumplimiento del marco jurídico y de las autorizaciones, así como sancionar cuando sea necesario. En los países que han decidido que en el ámbito de las telecomunicaciones tanto el ministerio como el órgano regulador tengan responsabilidades, la distribución de facultades no ha sido uniforme, ni la relación entre ministerio-regulador una fácil y libre de conflictos.

En México durante las discusiones y proyectos para la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 (LFT), el órgano regulador siempre estuvo presente con diversas facultades. Sin embargo, en la recta final de la aprobación de la LFT, se suprime el establecimiento del órgano regulador y sus facultades, remitiéndolo a un artículo transitorio en el cual se ordena al Ejecutivo Federal crear un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En cuanto a las facultades, éstas se dividieron entre la COFETEL y la Subsecretaría de Comunicaciones lo cual ha generado fuertes críticas, y a ello se ha atribuido la "doble ventanilla" que se refiere a que para un solo trámite se realizan dos gestiones una ante la COFETEL y otra con la Subsecretaría de Comunicaciones. Esa concurrencia de facultades ha obedecido fundamentalmente a la existencia de procedimientos fragmentados y a la constricción de COFETEL en relación con la SCT.

Una deficiencia palpable de COFETEL ha tenido desde su creación, que fue elevada a rango de ley con las reformas de 2006 a la LFT, es que no puede sancionar sino únicamente opinar si procede una sanción. Sin embargo, no existe razón alguna para que COFETEL opine y la Subsecretaría de Comunicaciones decida si se sanciona o no al infractor.

Por las razones anteriormente expuestas, se considera prudente que la COFETEL se convierta en el único regulador en materia de Telecomunicaciones, siendo un órgano descentralizado, cuyos nombramientos sean hechos de forma escalonada y pasen por la ratificación del Senado. Sin duda, esto garantizará su independencia e imparcialidad, agilizando los procedimientos bajo su encargo y velando siempre por prácticas competitivas en el ramo.

Es con base en los razonamientos anteriores que se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9-A Y 9-C DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones **es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía de decisión**, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La Comisión tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones y no estará subordinada a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y

contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I…III

IV. Otorgar, modificar, prorrogar y revocar las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, conforme los procedimientos administrativos de licitación pública, entre otros;

V. Aprobar el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación correspondientes;

VI…XIV.

XV. Sancionar las infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XVI. …XVII

….

Artículo 9-C. Los comisionados serán designados **de forma escalonada** por el Titular del Ejecutivo Federal y **ratificados por el Senado de la República ó, en periodo de receso, por la Comisión Permanente,** y deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. …III.

…

(**se deroga último párrafo**)

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Artículo Segundo. Los nombramientos para la renovación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán ser presentados por el Titular del Ejecutivo en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, sin que, debido al cambio de naturaleza jurídica de este órgano, puedan ser considerados dentro de dichos nombramientos los comisionados en funciones hasta la publicación de la presente.

Atentamente,

SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA	**SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN**
SEN. CARLOS ACEVES DEL OLMO	**SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ**
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA	**SEN. AMIRA GRICELDA GÓMEZ TUEME**
SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI	**SEN. FRANCISO HERRERA LEÓN**

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

DIEZ, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DEL REINO DE ESPAÑA EN MÉRIDA.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN DOS PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 21 de julio del año en curso, dos oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso:

1. Para que el C. **José Mario Molina Pasquel y Henríquez**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.
.
2. Para que el C. **Gonzalo Ortiz Guzmán**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Gran Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos:

a) Respecto del C. **José Mario Molina Pasquel y Henríquez**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

b) Respecto del C. **Gonzalo Ortiz Guzmán**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. **José Mario Molina Pasquel y Henríquez**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. **Gonzalo Ortiz Guzmán**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE UN PERMISO A CIUDADANO MEXICANO, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIÓN OTORGADA POR GOBIERNO EXTRANJERO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, el 30 de junio del año en curso,

solicitud de permiso para que el C. **Juan Manuel Oliva Ramírez**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau**, **en grado de Comendador**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Esta Primera Comisión recibió la solicitud referida con los siguientes documentos anexos:

a) Original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de la Condecoración de referencia no implica la sumisión del peticionario a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al C. **Juan Manuel Oliva Ramírez**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN DIEZ PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR LOS DIVERSOS GOBIERNOS EXTRANJEROS QUE SE INDICAN.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 9 de junio del año en curso, diez oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso:

1. Para que la C. **Víctor Hugo Arroyo Vázquez**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz**, que le otorga el Gobierno del **Reino de España.**

2. Para que la C. **María Mercedes Vázquez Miranda**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

3. Para que la C. **María Margarita Guerrero Trillo**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz**, que le otorga el Gobierno del **Reino de España.**

4. Para que el C. **Isidoro Pastor Román**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

5. Para que el C. **Héctor Rivero Borrell Miranda**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

6. Para que el C. **Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

7. Para que el C. **Carlos Navarrete Ruíz**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Caballero Gran Cruz**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

8. Para que el C. **Bruno Francisco Ferrari García de Alba**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

9. Para que el C. **Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

10. Para que el C. **Aldo Ricardo Flores Quiroga**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos:

a) Respecto del C. **Víctor Hugo Arroyo Vázquez**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

b) Respecto de la C. **María Mercedes Vázquez Miranda**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

c) Respecto de la C. **María Margarita Guerrero Trillo**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

d) Respecto del C. **Isidoro Pastor Román**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

e) Respecto del C. **Héctor Rivero Borrell Miranda**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

f) Respecto del C. **Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

g) Respecto del C. **Carlos Navarrete Ruíz**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

h) Respecto del C. **Bruno Francisco Ferrari García de Alba**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del

Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

i) Respecto del C. **Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

j) Respecto del C. **Aldo Ricardo Flores Quiroga**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

En los diez casos, de la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- En este caso, cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para los ciudadanos interesados, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. **Víctor Hugo Arroyo Vázquez**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la C. **María Mercedes Vázquez Miranda**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos**.**

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso a la C. **María Margarita Guerrero Trillo**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al C. **Isidoro Pastor Román**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al C. **Héctor Rivero Borrell Miranda**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso al C. **Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al C. **Carlos Navarrete Ruíz**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Caballero Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso al C. **Bruno Francisco Ferrari García de Alba**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede permiso al C. **Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede permiso al C. **Aldo Ricardo Flores Quiroga**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN DOS PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR LOS DIVERSOS GOBIERNOS EXTRANJEROS QUE SE INDICAN.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 23 de junio del año en curso, dos oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso:

1. Para que el C. **Manuel Perlo Cohen**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau**, **en grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

2. Para que el C. **José Aristeo Saru-Khán Kermez**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos:

a) Respecto del C. **Manuel Perlo Cohen**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

b) Respecto del C. **José Aristeo Saru-Khán Kermez**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

En ambos casos, de la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para los ciudadanos interesados, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. **Manuel Perlo Cohen**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. **José Aristeo Saru-Khán Kermez**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DEL REINO DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE YUCATÁN.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, con fecha 23 de junio de 2010, fue turnada para su estudio y dictamen una solicitud de permiso remitida por la Secretaría de Gobernación para que el ciudadano **Víctor Manuel Gómez Rodríguez**, pueda desempeñar el cargo de **Cónsul Honorario del Reino de España en la Ciudad de Mérida,** con circunscripción consular en el Estado de Yucatán.

Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 78, fracción IV, Apartado C), esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

I.- Del expediente de la solicitante, misma que contiene currículum vitae, identificación y acta de nacimiento, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadano mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

II.- De acuerdo a información obtenida, la función del Cónsul Honorario es la de asistir y proteger a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y Andorra, representar de forma general a España, al Estado Español y a sus Instituciones.

III.- En virtud de que los trabajos a desarrollar no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.

En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la Ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el Estado de Yucatán.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE UN PERMISO A CIUDADANO MEXICANO, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIÓN OTORGADA POR GOBIERNO EXTRANJERO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas para su estudio y dictamen, el 7 de julio del año en curso, las solicitudes de permiso para que el C. **Julio César Cueto Tirado**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Cruz de las Fuerzas de Aire**, que le otorga el Gobierno de la **República de Guatemala** y para que el C. **Jean Francois Joseph Alain Prud Homme Lagace**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referida con los siguientes documentos anexos:

a) Respecto del C. **Julio César Cueto Tirado**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

b) Respecto del C. **Jean Francois Joseph Alain Prud Homme Lagace**, original de la solicitud del interesado dirigido al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. **Julio César Cueto Tirado**, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. **Jean Francois Joseph Alain Prud Homme Lagace**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN SIETE PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 14 de julio del año en curso, siete oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso:

1. Para que el C. **Leopoldo Vilchis Ramírez**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero**, que le otorga el Gobierno de la **República Francesa**.

2. Para que la C. **María Cristina Irina García Cepeda García**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Cruz de Insignia**, que le otorga el Gobierno del **Reino de España**.

3. Para que la C. **María de Lourdes Aranda Bezaury**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número**, que le otorga el Gobierno del **Reino de España**.

4. Para que el C. **Alfonso de María y Campos Castelló**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Comendador**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos.**

5. Para que el C. **Sergio Iván Martínez Perea**, pueda aceptar y usar la **Medalla Premio Marinha do Brasil**, que le otorga el Gobierno de la **República Federativa del Brasil**.

6. Para que el C. **Octavio Sánchez Guillen**, pueda aceptar y usar la **Medalla Conmemorativa Primero de Agosto del Ejército Popular de Liberación de China**, que le otorga el Gobierno de la **República Popular China**.

7. Para que el C. **Héctor Alfredo Moreno Herrera**, pueda aceptar y usar la **Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Caballero**, que le otorga el Gobierno del **Reino de los Países Bajos**.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos:

a) Respecto del C. **Leopoldo Vilchis Ramírez**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

b) Respecto de la C. **María Cristina Irina García Cepeda García**, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

c) Respecto de la C. **María de Lourdes Aranda Bezaury**, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

d) Respecto del C. **Alfonso de María y Campos Castelló**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

e) Respecto del C. **Sergio Iván Martínez Perea**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

f) Respecto del C. **Octavio Sánchez Guillen**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

g) Respecto del C. **Héctor Alfredo Moreno Herrera**, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. **Leopoldo Vilchis Ramírez**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la C. **María Cristina Irina García Cepeda García**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Cruz de Insignia, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso a la C. **María de Lourdes Aranda Bezaury**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al C. **Alfonso de María y Campos Castelló**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Comendador, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al C. **Sergio Iván Martínez Perea**, para aceptar y usar la Medalla Premio Marinha do Brasil, que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso al C. **Octavio Sánchez Guillen**, para aceptar y usar la Medalla Conmemorativa Primero de Agosto del Ejército Popular de Liberación de China, que le otorga el Gobierno de la República Popular China.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al C. **Héctor Alfredo Moreno Herrera**, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN SEIS PERMISOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MÉXICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 23 de junio del año en curso, dos oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y notificación en la que se le comunica el puesto a laborar, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza eminentemente administrativa, hacia el interior de la respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio de la representación política o de la capacidad para comprometer al gobierno en cuya representación diplomática se prestará labor.

3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de los solicitantes.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier García López, para prestar servicios como Chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Eric David Vera Arreola, para prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz Castillo, para prestar servicios como Auxiliar Administrativo en la Embajada de la República de Colombia en México.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios como Empleado en la Sección de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Erika Alejandra Hernández Victoria, para prestar servicios como Asistente Administrativo en la Oficina Agrocomercia en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Herminia Laura Buendía Cruz, para prestar servicios como Cajera de la Sección de Visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN OCHO PERMISOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MÉXICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 30 de junio del año en curso, dos oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y notificación en la que se le comunica el puesto a laborar, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza eminentemente administrativa, hacia el interior de la respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio

de la representación política o de la capacidad para comprometer al gobierno en cuya representación diplomática se prestará labor.

3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de los solicitantes.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Liliana Castillejos Morales, para prestar servicios como Agente de Compras en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Eileen Hernández Chávez, para prestar servicios como Asistente Administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California..

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Rosendo Emilio Hernández Morales, para prestar servicios como Chofer Mensajero en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Herydan Milton Maza Hernández, para prestar servicios como Encargado de Relaciones Públicas en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México..

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gilda Sánchez Trejo, para prestar servicios como Asistente Ejecutiva Bilingüe en la Embajada de la República de Haití en México.

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Aguilera Zepeda, para prestar servicios como Analista Financiero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Mauricio Gilberto Vázquez Puga, para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento (Electrodomésticos) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Gabriel Rivas Barbosa, para prestar servicios como Almacenista en la Sección de Servicios Generales en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,

Tamaulipas.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN NUEVE PERMISOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MÉXICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 14 de julio del año en curso, dos oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y notificación en la que se le comunica el puesto a laborar, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza eminentemente administrativa, hacia el interior de la respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio

de la representación política o de la capacidad para comprometer al gobierno en cuya representación diplomática se prestará labor.

3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de los solicitantes.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Efrén Puente Rodríguez, para prestar servicios como Asistente de Recursos Humanos en la Sección Administrativa en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Jared Antonio Zapata Salcido, para prestar servicios como Empleado de Visas en el Departamento de Visas de No Inmigrantes en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Juan Ernesto Ramírez de la Cerda, para prestar servicios como Asistente de Viajes en el Departamento de Administración en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano José Luis Sosa Mora, para prestar servicios como Empleado de Limpieza en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Luis Humberto Mejía Mejorada, para prestar servicios como Examinador de cuentas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Luis Merlos Jaimes, para prestar servicios como Especialista en Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Vanessa Salcido Ibáñez, para prestar servicios como Asistente de Mercadeo Agrícola en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Eduardo Vega Arzola, para prestar servicios como Asistente de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede permiso a la ciudadana Eugenia Herrera Barragán, para prestar servicios como Asistente de Política y Economía en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO:

POR EL QUE SE CONSIDERA QUE HAN QUEDADO SUPERADAS DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS AL RECIENTE PROCESO ELECTORAL.

PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA QUE DIVERSAS PROPOSICIONES RELATIVAS AL RECIENTE PROCESO ELECTORAL HAN QUEDADO SUPERADAS EN FORMA DEFINITIVA.

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al reciente proceso electoral en varios estados de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. 1. Con fecha 12 de mayo de 2010, la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la gobernadora del estado de Yucatán a garantizar las condiciones políticas necesarias para las próximas elecciones en la entidad.

II. 2. Con fecha 19 de mayo de 2010, la Senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales su presencia en los estados que tienen elecciones, para dar seguimiento a los delitos electorales que se están presentando de manera reiterada, además de implementar un sistema de denuncia ciudadana de delitos electorales.

II. Con fecha 2 de junio de 2010 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

3. Del Diputado Oscar Saúl Castillo Andrade integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al H. Congreso del estado de Veracruz para que en aras de no enturbiar ni ensombrecer el proceso electoral en el estado, se abstenga, al menos durante el tiempo que dure este, para tramitar el juicio de procedencia del C. Ricardo García Guzmán, presidente constitucional del municipio de Panuco, Veracruz.

III. Con fecha 9 de junio de 2010, fueron presentadas ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, las siguientes proposiciones:

4. Del Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a investigar y resolver las denuncias presentadas en contra del Presidente de la República por la utilización de recursos materiales y humanos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y de los programas sociales de las dependencias federales de sedesol y sagarpa en el proceso electoral del estado de Oaxaca.

5. Del Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la FEPADE investigue actos realizados por Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, posiblemente constitutivos de delito electoral, los cuales benefician al ex rector de dicha institución y actual candidato al cargo de presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuen.

6. Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Desarrollo Social a abstenerse de utilizar los programas sociales y los programas dirigidos al desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas con fines electorales y a no condicionar los recursos de dichos programas al apoyo del candidato de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia en el estado de Oaxaca.

7. Del Diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción, respecto de diversos hechos ilícitos que en forma sistemática, y mediante el empleo de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se han venido presentado en diversos municipios del Estado de Veracruz.

8. Del Diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción, respecto de diversos hechos ilícitos que en forma sistemática, y mediante el empleo de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se han venido presentado en diversos municipios del Estado de Veracruz.

IV. Con fecha 16 de junio de 2010, fueron presentados ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, las siguientes proposiciones:

9. Del Senador Adolfo Toledo Infazón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas suspenda el uso electoral de los recursos y programas de la dependencia a su cargo en las campañas a puestos de elección popular realizadas en el país, particularmente en el estado de Oaxaca.

10. Del Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Felipe Calderón Hinojosa a no enviar como emisarios a sus familiares para apoyar al candidato de la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia en el estado de Oaxaca y contribuya a la equidad en el proceso electoral.

11. Del Diputado Javier Corral Jurado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se hace un enérgico llamado al Gobernador del estado de Oaxaca para que no intervenga en el proceso electoral, deje de utilizar los recursos destinados al buen ejercicio de la

administración pública local, se conduzca dentro del marco a la legalidad y brinde las condiciones democráticas, en el marco de la tolerancia y respeto.

12. De los Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo, Norma Esparza Herrera, Fernando Castro Trenti, Adolfo Toledo Infanzón, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Francisco Herrera León y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social y del Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a efecto de que expliquen la utilización de programas sociales en las entidades donde actualmente se desarrollan procesos electorales; asimismo, se exhorta a la Procuraduría General de la República a integrar una averiguación previa que le fuera remitida como consecuencia de la posible comisión de delitos electorales en el estado de Aguascalientes.

V. Con fecha 23 de junio de 2010, fueron presentados ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, las siguientes proposiciones:

13. Del Diputado Javier Corral Jurado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exige la inmediata renuncia de José Luís Echeverría Morales, como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, y se hace un exhorto a los consejeros integrantes del Consejo General de esa entidad a que se conduzcan con imparcialidad, apego irrestricto a la legalidad en la contienda electoral del próximo 4 de julio y exige a la procuraduría general de la república, para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, inicie una averiguación previa referente a estos acontecimientos.

14. De la Diputada Gabriela Cuevas Barrón integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Electorales Estatales a que implementen acciones para fomentar la cultura de la denuncia, el respeto a la legalidad y la prevención de los delitos electorales; así como a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia Estatales, para que instrumenten mecanismos con el objetivo de recibir y tramitar -de manera pronta y expedita- las denuncias que se presenten antes, durante y después de la jornada electoral del 4 de julio de 2010

VI. Con fecha 30 de junio de 2010 fueron presentados ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, las siguientes proposiciones:

15. Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a abstenerse de participar en el proceso electoral de Oaxaca.

16. Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral del 4 de julio de 2010.

VII. En las mismas fechas de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones antes relacionadas se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Todas las proposiciones relacionadas en el apartado de antecedentes tienen un factor común: exhortan a diversas autoridades a realizar o abstenerse de actos con incidencia en la jornada electoral que se realizó el 16

de mayo en el estado de Yucatán y el pasado día 4 de julio en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Las proposiciones que se dictaminan realizan diversas consideraciones dirigidas, en cada caso, a sustentar los puntos de acuerdo que solicitan sean emitidos por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Los puntos resolutivos de cada proposición se expresan de la siguiente forma:

- La proposición listada con el numeral 1 del apartado de antecedentes

PRIMERO. La Comisión Permanente condena enérgicamente el brutal y cobarde atentado que sufrió el diputado local Ismael Peraza Valdés, a manos de presuntos policías judiciales adscritos a la Procuraduría de Justicia de Yucatán.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exige a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y al Procurador de Justicia del Estado, Héctor José Cabrera Rivero, a que pongan a disposición de las autoridades competentes, a los agentes responsables de esta brutal y cobarde agresión y que se les castigue de manera ejemplar.

TERCERO. La Comisión Permanente exhorta al Presidente del Congreso del estado de Yucatán, a velar por el respeto a la inmunidad de los diputados al Congreso Local, conforme lo dispone la Constitución del Estado y a que exija el esclarecimiento del atentado en contra del Dip. Peraza Valdés.

CUARTO. La Comisión Permanente exhorta a la titular del Gobierno de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, a abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de intromisión tendiente a favorecer al Partido Revolucionario Institucional hacia las próximas elecciones locales en la entidad; y, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para que en el caso de que se violente o interfiera indebidamente el Proceso Electoral, se investigue y sancione a quién resulte responsable.

QUINTO. Se exhorta al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán a brindar en el ámbito de sus competencias, las garantías necesarias para que los ciudadanos emitan su voto en condiciones de equidad y transparencia durante la jornada del 16 de mayo y el resto del proceso electoral en el Estado

.

SEXTO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán, para en cumplimiento por lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, transparente todo lo referente a la aplicación de los $343,375,000 (trescientos cuarenta y tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos), destinados a la adquisición de tierras al Ejido de Ucú.

- La proposición listada con el numeral 2 del apartado de antecedentes:

PRIMERO. Se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que se cuente con una estrategia nacional que permita su presencia en los procesos electorales que actualmente se desarrollan en el país.

SEGUNDO. Se solicita a la FEPADE la implementación de un programa de denuncia ciudadana, el cual permita el involucrar a la ciudadanía en la defensa y vigilancia del voto. Que se cuente en cada entidad con elecciones con módulos de denuncia electoral ciudadana, un número 01 800 y una página web, para facilitar las denuncias.

- La proposición listada con el numeral 3 del apartado de antecedentes:

***Único.-** Se exhorta respetuosamente al H. Congreso del estado de Veracruz para que en aras de no enturbiar ni ensombrecer el proceso electoral en el estado, se abstenga, al menos durante el tiempo que dure este, para*

tramitar el juicio de procedencia del c. Ricardo García Guzmán, presidente constitucional del municipio de Panuco, Veracruz.

- La proposición listada con el numeral 4 del apartado de antecedentes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que a la brevedad investigue y resuelva las denuncias presentadas en contra del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa por la utilización de recursos materiales y humanos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y de los programas sociales de las dependencias federales de SEDESOL y SAGARPA en el proceso electoral del estado de Oaxaca.

- La proposición listada con el numeral 5 del apartado de antecedentes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, intervenga a efecto de que inicie las correspondientes investigaciones de los actos posiblemente constitutivos de delito electoral que se están presentando, de manera reiterada, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, por parte del Rector Víctor Antonio Corrales Burgueño al permitir la utilización de la institución en beneficio del ex rector y actual candidato al cargo de presidente municipal de Culiacán, Sinaloa Héctor Melesio Cuén.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente solicita a la autoridad competente investigar el proceder de las autoridades de Rectoría y de 16 directores de escuelas universitarias que están utilizando recursos públicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la finalidad de evitar que se sigan empleando con fines electorales.

- La proposición listada con el numeral 6 del apartado de antecedentes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instruya a sus delegados abstenerse de utilizar los programas sociales y los programas destinados al desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas con fines electorales y a no condicionar los recursos de dichos programas al apoyo del candidato de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia en el estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigue la posible comisión de delitos electorales por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca y resuelva con la misma celeridad que ha tenido en los casos presentados por la coalición opositora.

- La proposición listada con el numeral 7 del apartado de antecedentes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción, e investigue las agresiones y homicidios que mediante el empleo de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y fuerza Aérea, se han registrado en el Estado de Veracruz.

- La proposición listada con el numeral 8 del apartado de antecedentes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción, e investigue las agresiones y homicidios que mediante el empleo de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y fuerza Aérea, se han registrado en el Estado de Veracruz.

- La proposición listada con el numeral 9 del apartado de antecedentes:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas suspenda el uso electoral de los recursos y programas de la Dependencia a su cargo en las campañas a puestos de elección popular realizadas en aquellos Estados de la República donde actualmente se desarrollan, especialmente en el estado de Oaxaca.

- La proposición listada con el numeral 10 del apartado de antecedentes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a no enviar como emisarios a sus familiares para apoyar al candidato de la Coalición PAN-PRD-PT-Convergencia en el estado de Oaxaca y contribuya a la equidad en el proceso electoral.

- La proposición listada con el numeral 11 del apartado de antecedentes:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al Gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz para que saque las manos del proceso electoral en Oaxaca, deje de usar los recursos públicos para promover al candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, se conduzca dentro del marco a la legalidad y brinde las condiciones democráticas en el marco de la tolerancia y el respeto.

- La proposición listada con el numeral 12 del apartado de antecedentes:

PRIMERO.- Se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, Ing. Heriberto Félix Guerra, y del Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Lic. Salvador López Orduña, a efecto de que expliquen la utilización de programas sociales a su cargo en las entidades donde actualmente se desarrollan procesos electorales.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a fin de que integre a la mayor brevedad posible la averiguación previa A-10/07385 que le fuera remitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, con fecha 13 de junio de 2010, la cual se deriva de la comisión de posibles delitos electorales en aquella entidad federativa.

- La proposición listada con el numeral 13 del apartado de antecedentes:

Único.- *La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige la inmediata renuncia de José Luis Echeverría Morales, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, solicitar a las autoridades lectorales se conduzcan con imparcialidad, apego irrestricto a la legalidad en la contienda electoral del próximo 4 de julio y exige a la Procuraduría General de la República, para que a través de la* Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, *inicie una averiguación previa referente a estos acontecimientos.*

- La proposición listada con el numeral 14 del apartado de antecedentes:

Primero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Electorales de las entidades federativas en las cuales van a celebrarse elecciones el próximo 4 de julio a que, en el ámbito de sus competencias, instrumenten acciones conjuntas para apoyar el desarrollo y ejecución de los trabajos de fomento a la cultura de la denuncia, respeto a la legalidad y prevención de los delitos electorales, privilegiándose las campañas de difusión permanente en medios electrónicos, impresos o cualquier otra tecnología que posibilite la comunicación hacia toda clase de públicos. Asimismo, para que difundan tanto las acciones de prevención como los mecanismos de orientación y atención ciudadana a través de los cuales se pueden presentar denuncias de hechos que puedan constituir delitos en materia electoral.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades donde se realizarán elecciones el próximo 4 de julio, a que instrumenten a través de sus fiscalías especializadas en materia electoral, mecanismos para recibir y tramitar -de manera pronta y expedita- las denuncias que se presenten antes, durante y después de la jornada electoral del 4 de julio de 2010.

- La proposición listada con el numeral 15 del apartado de antecedentes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua, Ing. José Luis Luege Tamargo, se abstenga de participar en el proceso electoral en Oaxaca y evite hacer llamados a la insurrección y confrontación que sólo buscan, de manera irresponsable, violentar los procesos electorales que se están desarrollando actualmente en el país.

- La proposición listada con el numeral 16 del apartado de antecedentes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ejercicio de sus atribuciones y funciones lleve a cabo las acciones necesarias para resguardar y garantizar la seguridad e integridad física de los ciudadanos que acudan a las urnas a hacer ejercicio de sus derechos al salir a votar.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que rinda un informe sobre el resultado de las acciones llevadas a cabo durante estos comicios estatales.

II. Los legisladores que conformamos esta comisión dictaminadora entendemos la oportunidad de cada una de las propuestas que se dictaminan.

Sin duda, la participación activa del Poder Legislativo Federal como observador calificado en los procesos electorales que se verifican en diversas entidades federativas nuestro país puede constituir un factor importante para la legitimación de los resultados que arrojen las votaciones. Lo anterior, entendiendo que cada legislador representa un conducto para el conocimiento de los asuntos relevantes que en dichos procesos se presentan y que, por esa vía, corresponde a este órgano legislativo federal el ejercer mecanismos de control político para resguardar la equidad en la contienda, en lo que atañe a la intervención de autoridades federales.

Sin embargo, precisamente por esa consideración, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó en su sesión del 9 de junio del año en curso, un dictamen propuesto por esta misma dictaminadora, para dar resolución a diversas proposiciones cuyo contenido está estrictamente relacionado con los procesos electorales estatales. Los puntos resolutivos de dicho dictamen se expresan como sigue:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos municipales, estatales y al gobierno federal a que se abstengan de intervenir en los procesos electorales que se realizarán en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas en julio del presente año y a realizar las acciones necesarias para efecto de garantizar el pleno respeto de las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental y ejecución de programas sociales y otras formas de ejercicio de recursos públicos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión llama a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a darle seguimiento a este exhorto, y a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados antes mencionados, a que realicen con eficiencia y rapidez las investigaciones que se integren con motivo de los posibles delitos.

Por otra parte, puesto que se han verificado las jornadas electorales en los distintos estados a los que hacen referencia esta dictaminadora considera que se da cumplimiento al objetivo que persiguen las proposiciones que se dictaminan.

Por lo antes expuesto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se considera que han quedado superadas en forma definitiva las proposiciones relacionadas en el apartado de ANTECEDENTES del presente Dictamen.

Hágase el presente dictamen del conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para efecto de dar por concluido el procedimiento relativo a la proposición de mérito y se descargue de los asuntos pendientes de resolución en esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DEL LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA A ACTUALIZAR SU LEGISLACIÓN, ESPECÍFICAMENTE LAS DISPOSICIONES QUE SANCIONEN EL ABUSO, VIOLACIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON RELACIÓN A LOS ABUSOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD EN TLAXCALA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a los abusos cometidos contra menores de edad en Tlaxcala.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizamos el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo objeto de este dictamen, fue presentada por los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Según refieren los legisladores promoventes, el 30 de abril del 2010 ante el Congreso legislativo de Tlaxcala, un niño de 11 años de edad expuso el caso de violación y abuso sexual cometido contra él y sus dos hermanos; la acusación del menor recae en la madre, quien se presume consentía la realización de este tipo de actos.

Sobre el particular, el padre de los menores señala que presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala la denuncia correspondiente por el delito de lenocinio, obrando su actuación en la averiguación previa 05/2010/AMPDLYC; sin embargo, se afirma que la misma no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

En el mismo tenor, se manifiesta que uno de los menores de edad abusados es una niña de 3 años y que hasta el momento se encuentra con la presunta responsable del delito, por lo que resulta necesaria su búsqueda. De los otros menores de edad se tiene conocimiento de su requerimiento a tratamientos médicos para recuperarse física y psicológicamente.

Continúan los autores del punto de acuerdo, destacando que los legisladores locales atendieron a la brevedad la solicitud del menor, conformando un grupo especial de trabajo que se encargue de atender las demandas de este caso; no obstante su pronta atención, éstos consideran que a través del trabajo legislativo local no sólo se ayudará a los menores presuntamente abusados sino a todos los niños de Tlaxcala que se encuentren en similares situaciones.

Se dice lo anterior, en virtud de los datos que hacen visibles los legisladores promoventes. En el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se acentúan diversos tipos penales atrasados para la realidad social actual; el artículo 220 de dicho Código establece pena privativa de libertad de 1 a 6 años para quien cometa el delito de abuso sexual, aumentando hasta en una mitad si el sujeto pasivo es menor de edad, es decir hasta 9 años, mientras que la sanción por abigeato es de 1 a 10 años de prisión.

Otra imprecisión legal que señalan los autores de la proposición, es la dispuesta en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. El citado tipo penal establece que *comete el delito de violación el hombre que sin consentimiento y mediante la violencia física y moral tenga cópula con una mujer,* esto quiere decir que no es violación la imposición de la cópula entre hombres, aunque estos sean menores de edad; en este sentido, los hombres no pueden denunciar la violación por no adecuarse la calidad del sujeto pasivo –mujer- que requiere dicho precepto legal.
Resulta necesario, de acuerdo a los promoventes, trabajar desde los tres órdenes de gobierno para erradicar este tipo de conductas criminales que atentan contra sujetos por demás vulnerables, como son los niños.

Por todo lo anterior es pertinente puntualizar los resolutivos de la Proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- *La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los diputados del LXI legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a que en homologación con las leyes federales en la materia, así como en los convenios y tratados internacionales suscritos por México, actualicen su legislación, especialmente en las disposiciones que sancionen el abuso, violación y explotación sexual infantil, procurando que éstas se pronuncien por el interés superior del niño.*

SEGUNDO.- *La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a que atiendan a la brevedad la averiguación previa 05/2010/AMPDLYC radicada por el delito de lenocinio, así como a redoblar los esfuerzos en la búsqueda de la niña de 3 años que se presume estar bajo la guarda de la madre, quien es señalada como la presunta responsable del delito.*

TERCERO.- *La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, para que en coordinación con el Sistema Nacional DIF, mantengan bajo tratamiento médico y psicológico a los menores de edad abusados, para propiciar una pronta recuperación física y moral, en razón de las vejaciones cometidas contra ellos.*

CUARTO.- *La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que realice una investigación detallada de la situación que guarda la comisión de los delitos de trata de personas, explotación y abuso sexual infantil y conexos, en el estado de Tlaxcala, toda vez que esta entidad se posiciona como una de las regiones en donde abundan estas conductas criminales cometidas contra menores de edad.*

II. Los integrantes de la Primera Comisión compartimos plenamente la preocupación de los Senadores promoventes en atención al caso expuesto, sobre todo por el gran daño que resulta para los niños, ejercer

cualquier tipo de abuso, violación y explotación sexual, siendo éstos por definición, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

No obstante la importancia que guarda tal denuncia, ésta dictaminadora se presenta de manera imparcial ante los hechos, empero procurando que la determinación final se apegue a lo que ordene el interés superior del niño.

Bajo este tenor, es preciso compartir que la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala ante la denuncia por lenocinio es diferente a la estimada por los agraviados. Según la declaración del C. Procurador, Lic. Pedro Flores Vázquez, no existió tal violación sexual, en virtud de los resultados que arrojó la inspección física realizada a los menores de edad.

El funcionario informó que en base a estudios proctológicos, se determinó que *no hubo ninguna penetración o violación, ni antigua, ni reciente, porque no hay desgarramientos ni daños en los pequeños*[45], agregando que el quejoso puede solicitar la cooperación de un perito externo si no se confía en el dictamen pericial de la Procuraduría.

Figura adicionalmente como presunción, que el padre de los menores supuestamente abusados manipuló a sus hijos con el propósito de afectar a su esposa, persona que enfrenta a la par, un proceso judicial civil por la guardia y custodia de su hija.

De la última información que se tiene sobre el caso, destaca que el padre de los menores de edad fue detenido por agentes policiales dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Asimismo se tiene conocimiento de la puesta a disposición de los niños ante al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala.

Esta dictaminadora da cuenta sobre su incapacidad para determinar la veracidad de los hechos, así como para resolver sobre la responsabilidad penal de las partes controvertidas, bien por el delito de lenocinio o por falsedad de declaración ante autoridad diversa a la judicial, dado que esto una tarea particular de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala.

Los integrantes de esta Primera Comisión coincidimos con los senadores promoventes en la necesidad de colaborar para resolver esta situación cuanto antes, ya que de ser ciertos los hechos declarados, se están violentando los derechos fundamentales de tres menores de edad, que además de ser presuntos sujetos de abusos y amenazas ahora se encuentran en un proceso de reevictimización por todas las diligencias que deben llevarse en la investigación ministerial.

Es convicción de quienes signamos este dictamen el exhortar a las autoridades correspondientes para que se revise la legalidad de las actuaciones ministeriales sobre el particular, y en su caso se retome una nueva línea de investigación que garantice la mayor transparencia y eficiencia en el proceso, no olvidando que el trato a los menores de edad –presuntas víctimas- debe apegarse a estricto derecho, respetando sus derechos humanos y dignidad.

III.- Esta Comisión coincide con los senadores promoventes en el hecho de que debe ser actualizada la legislación penal del Estado de Tlaxcala, específicamente en lo referido al abuso, violación y explotación sexual infantil.

En revisión al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se comprobó lo señalado por los autores de la proposición. El artículo 220 determina una sanción de 1 a 6 años para quien cometa el delito de abuso

[45] La información se rescata de la siguiente página de Internet http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=16702&Itemid=28 puesto que no existe comunicado o boletín de prensa oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala que avale dicha versión.

sexual -marcando una agravante de 3 años más si la víctima es un menor de edad- sin embargo está sanción sigue siendo menor a la considerada por abigeato.

En esta lógica, también es cierto que el tipo penal de violación resulta totalmente negado a la realidad social. El delito de violación no puede considerar un elemento subjetivo como el género del sujeto pasivo para configurar su realización, ya que la imposición de la cópula sea por violencia física o moral a un hombre queda totalmente en la impunidad.

Se dice desde la jurisprudencia que los elementos que constituyen el delito de violación lo son: *a) La cópula, que es cualquier forma de ayuntamiento carnal o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo; b) Empleo de violencia física que es la fuerza material en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros u otras acciones de tal ímpetu material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar copularse; o bien de violencia moral, que no es otra cosa más que el empleo de amagos o amenazas de males graves que, por la intimidación que producen, impiden resistir el ayuntamiento; y c) Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal*[46].

Ésta y otras inconsistencias en los tipos penales que regulan el delito de violación en el estado de Tlaxcala han permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a través de cinco criterios aislados- interpretar sobre sus disposiciones.

Entre los graves vacíos legales que producen algunos preceptos del Código Penal de Tlaxcala se encuentra la no actualización del delito de violación dándose entre cuñados, por ser parientes en línea transversal, y no en línea recta, como lo prevé el artículo 226 de dicho ordenamiento[47]; asimismo, no procede la agravante de delito cometido en pandilla -tratándose de una violación tumultuaria- pues de aplicarse los artículos 126, 127 y 227 de manera conjunta *se agravaría doblemente la situación del sentenciado por un mismo motivo, con la consiguiente violación de garantías*[48].

Como se podrá observar, resulta totalmente necesario extender un exhorto al Congreso legislativo del estado de Tlaxcala para que se atiendan todos los aspectos jurídicos irregulares en su legislación; todo ello, con la clara intención de garantizar seguridad jurídica a la población tlaxcalteca, pero sobre todo a los niños que habitan en esta región, quienes son uno de los grupos vulnerables –y favoritos- de las redes de abuso, violación y explotación sexual.

Finalmente, cabe advertir que esta dictaminadora no se posiciona a favor de leyes punitivas que vean en el incremento de las penas la solución a dichos problemas sociales. Se ha percibido en la práctica, que esta política criminal no funciona en nuestro país, y que se deben implementar adicionalmente programas de prevención y difusión, cuyo propósito sea informar a la población sobre los riesgos y daños que se generan con estas conductas criminales.

IV. Con la intención de atender el resolutivo cuarto de la proposición objeto de estudio, esta dictaminadora refiere que no existen cifras certeras que posicionen al estado de Tlaxcala como una de las regiones en donde prolifera el delito de trata de personas y conexos, pero quienes realizan trabajo en el terreno han visto el aumento considerable de la presencia de estos delitos en la región.

---

[46] Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época, *Violación, Elementos constitutivos del Delito de*, T. VI.2o. J/86, enero de 1997, p. 397.

[47] Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época, *Violación calificada cometida entre cuñados. No se actualiza por ser parientes por afinidad en línea transversal,* T. VI.P.11 P, diciembre de 1999, p. 799.

[48] Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Octava Época, *Violación Tumultuaria, agravante de delito cometido en pandilla incompatible con el delito de,* T. VI.1o.168 P, febrero de 1995, p. 608.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trabajo en la materia; según el Programa contra la Trata de Personas 2008-2009 -formulado por el mismo órgano autónomo- se tiene como objetivo general el establecer estrategias y acciones para erradicar y sancionar la trata de personas, así como proteger y dar asistencia a las víctimas del delito.

Entre las líneas de acción de dicho Programa, se tiene contemplado el *elaborar un diagnóstico que permita identificar los factores económicos, sociales, políticos y culturales que concurren y producen su incidencia; y conocer los alcances, características y dimensiones de la trata de personas en el país, especialmente la de mujeres, adolescentes, niñas y niños*. Asimismo, se mantiene como acción prioritaria el *elaborar un mapa nacional de la incidencia de delitos relacionados contra la trata de personas.*

En el multicitado Programa se muestra como objetivo de la CNDH la instalación de 10 comités regionales contra la trata de personas; en esta lista se contemplan a los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco como las localidades prioritarias de atención en la materia. Sin embargo, no existe dato que refiera una situación de gravedad en el estado de Tlaxcala.

A pesar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya atiende de manera general la solicitud en comento, sólo se conoce la estructura y funcionalidad del Programa contra la Trata de Personas 2008-2009 y no los resultados de éste; resolviendo los integrantes de esta comisión dictaminadora en atender la preocupación de los legisladores, mediante la petición de información sobre el particular programa a la CNDH.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación soberna el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los diputados del LIX legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a que en homologación con las leyes federales en la materia, así como en los convenios y tratados internacionales suscritos por México, actualicen su legislación, específicamente las disposiciones que sancionen el abuso, violación y explotación sexual infantil, procurando que éstas se pronuncien por el interés superior del niño.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a que garantice la expedités y transparencia en el curso de la investigación que lleve a determinar la veracidad de la denuncia y en su caso, ejercite la acción legal correspondiente contra quien resulte responsable por los hechos denunciados el pasado 30 de abril ante al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, a que en base a los dictámenes psicológicos efectuados a las presuntas víctimas, se les mantenga bajo tratamiento médico y psicológico para propiciar su pronta recuperación física y mental, cuidando que esta atención respete los derechos humanos y dignidad de los menores de edad.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y AL GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESTAURAR EL ORDEN PÚBLICO Y EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESTAURAR EL ORDEN PÚBLICO Y EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las proposiciones con punto de acuerdo: por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para atender a la brevedad el conflicto paramilitar en el municipio de San Juan Copala y solicita a la Comisión Permanente la designación de un grupo plural de legisladores que acompañe a la Caravana Humanitaria "Bety Cariño y Jyri Jakollah", a celebrarse el próximo ocho de junio del presente año; presentado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a través del diputado Oscar González Yánez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; relacionado con una caravana de observadores de derechos humanos en el municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, presentado por la diputada Florentina Rosario Morales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con relación a la situación de violencia en San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. 1. Con fecha 19 de mayo el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a través del diputado Oscar González Yánez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca para que desarme y procese a los grupos paramilitares que operan en la región de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca.

2. Con fecha 19 de mayo la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre la caravana nacional e internacional de observadores de derechos humanos al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

3. Con fecha 16 de junio la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la situación de violencia en San Juan Copala, en el estado de Oaxaca.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo listada en el numeral 1 de los antecedentes del apartado de antecedentes expone las consideraciones siguientes:

1. Señala el promovente que, en San Juan Copala el pasado 27 de abril, fueron "emboscados y vilmente asesinados integrantes de la Caravana Internacionalista por la Paz de la que formaban parte Jyri Jaakolla observador de una ONG y la compañera Alberta Cariño Trujillo…"

2. Explica el diputado promovente que esta comunidad "está prácticamente incomunicada: sin servicios médicos, energía eléctrica, servicio telefónico, agua potable y sin un suministro regular de alimentos…"

3. Indica también que "los grupos de choque denominados Unidad para el Bienestar Social de la Región Trique (UBISOR) y Movimiento de Unificación de la Lucha Trique (MULT), mantienen el acoso sobre casi 100 familias que se niegan a abandonar su población…" y que el gobierno del estado de Oaxaca "ha sido omiso en la detención de los integrantes de los grupos paramilitares responsables de estos atentados…"

4. Concluye el promovente que "mientras el gobierno del estado de Oaxaca y el Gobierno Federal no desarticulen y procesen a los grupos paramilitares, la expectativa de otro Acteal está a la vista".

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al gobierno de Oaxaca para que desarme y procese a los grupos paramilitares que operan en la región de San Juan Copala.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades del gobierno del estado para que garantice la seguridad pública en la comunidad de San Juan Copala y el estado de Derecho consagrado en nuestra Carta Magna.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión designará a un grupo plural que acompañe el 8 de junio del presente a la Caravana Humanitaria "Bety Cariño y Jyri Jakollah", como una medida de coadyuvancia para que se pueda hacer entrega de los víveres y medicinas a la multicitada comunidad y dé seguimiento puntual a los hechos de sistemática violación a los derechos individuales y colectivos de los integrantes de las comunidades triques de San Juan Copala.

La proposición con punto de acuerdo listada en el numeral 2 de los antecedentes del apartado de antecedentes expone las consideraciones siguientes:

1. Señala la proponente que los lamentables hechos ocurridos a una caravana de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, que se dirigían hacia el municipio autónomo de San Juan Copala, en la zona Triqui del estado de Oaxaca, ha dejado a la vista actos de violencia y la presencia de grupos paramilitares que desde hace tres décadas han vivido en la impunidad, señala además que estos mismos grupos son responsables de la violencia por el control de la zona Triqui, lo que ha ocasionado que hayan muerto más de 300 ciudadanos en estos años, estas cifras a decir de la promoverte son apoyadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, y Human Rights Watch, quienes han publicado y denunciado ante la comunidad internacional estos hechos.

2. Se establece en la proposición motivo del presente dictamen que organismos de la sociedad civil, catedráticos y defensores de derechos humanos nacionales, posterior al homicidio de la ciudadana Beatriz Cariño y del ciudadano finlandés Jyri Jakkola, durante un ataque a la caravana el pasado 27 de abril, han decidido volver a salir en caravana a la zona Triqui con el fin de constatar y denunciar los actos de violencia sistemática que se genera por la presencia de grupos armados, entregar víveres, y buscar de alguna forma un acuerdo de paz que regrese al estado de derecho en esta zona indígena del país.

Señala además que dicha caravana se integrará por activistas de derechos humanos nacionales e internacionales, vinculados a organismos de alto reconocimiento, luchadores sociales y personajes públicos destacados, a lo cual se espera la suma del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y Amnistía Internacional.

3. Agrega la promoverte a su proposición que existe preocupación motivadas por las declaraciones del jueves 13 de mayo en voz del Secretario General de Gobierno del estado de Oaxaca, el cual desconoce dicha caravana y que manifiesta que no puede garantizar su seguridad, si bien es cierto que hasta este momento aún no se conoce ni nombres de activistas nacionales e internacionales, ni de organizaciones que conformaran dicha caravana, la diputada rosario Morales señala que se partirá como misión humanitaria, ejerciendo el derecho al libre transito, el próximo 30 y 31 de mayo y/o en su defecto el 8 y 9 de junio.

4. En mérito de lo expuesto y con base en los argumentos anteriormente expuestos, la promoverte somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Primero.- Con total respeto a la división de poderes la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República que a la Caravana de Observación Internacional que visitará el municipio de San Juan Copala, Oaxaca se les otorguen las garantías constitucionales necesarias y se garantice la integridad física de sus participantes.

Segundo.- Con total respeto a la división de poderes la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que desde su competencia brinde las medidas de protección consular necesarias a las y los ciudadanos extranjeros que participen en dicha Caravana de Observación Internacional a San Juan Copala, Oaxaca con el fin de que sean respetados sus derechos humanos y sea garantizada su integridad física.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión defina una comisión de seis legisladoras y legisladores que acompañen dicha caravana.

La proposición con punto de acuerdo listada en el numeral 3 de los antecedentes del apartado de antecedentes expone las consideraciones siguientes:

1. Recuerda la promovente que el 27 de abril pasado en las inmediaciones del poblado La Sabana, municipio cercano a San Juan Copala, una Caravana Humanitaria, sufrió una violenta agresión armada cuando se dirigía a la zona de San Juan Copala, de la región Mixteca del estado de Oaxaca.

El resultado de la emboscada fue de dos muertos Jyri Jaakola, de 33 años, finlandés e integrante de la organización Unsi Tanli Ry de Finlandia, y Alberta Beatriz Cariño Trujillo, de 35 años, originaria de Chila de las Flores, Puebla, y parte del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, así como varios heridos, entre ellos dos periodistas de la Revista Contralínea.

2. Sostiene la autora de la proposición de mérito que en este acto se dictamina que San Juan Copala es el único Municipio Autónomo perteneciente a una parte del pueblo indígena trique y que la zona ha sido rodeada desde hace seis meses por grupos armados impidiendo así la entrada de comida, ayuda a la gente.

Señala que esto se debe a que esa región se encuentra bajo control de la organización denominada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISOR); además existen otras fracciones como la denominada MULTI (Movimiento Unificado de Lucha Independiente), o el MUL (Movimiento Unificado de Lucha Triqui) quienes también disputan el control del municipio autónomo.

3. En virtud de lo anterior, refiere la proponente, se organizó una nueva caravana humanitaria para el 8 de junio, por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de poder llevar alimentos y víveres a las familias de San Juan Copala que no pueden salir a obtener alimentos por encontrarse bajo amenaza constante de los grupos arriba señalados.

A esta Caravana se integraron organismos defensores de los derechos humanos, integrantes de la sociedad civil así como Diputados Federales del Partido de la Revolución Democrática a los cuales les fue impedido el libre transito hacía la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, mediante disparos con armas de fuego.

Señala que es inaceptable que el Gobierno Federal se sustraiga de éstos lamentables acontecimientos y haga caso omiso a los llamados que al respecto han hecho diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales sobre la operación de grupos denominados "paramilitares" en el estado de Oaxaca.

Por ello, en concreto propone lo siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga de manera inmediata con la finalidad de garantizar el libre transito, la libertad personal y la seguridad física de los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala en el estado de Oaxaca.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen, detengan y procesen tanto a los autores materiales como intelectuales de los delitos cometidos por los grupos armados que actúan al margen de la ley en contra de los pobladores de San Juan Copala en el estado de Oaxaca.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho debe ser una constante en todo el territorio nacional, por lo cual, la existencia de grupos armados que atenten contra la población inerme no únicamente cometen crímenes deleznables sino que también violentan al Estado mismo y a sus instituciones, al diluir su monopolio en el ejercicio de la fuerza.

SEGUNDO. Dadas las condiciones extremas de violencia que viven los habitantes del municipio de San Juan Copala, resulta imprescindible la acción del Estado para garantizar los derechos humanos y la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan el territorio nacional, por lo cual la dictaminadora coincide en la importancia de la intervención de las autoridades gubernamentales tanto estatales como federales.

TERCERO. En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera oportuno realizar un respetuoso exhorto a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca para restablecer el orden público y la seguridad en el municipio de San Juan Copala así como también solicitar al gobierno federal, en el ámbito de su competencia, coadyuvar con las autoridades del estado de Oaxaca en el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho.

CUARTO. Asimismo, la Primera Comisión se encuentra convencida de que únicamente la acción decidida y firme de las autoridades podrá coadyuvar en la recuperación del tejido social y en la reinstauración del orden público, gravemente lesionados en el municipio oaxaqueño de San Juan Copala.

QUINTO. En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar un respetuoso llamado a las autoridades federales encargadas de la seguridad publica para que investiguen, detengan y procesen tanto a los autores materiales como intelectuales de los delitos cometidos por los grupos armados en el municipio de San Juan Copala.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones necesarias para restaurar el orden público y el Estado de Derecho en el municipio de San Juan Copala.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen, detengan y procesen tanto a los autores materiales como intelectuales de los delitos cometidos por los grupos armados que actúan al margen de la ley en contra de los pobladores de San Juan Copala en el estado de Oaxaca.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días de mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INVESTIGAR Y ATENDER DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA, LOS CASOS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA DENUNCIADOS EN MUNICIPIOS CON UNA ALTA POBLACIÓN INDÍGENA.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES A QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE CULTO Y CONTRA LA INTOLERANCIA RELIGIOSA, PARTICULARMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 26 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Esta comisión entiende que la proposición en análisis tiene como objetivo principal, defender el principio de laicidad frente a los diversos casos de intolerancia religiosa, en especial por parte de autoridades municipales en contra de miembros de comunidades indígenas.

Hay que recordar que la libertad religiosa y de culto debe prevalecer sobre la cultura de la discriminación, nuestro propio marco jurídico pena severamente la discriminación, definiéndola en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación como:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Tenemos conocimiento de que los proponentes les preocupa que, en efecto, se presenten hechos en los que exista la posible participación de funcionarios públicos en prácticas de discriminación y exclusión social motivada por preferencias políticas y religiosas.

II. Los que signamos el presente dictamen, coincidimos con los proponentes en la necesidad de que el Estado haga prevalecer en todo momento el principio constitucional consagrado en el artículo 24, el cual versa de la siguiente manera:

Articulo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Estamos convencidos de que el desarrollo del Estado constitucional laico es un tema fundamental para nuestra consolidación democrática. Por ello, es necesario hacer de la separación Estado – iglesia el eje rector para reconocer la autonomía de la política y para consolidar la convivencia social y multicultural.

La laicidad del Estado reconoce la existencia de una sociedad tolerante en dónde la cooperación social permita reconocer en el otro a un ser digno y libre, capaz de crecer y aportar.

Lo anterior se refiere principalmente a la independencia de la toma de decisiones cívicas, del individuo y del respeto a la nación, es sumamente importante recordar que voluntades propias y diversos actos autoritarios no deben influir en temas que conciernen a todos los mexicanos.

Por lo tanto, tenemos la firme convicción de que el Estado debe ser capaz de garantizar a la población el respeto a sus derechos fundamentales y vigilar principalmente que los servidores públicos funjan como principales vigilantes del cumplimiento de leyes y valores sociales, en vez de utilizar sus funciones para violentarlas.

Los que signamos el presente dictamen condenamos cualquier acción por parte de servidores públicos, que derive de un mal ejercicio de sus funciones, sobre todo en aquellos casos en que afecta de manera directa sobre la toma de decisiones exclusivamente personales.

III. Por lo antes mencionado preocupa a esta dictaminadora que se tenga conocimiento del incremento del fenómeno de la intolerancia religiosa en el país, sobre todo en las áreas rurales e indígenas cuyos pobladores profesan distintas creencias.

Sobre todo, preocupa que diversos medios de comunicación hayan advertido posibles actos discriminatorios por parte de autoridades municipales. Es sumamente necesario que dichos casos sean revisados a profundidad de manera pronta y expedita por parte de las autoridades correspondientes, así como de la propia CNDH.

Algunos de estos casos se han advertido ampliamente por parte de diversos medios de comunicación, quienes exponen que aún persisten comunidades donde vecinos han sido convocados a reuniones de Asamblea para tratar asuntos de falta de pagos obligatorios y fuera de la Ley a supuestos miembros religiosos. Se presume que este tipo de reuniones es auspiciado por comisariados ejidales, el Consejo de Vigilancia y por parte de policías.

Además hay que mencionar que en algunos casos existen serias amenazas de muerte e incluso se presume de detención injustificada a miembros con distinta profesión religiosa a la de la mayoría de las autoridades locales.

Por temor de sus vidas las personas se ven obligadas a albergarse en iglesias fuera de su comunidad. De a cuerdo con reportes periodísticos se sabe que todavía persiste la posibilidad de presiones para que muchas de estas personas abandonen su comunidad y sean desplazados.

También hay diversas coberturas sobre abuso de autoridad en dónde se ha advertido la posibilidad de que el comisariado ejidal sea uno de los principales incitadores de las expulsiones de miembros religiosos.

Por su relevancia también cabe mencionar que hay muchas familias que por razón de religión aún siguen en espera de que autoridades de los municipios cumplan con el compromiso y obligación para la reconstrucción de sus hogares dañados.

Por otra parte, cabe mencionar incluso que el apartado referido a México del Reporte Internacional sobre Libertad Religiosa 2009, elaborado por el gobierno de Estados Unidos, precisa que la mayoría de los incidentes antes mencionados han ocurrido en zonas de alta marginación y con alta presencia indígena.

En resumen se sabe de posibles expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, impedimento para usar los panteones municipales y la negación del servicio escolar a menores; una larga lista de violaciones en contra de personas que profesan una religión distinta a la de las autoridades locales.

Además, resulta preocupante el aumento de los casos de intolerancia y discriminación religiosa este sexenio, existen 96 casos documentados en los primeros tres años de la administración del Lic. Calderón Hinojosa, frente a 42 casos en el sexenio pasado.

IV. Con base en lo antes expuesto y otros casos no documentados, se dio paso a la creación del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED), el cual es un órgano de Estado fundamentado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003.

El Consejo tiene como principal función promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social con el fin de avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.

También se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el CONAPRED desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Resulta importante recordar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, determina los objetivos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Artículo 17.- El Consejo tiene como objeto:
I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país;
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;

III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

V. Con base en los apartados antes expuestos, quienes signamos el presente dictamen consideramos oportuno modificar los resolutivos a fin de consolidar la voluntad y los objetivos expresados por los proponentes.

Por lo tanto, debido a que la idea general y necesaria para cumplir con el propósito del Punto de Acuerdo consiste en la investigación de casos específicos en contra de personas que profesan alguna religión diferente a las autoridades de la región, consideramos oportuno las instancias correspondientes, investigue y atienda los casos de intolerancia religiosa suscitados en municipios con una alta población indígena.

Así mismo se exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con base en sus atribuciones amparadas por el artículo 20 de la Ley, investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias en las comunidades afectadas e implementar un programa específico para fomentar la tolerancia religiosa y el respeto a los derechos humanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de las instancias correspondientes, investigue y atienda de manera pronta y expedita, los casos de intolerancia religiosa denunciados en municipios con una alta población indígena.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias en municipios con una alta población indígena e implemente un programa específico en las regiones afectadas, para fomentar la tolerancia religiosa y el respeto a los derechos humanos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dar especial seguimiento a los casos de intolerancia religiosa, así como asesorías a las víctimas por dicho delito.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A PROMULGAR DIVERSAS LEYES Y ORDENAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A QUE PROMULGUE DIVERSAS LEYES Y ORDENAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la solicitud para que el Secretario de Gobernación, comparezca ante la Comisión Permanente a fin de que informe las razones por las que aún no han sido promulgadas diversas leyes y ordenamientos expedidos por el H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 26 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. Algunos legisladores por razones mediáticas y seguramente electorales insisten en convocar y realizar a la mayor brevedad un periodo extraordinario de sesiones de este Honorable Congreso de la Unión; sin embargo, es preciso puntualizar que los tiempos del Poder Legislativo no son, ni pueden ser los de intereses facciosos o de grupo.

2. Se insiste en que hay materia trascendente para legislar, de lo cual no cabe la menor duda, ya que hay minutas importantes aprobadas en sus respectivas Cámaras de origen que se encuentran ahora en la Cámara revisora para su análisis, en caso de modificaciones y cambios a esas minutas para ser devueltas a su Cámara de origen, o su aprobación por la Cámara que las haya revisado.

3. Varias de esas minutas fueron aprobadas en su Cámara de origen el último día del pasado periodo de sesiones y enviadas en esa fecha a la colegisladora. Esas minutas fueron fruto de largos trabajos de deliberación en las Comisiones abocadas a esos temas. Lo menos que nos debemos Senadores y Diputados, es el respeto recíproco a los tiempos y la reflexión necesarios para el proceso de formación de leyes. Son como hemos dicho, minutas sobre temas importantes que no admiten la precipitación y mucho menos la presión de algunos legisladores a través de los medios para que esas minutas se discutan y se aprueben en los tiempos electorales que convienen a una minoría legislativa. Esta es una primera puntualización indispensable porque las comisiones en las Cámaras revisoras no han dictaminado esas minutas y por tanto no hay materia para convocar a un periodo extraordinario.

4. A lo largo de los trabajos de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se han aprobado numerosas reformas de gran trascendencia e importancia para el país.

5. La opinión pública que con justa razón espera que las leyes les resuelvan los problemas que enfrentan a diario, no tienen por que estar en el seguimiento permanente de los procedimientos para que una ley entre en vigor. Y para su entrada en vigor, de conformidad con la fracción primera del artículo 89 Constitucional entre las facultades y, subrayo, obligaciones del Presidente, está la de promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Único: Se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación C. Fernando Gómez Mont, ante esta soberanía, a fin de que informe las razones por las que no han sido promulgadas diversas leyes y ordenamientos expedidos por el H. Congreso de la Unión.

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I. Es cierto que en ambas cámaras del Congreso de la Unión hay temas urgentes para la sociedad mexicana que están pendientes de ser aprobados y que deben ser examinados y dictaminados cuidadosamente por las comisiones ordinarias responsables. Existen minutas importantes aprobadas en sus respectivas Cámaras de origen que se encuentran ahora en la Cámara revisora para su análisis, y dictaminación correspondiente.

II. Por otro lado, es evidente que a lo largo de los trabajos de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se han aprobado numerosas reformas de gran trascendencia e importancia para el país, que no han sido promulgadas por el Ejecutivo, de conformidad con las facultades que establece la fracción primera del artículo 89 Constitucional.

III. Entre las reformas que no han sido promulgadas destacan varias al Código Penal Federal, en materia del endurecimiento de penas en contra de los pederastas y en materia de propiedad industrial; destaca la Ley General de Población; la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; reformas en materia indígena; la Ley de Ascensos de la armada; la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, entre otras.

IV. Esta situación pone de manifiesto también lo inconveniente que resulta la facultad discrecional del titular del Ejecutivo para no promulgar leyes y decretos ya aprobados por el Poder Legislativo, facultad que se ha reconocido como "veto de bolsillo". Es pertinente recordar que ya existe una minuta aprobada por la Cámara de Senadores, desde la LX Legislatura, en donde dicha facultad se elimina por la vía de la reforma constitucional al artículo 72. Dicha minuta, está pendiente de ser dictaminada por la colegisladora, en este caso, la Cámara de Diputados.

Ahora, aun y cuando no se han agotado los plazos para la publicación de dichas reformas, y que el Congreso de la Unión se encuentra en si periodo de receso, eso no es motivo para que el Ejecutivo Federal no ejerza su facultad de publicación.

En consecuencia, esta dictaminadora considera oportuno solicitar, respetuosamente al Titular de Ejecutivo federal para que instruya a su Secretario de Gobernación para que promulgue a la brevedad diversas leyes y ordenamientos expedidos por el H. Congreso de la Unión.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta al Secretario de Gobernación a que promulgue diversas leyes y ordenamientos expedidos por el H. Congreso de la Unión.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES QUE PERMITAN EXPEDIR UNA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y A REFORMAR SUS CÓDIGOS PENALES, BUSCANDO LA ADECUADA ARMONIZACIÓN CON LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y DEMÁS DISPOSICIONES FEDERALES EN LA MATERIA.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL COMBATE Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas dos proposiciones con Punto de Acuerdo, una por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada entidad federativa a armonizar sus respectivas legislaciones con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia, a cargo de la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la otra por el que se exhorta a diversas autoridades federales a combatir y castigar el delito de trata de personas y conexos, a cargo de los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 26 de mayo fueron presentados ante el Pleno la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión las siguientes proposiciones:

1. De la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada entidad federativa a armonizar sus respectivas legislaciones con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia, y

2. De los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,

por el que se exhorta a diversas autoridades federales a combatir y castigar el delito de trata de personas y conexos

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones de mérito se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Considera la promovente de la proposición listada con el numeral 1 del capítulo de antecedentes, que Que la trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, valores del más alto rango a escala internacional.

Que la comisión de este delito se ha fortalecido a través de los años merced a las redes del crimen organizado y la falta de estrategias gubernamentales.

Que México es un país con un especial grado de vulnerabilidad ante este delito, debido a una cuestión multifactorial: su geografía, pobreza, escasa tradición de protección a los grupos especialmente vulnerables y a la desarticulación que generan sus múltiples ordenamientos jurídicos penales y vacíos legales.

Que, aunque es Estado Parte, los Estados Unidos Mexicanos violan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como toda una gama de instrumentos que le obligan a proteger los derechos humanos más básicos, con especial referencia a las víctimas de la trata de personas.

Que la trata de personas es una realidad que debe ser abordada urgentemente por el Estado mexicano con la finalidad de proteger a las víctimas de este fenómeno.

Que debemos hacer frente a la responsabilidad que incumbe a todos los actores políticos, a la sociedad misma y a todos quienes desean ver reflejada en la realidad, la aspiración de vivir en un Estado Constitucional de Derecho.

Que en virtud de la entrada en vigor del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, México inició un proceso de armonización legislativa para adecuar su codificación penal con los instrumentos internacionales sobre la materia.

Que el 27 de noviembre de 2007, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que, aún cuando la aprobó el Congreso de la Unión , no es una ley federal, reservando el conocimiento de este delito, por parte de las autoridades federales solo en los casos a que se refiere el Artículo 3 del propio ordenamiento; por esta razón y en ejercicio de su soberanía, sería conveniente que las entidades federativas modifiquen su legislación local para incorporar el delito de la Trata de Personas en concordancia con la nueva conceptualización.

Que hasta la fecha, 24 entidades federativas han modificado su legislación penal introduciendo el nuevo tipo penal de ese delito; sin embargo, se ha producido una notoria heterogeneidad que puede provocar un grave problema para su combate eficaz.

Que se requiere de un análisis amplio y responsable a partir de la diversidad de legislaciones locales que, permita a su vez, convencer a los legisladores de las entidades federativas a homologar los tipos penales contra la trata de personas para acabar con la impunidad en este tipo de delito.

En concreto propone lo siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de cada entidad federativa, para que, en respeto irrestricto a su soberanía, implementen las acciones legislativas pertinentes que permitan expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar sus códigos penales, buscando la adecuada armonización con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal para seguir reforzando con la participación de entidades federativas y municipios, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; desarrollar campañas de prevención, protección y atención; promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito y destino de las víctimas; promover la investigación científica; proporcionar la capacitación continua de los servidores públicos; fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito; ejecutar planes para la construcción de albergues; proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de la integridad física de las víctimas; e investigar, detener y consignar a las personas implicadas en este delito, con la finalidad de contar en todo el país con un marco jurídico y acciones de política pública que, permitan con mayor eficacia, prevenir y sancionar este delito, así como garantizar la protección de las víctimas.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de los tiempos oficiales, se promueva en mensajes de radio y televisión, la introducción de un programa de denuncia y recompensa entre la población civil, para que, a través de la participación de la comunidad, se denuncie el delito de trata de personas y se aumente la detección, procesamiento y sanción de los responsables.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de la Federación, para cumplir con los compromisos internacionales en materia de trata de personas, relativos a la capacitación y asistencia técnica en la actualización de agentes de la policía y ministerios públicos, jueces, magistrados y todo servidor público vinculado al sistema penal.

Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, se refuercen los controles fronterizos que sean necesarios, con la finalidad de prevenir, detectar y erradicar las redes delictivas encargadas de traficar con personas.

II. En la proposición listada con el numeral 2 del apartado de antecedentes, los autores promoventes de la misma recuerdan que la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre son algunos de los supuestos jurídicos que delimita el tipo penal de trata de personas; y que dicho delito resulta tan flagelante para la sociedad, por la denigración que padecen las personas ante los constantes abusos cometidos en su contra, sin mencionar el irreparable daño psicológico y físico que resulta no sólo para las víctimas, sino también para sus familias.

En mayo de 2007, la Organización de Estados Americanos reportaba que era alarmante la trata de personas en México. Según el informe “La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio exploratorio en Tapachula, Chiapas”, las víctimas de trata de personas en el sur de México tienen entre 10 y 35 años de edad, y 90% son de Guatemala, Honduras y El Salvador; asimismo se detalla que en la última década ha reportado un incremento en la demanda de niños y mujeres por parte de las redes delictivas, de acuerdo con la información que aportan los proponentes.

De la misma fuente de información se tiene que en la región del Soconusco, Chiapas, hay al menos nueve puntos donde se ejerce la trata. En Tapachula prevalecen condiciones de "alto riesgo", pues hay cinco

expendios de bebidas alcohólicas por cada escuela, y en cada uno se explota a entre ocho y 14 niñas, adolescentes y mujeres, por lo que se calcula en cerca de 21 mil las víctimas1.

En este tenor, el poder legislativo federal, atendiendo a la necesidad social suscitada ante este delito en noviembre de 2007 expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, muestra de un acercamiento para combatir y erradicar esta conducta criminal y a su vez, la manifestación de cumplimiento ante los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia.

Sin embargo, continúan, a pesar de contar con una Ley especial que regula las particularidades del delito de trata de personas y conexos, la conformación de una Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar el delito, así como preverse la expedición de un Programa Nacional en la materia, pareciere existir un incremento en la incidencia de tal infracción. Se dice lo anterior, en virtud de los constantes informes y reportes de la captura de redes de trata de personas, que mantienen a su victimas bajo lamentables situaciones de explotación sexual o laboral.

La frontera sur de México, denuncian, se convierte día a día en un lugar más peligroso; las redes de trata de personas, grupos vinculados con el crimen organizado, así como pandillas, provocan colocar a la entidad en focos rojos para los migrantes, las mujeres y niños.

Una de las acciones que promuevan la erradicación de estas prácticas en el estado de Chiapas, es la implementación de un Programa Permanente –en la zona fronteriza- en congruencia con el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Si bien, la fracción XI del artículo 2 del Reglamento de la Ley en comento señala que los Programas Permanentes son aquellos programas sectoriales y especiales de las dependencias, entidades que integran la Comisión y la Procuraduría, cuyas acciones tengan relación con la prevención y sanción del delito de trata de personas o con la protección, atención y asistencia a las víctimas, dada la importancia que guarda el Estado de Chiapas por su frontera con los estados centroamericanos –que aumenta la incidencia del delito de trata de personas y conexos-, las dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial deberían enfocar la atención de sus acciones sobre esta entidad federativa.

Estas constantes de impunidad, abuso y explotación pueden erradicarse si se trabaja conjuntamente. El poder legislativo federal, así como los congresos locales de las entidades federativas, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos protectores de los derechos humanos, y sociedad civil, tienen el compromiso de participar en esta lucha contra la trata de personas.

Ante este panorama, el pasado 21 de mayo del corriente, los viceministros de la región norte y Centroamérica pertenecientes a la XV Conferencia Regional sobre migración acordaron combatir el tráfico y secuestro de migrantes, la trata de personas, así como fortalecer el modelo de los Oficiales de Protección a la Infancia.

Entre los acuerdos que resultaron de la Conferencia, destaca la realización de un taller sobre el modelo de capacitación de los oficiales de protección a la Infancia en Panamá, retomando la propuesta de México de adaptar dicho plan de acción de acuerdo a las características de cada país miembro.

Del particular nos dice la oficina de UNICEF en México, que en marzo de 2009 la puesta en marcha del modelo Oficiales de Protección a la Infancia –a cargo del INM- fue un gran avance para brindar protección y seguridad a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, sin embargo aún existen retos para la protección de la niñez migrante en virtud de que dicho modelo sólo se implemento en la frontera norte de nuestro país.

Las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia juegan un papel fundamental. Bajo la misma línea de información que muestra la detención de numerosas bandas criminales y redes de tratantes, a

la fecha existe una sola sentencia contra este delito; sentencia histórica en razón de ser la primera a nivel nacional en castigar la trata de personas.

En concreto proponen los siguientes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Lic. Fernando Gómez Mont, a que en base al Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se implemente un Programa Permanente para la prevención y sanción de dicho delito, con la protección, atención y asistencia a las víctimas, en la zona fronteriza del Estado de Chiapas; siendo ésta una de las regiones del país en donde son constantes las violaciones y abusos cometidos contra mujeres, menores de edad y migrantes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, C. Sara Irene Herrerías Guerra, a que en coordinación con las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, se redoblen los esfuerzos en el combate y castigo del delito de trata de personas y conexos, garantizando además, que las víctimas u ofendidos sean indemnizados por concepto de reparación de daños y perjuicios.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Lic. Cecilia Romero Castillo, a implementar el plan de acción de Oficiales de Protección a la Infancia en la frontera sur de nuestro país con carácter de permanente, conforme lo estipula el Modelo para la Protección de Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, así como a fortalecer dicho modelo en la frontera norte de México.

III. Los signatarios del presente dictamen coincidimos plenamente con los autores de las proposiciones de mérito en que la trata de personas es uno de los crímenes más odiosos que atenta en contra de los derechos más elementales de las personas como el derecho a la seguridad, a la dignidad, a la libertad de movimiento, a los derechos laborales.

Además, sabemos que la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados y que afecta a cerca de un millón de personas anualmente en todo el mundo.

Es un delito que, además, genera millones de dólares anuales para los victimarios mientras que las víctimas viven en condiciones de pobreza, bajo amenazas, sin libertad. Esto ubica en situaciones de absoluta vulnerabilidad a las personas que de por sí eran vulnerables: en efecto las víctimas más probables son las mujeres, los niños, los migrantes en tránsito y cuyo estatus jurídico no está en orden. Es pues una trampa sin salida, la mayoría de las veces.

Nuestro país es signatario de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y desde 2007 publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En 2009, veintidós estados mexicanos y el Distrito Federal decretaron reformas en su código penal, que tipifican algunas formas de trata de personas, únicamente el Distrito Federal y Chiapas cuentan con leyes específicas sobre la materia.

También los organismos públicos autónomos y las organizaciones no gubernamentales están realizando acciones concretas con la finalidad de combatir el delito y de atender a las víctimas de la trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos instaló, en septiembre de 2009, el Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, e igualmente estableció el Programa Nacional contra la Trata de Personas en 2007, dentro

del cual estableció varios Comités Regionales, los cuales, mediante un equipo interinstitucional e interdisciplinario, atienden el delito en varias regiones del país.

El pasado mes de mayo la Ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, fue sede de la XV Conferencia Regional sobre Migración bajo el tema migración y familia y, entre otras decisiones, se acordó la realización de un taller sobre el Modelo de capacitación de los Oficiales de Protección a la Infancia y la adopción del modelo de Oficiales de Protección a la Infancia como una buena práctica a favor de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la implementación de los Lineamientos de Atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de cada entidad federativa, para que, en respeto irrestricto a su soberanía, implementen las acciones legislativas pertinentes que permitan expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar sus códigos penales, buscando la adecuada armonización con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para seguir reforzando, con la participación de entidades federativas y municipios, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se implemente un Programa Permanente para la prevención y sanción de dicho delito, con la protección, atención y asistencia a las víctimas, particularmente en la zonas fronterizas del país.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, C. Sara Irene Herrerías Guerra, a que en coordinación con las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, se redoblen los esfuerzos en el combate y castigo del delito de trata de personas y conexos.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Lic. Cecilia Romero Castillo, a implementar el plan de acción de Oficiales de Protección a la Infancia en la frontera sur de nuestro país con carácter de permanente, conforme lo estipula el Modelo para la Protección de Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, así como a fortalecer dicho modelo en la frontera norte.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO LEGAL QUE SE SIGUE EN CONTRA DE OSVALDO ARISTÓTELES MORGAN COLÓN, PRESUNTO RESPONSABLE DEL HOMICIDIO COMETIDO EN CONTRA DE LA JOVEN ALÍ DESSIRÉ CUEVAS CASTREJÓN.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL HOMICIDIO COMETIDO EN CONTRA DE ALÍ DESSIRÉ CUEVAS CASTREJÓN.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que cesen de manera inmediata las prebendas de las que goza el C. Osvaldo Morgan Colon, responsable del feminicidio cometido en contra de la joven Alí Dessiré Cuevas Castrejón, mujer mexicano-panameña, presentada por la Diputada Diva Hadamira Gastelúm Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 26 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Señala la promovente que, en México, el "Observatorio Nacional del Feminicidio de enero de 2007 a diciembre de 2009 ha logrado documentar al menos 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas es 18 entidades del país…" Lo anterior, desde 1997, se encuentra conceptualizado como violencia feminicida, en la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, como "la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…"

2. Explica la diputada promovente que, en el caso específico, la joven Alí Dessiré Cuevas Castrejón fue víctima de la violencia de género ejercida por su pareja sentimental, Osvaldo Morgan Colon, que le causó la muerte. A partir de este momento, el proceso penal seguido en contra del presunto responsable ha presentado diversas irregularidades que han sido detectadas por las autoridades de la hermana República de Panamá, la propia familia de la víctima y de diversos grupos nacionales e internacionales de lucha en contra de la violencia de género.

3. Indica la promovente que, "en el marco del Seminario Regional Combatiendo la Violencia contra las Mujeres de la Legislación a la aplicación efectiva, llevado a cabo en la Cuenca-Ecuador del 21 al 23 de abril del año en curso, el presente asunto fue comentado y encomendado a la Delegación de Diputadas representantes del Gobierno Mexicano…" Asimismo, señala la promovente que "el gobierno de Panamá ha requerido formalmente a la cancillería mexicana el seguimiento del proceso, toda vez que Alí detentaba la ciudadanía panameña y el caso ha tenido un impacto profundo en la opinión pública del país, generando consternación y exigencias unánimes para que el delito no quede impune…"

4. Concluye la promovente que "Alí es una víctima más de feminicidio, crimen que según fuentes extraoficiales ha cobrado 10 000 vidas en México durante la última década."

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Exhortamos a las autoridades correspondientes que se lleve a cabo el debido proceso legal por el feminicidio de Alí Cuevas para que éste no quede impune.

SEGUNDO. Exhortamos a las autoridades del reclusorio Norte por medio del jefe de Gobierno del Distrito Federal a que rectifiquen el fichaje de identidad y terminen con el montaje que protege a Osvaldo Aristóteles Morgan Colón.

TERCERO. Demandamos que las prebendas hacia el inculpado sean cesadas inmediatamente y que su trato sea el mismo que otros inculpados.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho implica el respeto de los derechos de las mujeres, especialmente aquellos consignados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que únicamente así se garantiza el desarrollo integral de nuestra sociedad, se fortalecen los valores de la convivencia pacífica y se construye una ciudadanía activa y participativa.

SEGUNDO. Esta Comisión dictaminadora coincide en que, no obstante los esfuerzos de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales, la violencia de género sigue presente en el territorio nacional, lesiona gravemente el tejido social y, en consecuencia, no debe permitirse ningún hálito de impunidad ni de protección de aquellas personas consideradas como presuntos agresores.

TERCERO. Asimismo, la Primera Comisión se encuentra convencida de que únicamente la acción conjunta de los actores sociales y políticos podrá coadyuvar en la recuperación del tejido social y en la reinstauración del orden público, gravemente lesionados por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que garantice el debido proceso legal que se sigue en contra de Osvaldo Aristóteles Morgan Colón, presunto responsable del homicidio cometido en contra de la joven Alí Dessiré Cuevas Castrejón.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE DA POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR EL QUE SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EXHORTO AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, PARA QUE TRANSPARENTE DIVERSOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a que transparente el proceso de licitación pública por el que se contrataron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, adquisición de material y documentación electoral para el proceso electoral que se desarrolla en el estado.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de junio de 2010, el Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En la fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición antes relacionada se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En sus consideraciones, el legislador autor de la proposición que se dictamina considera que el procesos electoral que se desarrolla en el estado de Oaxaca, mismo que con la jornada comicial del próxicmo 4 de julio, se ha visto empañado por la negativa del Instituto Estatal Electoral para informar sobre el proceso de licitación pública mediante las cuales se contrataron los servicios de monitoreo general de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares (PREP), elaboración y adquisición del material y documentación electoral, para el proceso electoral 2010.

Reseña el proponente que, conforme a datos proporcionados en la página electrónica del Instituto, el 10 de febrero el Consejo General acordó instruir a la Junta General Ejecutiva que en ejercicio de sus atribuciones determinará y estableciera los procedimientos correspondientes para llevar a cabo las mencionadas licitaciones públicas, cuidando en todo momento las condiciones de cobertura, seguridad, transparencia calidad, y entrega con toda oportunidad, a fin de velar por sano desarrollo del proceso electoral.

Con ese fundamento, en fechas 26 de febrero, 2 de marzo, 10 de marzo y 20 de abril de 2010, la Junta publicó las convocatorias 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010 respectivamente, por las cuales se puso a concurso la contratación de los servicios de monitoreo general de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, elaboración y adquisición del material y documentación electoral, para el proceso electoral 2010.

En dichas convocatorias se especifica que los procedimientos de licitación se realizarían de acuerdo a las bases establecidas por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del propio Instituto.

Lo anterior, aduce el proponente, presupone la existencia de dichas bases, por lo que fueron solicitadas por el representante del Partido Convergencia, a fin de conocer, como integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los requisitos y procedimientos para la licitación sin que hasta e la fecha las autoridades electorales hayan dado respuesta a tal requerimiento. Petición que fue negada por el Instituto argumentando que se trata de información clasificada como confidencial.

La negativa preocupa al proponente, sobre todo porque la prestación de estos servicios costará al erario público de ese estado, según informa, alrededor de 82 millones de pesos.

La resistencia del Instituto a informar motivó un recurso de apelación promovido por el representante del Partido Convergencia ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado, cuya resolución RA/08/2010 emitida el 3 de mayo, declaró su incompetencia para conocer y resolver del caso. Contra dicha resolución, se interpuso Juicio de Revisión Constitucional, bajo el número SUP-JRC-121/2010 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió, el pasado 20 de mayo, ordenar al Tribunal Estatal Electoral conocer y resolver el recurso de apelación presentado por el partido Convergencia para tener acceso a los expedientes sobre los contratos asignados por licitación pública para el proceso electoral 2010.

El 10 de mayo el Director General del Instituto Electoral de Oaxaca presentó un informe ante el Consejo General en el que se da cuenta del desarrollo del proceso de licitación, las empresas concursantes, las empresas ganadoras y el monto del contrato asignado para cada uno de los servicios requeridos por la Junta para el proceso electoral en curso; pero, aduce la proposición, omitió información que resulta relevante para dar legitimidad al proceso por el que resultaron ganadoras las empresas Verificación y Monitoreo S.A de C.V; Diseño, Reconstrucción y Comunicación S.A. de C.V; Grupo Proisi S.A de C.V; y Litho Formas S.A de C.V., pues el informe se limita a hacer un recuento escueto que, a juicio del proponente, va en contra de la normatividad estatal en materia de licitaciones públicas, al carecer de respaldado con documentos que demostraran la existencia de cada unas de las etapas de las licitaciones, o que sustentaran que aquellas contaran con la idoneidad técnica, moral, económica y financiera que garantizara el debido cumplimiento de los servicios licitados.

Ante todo lo anterior, el proponente considera que la Junta General Ejecutiva del Instituto se extralimito en sus funciones, pues no se le facultó para realizar el procedimiento de licitación y mucho menos el de emitir dictamen y/o fallo, lo cual debió haber sido observado, valorado y aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, como máximo órgano encargado del correcto y normal desarrollo del proceso electoral 2010, de conformidad con el artículo 83 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

Ante esos hechos, el legislador considera necesario que, en el marco del proceso electoral 2010, las autoridades electorales del estado de Oaxaca cumplan a cabalidad con lo mandatado en el artículo 116 numeral IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que su ejercicio se rija por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Razón por la cual solicita al pleno emitir el siguiente punto resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca para que transparente los procesos por el cual se licitaron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, elaboración y adquisición del material y documentación electoral para el proceso electoral 2010, de los cuales resultaron ganadoras las empresas Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V., Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., Grupo Proisi, S.A. de C.v. y Litho Formas, S.A de C.V.

II. Esta Comisión Considera que el otorgar a la ciudadanía una pronta y efectiva capacidad de respuesta por parte del Gobierno a las demandas sociales en materia de información contribuye a eficientar la capacidad de evaluación de la función pública por parte de la ciudadanía y, con ello, a incrementar la legitimidad de los gobernantes. El acceso a la información proporciona también la oportunidad de una más ágil participación de la sociedad civil organizada en el control del poder del Estado.

Un efectivo acceso a la información pública gubernamental debe ayudar al perfeccionamiento de las acciones estatales en beneficio común. La difusión pública de los datos de gobierno abre canales para el diálogo y el debate entre éste y la sociedad.

Al mismo tiempo, esta dictaminadora contempla a la transparencia de los actos de las autoridades electorales, como uno de los instrumentos fundamentales para garantizar el pleno cumplimiento de los principios de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, mismos que son rectores del ejercicio de la función electoral que realizan las autoridades estatales, conforme lo ordenan los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de nuestra República; 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 79 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

III. A partir de diversos documentos que son de acceso público, esta Comisión Dictaminadora puede dar cuenta de la certeza de los hechos que relata el proponente, en cuanto a los actos emitidos por las diversas autoridades electorales que han intervenido en el caso. Tales hecho son, en resúmen:

1. El 25 de marzo de 2010, el representante propietario de Convergencia, partido político nacional, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, solicitó se le expidiera copia certificada de los documentos siguientes:

- Las bases correspondientes a la licitación pública para la contratación de servicios de monitoreo generales en radio y televisión para el proceso electoral ordinario de 2010 que expidió la Junta General Ejecutiva del Instituto.

- Las bases correspondientes a la licitación pública para la contratación de servicios de desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

- Las bases correspondientes a la licitación pública para la contratación de servicios para la adquisición de la documentación y material electoral comprendidos en el acuerdo por el que se aprueban los modelos de boletas, actas y demás documentación electoral de fecha febrero 10 del 2010.

2. El 2 de abril del año en curso, el citado representante reiteró la solicitud reseñada en el punto que antecede.

3. El 10 de marzo del mismo año, la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca acordó, al resolver el expediente IEE/JGE/RA/01/2010, negar la expedición de copias certificadas de la documentación solicitada por Convergencia. En lo sustancial, su razonamiento se sustentó en el argumento de q ue en el caso de las bases de las licitaciones públicas relativas a los servicios de monitoreo, resultado electorales preliminares y adquisición del material y documentación electoral, no pueden hacerse del conocimiento público, ni aun de los partidos políticos, puesto que en ellas se contienen datos, características, especificaciones y medidas de seguridad, que de darse a conocer públicamente, podrían poner en riesgo los fines del Instituto y por ende, la seguridad del proceso electoral ordinario que en este año se desarrolla en el Estado de Oaxaca, "en atención a la especial naturaleza de dichos bienes y servicios, por lo cual, sin duda alguna, este tipo de información, debe reservarse, por razones de interés público, siendo, por tanto, su acceso restringido…".

4. El siguiente 16 de marzo, el aludido representante propietario interpuso recurso de apelación en contra de dicho acuerdo, el cual se radicó ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca bajo el expediente RA/08/2010.

5. El 3 de mayo, el citado órgano jurisdiccional electoral determinó declararse incompetente para conocer y resolver el recurso.

6. El 8 de mayo siguiente, el Partido Convergencia promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral a fin de impugnar la sentencia reseñada en el punto que antecede, el cual se radicó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado bajo el expediente SUP-JRC-121/2010.

7. El juicio que fue resuelto el pasado 19 de mayo. El Tribunal federal determinó:

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil diez, por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, en el recurso de apelación RA/08/2010.

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que, dentro de un plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, asuma competencia, determine si se cumplen o no los requisitos de procedibilidad, y, en consecuencia, dicte la resolución que corresponda conforme a derecho.

8. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal federal, el 22 de mayo de 2010, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca emitió resolución al recurso de apelación en los siguientes términos:

ÚNICO. Se sobresee el recurso de apelación promovido por el Partido Convergencia.

No es intención de esta dictaminadora explorar siquiera la razón jurídica de las autoridades electorales oaxaqueñas para emitir sus resoluciones, pero consideramos oportuno establecer los motivos básicos que llevaron al Tribunal Electoral local a tomar su determinación de sobreseer el juicio.

Al respecto, en su fallo el Tribunal da cuenta de la recepción de las siguientes pruebas supervinientes:

- *Oficio número I.E.E./P.C.G./0801/2009 de veintidós de mayo de dos mil diez, suscrito por el Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, recibido a las dieciséis horas del mismo día veintidós, en la Secretaría General de este Órgano Jurisdiccional, por el que informa que con fecha dieciocho y veintidós de mayo del año en curso, se entregaron al hoy recurrente copias de los expedientes de las licitaciones efectuadas en los rubros de monitoreo general en radio y televisión; programa de resultados electorales preliminares; así como documentación y material electoral, para el proceso electoral ordinario dos mil diez.*

- *Anexos del oficio antes citado, consistente en copias de la siguiente documentación:*

- *Expediente de Licitación del Procedimiento de Concurso IEE-CA-PC-01/2010, relativo a la Contratación del Servicio de Monitoreo General de Radio y Televisión, que será utilizado en el Proceso Electoral Ordinario dos mil diez, en el Estado de Oaxaca.*

- *Expediente de Licitación del Procedimiento de Concurso IEE-CA-PC-02/2010, relativo a la contratación de servicios de la Adquisición del Material Electoral, que será utilizado en el Proceso Electoral Ordinario dos mil diez, en el Estado de Oaxaca.*

- *Expediente de Licitación del Procedimiento de Concurso IEE-CA-PC-03/2010, relativo a la contratación del Servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que será utilizado en el Proceso Electoral Ordinario dos mil diez, en el Estado de Oaxaca.*

- *Expediente de Licitación del Procedimiento de Concurso IEE-CA-PC-04/2010, relativo a la contratación de la adquisición de las Boletas, Actas y demás Documentación y Material Electoral, que será utilizado en el Proceso Electoral Ordinario dos mil diez, en el Estado de Oaxaca.*

▪ *Oficio número I.E.E./P.C.G./0301/2010 de veintidós de mayo de dos mil diez, suscrito por el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dirigido al representante propietario del Partido Convergencia ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, por el que le remite copias de los expedientes íntegros de los procedimientos relativos a las licitaciones efectuadas en los rubros de: Material Electoral; Programa de Resultados Electorales Preliminares y Documentación Electoral, todos ellos para el Proceso Electoral Ordinario dos mil diez.*

▪ *Cuatro acuses de recibo en copia certificada, una de dieciocho de mayo y tres de veintidós de mayo del año en curso, respectivamente de las que se colige que el Instituto Estatal Electoral hizo entrega al ciudadano Víctor Hugo Alejo Torres, representante propietario del Partido Convergencia ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, de la documentación detallada en cada una de ellas.*

Con lo anterior, el Tribunal considera que existe una causa de sobreseimiento del juicio, misma que radica en la falta de materia del medio de impugnación, porque la autoridad electoral modificó el acto que reclamaba el partido Convergencia.

Ello, porque el Tribunal considera que la autoridad responsable hizo entrega de la documentación que en principio le fue negada al hoy recurrente, lo que hace evidente que el acto impugnado del juicio quedó sin efectos y, toda vez que el promovente alcanzó su pretensión, el recurso quedó sin materia.

Como fundamento, el Tribunal cita el artículo 10, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, mismo que establece como causa de sobreseimiento la modificación o revocación del acto o resolución impugnado, de manera que quede sin materia el recurso.

IV. Frente a lo expuesto anteriormente, esta Comisión considera que la proposición de mérito debe darse por atendida, en tanto que la pretensión del proponente ha sido cumplida en los hechos, a consecuencia de los diversos actos realizados por las autoridades electorales locales.

Debe recordarse que la pretensión de la proposición, expresa en su punto resolutivo único, era que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortara al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca para que "transparente los procesos por el cual se licitaron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, elaboración y adquisición del material y documentación electoral para el proceso electoral 2010, de los cuales resultaron ganadoras las empresas Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V., Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., Grupo Proisi, S.A. de C.v. y Litho Formas, S.A de C.V.".

Por otra parte, en sus consideraciones, el proponente aduce que la falta de transparencia resulta de la negativa del Instituto para entregarle documentación relativa a los requisitos y procedimientos para la licitación, pues afirma haberlo solicitado "sin que hasta e la fecha las autoridades electorales hayan dado respuesta a tal requerimiento".

Entonces, si la negativa al requerimiento resulta en la falta de transparencia que reclama el proponente, entonces, la entrega de la documentación requerida debe resultar en la transparencia pretendida por el punto resolutivo de la proposición de mérito.

Por lo antes expuesto y fundado, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Por haberse cumplido su objetivo específico, se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a que transparente el proceso de licitación pública por el que se contrataron los servicios de monitoreo de radio y televisión, programa de resultados electorales preliminares, adquisición de material y documentación electoral para el proceso electoral que se desarrolla en el estado.

Hágase el presente dictamen del conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para efecto de dar por concluido el procedimiento relativo a la proposición de mérito y se descargue de los asuntos pendientes de resolución en esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

CON RELACIÓN A LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR LOS TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 271 DEL SINDICATO MINERO EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR LOS TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 271 DEL SINDICATO MINERO EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, le fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la senadora Rosalinda López Hernández y del senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo en comento, fue presentada en la sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 2 de junio de 2010.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. La propuesta en estudio da cuenta de las diversas denuncias presentadas por ciudadanos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quienes señalan que una veintena de trabajadores de la sección 271 del Puerto Industrial, Lázaro Cárdenas, Michoacán, sufrió agresiones físicas y psicológicas presuntamente a manos de elementos de la Policía Federal.

II. En este sentido, los proponentes reseñan que:

a) Aproximadamente a la media noche del sábado 22 de mayo, el C. Mario García Ortiz, Delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero en Michoacán, fue detenido y golpeado por agresores armados y uniformados, a quienes los agredidos identifican como elementos de la Policía Federal;

b) Que tal detención no se sustentó con orden judicial o ministerial, ni respondía a hechos flagrantes probablemente constitutivos de delito, por lo que es de suponerse una extralimitación en el uso de las facultades legales de los elementos policiales que hubieran ejecutado tal detención;
c) Que al conocer los hechos, diversos trabajadores de la sección sindical 271, se apersonaron en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de investigar la situación jurídica del C. Mario García Ortiz, donde según la denuncia de los trabajadores, fueron ilegalmente retenidos por agentes de la Policía Federal;
d) Que de conformidad con lo señalado en un oficio del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, dichos trabajadores fueron "secuestrados por uniformados disparando ráfagas, golpeados despiadadamente y torturados psicológicamente durante cinco horas, resultando de ello gravemente lesionados tres de nuestros compañeros, entre ellos, Mario García Ortiz, (…) quien recibió heridas que ponen en peligro uno de sus ojos." Señalan además, que también resultaron con heridas graves, los CC. Prudencio Pérez Chávez y Javier Jaimes, y
e) Que el referido delegado especial, denunció que luego de haber sido golpeado, un socorrista de la Cruz Roja se acercó para procurarle atención médica, lo que fue impedido por uno de los presuntos agentes policiales, en abierta confrontación con los más elementales Derechos Humanos.

De tales hechos, se da cuenta en diversos artículos periodísticos, tales como: la columna publicada el 25 de mayo de 2010 en La Jornada, de título "Mineros de Lázaro Cárdenas denuncian agresión de policías federales sin motivo"; la publicada en la misma fecha por el periódico El Universal, de título "Exigen salida de PF en Lázaro Cárdenas"; la publicada en el portal de internet "Terra, México", el 24 de mayo de 2010, intitulada "Repudia sindicato minero agresión de PFP en Puerto Lázaro Cárdenas"; así como sendas notas similares, publicadas en Excélsior, Cambio, Quadratín y otros medios de comunicación nacionales y locales.

III. Asimismo, la propuesta de mérito da cuenta de las movilizaciones sociales que en respuesta a los hechos reseñados se suscitaron en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las que consistieron en parar actividades en las áreas productivas de Arcelor Mittal, centro de trabajo de los más de tres mil miembros de la sección 271, y en la ejecución de una marcha, que se efectuó el lunes 24 de mayo en el referido municipio, a la que asistieron entre cinco mil y ocho mil personas, sumando el apoyo de diversos sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos.

Cabe señalar que en aparente respuesta a estas movilizaciones, aunque sin pronunciarse directamente sobre los hechos, la Policía Federal anunció el retiro de sus elementos, del hotel Sol del Pacífico, instalación que desde 2008 ocupaban como cuartel general. Los agentes fueron reinstalados en la tenencia de Buenos Aires, de ese municipio, localizada a unos 10 kilómetros del puerto.

IV. Los proponentes expresan su preocupación, compartida por esta comisión dictaminadora, ante las crecientes violaciones a los Derechos Humanos y a las garantías de debido proceso que han sufrido los ciudadanos, por causa de la presencia de fuerzas militares y de policía federal, en diversas entidades federativas y particularmente en Michoacán. Nos parecen significativos los datos contenidos en el instrumento en comento, que señalan que cuando se inició la denominada "Operación Conjunta Michoacán", en 2007, la CNDH recibió 127 quejas, en 2008, éstas crecieron hasta alcanzar 318, y que en 2009, fueron 601 los casos que evaluó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es del conocimiento de esta comisión dictaminadora, el Boletín de Prensa 059/2010 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, donde a letra se señala que "*Michoacán se ubica en primer lugar nacional en cuanto a quejas interpuestas en contra de fuerzas federales, desplazando incluso a Chihuahua, lo anterior de acuerdo a un reporte elaborado por la CNDH durante el primer cuatrimestre del año (…) lamentablemente el estado se coloca en primer sitio en el país por el número de quejas en contra de fuerzas federales, con el 12.05 por ciento del total" .*

En congruencia con lo expuesto por los proponentes, el citado boletín refiere que "*En el 90 por ciento de los expedientes en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la*

Policía Federal, se acreditan tratos crueles, inhumanos y degradantes como tortura y lesiones. A la fecha en Michoacán se registran 193 quejas en contra de elementos federales, por hechos ocurridos principalmente en los municipios de Apatzingán, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan".

V. Preocupa además a esta dictaminadora que pese a la innegable existencia de los hechos de violencia reseñados y la presunta participación de elementos de la Policía Federal; efectivamente, no pueda localizarse un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por lo que resulta procedente solicitar la intervención de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, así como del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Resulta ilustrativa la trascripción de la fundamentación y motivación de esta solicitud presentada por los proponentes, en los siguientes Términos: "…es conveniente la intervención de esta soberanía, para solicitar formalmente la intervención de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, para que conforme a su facultad de "Instrumentar y actualizar procedimientos de inspección e investigación para detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas de la Institución y en el cumplimiento de las obligaciones de sus Integrantes" (fracción III del artículo 19 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal), inicie las investigaciones conducentes, dictando las medidas precautorias necesarias para asegurar que no acaecerán represalias contra los trabajadores mineros o sus familias. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 19 del citado reglamento, se solicita poner a disposición de esta soberanía el resultado de tal investigación.

La disposición invocada, señala a letra:

Artículo 19. *Corresponde a la Unidad de Asuntos Internos:*

I. a II. (…)

III. Instrumentar y actualizar procedimientos de inspección e investigación para detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas de la Institución y en el cumplimiento de las obligaciones de sus Integrantes;

IV. Conocer de quejas y denuncias, incluso anónimas, con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por los Integrantes de la Institución, preservando, en su caso, la reserva de las actuaciones, en caso de que se identifique el denunciante, deberá de oficio poner a su disposición el resultado de la investigación.

[Lo sucesivo] (…)

Ahora bien, la propuesta de intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, para que investigue si es procedente la imposición de sanciones administrativas y el otorgamiento de indemnizaciones a los particulares afectados, no es precisa en el fundamento invocado por los proponentes, sino que encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como en los numerales 1 de la fracción I y 1, 2 y 3 de la fracción II, del artículo 80 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública que establecen en sus términos:

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 5. *La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento y demás normatividad aplicable.*

Artículo 41. *El Titular del Órgano Interno de Control será designado en términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien, en el ejercicio de sus facultades, se*

auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos que aquél.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Para el debido cumplimiento de las atribuciones a cargo del Titular del Órgano Interno de Control y de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, los servidores públicos de la Secretaría estarán obligados a proporcionarles el auxilio que les sea requerido.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 80. *Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que sean designados o de la Procuraduría, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos órganos, las siguientes facultades:*

I. Titulares de las áreas de Responsabilidades:

1. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento;

(…)

II. Titulares de las áreas de Auditoría:

a). De Auditoría Interna:

1. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías y visitas de inspección que les instruya el titular del órgano interno de control, así como suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al titular del órgano interno de control, a la Secretaría y a los responsables de las áreas auditadas;

2. Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran para determinar si las dependencias, las entidades y la Procuraduría, cumplen con la normatividad, programas y metas establecidos e informar los resultados a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el tornamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo;

3. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización;

(…)

Resulta procedente también, la solicitud de colaboración entre las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos, a efecto de documentar la denuncia ciudadana y en su caso, emitir las recomendaciones públicas conducentes, sugiriéndose que de ser aplicable, se solicite la reparación del daño.

VI. Con relación al primer punto resolutivo propuesto, según el cual "*La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la implementación de una política de cero tolerancia, respecto de toda forma de violencia cometida por Servidores Públicos en cualquier nivel de gobierno, actuando al margen de nuestro orden Constitucional y lega*l", se considera necesario hacer modificaciones a efecto de que tal pronunciamiento no contenga sólo un carácter declarativo, sino que trascienda al ámbito de lo propositivo.

En este tenor, se considera pertinente incluir un exhorto a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que a la apertura del siguiente periodo ordinario de sesiones, incluyan en la agenda legislativa las reformas necesarias para normar los procedimientos policiales y el uso de la fuerza pública, quedando el resolutivo en los siguientes términos:

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la implementación de una política de cero tolerancia, respecto de toda forma de violencia cometida por servidores públicos en cualquier nivel de gobierno, actuando al margen de nuestro orden Constitucional y legal, y extiende un exhorto a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para que a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo de la LXI legislatura, discutan y en su caso, aprueben las reformas necesarias para normar los procedimientos policiales y el uso de la fuerza pública.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la implementación de una política de cero tolerancia, respecto de toda forma de violencia cometida por servidores públicos en cualquier nivel de gobierno, actuando al margen de nuestro orden Constitucional y legal, y extiende un exhorto a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para que a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo de la LXI legislatura, discutan y en su caso, aprueben las reformas necesarias para normar los procedimientos policiales y el uso de la fuerza pública.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García Luna, para que:

a) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se dé vista a la Unidad de Asuntos Internos, de la queja presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en la que denuncian hechos probablemente constitutivos de delitos presuntamente perpetrados por elementos de la Policía Federal, en contra de agremiados de la Sección 271 de dicha agrupación sindical;

b) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como en los numerales 1 de la fracción I y 1, 2 y 3 de la fracción II, del artículo 80 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se dé vista al Órgano Interno de Control, de los expedientes relacionados con la presunta agresión en contra de trabajadores mineros por parte de elementos de la Policía Federal en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a efecto de que se determine si existen responsabilidades administrativas y, de ser procedente, dictamine las solicitudes de indemnizaciones a los particulares afectados.

c) Se remita el expediente de la investigación realizada al Ministerio Público de la Federación, a fin de que se determine lo que en derecho resulte procedente, y

d) Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 19 del reglamento de la Ley de la Policía Federal, se informe a esta representación soberana, a la brevedad posible, sobre el resultado de la investigación, incluyendo las medidas preventivas y las sanciones disciplinarias que en su caso se determinen.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, para que en coordinación con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Mtro. Víctor Manuel Serrato Lozano, se proceda a la investigación de la presunta agresión a trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana por parte de elementos de la Policía Federal, en el puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán; y en su caso, se emitan las Recomendaciones Públicas conducentes, solicitando la reparación del daño.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO EFECTÚA PARA CONTINUAR CON LA BÚSQUEDA EFECTIVA Y LA LOCALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS CC. EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS CC. EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo con relación a la desaparición forzada de los CC. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presentada por la Diputada Florentina Rosario Morales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 2 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Manifiesta la Diputada Florentina Rosario Morales que el delito de desaparición forzada de personas es considerado en la doctrina internacional como un crimen de *lesa humanidad*, porque se ejecuta con todas las ventajas que dá el abuso del ejercicio del poder público, ya que el sólo hecho de desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas.

Por lo que señala que se trata de un delito cometido por el Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios que debieran proteger a la población. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo cometen, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.

2. En ese sentido señala que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son detenidos y posteriormente desaparecidos el día 25 de mayo del 2007, en la ciudad de Oaxaca.

Manifiesta además que en ambos casos los familiares interpusieron denuncias por el delito de desaparición forzada de persona, sin embargo la Procuraduría General de la República las tiene radicadas por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 y que ésta averiguación previa no ha dado resultado alguno y tampoco ha sido conocida por los familiares.

3. La Diputada Rosario Morales señala que estos hechos llevaron a la creación de una Comisión de Mediación Integrada por diversas personalidades de defensa de los derechos humanos, que dicha Comisión buscó la presentación con vida de los desaparecidos pero no consigo respuesta alguna, la misma se vio disuelta por la nula intervención de las autoridades competentes con el fin de dar con vida de los desaparecidos.

Manifiesta además que la Comisión de Mediación publicó sus resultados, a diferencia del silencio oficial sobre el tema.

Por tanto manifiesta que a tres años de estas desapariciones, señala que el Congreso de la Unión debe condenar estos actos de *lesa humanidad* con la misma energía que los acontecidos contra otros actores políticos.

4. En virtud de lo anterior plantea el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO: Con total respeto a la división de poderes la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria de Gobernación Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta, enviar a esta soberanía un informe de conclusiones sobre las negociaciones entre esa dependencia y la Comisión de Mediación sobre los Desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

SEGUNDO: Con total respeto a la división de poderes la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República Lic. Arturo Chávez Chávez, a que envíe un informe sobre las acciones tomadas por su dependencia con el fin de dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión de la Permanente coincidimos con la Diputada Florentina Rosario Morales en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas es considerado en la doctrina internacional como un crimen de *lesa humanidad*, porque se ejecuta con todas las ventajas que da el abuso del ejercicio del poder público, ya que se trata además de un delito cometido por el Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios que debieran proteger a la población. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo cometen, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.

En ese sentido en el año de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 47/133 denominada “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, la cual considera que esta práctica afecta los valores más profundos y las libertades fundamentales de toda sociedad y, por lo tanto, establece que su práctica sistemática representa un crimen de *lesa humanidad.*

Asimismo en el año de 1994, la Organización de los Estados Americanos aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual dispone que esta práctica constituye un crimen de lesa humanidad y define a este delito como:

"La privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Es importante resaltar que a la fecha en nuestro país ya se han dado experiencias importantes como es el hecho de su tipificación correspondiente en el Código Penal Federal; la creación de una Fiscalía Especial para los desaparecidos políticos del periodo conocido como la *guerra sucia* de los años setentas; así como las resoluciones la que al respecto han señalado los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Recientemente en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente denominado Radilla Pacheco *versus* México, en el cual los familiares del Señor Rosendo Radilla demandaron al Estado mexicano por su desaparición desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero.

La Corte Interamericana resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por lo que deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea y continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales.

SEGUNDO. Para el caso que nos ocupa, para los integrantes de ésta Primera Comisión, reconocen los hechos que desde de julio de 2007, cuando se detonaron cargas explosivas en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Celaya y Salamanca en el estado de Guanajuato, mismas que se adjudico el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) en demanda de la presentación con vida de los propios C Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el cual reconoce como dos de sus integrantes.

De igual manera la autoría de un ataque perpetrado a las instalaciones de una cárcel en construcción en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, demandando nuevamente la aparición con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez los cuales han asegurado el gobierno federal los tiene privados de su libertad en sus "mazmorras".

También reconoce los trabajos de la Comisión de Mediación creada ex profeso para dar con el paradero de los C. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera oportuno solicitar, respetuosamente al titular de la Secretará de Gobernación y al Procurador General de la República, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, la información correspondiente respecto de las desapariciones forzadas de los C. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, solicita del titular de la Secretaria de Gobernación un informe sobre las acciones que la dependencia

a su cargo efectúa para continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata de los C. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia del Ministerio Público, solicita del titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre las investigaciones y, en su caso, los procesos penales que se tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada de los C. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR LA PUBLICACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO 2106 QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942 - 1964, APROBADAS EL 29 DE ABRIL DE 2010.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PROCEDA A PUBLICAR DE INMEDIATO EN EL DOF LAS REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 5º Y 6º DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO 2106 QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942 – 1964, APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 29 DE ABRIL DE 2010.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo de las y los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que con la participación que corresponda a la Secretaría de Gobernación, proceda a publicar de inmediato en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a los artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la ley que crea el fideicomiso 2106 que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942 – 1964, aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2010.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 9 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone a manera de antecedentes que:

1. Con fecha 22 de abril de 2010 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 - 1964.

2. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente el 28 de abril de 2010 con 307 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de Decreto se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Minuta recibida por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2010, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios 1942 - 1964, para efecto de Dictamen y elaborado éste se presentó ante el pleno de esta Cámara; siendo aprobado por esta, el mismo día por 93 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Luego se turnó al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

La proposición objeto de nuestro análisis también expone las siguientes consideraciones que la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, aprobada por el Congreso de la Unión una vez que fueron cumplidas las formalidades constitucionales y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal para efectos de su promulgación y publicación, tiene por objeto:

1. Incluir dentro de los beneficiarios del Fondo a las concubinas que acrediten su calidad mediante resolución judicial y a los legítimos herederos; establecer que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social, por una sola vez, por la cantidad base de $38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n), en una sola exhibición; y a los que hayan recibido un pago parcial de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.), se les deberá pagar la cantidad restantes $34,000.00 (Treinta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), de acuerdo a la Convocatoria que el Comité Técnico publique en el Diario Oficial de la Federación, adicionar como invitado permanente a un representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 y establecer el trato preferencial a los trabajadores con enfermedades terminales, para el cobro de los apoyos, así como también se amplia a un nuevo requisito a favor de los ex trabajadores para registro denominado, mención honorífica que sea expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964, debidamente apostillado.

Dicha iniciativa es parte del compromiso asumido por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de dar solución adecuada y expedita a los problemas relacionados con el funcionamiento del Programa de Apoyo Social de los ex trabajadores Migratorios Mexicanos, en virtud de que se trata de un grupo vulnerable que requiere de atención y que para ello se impulsen las gestiones necesarias para que reciban los recursos económicos que legítimamente les corresponde.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con Punto de Acuerdo para que ésta:

Exhorte respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la participación que corresponda al Titular de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se instruya la publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Reformas y Adiciones a los Artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la Ley que Crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios

Mexicanos 1942 - 1964, aprobadas el 29 de abril de 2010 por el Senado de la República, en su carácter de Cámara revisora y remitido al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 – 1964, cuyo dictamen se aprobó en la cámara de origen el 28 de abril de 2010 con 307 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de Decreto se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos de los Apartados A y B del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la Minuta recibida por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2010, se turnó y dictaminó el mismo día por 93 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para después turnarse al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

3. Que dicha iniciativa tiene por objeto incluir dentro de los beneficiarios del Fondo a las concubinas que acrediten su calidad mediante resolución judicial y a los legítimos herederos; establecer que el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos y que dicha iniciativa es parte del compromiso asumido por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de dar solución adecuada y expedita a los problemas relacionados con el funcionamiento del Programa de Apoyo Social de los ex trabajadores Migratorios Mexicanos, en virtud de que se trata de un grupo vulnerable que requiere de atención inmediata y que para ello se impulsen las gestiones necesarias para que reciban los recursos económicos que legítimamente les corresponden.

En consecuencia, esta dictaminadora considera oportuno solicitar, respetuosamente al Titular de Ejecutivo federal para que, dado que la iniciativa en comento ha cursado y culminado el proceso legislativo en las cámaras del Congreso de la Unión, y que le ha sido turnada desde hace más de cuarenta días y ésta no ha sido observada como lo establece el artículo 72 constitucional, tenga a bien ordenar su publicación, a través del Secretario de Gobernación, al Diario Oficial de la Federación, para que una vez promulgada y publicada, pueda ésta importante ley entrar en vigor para el beneficio y los ex braceros, sus familiares y herederos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya la publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Reformas y Adiciones a los Artículos 2º, 3º, 5º y 6º de la Ley que Crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 - 1964, aprobadas el 29 de abril de 2010 por la Cámara revisora y remitido al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

CON RELACIÓN A LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE LOS EXPOLICÍAS DE HIDALGO Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN RELATIVO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE LOS EXPOLICÍAS DE HIDALGO Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, le fueron turnadas en diferentes fechas, sendas proposiciones con punto de acuerdo de similar materia:

1) Por el que se solicita al Secretario de Seguridad Pública un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y la recomendación 25/2010 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y exhorta al titular del Poder ejecutivo Federal para que contemple en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento presupuestal a las partidas destinadas a los centros penitenciarios y de readaptación social, presentada por el diputado ***Rubén Moreira Valdez*** del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y

2) Por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, para que funcionarios de ese organismo autónomo constitucional realicen inspecciones periódicas a los expolicías municipales de Pachuca, así como a los expolicías estatales y ministeriales de Hidalgo, a efecto de determinar el estado que guardan los derechos fundamentales con relación al desarrollo del proceso penal y a las condiciones físicas y psicológicas de los detenidos; por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública valoren la pertinencia de trasladar los procesos penales a la jurisdicción jueces penales en Hidalgo, y en consideración a las seguridad de los centros de de readaptación social de dicha entidad, sean trasladados los detenidos, y por el que se solicita al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, a que con base en el probidad y diligencia que distingue a sus miembros, éstos asistas, orienten, auxilien o represente a quien lo solicite o necesite con relación al servicio de la defensa penal para los expolicías de Hidalgo, a efecto de tener una defensa legal oportuna, profesional y adecuada, presentada por los senadores ***José Luis García Zalvidea, José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez y Rubén Fernando Velázquez López*** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.1. La Proposición con Punto de Acuerdo del diputado Rubén Moreira Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 9 de junio de 2010.

I.2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

I.3. La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

A) Señala el promoverte que en el mes de junio de 2009, en Pachuca, Hidalgo, fueron detenidas por las fuerzas del orden federal, 119 funcionarios de seguridad pública municipal, estatal y federal, quienes fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud agravada y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento de la ejecución de delitos.

Señala que fueron sometidos a un arraigo de 60 días, y trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, ubicado en Cerro de León sin número, municipio de Villa Aldama Perote, Veracruz, con la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009, radicada en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en el Rincón, municipio de Tepic, bajo la Causa penal No. 464/2009-V.

Manifiesta el promoverte que a 21 de los presuntos responsables, se les dictó el Auto de Formal Prisión el 21 de septiembre del 2009, por los delitos mencionados, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz y a los otros 90 se les dictó el mismo Auto en fecha 24 de septiembre de 2009. Menciona que a uno de los procesados Luis Enrique Islas Hernández, en dicho Auto se determinó su libertad. Sin embargo, aún sigue sujeto a proceso.

Asimismo manifiesta que las pruebas en contra de los procesados están basadas en declaraciones ministeriales de los testigos de identidad reservada con las claves de: *José Antonio*, el *Caleb*, el *Pitufo* y *Rufino* y en una narconómina, como en el caso del conocido coloquialmente *Michoacanazo* donde 18 de 35 de los inculpados han salido en libertad ganando apelaciones, amparos e incluso por desvanecimiento de datos.

Expone el Diputado Moreira que desde la detención, según los familiares de los ahora ex servidores públicos en prisión, han denunciado violaciones flagrantes a los derechos humanos de estos y recurrido a diversas instancias de los diferentes órdenes de gobierno y poderes del estado e instancias no jurisdiccionales, con la finalidad de detener los abusos a que han sido sometidos dichos ex servidores durante el proceso judicial, el arraigo y en su estancia en el CEFERESO No. 5 Oriente.

B) Con relación a lo anterior, el promoverte manifiesta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la recurrencia de las quejas y para evitar que se siguieran vulnerando los derechos humanos solicitó la implantación de medidas cautelares al subsecretario del Sistema Penitenciario Federal para realizar acciones de protección y observancia de los derechos fundamentales de los internos. Se ha constatado por el mismo órgano no jurisdiccional que dichas medidas no han sido cumplidas a pesar de que fueron aceptadas por la autoridad penitenciaria., por lo que la CNDH emitió la Recomendación No 25/2010 donde observa que en el CEFERESO No 5 Oriente:

"Se vulneran los derechos humanos a la seguridad personal, a la salud, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, y a la readaptación social en agravio de la población penitenciaria, toda vez, que las autoridades a cargo del mismo no han cumplido con eficacia la obligación de garantizar el

respeto a la integridad física y mental de los agraviados, ni con la de propiciar condiciones adecuadas para su readaptación social,"

Lo anterior de acuerdo a los siguientes elementos:

- Las condiciones de habitabilidad del CEFERSO son deficientes
- Por falta de áreas apropiadas las visitas no son regulares ni continuas
- Las visitas íntimas se suspenden por falta de instalaciones adecuadas violando la reglamentación vigente
- Se impide a la población penitenciaria el fortalecer y/o preservar su relación con el exterior
- La población penitenciaria permanece encerrada hasta por diez días continuos en sus celdas
- El penal no cuenta con instrumentos tecnológicos para llevar a cabo revisiones a toda persona, por lo que las visitas son sometidas a tratos indignos sobre todo las mujeres
- La indumentaria que se otorga a los internos es insuficiente e inadecuada para el tipo de lugar donde se encuentran
- Algunos internos fueron objeto de golpes y maltratos por parte del personal de custodia
- Los alimentos y agua que se proporcionan a los internos son insuficientes en calidad y cantidad
- Existe falta de actividad debido a la ausencia de talleres, de herramientas y materiales necesarios
- No cuentan con actividades académicas ni educativas, por falta de aulas, material de apoyo y maestros
- No existe separación de procesados y sentenciados lo que no contribuye a una estancia digna en prisión
- Existe deficiencia en la prestación del servicio médico
- No se administran medicamentos adecuados a internos que padecen diabetes mellitas, VIH SIDA, hipotiroidismo, hipertrofia prostática, insuficiencia vascular periférica, hipertensión arterial y esquizofrenia, ni hay las condiciones para cambio de válvula aórtica y colocación de válvula AHMED.
- El CEFERESO no cuenta con una plantilla adecuada de profesionales de la salud

Señala el diputado Moreira que de acuerdo a la misma Recomendación, las autoridades penitenciarias violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicio de Atención Médica, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-200, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "protocolo de San Salvador", la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por la ONU

En consecuencia de lo anterior la CNDH, recomendó al Ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, que ordene a quien corresponda lo siguiente:

1. Asignar presupuesto de forma inmediata y personal capacitado de seguridad y custodia, psicología y trabajo social suficiente para cubrir las necesidades del CEFERSO en cuestión
2. Regularizar de forma inmediata la visita familiar e íntima y se abstenga de mantener en condiciones de aislamiento a los internos
3. Completar de forma inmediata la plantilla de personal médico y de enfermería para la atención correspondiente a los internos
4. Trasladar al interno "V119" al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial

5. Colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que este organismo promueva ante el órganos Interno de Control de la SSP por maltrato ocasionado por servidores públicos del penal mencionado
6. Colaborar con la CNDH en la integración de la averiguación derivada de la denuncia de hechos ante el Ministerio Público, que este organismo promueva en contra de servidores públicos del penal
7. Colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que este organismo promueva ante el Órgano Interno de Control de la SSP en contra de servidores públicos del penal mencionado
8. Instrumentar un programa de capacitación permanente para personal directivo, técnico administrativo y de custodia del CEFERSO en cuestión
9. Realizar gestiones presupuestales y administrativas, a fin de que se instalen aparatos electrónicos de tecnología sobre seguridad penitenciaria
10. Abrir cuentas individualizadas de cada uno de los internos, y se les otorgue a los confinados alimentación balanceada, higiénica en cantidad suficiente.

C) Argumenta el Diputado Moreira Valdez que es por ello importante revisar las políticas penitenciarias de readaptación social y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, de manera que se puedan subsanar los errores y deficiencias. Pues como lo ha comentado el *ombudsman* nacional, sólo en la comisión del delito de delincuencia organizada y contra la salud existen, aproximadamente, en el presente sexenio 230 mil detenidos y están por cumplirse 250 mil órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Ante estos hechos es necesario llamar la atención en el seguimiento a las políticas de combate a la delincuencia que lleva a cabo el gobierno federal, pues en el caso del *Michoacanazo* se está demostrando la inocencia de los inculpados y estas libertades no son espectáculo mediático cómo lo fue el 26 de junio durante la detención de esos ex funcionarios.

En el caso que comento del estado de Hidalgo, los familiares y abogados defensores de los procesados han denunciado no sólo maltrato en el CEFERESO No. 5, sino violaciones a los derechos humanos, ineficiencia en la administración de justicia, fabricación de pruebas por parte de la SIEDO, abuso de las figuras de los testigos *protegidos* y *arraigo* y lentitud en el proceso jurisdiccional.

D) Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la promovente propone a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se solicita al Secretario de Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García Luna, informe del cumplimento de la Recomendación: 25/2010, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de fecha 24 de mayo de 2010 y de las medidas cautelares dictadas por dicha Comisión, sobre el caso de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz.

SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García Luna se respeten los derechos humanos de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz de acuerdo al marco nacional e internacional.

TERCERO. Se exhorta al Presidente de la República para que contemple en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, un incremento a las partidas destinadas a los centros penitenciarios y a las políticas y programas de readaptación social, que dé cumplimiento íntegramente al marco de respeto a los derechos humanos de las y los internos.

CUARTO. Se solicita al Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados, realizar y presentar a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de este órgano legislativo un análisis sobre el comportamiento y aplicación presupuestal federal y estatal de los Centros de Readaptación Social del país.

II.1. La Proposición con Punto de Acuerdo de los senadores ***José Luis García Zalvidea, José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez y Rubén Fernando Velázquez López*** fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 16 de junio de 2010.

II.2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II.3. La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

A. Un grupo de cerca de 140 personas, integrantes de la Policía Municipal de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, del Estado de Hidalgo, fueron localizados y detenidos los días 24 y 25 de Junio y de 14 de Septiembre del año 2009, en operativos realizados por elementos de la Policía Federal Preventiva, con motivo de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Dichos policías fueron acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.

B. Según se expone en dicho Punto, los abogados y familiares de los expolicías detenidos señalan que durante el curso de la investigación y el desarrollo del proceso penal se han presentado irregularidades que conculcan los derechos fundamentales de los inculpados, entre ellas se señalan:

a) Arraigos infundados;

b) Sobrevaloración probatoria de las declaraciones de los testigos protegidos;

c) Demora indebida de los inculpados para ponerlos a disposición de Juez;

d) Negación de información por parte del Fiscal a familiares y abogados sobre los cursos de los procedimientos penales;

e) Maltratos y vejaciones hacia los inculpados durante el traslado en los centros de confinamiento;

f) Inadecuada o nula atención médica para los inculpados en los centros de confinamiento.

g) Incomunicación ilegal de los inculpados con sus abogados y familiares.

No obsta decir, que el caso en comento guarda una enorme similitud con el llamado "Michoacanazo", y en cual se pudo comprobar que las imputaciones hechas por testigos protegidos y las demás pruebas circunstanciales que aportó la fiscalía no fueron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los exfuncionarios. Cuestión que se puede corroborar por el inmejorable desempeño del Grupo Plural que se constituyó en el Senado.

Basta decir que, a la luz de los hechos, las acusaciones con su símil en Michoacán tuvo efectos nocivos en la opinión pública ante el descrédito de la justicia mexicana.

C. Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los promoventes ponen a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ***Dr. Raúl Plascencia Villanueva***, para que funcionarios de ese organismo autónomo constitucional realicen inspecciones periódicas a los expolicías municipales de Pachuca, así como a los expolicías estatales y ministeriales de Hidalgo, a efecto de determinar el estado que guardan

los derechos fundamentales con relación al desarrollo del proceso penal y a las condiciones físicas y psicológicas de los detenidos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública valoren la pertinencia de trasladar los procesos penales a la jurisdicción jueces penales en Hidalgo, y en consideración a las seguridad de los centros de de readaptación social de dicha entidad, sean trasladados los detenidos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, a que con base en el probidad y diligencia que distingue a sus miembros, éstos asistas, orienten, auxilien o represente a quien lo solicite o necesite con relación al servicio de la defensa penal para los expolicías de Hidalgo, a efecto de tener una defensa legal oportuna, profesional y adecuada.

Una vez examinado el contenido de las proposiciones con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora hicieron una valoración con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión consideran que mediante las reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, se reformó entre otros artículo el 18 de la Constitución Federal con la intención de remediar las pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones en nuestro país, condiciones debidas, principalmente, a que no habían sido consideradas un rubro sustantivo o relevante, tanto dentro de la agenda legislativa así como, para las políticas de asignación de recursos.

Esto ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos. A pesar de que por mandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educación, al trabajo y a la capacitación para el mismo, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los reclusos gocen de ninguno de esos derechos. El imperio de la violencia entre los internos y la que ejercen los custodios es lo que rige de manera cotidiana la vida en prisión.

SEGUNDO. Ahora bien, para el caso materia del presente dictamen, la propia recomendación 25/2010 emitida por la Comisión nacional de los Derechos Humanos, señala que en el Centro Federal de Readaptación Social No. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz se vulneran los derechos humanos a la seguridad personal, a la salud, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la readaptación social en agravio de la población penitenciaria, toda vez que las autoridades a cargo del mismo no han cumplido con eficacia la obligación de garantizar el respeto a la integridad física y mental de los agraviados, ni con la de propiciar condiciones adecuadas para su readaptación social.

En ese sentido se señala en dicha recomendación que las condiciones de habitabilidad del mismo son deficientes; ya que no cuentan con micas en las ventanas, lo que provoca corrientes de aire helado, la iluminación artificial es insuficiente, la mayor parte de la estructura de las instalaciones requieren reparaciones, sobre todo de tipo hidráulico y sanitario; se detectaron cables eléctricos expuestos sobre las paredes que generan fallas en la energía y riesgo de corto circuito al interior de las celdas, lo cual puede poner en peligro la integridad física y la vida de los internos; aunado a ello, no se han acondicionado las estancias de visita familiar e íntima, y no cuentan con talleres. Sobre el particular, se observa que las autoridades encargadas de administrar dicho Centro Federal no han tomado las medidas necesarias para mantenerlo adecuadamente y así evitar el deterioro que presenta, sobre todo si tomamos en consideración que fue incorporado al Sistema Penitenciario Federal y no cuenta con las condiciones necesarias para prestar en forma correcta el servicio para el que fue destinado; así como para garantizar la seguridad de los internos, del personal penitenciario y de visitantes.

La propia Comisión Nacional señala que es el Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública quien tiene la obligación de verificar que las instalaciones que adquiera para el internamiento de personas privadas de su libertad, reúnan las condiciones que garanticen una estancia digna, asimismo, en su caso efectuar las acciones necesarias para mantenerlas en buenas condiciones, en cuanto a su infraestructura, muebles y servicios, para que realmente puedan cumplir con el objetivo de readaptación social, de conformidad a lo que establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra en 1955, los cuales señalan las características que deben de reunir los lugares destinados al alojamiento de los internos.

TERCERO. No obsta decir, que a consecuencia del incremento preocupante de los índices delictivos, y de la creciente injerencia, operación e influencia de delincuencia organizada en la sociedad, el Estado mexicano ha impulsado una serie de medidas para combatir, atenuar y prevenir la acción delictiva.

Recordemos que en seno del Congreso de la Unión se han procesado en los últimos años sendas reformas penales para hacer frente a este derrotero. Sin embargo, la evidencia empírica arroja, que pese a los esfuerzos para impulsar un nuevo marco penal y aumentar el presupuesto en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, en los hechos los índices delictivos no disminuyen, ni tampoco se reduce la operación del crimen organizada.

Hay que decir, que si bien en un sentido estricto, si bien hoy contamos con instrumentos más *flexibles* del Estado para perseguir, detener y procesar a los sospechosos (arraigo constitucional, ampliación del plazo para la investigación del fiscal, testigos protegidos, decomiso de bienes, entre otros) y que nos encontramos en una etapa de minusvalía de los derechos fundamentales y de las garantías penales para *facilitar* el combate a la delincuencia, la realidad indica que el Estado ante su incapacidad, puede y ha cometido atropellos contra sus ciudadanos.

El caso del llamado *"Michoacanzo"* demuestra fehacientemente que la estrategia y el objeto contra la delincuencia puede tergiversar los fines para los que idearon las herramientas legales, de un modo tan atroz e inaceptable para un Estado Democrático de Derecho.

Es por ello, que ante los hechos que se denuncian en ambas proposiciones, y frente a la evidencia recopilada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de los expolicías del Hidalgo, y con base en el principio de presunción de inocencia, de legalidad y del debido proceso, los integrantes de esta Comisión consideramos procedentes los resolutivos que legisladores federales del PRI y PRD que presentaron en días pasados.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Secretario de Seguridad Pública Federal, Ingeniero Genaro García Luna, informe del cumplimento de la Recomendación: 25/2010, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de fecha 24 de mayo de 2010 y de las medidas cautelares dictadas por dicha Comisión, sobre el caso de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, para que funcionarios de ese organismo autónomo constitucional realicen inspecciones periódicas a los expolicías municipales de Pachuca, así como

a los expolicías estatales y ministeriales de Hidalgo, a efecto de determinar el estado que guardan los derechos fundamentales con relación al desarrollo del proceso penal y a las condiciones físicas y psicológicas de los detenidos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal, Ingeniero Genaro García Luna a que garantice el respeto a los derechos humanos de los internos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz de acuerdo al marco nacional e internacional.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República para que contemple en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, un incremento a las partidas destinadas a los centros penitenciarios y a las políticas y programas de readaptación social, que dé cumplimiento íntegramente al marco de respeto a los derechos humanos de las y los internos.

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados, realizar y presentar a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de este órgano legislativo un análisis sobre el comportamiento y aplicación presupuestal federal y estatal de los Centros de Readaptación Social del país.

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública valoren la pertinencia de trasladar los procesos penales a la jurisdicción jueces penales en Hidalgo, y en consideración a las seguridad de los centros de readaptación social de dicha entidad, sean trasladados los detenidos.

SÉPTIMO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, a que con base en el probidad y diligencia que distingue a sus miembros, éstos asistas, orienten, auxilien o represente a quien lo solicite o necesite con relación al servicio de la defensa penal para los expolicías de Hidalgo, a efecto de tener una defensa legal oportuna, profesional y adecuada.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS MEDIOS CON QUE SE DARÁ CERTEZA A LA POBLACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE SU INFORMACIÓN, VERACIDAD, MECANISMOS DE SEGURIDAD, RESGUARDO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA UN INFORME SOBRE LOS MEDIOS CON QUE SE DARÁ CERTEZA A LA POBLACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL MANEJO DE SU INFORMACIÓN, VERACIDAD, MECANISMOS DE SEGURIDAD, RESGUARDO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía un informe sobre los medios con que se dará certeza a la población de la confiabilidad del manejo de su información, veracidad, mecanismos de seguridad, resguardo y validación de la información del Censo de Población y Vivienda 2010, a cargo del **Senador Ricardo Monreal Ávila,** del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 02 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. La proposición en análisis se refiere principalmente a solicitar la protección de la información, con los mecanismos de seguridad y resguardo necesarios, de la información del censo de población y vivienda 2010.

Lo anterior debido a que el trabajo de recopilación comprende diversas estadísticas de ocupación y empleo, así como de violencia intrafamiliar y de pareja y se aplicará en casi todas las viviendas.

Además, hay que mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada de realizar dichos censos poblacionales cada década, así como los censos económicos cada cinco años, es una de las pocas instituciones en las que todavía confía la sociedad.

Sin embargo, para el proponente este censo de población se encuentra inmerso en una gran desconfianza y escepticismo a causa de las acciones por parte de las instituciones y del crimen organizado. Un ejemplo de lo anterior es la venta del Padrón Electoral de 2000 a la empresa estadounidense Choise Point.

De igual forma da como ejemplo la nota que distintos medios de comunicación ofrecieron, afirmando que en la zona de Tepito se vende base de datos oficiales que incluyen nombres, apellidos, dirección y fecha de nacimiento de los ciudadanos que nos encontramos registrados en dicho padrón.

II. La Primera Comisión se ha pronunciado en con anterioridad a favor de las labores institucionales encaminadas a obtener una legítima y evaluada relación entre los actores políticos y sociales. Tenemos la firme convicción de que solo podemos asegurar una verdadera actuación legitima cuando los responsables de asegurar el bien común sean constantemente evaluados y sobre todo, que sean castigados de encontrarse faltas a los principios constitucionales.

Las formas de evaluación a las que nos referíamos en el párrafo anterior se refieren principalmente a la capacidad de respuesta de los sujetos en el poder, a las demandas sociales. De no acceder de manera adecuada y oportuna a las soluciones, se estaría encaminando al propio Estado hacia un completo descontento social, separando a la sociedad de sus representantes y con ello un desequilibrio intolerable.

Ante estas cuestiones, compartimos la preocupación que manifiesta el proponente en relación al sentido de que la aceptación o la legitimidad también es un elemento necesario para nuestra seguridad interna. Por ello quienes signamos el presente documento estamos convencidos de que la garantía de seguridad ciudadana, específicamente en temas que se refieran a datos personales y aquellos referentes para combatir la delincuencia organizada, necesitan de un estricto seguimiento de normas y procedimientos indicados.

Es por lo anterior que se debe poner mayor énfasis en resguardar los datos contenidos en el censo de población y vivienda 2010 que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De cumplir cabalmente con esta petición podremos garantizar una mayor confiabilidad en nuestras autoridades administrativas y de seguridad.

III. Esta Comisión tiene conocimiento, por ser hechos de dominio e interés público y ampliamente explicados en la página de internet http://www.censo2010.mx/, que el 31 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en efecto inició el Censo de Población y Vivienda 2010 para recabar información acerca del número de habitantes mexicanos, el lugar y condiciones de donde viven, su edad, sexo, escolaridad, lugar de nacimiento y qué religión profesan.

Es relevante mencionar que el Instituto está utilizando dos tipos de cuestionarios que incluyen 29 preguntas en uno simple y otro más completo denominado ampliado, con 79 cuestionamientos. Con el cuestionario ampliado se censarán alrededor de 2.7 millones de viviendas y con las 29 preguntas comunes se obtendrá información sobre:

…la edad de las personas, sexo, parentesco, lugar de nacimiento y de residencia en 2005, derecho a servicios de salud, religión; discapacidad, lengua indígena; nivel educativo, situación conyugal; condición de actividad económica; fecundidad y mortalidad.

Además, el INEGI planea obtener información sobre otras áreas como carreteras y transporte público, infraestructura y servicios, la presencia de grupos indígenas, así como algunos aspectos económicos y sociales de este tipo de localidades.

También tenemos presente que el Censo de Población y Vivienda lleva un avance del 20 por ciento hasta el 7 de junio, así como el hecho de que se tiene detectado que podría existir un 2.3 por ciento de entrevistas no levantadas por rechazo de ciudadanos a contestar los cuestionarios y que todos los resultados del Censo se darán a conocer hasta el primer trimestre del 2011.

Igualmente hay que apuntar que el Instituto dio a conocer que el costo del Censo será de seis mil millones de pesos, contando las etapas previas y posteriores al levantamiento de datos, sin embargo dijo que es más barato que anteriores Censos como en el 2000 que el costo por persona era de 60 pesos y ahora es de 55.

En base a los datos anteriormente expuestos, nos resulta fundamental que el Instituto posea mecanismos seguros para proteger una información que por su contenido resulta estratégica para el Estado y para el resto de los ciudadanos.

IV. Sabemos, gracias a datos proporcionados por el INEGI en su página de internet que durante el censo 2010, el Consejo Ciudadano se plantean implementar medidas como la verificación de identidad de los encuestadores del Instituto a través de una llamada telefónica al centro de contacto del organismo civil, al número 5533-5533.

Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano, explicó que se coordinarán con el INEGI fue para darle certidumbre a la ciudadanía y transparentar el levantamiento de los datos y agregó que la selección de los más de 7 mil encuestadores fue un proceso en el que buscó al personal idóneo, al tiempo que se les capacitó, sin embargo, reconoció que no se verificó si contaban con antecedentes penales.

Sin embargo, quienes dictaminamos consideramos que es importante debido a la escalada de violencia en el país, que en efecto, existen suficientes mecanismos, distintos a los antes mencionados, que hacen suponer la debida protección de los datos ante e el crimen organizado.

Por lo anterior estamos de acuerdo con el proponente en relación a que el conocimiento de la metodología utilizada para proteger dicha información es imprescindible garantizar el bienestar de la sociedad y fortalecer la legitimidad del orden público y la confianza en su capacidad para responder a los problemas sociales, promoviendo el cumplimiento por parte de las instituciones gubernamentales con sus responsabilidades.

Ahora bien, es Comisión está consciente de que la información que se solicita no puede causar perjuicio a las actividades del gobierno de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, ni las estrategias procesales en procesos judiciales. Por ello, consideramos procedente realizar la solicitud de información bajo la condición de que la misma no debe ir en perjuicio de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, rindan un informe detallado sobre los medios con que se dará certeza a la población de la confiabilidad del manejo de su información, veracidad, mecanismos de seguridad, resguardo y validación de la información del censo de población y vivienda 2010.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente y con el pleno principio de la división de poderes a todas las autoridades civiles, militares, brindar el apoyo oportuno y eficaz a todos los, encuestadores, plenamente identificados que realizan el censo de población y vivienda 2010, para realizar la labor por la cual se les ha encomendado.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA, QUIRÚRGICA, HOSPITALARIA, FARMACÉUTICA, PSICOLÓGICA Y DE REHABILITACIÓN QUE ESA INSTITUCIÓN HA PROPORCIONADO A LOS NIÑOS QUE RESULTARON CON LESIONES GRAVES COMO PRODUCTO DEL INCENDIO EN LA GUARDERÍA ABC DE HERMOSILLO, SONORA.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL IMSS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA, QUIRÚRGICA, HOSPITALARIA, FARMACÉUTICA, PSICOLÓGICA Y DE REHABILITACIÓN QUE ESA INSTITUCIÓN HA PROPORCIONADO A LOS NIÑOS QUE RESULTARON CON LESIONES GRAVES COMO PRODUCTO DEL INCENDIO EN LA GUARDERÍA ABC DE HERMOSILLO, SONORA

Honorable Asamblea:

A la PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, le fue turnada para su análisis una proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del IMSS ante la negligencia en la atención médica a las niñas y niños que resultaron lesionados con motivo del incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, suscrita por los Diputados Balfre Vargas Cortéz, Agustín Guerrero Castillo y Ramón Jiménez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 9 de junio de 2010 y turnada en esa misma fecha para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a esta Primera Comisión.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.

I. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se funda en la preocupación de los proponentes ante la probable negligencia y omisiones en la atención médica de las niñas y niños que resultaron heridos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, así como la desatención de las autoridades del IMSS a los niños y sus familiares, situación que -señalan los proponentes- ha sido denunciada por los propios familiares.

II. Expresan los proponentes que a un año de este siniestro, el Director del IMSS, Licenciado Daniel Karam Toumeh, ha actuado negligentemente, de manera sistemática, en el otorgamiento de atención médica adecuada a los 80 niños que resultaron gravemente lesionados, razón por la cual los familiares de estos menores se han visto obligados ha comenzar una colecta pública a fin de obtener recursos para someter a sus hijas e hijos al tratamiento especializado que requieren.

Entre otras cosas, los autores señalan que las autoridades del IMSS continúan ignorando a los familiares de los niños lesionados y que afirman falsamente que los niños que respiraron humo tóxico en el incendio de la Guardería ABC se encuentran bien, lo que contradice la opinión de otros médicos que afirman que los pulmones de estas niñas y niños quedaron muy dañados y tendrán secuelas graves si no reciben el tratamiento adecuado. Por lo pronto, los autores indican que muchos de estos menores tienen fibrosis pulmonar.

III. Señalan que la negligencia y cinismo del IMSS han llegado a tal extremo, que el 31 de mayo pasado fue enviado a la ciudad de Hermosillo, Sonora un grupo de médicos para revisar a los 80 niñas y niños lesionados en un Hotel y no en un Hospital, lo que evidentemente representa un acto de absoluta falta de profesionalismo y de ética.

IV. Manifiestan que el siniestro ocurrido en la Guardería ABC no fue un mero accidente, sino que sobrevino por la omisión conciente de los propietarios en complicidad con las autoridades del IMSS y otras de carácter local y federal, de las medidas mínimas de seguridad e higiene, con el objeto de elevar su tasa de utilidad, razón por la cual los hechos deben ser reparados desde el punto de vista penal, civil y administrativo, siendo la atención a la salud de estos menores la que con mayor urgencia exige tal reparación.

V. Los autores recuerdan e incluso citan textualmente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación 49/2009 del 31 de julio de 2009, determinó que el Director General del IMSS debía girar instrucciones para que se brindara: *"la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida a los menores que resultaron lesionados…así mismo sean cubiertos los gastos erogados con motivo de su atención médica; y, se tomen las medidas necesarias a efecto de garantizar un ejercicio del derecho a la protección de la salud de los menores y sus familias"*.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. En primer término resulta pertinente señalar que los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación de los proponentes por el estado de salud de los 80 niños y niñas que resultaron gravemente lesionados en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, así como por la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación que se les brinda por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, coinciden en que es un compromiso legal y moral del IMSS brindar a estos 80 niñas y niños la atención médica y psicológica de primera calidad que necesitan hasta su completa recuperación.

II. El incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es un hecho que indudable y comprensiblemente ha lastimado e indignado a las y los mexicanos por la trágica muerte de niños, así como por las lesiones causadas a otros 80. Sin duda el que las principales víctimas hayan sido niños pequeños, aumenta la indignación y tristeza que un hecho como este suscita en la sociedad, sin mencionar, desde luego, el dolor y sufrimiento de los padres y familiares de las víctimas.

III. Ahora bien, en cuanto al fondo de la proposición que se dictamina, los autores plantean la conveniencia de que esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, citen a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Daniel Karam Toumeh, con el objetivo de que *"informe y explique a esta Soberanía sobre las razones que lo han llevado a ignorar su obligación legal y su compromiso público para dar a las 80 niñas y niños que resultaron con lesiones graves como producto del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 05 de*

junio del 2009, toda la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación necesarias y de primera calidad; y sobre las medidas urgentes que tomará para acabar con esta inadmisible omisión, para la debida tutela de la vida e integridad personal de los infantes; y que informe también sobre las acciones tomadas, y resultados obtenidos, con motivo de este siniestro en general, especialmente en materia de justicia en favor de los familiares de las 49 niñas y niños que perdieron la vida; así como en materia de seguridad e higiene respecto a las guarderías subrogadas a los particulares".

Al respecto, esta Comisión dictaminadora considera plausible el fondo de la proposición, en tanto que revela como idea toral la preocupación por la atención médica que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya proporcionado y continúe proporcionando a los infantes lesionados en el incendio de la Guardería ABC, preocupación compartida por los integrantes de esta Comisión como ya se ha señalado.

IV. No obstante, esta dictaminadora considera que de la simple lectura de la proposición, se desprende claramente un juicio valorativo de los autores, en relación a las supuestas omisiones del Director General del IMSS respecto de la atención médica otorgada a las niñas y niños lesionados, cuando en el texto de la proposición señalan: "*sobre las razones que lo han llevado a ignorar su obligación legal y su compromiso público para dar a las 80 niñas y niños que resultaron con lesiones graves como producto del incendio en la Guardería ABC…"*.

En opinión de esta dictaminadora, la relevancia y delicadeza del caso ameritan un tratamiento objetivo e imparcial, en el que se omitan juicios valorativos *a priori* que puedan propiciar la eventual politización de un asunto en el que lo más importante, por tratarse de víctimas menores de edad, es lograr finalmente el elemental acceso a la justicia de estas y sus familiares. En esa lógica, aunque los miembros de esta dictaminadora comparten el espíritu de la proposición, consideran poco prudente la forma.

En es tenor de ideas y en aras de allegarse elementos y fuentes de información que pudieren evidenciar las supuestas omisiones del director del Instituto Mexicano de Seguro Social, esta dictaminadora estima pertinente solicitar un informe sobre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación que el IMSS ha proporcionado a los niños lesionados por el incendio de la guardería ABC.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se solicita al Director del IMSS, Licenciado Daniel Karam Toumeh, remita a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación que esa institución ha proporcionado a los niños que resultaron con lesiones graves como producto del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, así como de las posibles omisiones y negligencia en la prestación de dichos servicios y, en su caso, las medidas adoptadas para subsanarlas.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 29 días de mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EMITIR UN INFORME DETALLADO DE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADO LA DEPENDENCIA A SU CARGO PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UN INFORME DE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADO LA DEPENDENCIA A SU CARGO PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Honorable Asamblea:

A la PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, le fue turnada para su análisis una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a efecto de que exponga los trabajos que ha realizado la dependencia a su cargo para la elaboración del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Senador Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración de esta Asamblea las siguientes:

ANTECEDENTES

La Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 09 de junio 2010 y turnada en esa misma fecha para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a esta Primera Comisión.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.

I. Señala el proponente que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 10 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; y para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son aproximadamente dos millones.

II. Expresa que la lucha por el respeto y la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad, ha sido un movimiento ya de varias décadas, donde se siempre se ha buscado un marco jurídico en el que plenamente se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad; y como resultado de este esfuerzo, en 2005 se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad.

III. Asimismo el iniciante señala que dicha Ley, cuenta con una serie de bondades entre las que se encuentran: que se reconocen los derechos humanos de las personas con discapacidad y dispone el establecimiento de las políticas públicas necesarias para el ejercicio de tales derechos y se crea el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad con el objeto de contribuir al establecimiento de una política de Estado a favor de este grupo vulnerable, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

IV. Subraya que esta Ley también es importante puesto que se establece la aplicación de programas a favor de las personas con discapacidad en materia de salud, trabajo y capacitación, educación, facilidades arquitectónicas, desarrollo urbano, vivienda, transporte público, comunicaciones, desarrollo y asistencia social, deporte, cultura y seguridad jurídica.

V. Sin embargo, el proponente manifiesta que a pesar de la publicación y aprobación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ello es sólo un primer paso, lo que seguiría entonces es la elaboración y publicación del correspondiente Reglamento por parte del Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley General para las Personas con Discapacidad, que a la letra señala:

"El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley."

VI. Para sustentar el contenido de su proposición, los autores invocan que han transcurrido cinco años, desde la publicación de la Ley (10 junio 2005) y el Ejecutivo Federal no ha emitido el correspondiente reglamento, aun y cuando en agosto de 2009 la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal a que publicara en el Diario Oficial de la Federación el multicitado Reglamento, a efecto de que se definieran con precisión los alcances de las políticas públicas establecidas en esa Ley.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Los integrantes de esta comisión dictaminadora comparten la preocupación de la proponente en lo que respecta al debido respeto y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.

Y es que de acuerdo con el preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada el 13 de diciembre de 2006), este sector de la sociedad se sigue encontrando con barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y por ende se siguen vulnerando sus derecho humanos, como por ejemplo el acceso a la salud, la educación e incluso hasta el de la información.

II. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que la Ley General para las Personas con Discapacidad es un esfuerzo valioso para que se reconozcan plenamente los derechos de estas personas, pues además de que en ella se reconocen los derechos humanos de este sector de la población, se crean órganos de vital importancia como lo es el caso del Consejo Nacional y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad con la finalidad de promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley, que se emprendan a favor de las personas con discapacidad.

III. Así pues, aunque la Ley General para las Personas con Discapacidad ha sido un primer intento de protección, se coincide en la necesidad de un sustento legal que emane de la ley general, que en este caso sería el Reglamento a efecto de que se cumpla el artículo quinto transitorio de la misma donde se establece que el Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor; y el inciso A) del artículo 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada por México el 17 de octubre 2007) que señala que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicha Convención.

IV. En este sentido, la dictaminadora reconoce que existe un retraso de cinco años en la publicación del Reglamento de la Ley General para las Personas con Discapacidad y que en la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo, en agosto de 2009, donde se demanda la publicación del multicitado Reglamento, además de una proposición del Diputado César Duarte con fecha 22 de julio de 2009.

V. Ahora bien, es importante señalar que se coincide en la inmediata publicación del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad a efecto de que el Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, desde el ámbito de sus competencias apliquen las políticas públicas y los programas que la misma ley establece para el óptimo desarrollo de las personas con discapacidad.

VI. En virtud de las consideraciones arriba señaladas, el proponente sugiere citar a comparecer a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a efecto de que exponga los avances que la dependencia tenga al respecto.

Sin embargo esta comisión dictaminadora considera pertinente solicitar un informe detallado a la misma para que el Congreso este enterado del proceso de elaboración o en su caso la culminación del Reglamento de la Ley General para las Personas con Discapacidad y a la brevedad sea publicado por el Ejecutivo Federal.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Ing. Myriam Arabian Couttolenc, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a emitir un informe detallado de los trabajos que ha realizado la dependencia a su cargo para la elaboración del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días de mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR A LAS NIÑAS Y NIÑOS HUÉRFANOS DEL PAÍS COMO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, INCLUYA A LAS NIÑAS Y NIÑOS HUÉRFANOS DEL PAÍS COMO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, le fue turnada proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes y de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades incluya a las niñas y niños huérfanos del país como beneficiarios del programa oportunidades, presentado por el Diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 9 de junio de 2010.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 9 de junio del 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. Que en noviembre de 2009, la UNICEF ubicó a México como el segundo país de América Latina en tener niños huérfanos, sólo después de Brasil. Según los datos obtenidos, México posee 1.6 millones de niños huérfanos, desde recién nacidos y hasta los 17 años de edad; 11 mil 75 niños en la República Mexicana se encuentran en estado de abandono, un hecho preocupante que impulsa la urgencia de darle apoyo a este sector tan desprotegido de la Sociedad Mexicana.

2.- Que uno de los principios fundamentales para lograr el óptimo desarrollo de México, es "Promover el desarrollo sano e integral de la niñez Mexicana, garantizando el pleno respeto y aplicación de los derechos otorgados a este sector de la sociedad por nuestra Constitución, a través de la atención a sus necesidades

primordiales como lo son: salud, alimentación, educación, vivienda, e impulsar el crecimiento y desarrollo pleno de sus capacidades", siendo éstos objetivos principales del "Plan Nacional de Desarrollo", contenidos en el objetivo 20 del Eje "Igualdad de Oportunidades".

3. Que es nuestra obligación como legisladores no dejar en el olvido la grave situación de los niños huérfanos en nuestro país, toda vez que en lo dispuesto por los artículos 3, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que "los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para todo su desarrollo integral", en consecuencia, presento este punto de acuerdo para que se contemple el apoyo sustancial y el reconocimiento de los niños huérfanos en el programa "Oportunidades" del Gobierno Federal, para que estos niños a través de dicho programa obtengan una adecuada formación y un óptimo desarrollo, ya que, la niñez es el futuro de México.

Con relación a lo antes citado, y con base el artículo 1°, primer párrafo de la "Ley General de Desarrollo social", establece que la Ley tiene por objeto garantizar, el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados y garantizados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de todos los sectores de la población al desarrollo social.

4. En esta tesitura es necesario señalar que desafortunadamente el objeto del artículo antes citado no se ha sido aplicado, toda vez que a este sector de la sociedad en concreto los niños huérfanos, no se les ha hecho participes de programas sociales para solucionar su desafortunada situación, hecho que también viola lo contenido en el artículo 3, segundo párrafo, de la misma Ley, cita que su política se sujeta al principio de "La Justicia Distributiva" que garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades etcétera; En consecuencia y con base en dicho principio, es imperativo que los niños huérfanos, que también son personas que integran nuestra sociedad, sean agregados al programa "Oportunidades" ya que es un sector sumamente desprotegido y vulnerable en nuestra sociedad.

En el artículo 6 de "La ley General de Desarrollo Social" se establece que algunos derechos para el desarrollo social son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente, y la seguridad social. En consecuencia a los niños huérfanos se les deben garantizar dichos derechos fundamentales y que también están contenidos como garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que mejor manera que incluyéndolos en el programa "Oportunidades" del Gobierno Federal.

5. Así mismo y con base en el artículo 8 de la "Ley General de Desarrollo social" que a la letra enuncia que "toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja". Con base en ello, es indispensable que el programa "Oportunidades" atienda las necesidades y apoye de manera efectiva y pronta las necesidades de los niños huérfanos o en situación de calle, ya que desafortunadamente representan el 15.95% de la proporción total de niños en México, un hecho realmente preocupante, que necesita urgentemente de nuestra atención y pronta solución.

6. Las estadísticas muestran que el porcentaje de niños huérfanos, va en crecimiento. Tan sólo en febrero de 2010 se conoció que diez mil niños quedaron huérfanos a causa de la violencia desmedida que se suscita en Ciudad Juárez. Diez mil niños cuyos padres y madres han sido ejecutados o desaparecidos; es claro que algunos de esos niños ahora son huérfanos, están desamparados sin ninguna oportunidad y sin la posibilidad de que alguien vea por su optimo desarrollo, siendo éste un ejemplo de este sector de la sociedad que queda sin el cobijo de algún programa de Desarrollo Social.

7. Precisamente, según la "Ley para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes", en el articulo 25 se establece que cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta, y

mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre, y para quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este capítulo, mediante:

A. La adopción, preferentemente la adopción plena.

B. La participación de familias sustitutas y
C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.

Aunado a ello, el Estado tiene la obligación de ayudar y brindar los recursos necesarios a niños, niñas y adolescentes que sean privados de su familia, en este caso, niños huérfanos. Es por ello que promuevo la entrada de los niños huérfanos al programa "Oportunidades" para protegerlos de violencia, explotación, trata, trabajos violatorios de la ley, y brindarles una nueva oportunidad para desenvolverse con un óptimo desarrollo. Niños que no cuentan con el apoyo necesario y que a temprana edad trabajan en condiciones verdaderamente deplorables, para poder sobrevivir.

Conjuntamente, en el artículo 14 de la misma Ley, se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes y de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a concluir (SIC) a las niñas y niños huérfanos del país como beneficiarios del Programa Oportunidades.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I. Las niñas y niños son el cimiento humano de una nación, indispensable para su desarrollo y dignidad. Por lo que tienen derecho a una protección integral, especialmente cuando se encuentran en situación especialmente difícil, cual es el caso de los niños huérfanos, cuyo número efectivamente ha ido en incremento, como consecuencia, de las crisis económicas y de seguridad pública, que sufre nuestro país.

A este propósito, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, señala en su Preámbulo:

"Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento"…

"Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración…"

Más adelante, en su artículo 20, esta Convención, establece:

"Artículo 20
"1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar… tendrán derecho a la protección y asistencia
especiales del Estado."

"2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños…"

En nuestro país, es escasa la protección de los niños huérfanos; así en las leyes de seguridad social, se les respalda por medio de las pensiones de orfandad y el otorgamiento de los servicios médicos; sin embargo la inmensa mayoría de las niñas y niños carecen de estas prestaciones, y, además la tutela integral de estos niños huérfanos exige de la instrumentación de otros programas adicionales, que permitan, como expresa el proponente: "…protegerlos de violencia, explotación, trata, trabajos violatorios de la ley, y brindarles una nueva oportunidad para desenvolverse con un óptimo desarrollo….

Por otro lado, como lo señala el proponente, nuestra Constitución Federal, en su artículo 4º. consagra, el derecho general de las niñas y los niños, a su pleno desarrollo, como una obligación que comparte el Estado, en los siguientes términos:

"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral."

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos…"

Por lo anterior, estimamos fundado legalmente, y de elemental justicia el que las niñas y niños sean beneficiarios del Programa Oportunidades. A lo cual dan un mayor respaldo las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social:

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social…"

"Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social…"

"Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:
…
"II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;
"III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

"IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social;

…

"VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias…"

"Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa."

"Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja."

Ratificando todo lo anterior, la Ley para la Protección de los Derechosde Niñas, Niños y Adolescentes, consagra:

"Artículo 1. La presente ley … tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución."

"Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

"Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

"F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad…"

"Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

"C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

"D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos."

Por lo expresado, es pertinente enfatizar lo marcado por el Proponente, en torno al Plan Nacional de Desarrollo:

"Comienzo señalando, que uno de los principios fundamentales para lograr el óptimo desarrollo de México, es "Promover el desarrollo sano e integral de la niñez Mexicana, garantizando el pleno respeto y aplicación de los derechos otorgados a este sector de la sociedad por nuestra Constitución, a través de la atención a sus necesidades primordiales como lo son: salud, alimentación, educación, vivienda, e impulsar el crecimiento y desarrollo pleno de sus capacidades", siendo éstos objetivos principales del "Plan Nacional de Desarrollo", contenidos en el objetivo 20 del Eje "Igualdad de Oportunidades".

Finalmente hay que señalar que la protección integral de los huérfanos del país, permitirá como señalan las "Reglas De Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2010, en su introducción, atacar:

"La desigual distribución del ingreso y la desigualdad en el acceso a oportunidades (que) ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país.

"… impulsar el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos, a través del fomento a la igualdad de oportunidades, y la superación de las condiciones de pobreza y marginación en que vive gran parte de nuestra población…" Destacadamente los huérfanos del país.

Partiendo de todo lo expuesto hasta este punto, esta dictaminadora coincide con el proponente de esta proposición con punto de acuerdo, sobre la necesidad de un apoyo sustancial y el reconocimiento de los niños huérfanos en el programa "Oportunidades" del Gobierno Federal, para que estos niños a través de dicho programa obtengan una adecuada formación y un óptimo desarrollo, ya que, la niñez es el futuro de México.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias correspondientes y de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, incluya a las niñas y niños huérfanos del país como beneficiarios del Programa Oportunidades.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO TANTO FEDERAL COMO LOCALES A INFORMAR SOBRE LOS MONTOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL CON LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y ELECTRÓNICOS, DURANTE SUS RESPECTIVOS MANDATOS.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO TANTO FEDERAL COMO LOCALES, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS MONTOS Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas las proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a cargo de los Senadores Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar acciones y políticas inmediatas para garantizar los derechos de los periodistas y el libre ejercicio de periodismo, a cargo del Senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar sus contenidos, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se citan, fueron presentadas en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo y 9 de junio de 2010, respectivamente.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposiciones de mérito se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Coinciden todos los legisladores que suscriben las proporciones que en este acto se dictaminan en que la violencia contra periodistas es un flagelo que atenta contra la libertad de expresión además de la evidente falta de seguridad con la que los periodistas deben de realizar sus funciones.

En ambas proposiciones se hace referencia a la incapacidad del Estado por garantizar la integridad y seguridad de los que se dedican a informar y que continúa sin adoptar las medidas necesarias para lograr que los hechos de violencia no queden impunes.

II. Los promoventes de la proposición presentada el 6 de mayo señalan que las cifras de los informes de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales respecto de los delitos cometidos contra periodistas no coinciden con las que reporta la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas.

Sostienen que la sociedad necesita conocer de la propia voz de los funcionarios, los avances y resultados que se han logrado en la materia, por lo que solicitamos la comparecencia del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, para que informe personalmente sobre el desempeño de la Fiscalía, manifestando a detalle los aspectos que se involucren con su función y por ello en concreto proponen lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Dr. Gustavo Salas Chávez, remita un informe detallado sobre las agresiones y homicidios cometidos contra periodistas en nuestro país, como un acto previo a su comparecencia ante esta representación soberana, para tratar éste y otros asuntos relacionados con la materia.

III. Por su parte, la proposición presentada el 9 de junio además señala que, la asignación de la publicidad gubernamental se ha utilizado para premiar o castigar a los medios de comunicación en México. Ha sido un recurso por parte de gobiernos para inhibir la libertad de expresión de aquellos órganos críticos u opuestos a sus políticas; o, por el contrario, para recompensar a las empresas de comunicación afines a sus programas. Sostiene pues que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibida por la ley.

Frente a esta situación de insuficiencia institucional, es urgente que a través de acciones inmediatas, el Estado mexicano establezca para las libertades de expresión y de imprenta y el derecho a la información, un régimen especialmente reforzado de garantías y de un estatuto legal especial.

Considera el legislador que al mismo tiempo deben adoptarse políticas concretas para garantizar y facilitar el ejercicio libre de las tareas de promoción y protección de los derechos de los periodistas, así como del ejercicio legítimo del derecho a informar en el país, de conformidad con las obligaciones y compromisos adoptados en el ámbito nacional e internacional.

Además, continúa, en el ámbito de los órganos federales de procuración de justicia es preciso instrumentar dos medidas urgentes. Una, otorgar plena autonomía técnica a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dotándola de las facultades suficientes y de la infraestructura y los recursos humanos y materiales que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones con prontitud y eficacia.

La otra, que al frente de esta Fiscalía, se designe a un Fiscal Especializado que sea nombrado en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y tenga el nivel de Subprocurador.

Finalmente, en este contexto social de gran riesgo que viven los periodistas, para el promovente resulta igualmente inaplazable instrumentar institucionalmente la creación de un verdadero Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales.

El objetivo del Programa debe consistir en desarrollar las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información que se encuentren en riesgo por causas relacionadas con violencia política, ideológica o del crimen organizado.

En concreto propone lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instrumente las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que otorguen plena autonomía técnica a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dotándola de las facultades suficientes y de la infraestructura y los recursos humanos y materiales que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones.

Asimismo, para que al frente de esta Fiscalía, se designe a un Fiscal Especializado que sea nombrado en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el nivel de Subprocurador.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya la creación de un verdadero Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, en el objetivo de desarrollar las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información que se encuentren en riesgo por causas relacionadas con violencia política, ideológica o del crimen organizado.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que informe a esta soberanía sobre los montos y criterios de asignación y contratación de publicidad gubernamental con los distintos medios de comunicación escritos y electrónicos, durante el presente sexenio.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ciudadano Procurador General de la República para que presente un informe público y detallado de las investigaciones y actuaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas durante el presente sexenio.

IV. Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de los proponentes por la situación de inseguridad y de falta de garantías en la que se encuentran aquellas personas que se dedican a informar y a reportar la realidad de nuestro país.

Sabemos lo importante que es para el desarrollo de cualquier democracia tanto la libertad de expresión como el acceso a la información y que la ausencia de resultados para descubrir a los responsables y procurar justicia, por parte de las autoridades, genera un mensaje de que no hay espacio ni tolerancia para las disidencias, ni para la denuncia de actos ilegales; y, por tanto, constituye una forma de censura previa, inadmisible en un Estado que se pretende democrático.

V. Compartimos también la inquietud de reorganizar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y de crear un programa que atienda las urgentes necesidades de protección a la labor periodística y de que dicha Fiscalía informe de la situación que guardan los asuntos para los que fue creada.

Es por ello que esta Comisión dictaminó y el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó el 2 de junio el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República a que, en uso de sus atribuciones legales, someta a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, las

modificaciones reglamentarias pertinentes para el cambio de adscripción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, con la finalidad de que ésta cuente con nivel de Subprocuraduría y goce de plena autonomía.

Y en su sesión del 9 de junio, el Pleno aprobó lo siguiente:

PRIMERO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la labor de todas aquellas personas que desarrollan labores periodísticas, de información o comunicación y expresa su mayor preocupación por el incremento en el número de delitos cometidos en contra de periodistas

SEGUNDO. La H. Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a las autoridades estatales y municipales a otorgar las garantías indispensables para el ejercicio de las labores periodísticas, de información o comunicación en todas las entidades de la República e implemente los programas, acciones o mecanismos que resulten necesarios para tal fin.

TERCERO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Procurador General de la República, envíe informe en relación con las actividades desarrolladas por la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que contenga el número de averiguaciones previas, la naturaleza de los delitos por los que fueron iniciados, en el momento procesal en que se encuentran así como el número de procesados y sentenciados por estos delitos.

Con ello, esta dictaminadora considera que se da cumplimiento a varios de los objetivos que persiguen la proposiciones que se dictaminan y queda a la espera de que los entes mencionados en los resolutivos aprobados atiendan las solicitudes de esta Soberanía.

VI. Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide con lo planteado en una de las proposiciones de la importancia de transparentar el uso de recursos públicos destinados a la comunicación social ya que las relaciones entre los poderes públicos y los medios que se establecen con motivo de la publicidad institucional deben regirse por los principios de objetividad, equidad, la transparencia e igualdad de oportunidades.

Sin embargo, creemos necesario conocer el monto y los criterios de asignación de la contratación de publicidad gubernamental no solamente del Ejecutivo Federal, sino de todos los estados de la Federación.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo tanto Federal como locales, para que informen a esta soberanía sobre los montos y criterios de asignación y contratación de publicidad gubernamental con los distintos medios de comunicación escritos y electrónicos, en durante sus respectivos mandatos.

Salón de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE CONGRATULA Y ENVÍA UNA CORDIAL FELICITACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN OCASIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo por el que se envía una felicitación y se hace un reconocimiento por su labor a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su vigésimo aniversario, a cargo del Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 9 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Sostiene el legislador promovente que la creación del ombudsman en México ha significado un avance histórico en la protección de los derechos humanos en nuestro país.

El 6 de junio de 1990, relata, nació la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado, posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Finalmente, continúa, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta última reforma constituye un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

Para el autor de la presenta proposición de mérito, los organismos públicos de derechos humanos, representan la evolución cultural que ha tenido nuestra incipiente democracia, ya que conforman la construcción democrática que ha crecido a la par de estos organismos que representan la madurez de nuestra sociedad.

La investigación y difusión de violaciones a derechos humanos que han venido realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin duda ha contribuido a la toma de conciencia, disminución en la frecuencia de las violaciones y el combate a la impunidad.

La autonomía que goza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es resultado de un largo proceso de las convicciones democráticas de la sociedad.

En materia de protección a los derechos humanos es necesario reconocer que aún existe un camino largo por recorrer, ya que en 20 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 2 mil 073 recomendaciones, de las cuales el 20 por ciento no se han cumplido y el 10 por ciento no han sido aceptadas.

Es por ello finaliza, que cobra vigencia la discusión que mantenemos en el Congreso de la Unión respecto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que permitiría que las recomendaciones de la CNDH se cumplan con mayor agilidad y que en caso contrario, exista una explicación por parte de las autoridades responsables.

En concreto propone el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se congratula y envía una cordial felicitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ocasión del Vigésimo Aniversario de su creación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su importante contribución a la construcción nacional y al mismo tiempo, se le exhorta a redoblar esfuerzos y fortalecer sus acciones como defensor de la ciudadanía ante los abusos del poder.

II. Para llegar a la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuestro país tuvo que recorrer un largo camino de creación de instituciones de protección de los ciudadanos como la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, creada en Nuevo León en 1983 o la Defensoría de los Derechos Universitarios, de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985.

El antecedente directo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la creación, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría.

Finalmente por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, este organismo se modificó para convertirse en la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos con plena autonomía de gestión y presupuestaria. Con esta reforma se le permitió defender y proteger los derechos humanos de todos los mexicanos frente a los abusos del poder.

Si bien se ha avanzado en la defensa de los derechos humanos, existen todavía una cantidad muy importante de violaciones a las garantías y prueba de ello son la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en nuestro país, el trato que reciben los migrantes que están en tránsito en territorio nacional, las redes de trata de personas y de prostitución infantil que sobreviven al amparo de la autoridad, solo por mencionar algunas conductas contrarias a los principios más elementales de la protección y la garantía de los derechos humanos.

Por ello, el Senado de la República aprobó una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros temas, incluye el deber constitucional de los servidores públicos de dar respuesta a sociedad mexicana cuando no aceptan las recomendaciones de la CNDH o cuando las aceptan y no las cumplen.

La facultad de investigación que se transfiere de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la CNDH permitirá que ninguna autoridad niegue información al Organismo nacional para determinar si hubo violaciones a derechos humanos así como dar seguimiento a denuncias y evitar la impunidad.

Celebramos sin duda el vigésimo aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no por ello dejamos de estar vigilantes a las violaciones de los derechos humanos y a la falta de garantías y abusos de poder y por ello suscribimos la proposición de mérito que en este acto se dictamina.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se congratula y envía una cordial felicitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ocasión del Vigésimo Aniversario de su creación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su importante contribución a la construcción nacional y al mismo tiempo, se le exhorta a redoblar esfuerzos y fortalecer sus acciones como defensor de la ciudadanía ante los abusos del poder.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

EN TORNO A LAS BARRANCAS EN EL DISTRITO FEDERAL.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PUBLICAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE 21 BARRANCAS EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL DIPUTADO REFAEL PACCHIANO ALAMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**.**

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a publicar y ejecutar los programas de manejo de 21 barrancas en el Distrito Federal, el pasado miércoles 16 de junio a cargo del Diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente en 16 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en su Exposición de Motivos que:

“Las barrancas se definen como depresiones naturales originadas por el fracturamiento del terreno o por una erosión provocada por ríos y escurrimientos. Ellas reúnen los elementos naturales necesarios para aportar diversos servicios ambientales; se estima que en el Distrito Federal existen 2,290 Km de escurrimientos superficiales asociados a barrancas1 cuya función es estratégica para la captación e infiltración del agua.

Las barrancas son principalmente áreas de recarga del acuífero, a través de las cuales se infiltra agua pluvial al acuífero del Valle de México, ya que las copas de los árboles que se encuentran en las barrancas interceptan la precipitación pluvial y hacen que descienda bajo la superficie del suelo, incrementando con esto la infiltración, disminuyendo los cursos de agua superficiales así como la erosión del suelo.

Además de la captación, a las barrancas también se les asocia con la regulación del clima –ya que no sólo interceptan la precipitación pluvial sino que la incrementan- y la presencia de árboles y arbustos facilita que las barrancas conserven por más tiempo la humedad existente, lo que deriva en la regulación de las condiciones térmicas de la Ciudad de México.

A estos beneficios se añaden los siguientes: filtración del viento por la retención de partículas en las copas de los árboles, retención de bióxido de carbono y modificación de la velocidad del viento.

Actualmente, un gran número de las barrancas del Distrito Federal se encuentran amenazadas por la realización de diversas obras y actividades que originan afectaciones que ponen en riesgo la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México; la mayoría de las barrancas urbanas presentan daños en su infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, la presencia de abundante basura, descargas domiciliarias a cielo abierto, zonas de alto riesgo sin cubierta vegetal y fuertes problemas de contaminación que atentan a la salud pública.

De acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 5°, las Áreas de Valor Ambiental (AVA) son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; Esta misma Ley indica que las barrancas y los bosques urbanos del Distrito Federal son Áreas de Valor Ambiental, siendo la Secretaría del Medio Ambiente la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo.

Empero, es primordial que dichas áreas cuenten con el decreto correspondiente que delimitará el polígono verde en un contexto urbano, toda vez que decretada el AVA, derivarán los Programas de Manejo y las acciones de preservación que orientarán la realización de obras y actividades compatibles con la vocación natural de las barrancas.

Las limitaciones y modalidades establecidas en las Áreas de Valor Ambiental como los usos, reservas, provisiones, destinos y actividades **son de utilidad pública** y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las mismas. En consecuencia, el ejercicio del derecho de propiedad de posesión y cualquier otro derivado de la tenencia de la tierra de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y modalidades.

Los particulares solo podrán realizar actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable y controlado de recursos naturales, investigación y educación ambiental, recreación y ecoturismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 93 bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

De otro modo, las Áreas de Valor Ambiental tenderán a desaparecer devoradas por la expansión de la mancha urbana y la política ambiental servirá para enmascarar el desarrollo inmobiliario depredador, que ha prevalecido en nuestro país.

La Agenda Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 2007 -2012 propone para su preservación, un programa de conservación y restauración de áreas verdes urbanas que prevé lo siguiente:

F) Gestión para el decreto de 33 barrancas como áreas de valor ambiental. La meta para esta administración es dejar consolidado el sistema de gestión de barrancas del poniente de la ciudad a través de la declaratoria como áreas de valor ambiental de 33 sistemas, lo que representa aproximadamente 50% de la meta total del proyecto. Esta figura protegerá estas zonas estratégicas de crecimiento urbano, contaminación e, incluso, permitirá la restauración del área y los servicios ambientales que aportan.

La Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal Martha Delgado, ha expresado que:

"*… planear y decretar 33 barrancas como áreas de valores ambientales, la primera de ellas la Barranca Tarango, corresponde a una estrategia para hacer autosuficiente al Distrito Federal en el manejo de este recurso vital. El Valle de México es un vaso aluvial que se forma por actividad volcánica y que la acumulación de los volúmenes de nuestros acuíferos le tomó a esta cuenca 600 mil años cuando se cerró la cuenca. Al extraer esa agua en los últimos 50 años, las arcillas han perdido volumen, se han compactado y han generado lo que también conocemos como un problema de hundimientos diferenciales, afectando la infraestructura pública, la vivienda los edificios, el equipamiento urbano con altos costos de mantenimiento. […]Por eso esta es una estrategia de enorme relevancia tanto económica como de autosuficiencia hídrica de mantenimiento de nuestra propia infraestructura hidráulica para la ciudad y por supuesto es una estrategia para tener un microclima apropiado en la Ciudad de México y mejorar el medio ambiente*".

Ante el inminente riesgo de la sustentabilidad de la ciudad por escasez de agua y la insoslayable importancia de las áreas de valor ambiental, nos permitimos exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a continuar con el proceso para la declaratoria de las 21 barrancas4 que la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías de la misma Secretaría tenía programadas para el año 2009 y proceder a la publicación y ejecución de los Programas de Manejo correspondientes.

En la medida en que se instauren las medidas de restauración y aprovechamiento sustentable de las Áreas de Valor Ambiental, avanzaremos hacia un modelo de desarrollo sustentable congruente, para lo que la Secretaría de Medio Ambiente deberá gestionar los recursos necesarios para la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo correspondientes."

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a continuar con el proceso para la declaratoria de las 21 barrancas que la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías de la misma Secretaría tenía programadas para el año 2009 y proceder a la publicación y ejecución de los Programas de Manejo correspondientes.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a etiquetar recursos presupuestales para el ejercicio fiscal 2011 destinados a la elaboración y publicación de los 21 programas de manejo determinados para barrancas.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

V. Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación con 87 mil 294 hectáreas de las cuales alrededor de 50 mil son de aptitud preferentemente forestal, que representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la ciudad de México. Sin embargo esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.

VI. El principal sistema de barrancas del Distrito Federal se encuentra en las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, una buena parte del territorio de estas demarcaciones está situado en el suelo de conservación; así, el 85 por ciento de la superficie de las barrancas se encuentra dentro del suelo de conservación y el 15 por ciento restante en suelo urbano.

VII. La Ley Ambiental del Distrito Federal define en su artículo 5º. a las "*barrancas: como una depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geológicas, se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes de ciclo hidrológico y biogeoquímico.*"

VIII. La problemática general de las barrancas se circunscribe fundamentalmente a:
1. Creciente deterioro ambiental de las barrancas.
2. Marco jurídico disperso, que provoca incertidumbre en la gestión de las barrancas.
3. Problemas de coordinación entre autoridades ambientales de los 3 ámbitos de gobierno.

IX. Las barrancas en el Distrito Federal se encuentran frecuentemente invadidas y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre éstas. Aunque de manera notable todavía existen aguas limpias en los en las partes altas de diversas barrancas, posteriormente presentan las aguas de éstas, severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce. Por ello, las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce de las aguas las barrancas comprometen su supervivencia. De ahí la necesidad de actuar de manera pronta e integral para lograr su plena rehabilitación, que es todavía posible. Su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo.

X. La Ley de Aguas Nacionales, en la fracción XLVII de su artículo 3o., establece que la ribera o zona federal corresponde a la faja de 10 metros de anchura, contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel agua máxima ordinaria y la amplitud de la ribera será de 5 metros.

XI. La citada ley establece en la fracción IV de su artículo 113, que la administración de la zona federal contigua a los cauces de las corrientes de propiedad nacional quedará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

XII. En su artículo 117 de la misma Ley de Aguas Nacionales se señala, que la CONAGUA podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas o municipios, o, en su caso, con los particulares interesados, por asignación o por subasta pública, que éstos se hagan cargo de la custodia, conservación y mantenimiento de las zonas federales de corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, en las porciones comprendidas dentro del perímetro de las poblaciones

XIII. En todo caso, debido que en las barrancas hay cauces y éstos pueden llevar agua, la CONAGUA, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, debe de regular el uso y el aprovechamiento de las aguas, además de la infiltración para la recarga de los mantos acuíferos, evitar que la basura o desechos materiales y sustancias tóxicas, lodos, producto de las actividades humanas contaminen las aguas superficiales o del subsuelo, y los cauces de los corrientes de aguas nacionales, y en los demás casos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

XIV. Por lo anterior, existen responsabilidad en el manejo de las barrancas del Distrito Federal, no solo del Gobierno del Distrito Federal a través de su Secretaría de Medio Ambiente, sino también del orden federal. Las instancias federales que tienen que ver con este asunto son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Agua, ambas organismos sectorizados en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, y la Procuraduría General de la República.

XV. No debe omitirse, que tanto en las discusiones de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2009 y 2010 se han presentado diversos proposiciones con Puntos de Acuerdo en la Cámara de Diputados, para que se destinen recursos con el objeto de atender adecuadamente la recuperación

de ríos y barrancas del Distrito Federal, ya que no solo existe una responsabilidad compartida entre el orden de gobierno local y federal, sino que también sólo la suma de recursos públicos de ambos ordenes, puede posibilitar la atención optima de su problemática.

En consecuencia, esta dictaminadora considera, que la problemática de las barrancas del Distrito Federal, requieren una atención más integral, que rebasa el proceso de declaratoria de Áreas de Valor Ambiental, por ello se considera solicitar, respetuosamente al Gobierno Federal su participación en la conservación y rescate de las barrancas del Distrito Federal.

Igualmente se debe señalar, y citado por el propio promovente, que la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal tiene programada de manera oficial conforme a la Agenda Ambiental decretar como meta hacia el 2012, lograr la declaratoria de 33 barrancas como áreas de valor ambiental, por lo que esto debe ser el objetivo propio del Acuerdo del promovente.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a continuar con el proceso para la declaratoria como Áreas de Valor Ambiental de las 33 barrancas, conforme a su Agenda Ambiental 2007-2012, y proceder a la publicación y ejecución de los Programas de Manejo correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a etiquetar recursos presupuestales para el ejercicio fiscal 2011 destinados a la elaboración y publicación de los 33 Programas de Manejo de las barrancas declaradas como Áreas de Valor Ambiental.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal a realizar, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, un programa de conservación y de rescate de las barrancas del Distrito Federal, que contribuya a garantizar su conservación y rescate.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y crédito Público, para que consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos para la conservación y rescate de las barrancas del Distrito Federal.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR Y RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA INJERENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA CUENCA DE BURGOS, SOBRE TODO EN EL POZO DENOMINADO "GIGANTE UNO".

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDO EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLITIA AL DIRECTOR DE PEMEX INFORMACIÓN RELATIVA A LA INJERENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA CUENCA DE BURGOS.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar y rendir un informe detallado sobre la injerencia del crimen organizado en la Cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado "Gigante Uno"

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 16 de junio de 2010, el Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

II. En la fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición antes relacionada se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En sus consideraciones, el legislador autor de la proposición que se dictamina recuerda que, según información difundida por un importante medio de comunicación, desde el pasado 23 de mayo un comando del crimen organizado mantiene la posesión forzada de un importante pozo de gas en la Cuenca de Burgos denominado "Gigante Uno", ubicado en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.

Esa acción ilegal incluye, informa el legislador, el secuestro de cinco trabajadores petroleros (Saúl García, Anselmo Teodosio Sánchez, Christopher Adán Cadena, Mario Zúñiga y Martín Franco), el robo de bienes de Pemex y de las compañías extranjeras que prestan sus servicios, así como el saqueo de condensados líquidos de gas natural pertenecientes a la Paraestatal mexicana.

El legislador evoca, para fundar su preocupación, que sucesos semejantes han tenido lugar en otras naciones, como Nigeria y Colombia, en las cuales el Estado perdió durante algún momento su capacidad para resguardar y explotar los recursos energéticos. A lo que se suma la importancia de resguardar el sector petrolero, pues se trata de un área estratégica para el impulso y dinamismo del sistema económico nacional.

Por ello, el autor considera imperativo que las autoridades federales investiguen y den a conocer lo que realmente esta ocurriendo en aquella zona geográfica.

Por lo cual, la proposición de mérito propone al pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la emisión del siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos, a fin de que se investigue y rinda un informe detallado sobre la injerencia del crimen organizado en la Cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado Gigante Uno.

II. Los legisladores que conformamos esta comisión dictaminadora tenemos conocimiento del evento que reseña el autor de la proposición bajo dictamen, a través de los mismos medios de comunicación.

Abundando en lo dicho por el proponente, en efecto, el pasado 10 de junio un diario de circulación nacional difundió una nota titulada "Miembros del crimen organizado mantienen secuestrados a cinco trabajadores de PEMEX, denunciaron familiares de las víctimas", en la cual informa que "desde el 23 de mayo uno de los pozos de la Cuenca de Burgos, el Gigante Uno, en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, se encuentra bajo el control de un comando armado".

Afirma la nota periodística que la paraestatal Petróleos Mexicanos se niega a ofrecer información al respecto, pero que "se sabe que esos pozos y estaciones de recolección son los más productivos de la zona", siendo que tales instalaciones generan gas líquido no asociado.

También establece que cinco empleados fueron secuestrados, según denuncia de sus familiares, a quienes atribuye el señalamiento de que "ni el Ejército ha podido entrar" y que las autoridades de la paraestatal están enteradas y se han negado a pagar el rescate que los captores piden por la liberación de los retenidos.

La nota finaliza dando a conocer los nombres de los trabajadores que se encuentran retenidos.

Además de la información anterior, otros rotativos e, incluso, agencias de noticias aseguran que la presunta toma del pozo petrolero se inscribe en la escalada que en los últimos meses ha tenido la actividad delictiva relacionada con el robo y venta de combustibles.

De tal gravedad es tal ilícito, que el pasado 7 de junio la empresa paraestatal presentó una demanda en la Corte Federal de Distrito en Houston, Texas, en un intento por frenar el mercado ilícito de combustible mexicano.

La demanda es resultado de una investigación realizada por Pemex en colaboración con el gobierno norteamericano, de la cual derivan indicios de complicidad de algunas empresas que operan en el vecino país, como BASF Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum Inc., Valley Fuels y US Petroleum Depot, Inc. las cuales han participado y alentado el tráfico ilícito en territorio norteamericano de petrolíferos robados en nuestro país.

Según informó la propia petrolera mexicana, la demanda "deja clara la forma cómo la delincuencia organizada utiliza la amenaza contra los trabajadores de Pemex Exploración y Producción para sustraer de las instalaciones de almacenamiento o mediante el secuestro de camiones de transporte, para posteriormente pasar de contrabando el condensado a Estados Unidos, en donde es adquirido por diversas empresas".

III. Por otra parte, el pasado 24 de junio, durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente, el C. Juan José Suárez Coppel, Director General de Petróleos Mexicanos, confirmó la situación delicada que se vive en la Cuenca de Burgos por la acción de grupos de delincuencia organizada en dicho territorio, que acechan al personal de la paraestatal y le causan detrimento mediante el robo de combustibles, amenazando seriamente la operación de Pemex en el norte de Tamaulipas y Nuevo León.

El servidor público fue enfático al afirmar que en ningún momento fue tomado el pozo Gigante 1, aunque confirmó la presunta privación de la libertad de cinco trabajadores de la empresa.

Respecto de esos hechos, el C. Carlos Morales Gil, Director General de Pemex Exploración y Producción, expresó lo siguiente:

"… en la zona norte del Estado de Tamaulipas, parte también del norte de Nuevo León, se ha venido viviendo una serie de circunstancias complicadas para operar. En ocasiones de bloquea, no se toman las instalaciones, no se ha llegado a esa situación, pero sí se ha llegado a impedir el paso de las personas que van a trabajar a algunas instalaciones, e incluso, digamos, se ha privado de la libertad también a algunos personas, como ya mencionó el señor director.

"En el caso de PEMEX hay cinco personas que tienen ya más de un mes que no se tienen noticias de ellas. Hay también personal de empresas que trabajan para PEMEX, que también han sido privados de su libertad por estos grupos, de tal manera que más que la toma de una instalación, como ya mencionó el director, se trata de impedir el acceso a alguna área importante del estado, donde llevamos a cabo nosotros el desarrollo de los proyectos."

Por último, el C. Suárez Coppel, expuso que han tenido contacto con las autoridades correspondientes, de la que han obtenido apoyo. Incluso, afirmó la existencia de convenios con el Ejército y con Marina, quienes también están trabajando en el tema.

Al final, la Senadora María Serrano Serrano solicitó al titular de la paraestatal petrolera remita a este órgano legislativo federal, por escrito, información relativa a la problemática del robo de gasolina, petróleo y gas – caso, éste último, alarmante, ante las notas periodísticas que aseguran una sangría a Pemex por aproximadamente 850 mil toneladas al año.

Al respecto, la legisladora especificó que el contenido del informe debe señalar las "denuncias en los últimos dos años se han presentado sobre estos robos e incluso sobre los fraudes que se han hecho para mermar el patrimonio de Petróleos Mexicanos" y, de éstas, cuántas han procedido y qué consecuencias han generado. Además, la Senadora Serrano solicitó que el informe aborde los controles y demás medidas tomadas para evitar los problemas de robo y de fraude.

IV. A igual que los legisladores que promovieron el punto de acuerdo bajo discusión y entrevistaron al Director General de Pemex, Esta Primera Comisión externa su preocupación frente al creciente fenómeno del robo de combustibles a la industria petrolera nacional, pues además de alimentar el grave fenómeno delictivo que se vive en nuestro país, se diezma el patrimonio de Petróleos Mexicanos, puntal importante para el mantenimiento de las finanzas públicas y el desarrollo mexicano.

Ahora bien, en específico, los hechos a que alude el autor de la proposición y los reseñados por la propia empresa paraestatal resultarían, en caso de verificarse, constitutivos del delito de robo de hidrocarburos o sus derivados, tipificado en el artículo 368 quater del Código Penal Federal, mismo que se persigue por querella

necesaria que interponga la propia empresa paraestatal. Ilícito que parece perpetrarse bajo el calificativo de delincuencia organizada.

Además de ello, conforme a las declaraciones reseñadas están presente también delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, materia que compete conocer al órgano ministerial federal.

Por ello, esta dictaminadora considera que, en todo caso, respecto de los puntos resolutivos de la proposición que se dictamina, sería prudente realizar una solicitud de información sólo a la paraestatal Petróleos Mexicanos, para efecto de obtener datos que confirmen o rechacen la actualización de los hechos que informa el proponente y de las denuncias que, en su caso, se hubieran levantado por la empresa ante la autoridad ministerial, dejando a salvo la reserva de información que el Ministerio Público tendría que anteponer a este órgano legislativo federal, respecto de las averiguaciones abiertas entorno al caso.

Sin embargo, como ha quedado de manifiesto en el considerando anterior, este órgano legislativo federal ya ha realizado una petición de información exactamente en los términos señalados al titular de la empresa paraestatal de referencia, restando solamente esperar una respuesta suficiente a dichas posiciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Por haberse cumplido su objetivo específico, se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar y rendir un informe detallado sobre la injerencia del crimen organizado en la Cuenca de Burgos, sobre todo en el pozo denominado “Gigante Uno”.

Hágase el presente dictamen del conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para efecto de dar por concluido el procedimiento relativo a la proposición de métrico y se descargue de los asuntos pendientes de resolución en esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS ESPECIALES A QUE EN TODOS LOS PROGRAMAS ESPECIALES, CORTES INFORMATIVOS Y CADENAS NACIONALES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE INCLUYA UN RECUADRO CON UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS O EL SISTEMA DE SUBTÍTULOS O CLOSE CAPTION.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ORDENAR AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS ESPECIALES A QUE EN TODOS LOS PROGRAMAS ESPECIALES, CORTES INFORMATIVOS Y CADENAS NACIONALES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE INCLUYA UN RECUADRO CON UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS O EL SISTEMA DE SUBTÍTULOS O CLOSE CAPTION.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, le fue turnada para su análisis, discusión y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal a ordenar al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del Presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption, suscrita por la diputada Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 16 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada Claudia Anaya expone en las consideraciones que:

1. El derecho a la información pública de 1,570,000 personas con discapacidad auditiva se están violando al no tener acceso a la información que se difunde en los mensaje del Titular del Poder Ejecutivo ya que existen diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Artículo 6o. *…* ***El derecho a la información será garantizado por el Estado****.*

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.***

2. En el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se señala que se considera como conducta discriminatoria restringir el acceso a la información.

3. El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 2008 en México, señala que nuestro país como Estado Parte de la Convención, se compromete a: " *a)* ***facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna*** *y sin costo adicional,* ***en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad***;*…"*

4. El Centro de Producción de Programas Informativos Especiales- CEPROPIE- es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que de acuerdo con el artículo 36, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría; el Centro tiene como objetivos generales documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación, y atender las demandas de producción, realización de programas informativos y especiales que le sean solicitados por la Presidencia de la República, sectores público y privado…"

5. Finalmente, y de manera comparativa la promovente establece que en Chile, Colombia y el Perú los mensajes de los titulares de los ejecutivos se apoyan con un intérprete de lengua de señas.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal a ordenar al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del Presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I. Esta Primera Comisión considera que es absolutamente cierto que mientras la información pública en general sea omisa en adoptar disposiciones para que las personas con discapacidad accedan a ella, se falta a las más elementales garantías constitucionales que consagran el derecho a la información como derecho fundamental de nuestro pueblo.

II. Esta dictaminadora considera que además de las disposiciones jurídicas que invoca la diputada promovente, la ley reglamentaria del artículo 6 Constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, refuerzan el sustento jurídico de su propuesta, al señalar en los artículos 1 y 2:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público. ***Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.***

Artículo 2. ***Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública*** *y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.*

III. También la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, en su artículo 27, fracción XXVII, competencia de la Secretaría de Gobernación, establece:

*XXVII. Formular, regular y c****onducir la política de comunicación social del Gobierno Federal*** *y las relaciones con los medios masivos de información.*

IV. Esta Comisión dictaminadora manifiesta que es oportuno recordar el compromiso suscrito por el Senado de la República, en representación del Poder Legislativo de la Nación, al dictaminar a favor de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que le turnó el Titular del Ejecutivo Federal.

V. Esta dictaminadora considera que existen las condiciones legales y administrativas propicias para que la proposición de la diputada promovente se lleve a cabo en las instancias competentes señaladas por ella.

En consecuencia, se considera oportuno pronunciarse a favor de la proposición, para que las instancias competentes realicen las gestiones y acciones necesarias para que en los próximos mensajes presidenciales, como el Informe de Gobierno u otros cortes informativos ya vayan acompañados de un medio que les permita a las personas sordas saber lo que se está informando, en abono al mejoramiento de nuestra ciudadanía, a la cultura social incluyente y por tanto a la calidad de nuestra democracia.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del Presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de junio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE SI LEGISLADORES DE LA LXI LEGISLATURA HAN SIDO SEÑALADOS COMO BENEFACTORES O PROTECTORES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE ACUERDO A UNA PUBLICACIÓN DE CIRCULACIÓN NACIONAL EN SU EDICIÓN DEL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACTUACIONES E INVESTIGACIONES JUDICIALES EN CURSO EN RELACIÓN A CUALQUIERA DE LOS LEGISLADORES Y LAS LEGISLADORAS QUE CONFORMAN LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN**.**

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la procuraduría general de la república, que informe a esta soberanía sobre las actuaciones e investigaciones judiciales en curso en relación a cualquiera de los legisladores y las legisladoras que conforman la LXI legislatura del Congreso de la Unión, del Diputado Armando Ríos-Piter del Grupo Parlamentario del PRD**,** el pasado miércoles 16 de junio.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 16 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. En la portada del número 1754 de la Revista Proceso, publicada el domingo 13 de junio del presente, se enmarca con una fotografía del salón de plenos del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda de “El Narco en el Congreso” y en sus páginas interiores, de la 10 a la 14, publica 18 fotografías de los 21 diputados y diputadas que según sus fuentes y documentos tienen alguna implicación con el crimen organizado. Aclara el semanario que “en diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de

recibir financiamiento del narcotráfico.”

2. Se asevera que sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado y que la revista en comento investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales.

3. La misma revista aclara que aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, sólo se da cuenta de los casos que logró documentar.

4. Del PRI mencionan a los diputados Alejandro Cano Ricaud, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Hugo Héctor Martínez González, Arturo Zamora Jiménez, Jorge Arana Arana, Rogelio Cerda Pérez, Felipe Cervera Hernández, Fabiola Vázquez Saut, Maria Estela de la Fuente Dagdug; del PAN mencionan a Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Humberto Benítez Treviño, Leonardo Arturo Guillén Medina, César Octavio Madrigal Díaz, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Valdemar Gutiérrez Fragoso y del PRD mencionan al diputado César Burelo Burelo y a Armando Ríos-Piter.

5. Ante la publicación de la Revista Proceso, el proponente refiere que tanto él como el diputado César Burelo Burelo convocaron el lunes 14 del presente a una conferencia de prensa, en donde solicitaron formalmente ala Procuraduría General de la República que aclare cual es el status que guardan sus expedientes si es que los hubiere, porque temen que con estas imputaciones pudieran luego ser detenidos y privados de sus derechos ciudadanos y políticos, estando en vísperas de participar en procesos de selección de candidatos para elecciones estatales venideras, como ya ha sucedido últimamente con otros actores políticos.

6. El proponente manifiesta, finalmente, que a lo largo de 15 años de servicio público se ha conducido con honestidad y rectitud, y que no acepta que se manche su honor y que se le difame con ligereza.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República, que informe a esta soberanía sobre las actuaciones e investigaciones judiciales que tiene en relación a cualquiera de los legisladores y las legisladoras que conforman la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

XVI. Nos parece sumamente delicado el material publicado en la Revista “Proceso” ya que hace señalamientos e imputaciones muy graves que de no estar debidamente documentadas lesionan la honorabilidad de los legisladores integrantes de la LXI legislatura del H. Congreso de la Unión y ponen en entredicho la protección que les brinda el artículo 61 constitucional.

XVII. Se reconoce la asimetría de los datos aportados en cada uno de los casos a que se refiere la Revista, y de ello se desprende que con elementos desiguales, se genera un daño grave en la imagen de los legisladores implicados y de igual magnitud para cada uno de los implicados.

XVIII. Es inquietante el hecho de que ya ha habido detenciones fundadas en órdenes de aprehensión que se derivan de llamadas anónimas y de declaraciones de testigos y de testigos protegidos, y que estas detenciones e incluso encarcelamientos han privado obviamente de derechos políticos a los implicados.

XIX. Es evidente que el proponente es un legislador que ve amenazada su perspectiva de poder participar en la contienda constitucional próxima a desarrollarse en su entidad y que reclama de las autoridades seriedad en su actuación y el esclarecimiento de la citada publicación sobre las imputaciones ahí referidas.

XX. Esta dictaminadora después de analizar la proposición que nos fue turnada, y la gravedad de sus implicaciones, y de observar que en el caso del proponente, la publicación refiere que: "Armando Ríos Piter, legislador perredista conocido como El Jaguar, es considerado el delfín del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca. La prensa le augura el triunfo, en ausencia de precandidatos que le hagan sombra, como podría haber sido el expresidente del Congreso local, Armando Chavarría, ejecutado en agosto pasado" nos parece que esta información así como otras informaciones vertidas sobre otros legisladores en la misma revista, no es suficiente ni probatoria para vincularlos a ninguna actividad criminal.

XXI. Se reconoce la necesidad urgente de aclarar la situación jurídica del proponente, como él mismo lo solicita y la de todos los legisladores implicados por ser esto interés general del Congreso de la Unión, representando en esta Comisión Permanente.

En consecuencia, esta dictaminadora considera oportuno solicitar, respetuosamente a la Procuraduría General de la República, le informe si en documentos en su poder han sido señalados los legisladores de la LXI Legislatura mencionados en las consideraciones del presente punto de acuerdo como benefactores o protectores de la delincuencia organizada, tal y como lo afirma la Revista "Proceso".

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, le informe si en documentos en su poder han sido señalados los legisladores de la LXI Legislatura mencionados en las consideraciones del presente punto de acuerdo como benefactores o protectores de la delincuencia organizada, de acuerdo a una publicación de circulación nacional en su edición del 13 de junio del presente.

Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A ATRAER Y RESOLVER CONFORME A DERECHO, EL RECURSO DE QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CDHEC/004/09, INTERPUESTO POR LA C. MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA, DERIVADO DE LA INACTIVIDAD Y DESATENCIÓN DE LAS INSTANCIAS ESTATALES.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A ATRAER Y RESOLVER CONFORME A DERECHO, EL RECURSO DE QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CDHEC/004/09, INTERPUESTO POR LA C. MARÍA ASTERIA TADEO GÓMEZ, ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA, DERIVADO DE LA INACTIVIDAD Y DESATENCIÓN DE LAS INSTANCIAS ESTATALES

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atraer y resolver conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales, a cargo de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 23 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Refiere la autora de la proposición de mérito que el 23 de octubre de 2008 la señora María Asteria Tadeo Gómez, denunció ante la Mesa Tercera del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Colima, con sede en la ciudad de Colima, el homicidio de su hijo, José Abel Nava Tadeo, iniciándose con ello, la Averiguación Previa, bajo el número 038/2008.

El 5 de diciembre de 2008 se determinó el no ejercicio de la acción penal, tras una mala integración de la Averiguación Previa, en la que se negó el derecho al desahogo conducente de las pruebas, refiriéndose erróneamente que el homicidio se trató de un suicidio.

La señora Tadeo Gómez se inconformó contra esta resolución y lo hizo patente ante el C. Procurador General de Justicia del Estado, quién con fecha 20 de enero de 2009, revocó el acuerdo y ordenó al C. Agente del Ministerio Público adscrito el desahogo de las pruebas pertinentes.

En razón de lo anterior, se procedió al desahogo de pruebas testimoniales, determinándose de nueva cuenta, mediante acuerdo de fecha 25 de febrero de 2009, el no ejercicio de la acción penal.

Contra esta nueva determinación, el 19 de marzo de 2009 la señora María Asteria Tadeo Gómez, se inconformó nuevamente ante el C. Procurador General de Justicia del Estado, quién el día 13 de abril de 2009, confirmó el acuerdo y ordenó al C. Agente del Ministerio Público notificar la resolución y archivar el expediente.

Con fecha 25 de mayo de 2009, la señora María Asteria Tadeo Gómez, se inconformó de nueva cuenta, por lo que las actuaciones fueron remitidas al C. Juez Primero de lo Penal de Colima, licenciado Abel Jaime Ramírez Ayala, quien tras el estudio del expediente, determinó que *"no se califica como válida y apegada a derecho, la determinación emitida por el Agente del Ministerio Público"*, ordenando *"la devolución de la misma a la Autoridad de origen, para que entre al estudio de los elementos del tipo penal de homicidio y desahogue las pruebas necesarias y determine lo que en derecho corresponde"*.

El acuerdo dictado por el C. Juez Primero de lo Penal, fue impugnado por el C. Agente del Ministerio Público ante la Primera Sala Penal, misma que con fecha 25 de septiembre de 2009, confirmó la resolución del Juez Natural, ordenando la remisión de la Averiguación Previa al C. Agente Investigador.

Desde entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha desahogado la reconstrucción de hechos y hasta la fecha, se ha limitado al desahogo de algunas pruebas testimoniales, denuncia la legisladora proponente.

La señora Tadeo Gómez, presentó el 7 de enero del año 2009, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la que quedó integrada bajo el expediente número CDHEC/004/09, misma que quedó archivada tras la revocación por parte del C. Procurador General de Justicia del Estado, del acuerdo que dictaba el no ejercicio de la acción penal, de fecha 23 de diciembre de 2008.

De acuerdo a lo que refiere la promovente, el día 22 de octubre de 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, inició de oficio una queja, debido a una nota publicada sobre este asunto en el periódico "Diario de Colima", integrándose bajo expediente No. CDHEC/7347/2009.

En el contenido de esta queja, se citó a declarar a la señora María Asteria Tadeo Gómez, además de solicitar un informe detallado sobre el particular a la Procuraría General de Justicia del Estado, mismo que fue rendido por el licenciado Félix Humberto Vuelvas Aguilar, Subprocurador operativo de dicha dependencia.

A pesar de lo actuado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de las circunstancias señaladas sobre el caso, la licenciada Rosa María Guadalupe Vadillo Yánez, Visitadora de la misma, manifestó la intención de la Institución era de solamente "observar" y esperar –sin especificar término– a que la Procuraduría General de Justicia del Estado determine de nueva cuenta, absteniéndose por tanto, de intervenir ante la citada dependencia.

Sostiene la que propone que dadas las circunstancias, el trato poco deferente recibido del Ombudsman estatal y toda vez que dicho procedimiento cumplió con los supuestos estipulados en los artículos 3, 6 y 60 de la Ley de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, al no haber resolución alguna durante el periodo de seis meses tras la última actuación, resulta procedente la atracción del asunto hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Menciona además que el 14 de junio pasado, la señora María Asteria Tadeo Gómez, expuso mediante escrito dirigido al C. Raúl Placencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la atracción del caso señalado, para su estudio, análisis y pronta emisión de la recomendación respectiva.

Cree la Senadora que la emisión de la recomendación de la CNDH necesaria y prioritaria, a fin de que pueda continuar la investigación e integración de la causa penal relativa al homicidio del C. José Abel Nava Tadeo, cometido el día 23 de octubre de 2008 y que tras una errónea integración, quedó señalado por parte del C. Agente del Ministerio Público de la adscripción como "suicidio".

Con ello, se permitirá que la impartición de justicia en este caso en concreto sea una realidad, favoreciendo la credibilidad de la ciudadanía en el trabajo de las instituciones nacionales y el fortalecimiento del Estado de Derecho, sostiene la legisladora autora de la proposición de mérito.

En concreto propone lo siguiente:

ÚNICO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, atraiga y resuelva conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales.

II. Los miembros de esta Comisión dictaminadora hemos tenido conocimiento de los hechos que relata la Senadora proponente.

En efecto, de acuerdo con la información pública al respecto, el 23 de octubre de 2008 fue encontrado muerto en su hogar José Abel Nava Tadeo, de 29 años. El joven, ingeniero titulado en Telemática, trabajaba en el Consejo Estatal de Seguridad (C4).
María Asteria Tadeo Gómez, denunció el homicidio de su hijo iniciándose la averiguación previa 38/2008 que concluyó en el no ejercicio de la acción penal, por tratarse de un suicidio y no de un homicidio, según reporta medios de comunicación.

Ante una serie de inconformidades de parte de María Asteria Tadeo, el Juez Primero de lo Penal de Colima determinó que se debería entrar al "estudio de los elementos del tipo penal de homicidio", además de desahogar las pruebas necesarias, determinando lo que conforme a derecho corresponde.

El 15 de octubre de 2009, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima ordenó a la Procuraduría General de Justicia de aquel estado que iniciara la investigación por homicidio de José Abel Nava, pero hasta la fecha no lo ha hecho

Los miembros de esta dictaminadora hemos conocido a través de diversos medios de comunicación, que la madre de José Abel Nava Tadeo ha dado a conocer una serie de irregularidades en el proceso que la llevan a concluir que su hijo fue asesinado y que no se suicidó, como asegura la Procuraduría de Justicia del Estado.

III. Aun y cuando los miembros de esta Comisión dictaminadora no hemos encontrado la información respecto del recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, al que se hace referencia en el

capítulo de consideraciones del presente dictamen, la carencia de dicha información no nos impide hacer un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso expuesto.

En efecto, esta Comisión está plenamente conciente de la urgente necesidad que tiene la población en general y particularmente los deudos del caso que aquí se plantea, de que se haga justicia siguiendo los instrumentos legales que nos hemos dado como sociedad.

La atracción de quejas es de hecho facultad de la CNDH según lo que señala el artículo 60 de su Ley y que a la letra dice:

Artículo 60.- La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, atraiga y resuelva conforme a derecho, el recurso de queja con número de expediente CDHEC/004/09, interpuesto por la C. María Asteria Tadeo Gómez, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, derivado de la inactividad y desatención de las instancias estatales.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO EXTENDER INVITACIÓN A EFECTIVOS DEL EJÉRCITO, MARINA Y FUERZA AÉREA DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FRANCIA Y ESPAÑA.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA EL PUNTO D ACUERDO RELATIVO A LA INVITACIÓN AL DESFILE MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE A EFECTIVOS DEL EJÉRCITO, MARINA Y FUERZA AÉREA DE NINGÚN PAÍS, EN PARTICULAR DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FRANCIA Y ESPAÑA

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que no extienda ninguna invitación a efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia y España; presentada por los diputados Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Oscar González Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 23 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Señalan los promoventes que, como parte de los festejos que año con año se realizan para celebrar el aniversario de la Independencia Mexicana, el 16 de septiembre se realiza “en las principales plazas públicas del país un magno desfile cívico-militar para conmemorar el inicio de nuestra gesta libertaria”, al cual asisten familias y ciudadanos, en un acto que pone de relieve su actitud y convencimiento cívico. Sin embargo, señalan los promoventes, ha trascendido, según información periodística que se ha invitado a “a contingentes de ejércitos extranjeros al desfile del 16 de septiembre. En particular, se pretende que asistan representantes de los Estados Unidos de América, Francia y España”, lo cual consideran una “total insensibilidad política”.
2. Explican los diputados promoventes que, en el caso de los Estados Unidos, muchas han sido las agresiones que nuestro país ha sufrido desde el siglo XIX, terminando con el asesinato del menor Sergio Adrián

Hernández Güereca, acaecido el pasado mes de junio. En el caso de Francia, indican los promoventes, no se puede olvidar que nuestro país fue objeto de una intervención que "pretendió imponernos un imperio", también durante el siglo XIX.

3. Concluyen los promoventes que, dada la facultad exclusiva otorgada por el Constituyente Permanente al Senado de la República para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, el Presidente de la República deberá remitir la solicitud correspondiente para que ingresen las tropas de los países en cuestión. Señalan los promoventes que "no nos oponemos a que representaciones sociales, diplomáticas, artísticas y culturales nos acompañen en los festejos del Bicentenario, lo que nos parece muy delicado es que se pretenda dar cabida a contingentes militares de países que en algún momento histórico han tenido conflictos con México".

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal se abstenga de invitar al desfile militar del 16 de septiembre a efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de ningún país, en particular de los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia y España, naciones que han pretendido sojuzgar la libertad de nuestra querida patria.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que una de las principales facultades del Senado de la República es el analizar la política exterior implementada por el gobierno mexicano, con base en los principios normativos establecidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna: "la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales", mismos que deben regir todas y cada una de las acciones que nuestro país emprenda, como Nación Independiente, dentro del espectro mundial.

SEGUNDO. La Comisión Dictaminadora coincide plenamente con los promoventes en que la historia independiente de nuestro país ha resultado difícil, con obstáculos y, en ocasiones, hemos sido objeto de múltiples agresiones, atentados, pretensiones e intervenciones. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera que, en el ánimo de una nueva relación del Orden Mundial, en el que México debe retomar la conducción de la política latinoamericana, la presencia de las tropas de países extranjeros, que únicamente deben lealtad y constancia a sus propios gobiernos, en un acto en el que se reconoce la figura presidencial y se celebra la independencia de México, más que representar una ofensa, es señal inequívoca de que estos gobiernos reconocen plenamente la identidad mexicana del Siglo XIX como Nación Independiente, Libre y Soberana.

TERCERO. Esta Comisión Permanente considera que, en el marco de las facultades que la Soberanía popular le ha concedido al Presidente de la República y a la Cámara de Senadores para establecer respetuosas y cordiales relaciones con otros países, negar la invitación, retirarla o, habiéndose hecho público en anuncio, no realizarla, más que contribuir a una buena relación con estas naciones, sentaría un negativo precedente entre ellas.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados Oscar González Yañez y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, presentada al pleno de la Comisión Permanente el pasado día 23 de junio.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

EN TORNO AL CASO DEL C. RAÚL HERNÁNDEZ ABUNDIO.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO A PRESENTAR CONCLUSIONES NO ACUSATORIAS CONTRA RAÚL HERNÁNDEZ ABUNDIO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de los Diputados Filemón Navarro Aguilar y Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación al injusto encarcelamiento del defensor de derechos humanos Raúl Hernández Abundio.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 23 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Refieren los autores de la proposición de mérito que el 17 de abril de 2008, en un retén militar en el crucero de la comunidad de Tecruz, en municipio de Ayutla, Guerrero, fueron detenidos Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio; indígenas defensores de derechos humanos, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM). El mismo día fueron puestos a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Ese mismo día, se hizo de su conocimiento que el 11 de abril de 2008, el Juez de Primera Instancia con sede en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, habría librado quince órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado cometido en contra de Alejandro Feliciano García, ocurrido el 31 de diciembre del 2007, en las que seis personas aparecían como acusadas de ser autores materiales y nueve como autores intelectuales, bajo el expediente 48-2/2008.

Se les informó que para su detención, el Juez de la causa se fundó en las declaraciones de dos supuestos testigos que manifestaron que el día del homicidio de Alejandro Feliciano, escucharon varias detonaciones y vieron en el lugar de los hechos a los integrantes de la OPIM, continúan refiriendo los proponentes.

El 23 de abril del 2008, el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez dictó el auto de formal prisión en contra de los cinco indígenas, cuatro señalados como autores intelectuales y uno, Raúl Hernández Abundio, señalado como autor material. Como consecuencia, el 7 de julio de 2008, los presos acudieron ante la justicia federal para solicitar un amparo en contra del auto de formal prisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia.

Cuando la justicia federal resolvió, se confirmó la existencia de graves irregularidades en las acusaciones fabricadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero contra los integrantes de la OPIM, por lo que el 19 de marzo del 2009 recuperaron su libertad cuatro integrantes de dicha organización indígena que se encontraban presos. El 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Guerrero, resolvió confirmar la cancelación de las órdenes de aprehensión, giradas en contra de cinco integrantes más, refieren los autores.

Pero Raúl Hernández Abundio, continuó en prisión. Del grupo de defensores de derechos humanos que inicialmente fueron detenidos, es el único que permanece detenido injustamente. Así lo han considerado diversas organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Comunicación Social AC (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En un comunicado conjunto, dichas organizaciones reiteraron el llamado a las autoridades del poder Ejecutivo de Guerrero a formular conclusiones a favor Raúl Hernández para que recupere su libertad.

El comunicado emitido por las organizaciones, señala que desde la detención de Raúl Hernández, la defensa a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha evidenciado las inconsistencias e irregularidades de la detención. También menciona que la defensa de Raúl Hernández Abundio ha aportado suficientes elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó, durante el tiempo en que ocurrió el homicidio.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hizo un llamado el 17 de abril 2010, a dos años de la privación de la libertad de Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que el sistema de justicia del Estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad.

Continúan los promoventes recordando que en su comunicado, la OACNUDH señala que desde el 11 de noviembre de 2008, tanto Raúl Hernández como sus compañeros de la OPIM han sido considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia al valorar que no existían pruebas para demostrar su responsabilidad y que su detención se relacionaba con su labor de defensores de derechos humanos. El comunicado también reitera que en el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, titulado "Entre el Compromiso y el Riesgo", la OACNUDH retomó el caso de Raúl Hernández y sus compañeros como un caso emblemático, que muestra algunos de los retos que enfrentan, ante el sistema

de justicia las y los defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, continúan, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condenó el hecho de que el Sr. Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), esté cumpliendo dos años de detención y continúe sometido a juicio. El comunicado señala que varios integrantes de la OPIM, son beneficiarios de medidas de provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 9 de abril del 2010, entre los que destaca Raúl Hernández Abundio, pues las y los integrantes de la organización a la que pertenecen, la OPIM, han sido víctimas de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias desde hace varios años por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el estado de Guerrero.

Durante el proceso de Raúl Hernández, han comparecido diversos testigos de descargo que dieron fe consistentemente de que Raúl Hernández no estuvo en el lugar, hora y fecha en que ocurrieron los hechos, se ha comprobado que estuvo realizando otros trabajos relacionados con la Comisaría municipal, pues en ese entonces se desempeñaba como Comandante de la policía del pueblo.

Recientemente, el 26 de mayo del 2010, se llevó a cabo la inspección ocular, que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández, como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción.

Durante ésta, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Alfredo Sánchez Sánchez, constató que el único testigo que hizo señalamientos en contra de Raúl mintió, pues verificaron que por la distancia, por los accidentes geográficos del terreno y por la escasa visibilidad propia de la hora en que ocurrieron los hechos, no era posible que el testigo pudiera identificar a Raúl como asegura en su declaración.

La certificación que realizó el Juez es suficiente para que se promueva el desistimiento de la acción penal contra Raúl Hernández o, en su caso, la presentación de conclusiones inacusatorias. Ambas acciones pueden ser promovidas en el ámbito de su competencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Esto atendiendo a que con las pruebas desahogadas ha quedado evidenciado una vez más, que Raúl Hernández está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Como consecuencia de lo anterior, el pasado 14 de junio de 2010, la defensa de Raúl Hernández, a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, solicitó el cierre del proceso por lo que el Juez encargado deberá resolver a la brevedad y conforme a derecho para poner en libertad a Raúl, en virtud de las pruebas presentadas a favor de su inocencia.

Por todo lo expuesto, los legisladores autores de la proposición de mérito sostiene que este caso, hace evidente la condición de vulnerabilidad e indefensión que sufren los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues aún cuando es la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), la encargada de garantizar la seguridad de los defensores e investigar los casos de amenazas e intimidación contra de éstos, es la misma que integra expedientes de acusación y fabrica delitos.

En concreto proponen lo siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a que promueva el sobreseimiento del proceso penal, o bien, se presenten conclusiones no acusatorias, en virtud, de que como se ha demostrado, Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos humanos, no tuvo participación en el ilícito que se le persigue dentro de la causa penal 48/2008, radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla

II. Según la información pública de la que esta Comisión tiene conocimiento, el 17 de abril del 2008 fueron detenidos cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), originarios de la comunidad El Camalote, en un retén que instalaron militares, policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Ministerial del estado y de Seguridad Pública estatal, acusados de matar el primero de enero de ese año al informante del Ejército, Alejandro Feliciano García, quien vivía en la misma comunidad.

Los detenidos fueron el dirigente de la Organización en ese poblado, Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedino y Raúl Hernández Abundio.

Denunciaron entonces que fueron torturados por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de un homicidio y de ser guerrilleros.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, asumió la defensa de los indígenas y encontró inconsistencias en la integración de la averiguación y promovió amparos para los indígenas, pero sólo consiguió cuatro, el de Raúl Hernández fue negado debido a que un supuesto testigo declaró que vio que Hernández Abundio llamó a Alejandro Feliciano García cuando estaba en la iglesia de El Camalote para que saliera y lo llevó a una reunión con otras personas y después escuchó un disparo.

Sin embargo, el testigo nunca se presentó a declarar, y sólo entregó un escrito con este testimonio.

El 12 de noviembre de 2008 Amnistía Internacional declaró a los cinco Me'phaa presos de conciencia, el 5 de febrero del 2009 Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) arrancaron una campaña denominada ¡Alza tu voz por su libertad! para exigir la liberación de los cinco indígenas.

El 18 de marzo de 2009 Tlachinollan fue notificado por la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, sobre la confirmación que hizo el Poder Judicial Federal de su sentencia de amparo que emitió el 15 de octubre de 2008 a favor de cuatro de los cinco me'phaa encarcelados. La resolución desechó el recurso de revisión que el 30 de octubre del año anterior presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez.

El 19 de marzo de 2009 salieron libres cuatro indígenas, quedando en la cárcel, Raúl Hernández Abundio.

El 20 de abril de 2010 la Federación Internacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es defender e implementar los principios formulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, emitió un boletín de prensa en el que "manifiesta su seria preocupación por los dos años de detención y por el enjuiciamiento del Sr. Raúl Hernández Abundio (…), y solicita la intervención inmediata y efectiva de las más altas autoridades mexicanas para que se tomen en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y los principios del debido proceso en el juicio contra el Sr. Hernández Abundio, (…)"

El 21 de junio pasado Raúl Hernández Abundio redactó una carta dirigida al Magistrado Edmundo Román Pinzón, Presidente Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero y al Juez Alfredo Sánchez Sánchez Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres en la que les solicita que el proceso que se le sigue termine y que se dicte una sentencia justa tomando en cuenta las pruebas.

Recuerda en esa misiva que los compañeros suyos que estaban presos con él "(…) ya salieron. Sólo quedé yo. Acusado con las mismas pruebas falsas (…)"

III. Esta Comisión dictaminadora advierte que, en virtud del principio de división de poderes y de las facultades que constitucional y legalmente se le confieren a este órgano del Congreso de la Unión, carece de competencia para intervenir en un asunto de carácter eminentemente judicial.

Asimismo, que la solución o el esclarecimiento del hecho típico a que se refieren los autores de la proposición de mérito conciernen a una obligación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a la que corresponderá investigar y deslindar las responsabilidades que resulten.

El artículo 102 del Código Penal del Estado de Guerrero señala que "Procede el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia absolutoria, en los siguientes casos:

I.- Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias, o no formule conclusiones dentro del plazo señalado para este efecto por omisión del agente que debió presentarlas;

II.- a IV.-

Sin embargo, esta dictaminadora es sensible a la acción desplegada por diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales que han refrendado su convicción en la inocencia del Sr. Raúl Hernández Abundio y han solicitado a las autoridades que incidan en su liberación.

Esta Comisión Dictaminadora tampoco es ajena a la existencia de diversas denuncias públicas en cuanto a presuntas irregularidades que se identifican desde la aprehensión del Sr. Hernández Abundio.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que en la resolución que emita en el presente asunto, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo y de descargo ofrecidas y desahogadas, en las que se basan la acusación y la defensa del C. Raúl Hernández Abundio.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Procurador general de Justicia del Estado de Guerrero a revalorar los elementos que le han llevado a presumir la comisión del delito en cuestión y la responsabilidad que atribuye al C. Raúl Hernández Abundio, en caso de que durante el proceso determine que la conducta o los hechos no son constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la ley penal o que el inculpad no tuvo participación en el delito que se persigue, promueva, con sustento en el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el sobreseimiento del proceso penal, así como su libertad absoluta.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SALUDA LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL CASO DE SAN SALVADOR ATENCO.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL CASO DE SAN SALVADOR ATENCO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la nación para resolver de manera favorable el amparo interpuesto en contra de las sentencias condenatorias impartidas por la justicia del Estado de México, para permitir la libertad de 12 presos políticos del caso Atenco; otra, presentada por los diputados Avelino Méndez Rangel y Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de la misma manera, fue turnada una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Ministerios Públicos de la Federación y del Estado de México para desistirse de la acción penal en contra de la C. América del Valle Ramírez, presentada por la Senadora Rosalinda López Hernández y, por último, una proposición con punto de acuerdo sobre la situación jurídica de América del Valle Ramírez, miembro del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, presentada por la Diputada Federal Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En relación con la proposición presentada por los diputados Méndez Rangel y Guerrero Castillo:

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 30 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Señalan los promoventes que “los doce presos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son personas que en los últimos cuatro años han estado separados de su familia, debido a procedimientos penales irregulares, así como a sentencias infundadas y excesivas, que reflejan claramente un Estado autoritario, que a través de argucias legales, ha criminalizado la protesta social”. Estas personas, indican los promoventes, fueron detenidas y procesadas judicialmente, debido a los hechos que derivaron en el “enfrentamiento del 3 y 4 de mayo de 2006 entre campesinos y policías en la localidad de San Salvador

Atenco [que] causó un muerto, decenas de denuncias por abusos sexuales a mujeres, medio centenar de heridos y 200 detenidos".

2. Explican los diputados promoventes que "la misma comunidad internacional ha dado cuenta de que América del Valle Ramírez, hija de uno de los principales defensores de los campesinos de Atenco, injustamente condenado a 112 años de prisión, ha solicitado asilo al gobierno de Venezuela para asegurar su tranquilidad y el respeto a sus derechos humanos ante la persecución por parte de las autoridades mexicanas".

3. Concluyen los promoventes que "es la hora de la Suprema Corte de Justicia, en la que tiene la oportunidad de tomar una decisión a favor de la libertad y la justicia o, por el contrario, a favor de la impunidad".

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver de manera favorable el amparo interpuesto en contra de las sentencias condenatorias impartidas por la justicia del Estado de México, para permitir así la libertad de 12 presos políticos, derivado de los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

SEGUNDO. Esta Comisión Permanente apoya la solicitud de asilo político de América del Valle Ramírez ante el gobierno de Venezuela para asegurar el respeto a sus derechos humanos y su tranquilidad ante la persecución política del gobierno mexicano.

En relación con la proposición presentada por la Senadora Rosalinda López Hernández:

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 30 de junio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Señala la promovente "en el año 2001, el Ejecutivo Federal, cuya titularidad recaía en el Lic. Vicente Fox Quesada, expidió un decreto de expropiación sobre tierras ejidales del municipio de San Salvador Atenco y varias comunidades aledañas a la rivera del ex lago de Texcoco. La causa de utilidad pública que daba sostén jurídico a tal decreto fue la pretensión de construir un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México". Sin embargo, este proyecto no contó con el consenso de la comunidad del municipio, lo cual generó un grave descontento social, múltiples enfrentamientos y un encono social que amenazaba con desbordarse. Indica la promovente que "lo anterior fue causa suficiente para que los pobladores de la región se organizaran y constituyeran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuyo objetivo inicial fue oponerse al citado decreto expropiatorio", cuyos integrantes iniciaron una movilización que obtendría su primer triunfo en 2004, con la cancelación del proyecto.

2. Explican la senadora promovente que "lamentablemente, entre el tres y cuatro de mayo de 2006, el escenario se tornó trágico, pues en un incomprensible, arrebatado y represivo afán de demostrar poder, se efectuó un operativo en el que participaron cuando menos dos mil elementos de la Policía Federal Preventiva". Resultado de este operativo, fueron aprehendidos "Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, y fueron trasladados al Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, y hoy enfrentan sentencias de 112 años con seis meses y 67 años con seis meses, respectivamente, por los delitos de secuestro equiparado…" Señala la promovente que la C. América del Valle, perseguida por la justicia mexiquense por los mismos delitos, ha logrado evadir la aprehensión.

3. Concluye la promovente que "la legalidad sin legitimidad no puede ser calificada de justicia".

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto a los Ministerios Públicos de la Federación y del Estado de México, a efecto de que resuelvan el desistimiento de la acción penal ejercida en contra de la C. América del Valle Ramírez, por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, al estar acreditada la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales por parte de las autoridades policiacas que intervinieron en esos hechos y por existir temor fundado de que los procedimientos en su contra contienen elementos de represión política.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, iniciar una investigación sobre la situación jurídica de la C. América del Valle Ramírez en la que se analice si el ejercicio de la acción penal en su contra responde a elementos meramente jurídicos o se configura una persecución política.

En relación con la proposición presentada por la diputada Florentina Rosario Morales:

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 07 de julio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

1. Señala la promovente "que el grave caso sucedido en San Salvador Atenco, ha comenzado a ser resarcido, pues el Tribunal más alto de la Nación, ha decidido dar libertad a los 12 presos, por los hechos de represión suscitados en mayo del 2006 en esa población…" En este contexto, la promovente resalta lo dicho por el Ministro Juan Silva Mesa, en relación a que "las sentencias reclamadas pueden ser consideradas como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición. Quedó en entredicho la forma en que el Estado trata la libertad personal, la integridad, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, particularmente por el crucial rol que representan por ser los líderes históricos y por el valor emblemático que tienen para su comunidad.".

2. Explican la diputada promovente que "ante tales violaciones, América del Valle estuvo escondida durante cuatro años, siendo perseguida política, no siendo prófuga de la ley, pues la determinación de la corte al afirmar como criminalización de la protesta social este hecho, a ella la convierte en perseguida, más no en prófuga…" y es por esta razón que, sostiene la promovente, debieran "la PGR y el Gobierno del Estado de México, retirar todos y cada uno de los cargos en su contra".

3. Concluye la promovente que "el Estado Mexicano debería investigar a los jueces, magistrados, ministerios públicos, a la policía investigadora y a los responsables del operativo de mayo de 2006, pues a pesar de que hayan logrado su libertad los pobladores de San Salvador Atenco, queda pendiente lo relacionado con la reparación del daño y sobretodo el castigo a las autoridades que confabularon los delitos de tortura, violación, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, privación ilegal de la libertad y el uso excesivo de la fuerza, donde además hubo a juicio de los Ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fabricación de pruebas y la aplicación de la ley por consigna, criminalizando la protesta social y violando sus derechos constitucionales y humanos por instrucciones y por omisiones".

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Con total respeto a la división de poderes, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República, Lic. Arturo Chávez Chávez, para que con los elementos que constan en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determine el no ejercicio de la acción penal en contra de la C. América del Valle Ramírez.

SEGUNDO. Con total respeto a la división de poderes, y a los principios del federalismo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del Estado de México para que, con los

elementos que constan en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine el no ejercicio de la acción penal en contra de la C. América del Valle Ramírez.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que el Estado debe garantizar, como una de sus tareas primordiales, el pleno goce de los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. Coincide también, en que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser proporcional al hecho y que nunca y en ninguna circunstancia debe excederse en él, ya que esto desborda las funciones que tiene y agrede a los ciudadanos. Asimismo, que la protesta social legítima no debe ser objeto de persecución legal o jurídica alguna.

SEGUNDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en su sesión celebrada el día 30 de junio, amparar a los doce presos: Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez, Oscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate y Román Adán Ordoñez Romero, al considerar que el procedimiento jurídico violó sus garantías individuales y que las condenas a que fueron sentenciados constituyen "una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social", partiendo de premisas falsas y endebles, que generaron un proceso en el que "partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan, por sí mismas, la presunción de peligrosidad". No obstante lo anterior, las autoridades federales informaron, con fecha 30 de junio, que los procedimientos judiciales iniciados en contra de Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Cochicoa, Felipe Álvarez y América del Valle continuarán, por lo cual los tres primeros no serán dejados en libertad, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, argumentando que "tienen pendientes cuatro causas penales por los delitos de robo agravado, lesiones y daño a los bienes públicos, despojo y ataque a las vías de comunicación y medios de transporte". Asimismo, la autoridad federal señaló que este amparo no protegía a la C. América del Valle.

TERCERO. El día 30 de junio, fueron puestos en libertad, los CC. Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Cochicoa y Felipe Álvarez, debido al desistimiento del ejercicio de la acción penal de las autoridades competentes de los ámbitos federal y local. Asimismo, el día 13 de julio, el Ministerio Público del Estado de México informó respecto al desistimiento en el ejercicio de la acción penal por las causas seguridad en contra de la C. América del Valle Ramírez.

CUARTO. Esta Comisión Permanente considera que el Estado debe ser responsable de garantizar la legalidad, para lo cual ha instituido diversas instancias que, en el marco de un equilibrio entre las competencias de los poderes que lo constituyen, deben coadyuvar para la vigencia del Estado de Derecho en nuestro País. Es por esta razón que los procedimientos judiciales en contra de estas cuatro personas, al considerarse viciados de origen por tener como razón primordial la persecución política de un pueblo que únicamente pretendió conservar su medio de subsistencia, de frente a una disposición que arbitrariamente pretendía arrancarles su tierra, a la cual se encuentran ligados ancestralmente.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda la decisión de las autoridades federales y del Estado de México, en el caso de San Salvador Atenco, mismas que coadyuvarán para garantizar la vigencia del Estado de Derecho en nuestro País y hace un reconocimiento a la gran lucha que, en la defensa de sus derechos, realizó el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra.

Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LOS 16 ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS A INSTRUMENTAR ACCIONES DENTRO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO FEDERAL

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, le fue turnada proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Órganos Político-Administrativos, a que instrumenten acciones para dar cumplimiento a la normatividad de protección civil y seguridad en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI`S), así como para que inicien la reubicación de aquellos que se encuentran en los mercados públicos del Distrito Federal**,** presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, el 30 de junio de 2010.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 30 de junio del 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo social y humano tiene como objetivos rectores: mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital sociales; así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.

2. Para cumplir los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de gobierno que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los

mexicanos, así como facilitar la realización de acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos.

3. Dentro de estos programas sobresale el de estancias infantiles, que en el caso del Distrito Federal se denominan Centros de Atención Infantil (CAI) y que incluyen la modalidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI`S), con el que se apoya a madres y padres trabajadores mediante los servicios de cuidado y atención a los niños que tienen 45 días de nacidos y menos de 6 años de edad. Este programa de educación inicial y preescolar se traduce en un apoyo directo a las familias que requieren buscar empleo, estudiar o permanecer en el mercado laboral, ya que les proporcionan lugares para que sus hijos reciban atención integral mientras trabajan.

4. Hoy en día, la importancia de que estos centros infantiles cumplan con la normatividad en materia de protección civil se ha incrementado ante los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de junio de 2009 en el Estado de Sonora, en donde perdieron la vida 49 menores y más de 100 sufrieron heridas que en muchos casos serán permanentes. Situación que cobra relevancia en el Distrito Federal, debido a que el 40% de los CENDI`S que tienen a su cargo las delegaciones se ubican en centros de abasto y, por lo tanto, en condiciones de riesgo, insalubridad y deficiencia educativa.

5. Es de subrayar que estos centros se encuentran al lado de cocinas, depósitos de basura y no cumplen con las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, algunos están ubicados en las plantas altas de los mercados, entre locales y tanques de gas. Otros se localizan entre baños públicos, debajo de cables de alta tensión y sus salidas de emergencia se encuentran cerradas, obstruidas o sin las dimensiones necesarias para cumplir con su finalidad.

En los supuestos señalados se encuentran CENDI`S como los de la Nueva Santa María, Anáhuac y Chorrito, en la delegación Miguel Hidalgo, el del Mercado de Churubusco, en Coyoacán, el del Mercado de Villa Coapa, en Tlalpan, y el CENDI Iztapalapa.

7. Por lo anterior, la implementación de acciones que tengan como objetivo la prevención, el mantenimiento y el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil y seguridad de estos centros resulta urgente y necesaria. En otras palabras, en la medida en que se cumpla con las disposiciones legales en estas materias se podrá seguir brindando apoyo a las madres y padres que buscan un lugar seguro en el que sus hijos puedan desarrollar sus actividades diarias.

8. A pesar de los esfuerzos que se han emprendido en los últimos años, tanto la infraestructura como la ubicación de los CENDI'S se han convertido en temas que requieren atención a la brevedad. Por ello, resulta apremiante que el Gobierno del Distrito Federal y las 16 Delegaciones realicen acciones para dar cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil, así como para reubicar los centros infantiles que actualmente presentan mayor riesgo de siniestro como son los ubicados en los mercados públicos del Distrito Federal, ya que en el 90% de los casos presentan rezagos en cuestiones de suministro de energía eléctrica, expansión de las áreas de comida en las que se utiliza Gas LP, disminución de las rutas de emergencia por la proliferación de giros no autorizados y el aumento de vendedores ambulantes fuera de sus instalaciones, entre otros problemas.

9. Es necesario que se desarrollen acciones orientadas a la difusión en materia de prevención de riesgos, protección civil, seguridad y primeros auxilios en los todos CENDI'S, así como la implementación de programas de reubicación de aquéllos que aún se encuentran dentro de mercados públicos. Todo ello, de acuerdo con las posibilidades presupuestales en este año, la asignación de recursos para el próximo ejercicio fiscal y la búsqueda de espacios en el Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los 16 Órganos Político-Administrativos a que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones dentro de los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Federal, a fin de dar

cumplimiento a las disposiciones legales en materia de protección civil, seguridad y administración de riesgos.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal ***y a*** los titulares de los 16 Órganos Político-Administrativos a instrumentar mecanismos para implementar y dar seguimiento al programa de reubicación de los centros infantiles que se encuentren dentro de los mercados públicos del Distrito Federal.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I.- La tragedia del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, puso de manifiesto el enorme déficit histórico que existe en el respeto a los derechos humanos de las niñas y niñas del país, y concretamente en materia de sus derechos humanos a la seguridad e higiene y protección civil. Esta responsabilidad se extiende a todos los niveles de gobierno. Por lo que urge, adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de siniestros tan terribles.

Desde luego, se debe legislar para llenar las lagunas normativas en materia de seguridad y protección civil de los menores, especialmente en el ámbito de las estancias infantiles; pero al propio tiempo, se debe hacer una aplicación escrupulosa de los ordenamientos ya existentes.

II. En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal aplica el programa de Centros de Atención Infantil (CAI) y que incluyen la modalidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI`S), cuyo objeto es otorgar educación integral a los hijos e hijas de los trabajadores, cuya edad oscile entre los 45 días y 5 años 11meses; así como proporcionar los cuidados necesarios durante su jornada laboral.

O en palabras de la proponente, "los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI`S)…(apoyan) a madres y padres trabajadores mediante los servicios de cuidado y atención a los niños que tienen 45 días de nacidos y menos de 6 años de edad. Este programa de educación inicial y preescolar se traduce en un apoyo directo a las familias que requieren buscar empleo, estudiar o permanecer en el mercado laboral, ya que les proporcionan lugares para que sus hijos reciban atención integral mientras trabajan."

Programa que se traduce en un enorme beneficio a favor de las niñas y niños, sus familias y la comunidad toda.

III. Sin embargo, como sucede con las guarderías de todo el país, los Cendis del Distrito Federal, presentan problemas en materia de seguridad y protección civil, especialmente las que se encuentran instaladas en los mercados públicos del Distrito Federal, por lo que urge corregir esta problemática, lo que además de prevenir siniestros en perjuicio de los menores, permitirá mejorar los resultados del referido Programa.

Esto en armonía con lo establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en cuya parte conducente se señala:

"Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de las niñas y niños;

II. Establecer los principios que orienten las políticas públicas a favor de las niñas y niños;

III. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas y niños…"

Defensa y garantía de los derechos de las niñas y niños que debe comenzar por la tutela de sus derechos a la vida y su integridad personal:

"Artículo 5.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley las niñas y niños en el Distrito Federal tienen los siguientes derechos:

A) A la Vida, Integridad y Dignidad:

I. A la vida, con calidad, siendo obligación del padre y la madre, de la familia, de los Órganos Locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las niñas y niños, su sobrevivencia y su desarrollo, así como el acceso a los medios y mecanismos necesarios para ello;

En respaldo a lo anterior, la Ley General de Protección Civil, marca:

"Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases **de la coordinación en materia de protección civil, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.**

"Artículo 2o.- La política pública a seguir en materia de protección civil, se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo**, y tendrá como propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de gobierno…"**

"Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

"V. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente…"

"Artículo 38.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad…"

Por su parte, la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, prevé, en forma equivalente, que:

"Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés general y tienen por objeto establecer en el Distrito Federal:

II.- Las bases para **la prevención y mitigación** ante las amenazas de riesgo geológico, fisicoquímico, sanitario, hidrometereológico y socio-organizativo…"

Asimismo, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, ordena:

"Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos
sociales universales;

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;"

La misma esencia de todas las disposiciones señaladas en este punto, se reproduce en el artículo 4º. Constitucional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el mismo sentido, como lo señala la proponente, el Plan Nacional de Desarrollo, establece:

"El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo social y humano tiene como objetivos rectores: mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital sociales; así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones."

En suma, que en materia de CENDI´S, lo central debe ser la protección de la vida e integridad de los menores, en una perspectiva de prevención. Lo que dará aún mayor relevancia a este Programa. Esto, conforme a los recursos presupuestales destinados al efecto.

Partiendo de todo lo expuesto hasta este punto, esta dictaminadora coincide con la proponente de esta proposición con punto de acuerdo, sobre la importancia de que los CENDI´S del Distrito Federal cumplan con la normatividad en materia de seguridad y protección civil ante los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de junio de 2009 en el Estado de Sonora. Igualmente se coincide con la proponente, en que en la medida en que se cumpla con las disposiciones legales en estas materias se podrá seguir brindando apoyo a las madres y padres que buscan un lugar seguro en el que sus hijos puedan desarrollar sus actividades diarias.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los 16 Órganos Político-Administrativos a que, en el ámbito de sus competencias, instrumenten acciones dentro de los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de protección civil, seguridad y administración de riesgos.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los 16 Órganos Político-Administrativos a instrumentar mecanismos para instrumentar y dar seguimiento al programa de reubicación de los centros infantiles que se encuentren dentro de los mercados públicos del Distrito Federal.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo relativo a la renuncia y nombramiento de titular de la fiscalía especializada en delitos electorales, a cargo del Diputado Ricardo López Pescador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. El diputado promovente señala como un hecho que marcó el incremento de la atmósfera de incertidumbre en el proceso electoral concurrente del pasado 4 de julio la destitución de la Titular de la Fiscalía especializada en Delitos Electorales el pasado 30 de junio.

En ese sentido, manifiesta su preocupación especial sobre el nombramiento del próximo titular de la FEPADE, exigiendo que se apegue al mandato legal y a los principios de certeza, objetividad e imparcialidad para todos los actores políticos.

Por último, demanda que el ejercicio de la facultad del Ejecutivo de nombramiento no sea un pretexto para confundir los intereses públicos con los personales o con los de partido, que se transparente el proceso y que se inicie un acuerdo plural para reformar la Constitución con el objetivo de que el nombramiento de dicho cargo sea atribución del Poder Legislativo, tomando en cuenta que esto ya se hace a nivel local.

En concreto propone lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, salvaguarde los principios de certidumbre, objetividad y transparencia, ajustándose plenamente a los requisitos legales y a la confianza de todas las fuerzas políticas.

SEGUNDO.- Se hace un llamado a todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma constitucional que permita que el nombramiento en FEPADE sea ratificado por la Cámara de Diputados, fortaleciendo así su carácter democrático.

II. Esta dictaminadora considera que la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado promovente contiene elementos válidos que deben tomarse en cuenta por esta Comisión toda vez que el nombramiento de quien deba sustituir a la titular de la FEPADE, deberá cubrir el perfil requerido con los requisitos legales correspondientes, pero además deberá cumplir con los principios constitucionales rectores que marcan a la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Hay que señalar que en días recientes Felipe Calderón, a propuesta del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, designó a José Luís Vargas Valdez como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

De acuerdo con información que publicaron diversos medios de comunicación, la trayectoria de José Luís Vargas Valdez en el ámbito académico e institucional ha estado vinculada con temas electorales; entre otros cargos se ha desempeñado como asesor jurídico del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, así como de otros consejeros electorales del IFE y del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretario instructor; también ha impartido cursos y diplomados en temas sobre Derecho Electoral, Reforma Política y Justicia Constitucional en Materia Penal y Comparada.

Por otra parte, esta comisión dictaminadora considera que la segunda propuesta que hace el promovente respecto al llamado a todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma constitucional que permita que el nombramiento en FEPADE sea ratificado por la Cámara de Diputados, para fortalecer nuestra democracia debiera ser materia de una promoción legislativa diferente, aunque retoma el sentido de la misma por considerar que hace una aportación valiosa al debate de los temas políticos-electorales dentro del proceso de Reforma del Estado.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Por haberse cumplido su objetivo específico, se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo relativo a la renuncia y nombramiento de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Salón de Plenos de de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR EL RESPETO AL USO DE SUELO DE ÁREA VERDE PARA EL POLÍGONO QUE COMPRENDE EL PARQUE REFORMA SOCIAL.

PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA COLONIA REFORMA SOCIAL EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DEL DISTRITO FEDERAL.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la colonia Reforma Social en la Delegación Miguel Hidalgo; a cargo de la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el pasado miércoles 14 de julio.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 15 de julio de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. La proponente argumenta que cuando era titular de la Demarcación Miguel Hidalgo, y en cumplimiento de las atribuciones que la fracción XXXIII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal confiere a los titulares de los Órganos Político-Administrativos, estableció como prioridad la atención y rehabilitación de los parques y espacios públicos en la demarcación, realizando obras que incluyeron la instalación de juegos infantiles y la regeneración de áreas verdes.

De igual forma, la proponente afirma que durante su administración se construyeron *"Faros del Saber"* con la finalidad de incrementar la oferta de bibliotecas y espacios culturales para los habitantes de las diversas colonias de la citada demarcación y argumenta también que para atender la demanda de las jefas de familia trabajadoras, se construyeron *Centros de Desarrollo Infantil* dentro de las mismas instalaciones de los faros,

con lo cual se maximizaron los recursos públicos y se generaron mejores oportunidades para las familias en la demarcación.

Específicamente, considerando que la colonia Reforma Social cuenta con 4,726 habitantes, de los cuales poco más del 7% son menores de 5 años, y que comprende 1,263 hogares (cerca de 4 mil personas), de las cuales el 26% son conducidos por jefas de familia, en el Presupuesto de Egresos 2009 de la Delegación Miguel Hidalgo se incluyeron suficientes recursos para la construcción del Faro-Cendi Reforma Social.

La proponente afirma que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación llevó a cabo el procedimiento de licitación pública, adjudicando la obra el 22 de febrero de 2009 a la constructora "Elram Construcciones" por un importe de $24'631,555.21, mediante el contrato de obra pública No. DMH-OP-005-FARO-CENDI REFORMA SOCIAL/09

Destaca que la fecha de inicio de los trabajos, según el contrato, fue el 23 de febrero de 2009 y el término del mismo debió darse el 22 de julio del mismo año. Sin embargo, es la fecha en que la obra permanece inconclusa, sin que los Jefes Delegacionales que han ocupado el cargo del mes de abril de 2009 a la fecha hayan rendido ante los vecinos alguna explicación por tal interrupción.

Por otra parte, la proponente señala que en la colonia Reforma Social existe un parque público que significa un espacio de diversión, deporte, recreación y convivencia para los niños, jóvenes y vecinos de la colonia, razón por la cual, durante su gestión con el cargo ya referido, revisó la propuesta del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo en 2007-2008, y acordó con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal que el predio que comprende el Parque Reforma Social se catalogara como Área Verde, lo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa desde octubre de 2008, como consta en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La proponente argumenta que la zonificación del uso del suelo de Área Verde debe preservarse así para garantizar la continuidad de todos los beneficios que brinda el parque no sólo a los vecinos de la colonia Reforma Social, sino a todo el poniente de la Ciudad, ya que representa una fuente de oxígeno permanente para los capitalinos.

Finalmente concluye su argumentación aduciendo que es necesario exhortar a las autoridades competentes de la Ciudad de México a que preserven y protejan el uso del suelo de Área Verde para el polígono que comprende el Parque Reforma Social.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo a que se concluya la construcción del Faro-Cendi ubicado en la colonia Reforma Social de la referida demarcación.

SEGUNDO. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se respete el uso de suelo del predio en mención como área verde.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

XXII. Es imperativo que las zonificaciones del uso del suelo de las Áreas Verdes deben preservarse para garantizar pulmones de oxigenación para la ciudad y espacios de recreación para sus habitantes, y que las autoridades deben ser las garantes de esta preservación.

XXIII. El parque al que alude la proponente no sólo brinda beneficios a los vecinos de la colonia Reforma Social, sino a todo el poniente de la Ciudad.

XXIV. Que las autoridades capitalinas deberán hacer valer la aprobación que hiciera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde octubre de 2008 para que el predio que comprende el Parque Reforma Social se catalogara como Área Verde.

XXV. Que la autoridad delegacional de Miguel Hidalgo debiera darle continuidad a las obras pendientes de centros de desarrollo infantil que están dentro de las instalaciones denominadas "Faros del Saber" que menciona la proponente; en particular al Faro-Cendi Reforma Social, más aún si es que se cuenta con los recursos necesarios para ello como afirma la proponente, sin embargo, esta dictaminadora considera que el exhorto a una autoridad delegacional excede las facultades de esta soberanía.

XXVI. Esta dictaminadora considera que es pertinente exhortar a las autoridades competentes del Distrito Federal a que se haga lo necesario para respetar el uso de suelo de Área Verde para el polígono que comprende el Parque Reforma Social.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Distrito Federal a que garanticen el respeto al uso de suelo de Área Verde para el polígono que comprende el Parque Reforma Social.

Salón de Plenos de de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXTERNA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SU PREOCUPACIÓN POR LA DEFINICIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 85/2010, QUE ESTABLECE UN LÍMITE SUPERIOR AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE EN EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES POR OTORGAR, QUE PUEDE PERJUDICAR A MÁS DE UN MILLÓN DE TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 85/2010 QUE TOPA LAS PENSIONES A EL EQUIVALENTE A DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, le fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pleno respeto a la división de poderes y conforme a sus atribuciones, a considerar la posibilidad de dejar sin efectos la Tesis de Jurisprudencia 2A./J. 85/2010 que topa las pensiones a el equivalente a diez veces el salario mínimo, presentada por los Senadores Carlos Aceves del Olmo, Fernando Castro Trenti y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de julio de 2010.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 14 de julio del 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. El 9 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó una Jurisprudencia por contradicción de tesis en la que se establece que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que son la base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tienen como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Sin embargo, de conformidad con la ley vigente, el tope máximo aplicado para tal cálculo es el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente.

2. De aplicarse la nueva disposición, un empleado con 65 años de edad de una ciudad zona A (como el DF) y considerando el salario mínimo promedio máximo de 25 veces de los últimos 5 años verá reducida su pensión de 482 mil pesos anuales, a sólo 193 mil pesos, es decir, 60 por ciento menos.

3. La Jurisprudencia contraviene, no sólo lo dispuesto por los preceptos antes citados, sino también la garantía individual consagrada en el artículo 14 de la Constitucional que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Al aplicar dicha interpretación por la Suprema Corte, se hace retroactivamente en perjuicio de un millón 217 mil trabajadores, toda vez que los asegurados al afiliarse comienzan a cotizar, por lo que a partir de ese momento se hacen acreedores de los beneficios a generar, y esto es independientemente a que normas posteriores las modifiquen.

4. Resulta apremiante buscar revertir esta situación que está coartando la eficiente administración de la Seguridad Social en nuestro país; ésta, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

5. Resulta increíble que el Máximo Tribunal parezca no comprender el significado de la Seguridad Social, máxime cuando nuestra Constitución Política fue la primera en el mundo que elevó el derecho a la Seguridad Social a Garantía Constitucional.

6. Es el momento indicado para encontrar soluciones, por eso se propone exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, conforme a sus atribuciones y a su responsabilidad con los fines del Estado, de marcha atrás en tan lamentable criterio jurisprudencial que vendría a perjudicar a más de un millón de trabajadores.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pleno respeto a la división de poderes y conforme a sus atribuciones, a dejar sin efectos la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 85/2010, que de otra forma perjudicaría a un millón 217 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I.- De acuerdo a la Jurisprudencia 2a./J. 85/2010 cuyo ponente fue el Ministro Sergio A. Valls Hernández:

De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.

II. La Jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte es resultado de juicios previos llevados entre trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que se infiere de estos juicios, que el Instituto ha tratado de evadir sus obligaciones encomendadas por la Constitución en el artículo 123 Constitucional, apartado "A" fracción XXIX, y que son ante todo las de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión a los trabajadores.

III. Es una Jurisprudencia por contradicción de tesis pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por lo que, al día de hoy, carece de efectos jurídicos; sin embargo, en el momento en que se cumpla con el tramite administrativo, la jurisprudencia tendrá alcances suficientes como para afectar al millón 217 mil trabajadores que, de acuerdo a cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy cotizan entre 11 y 25 salarios mínimos diarios.

IV. El contenido de la Jurisprudencia, evidentemente, está orientada a los trabajadores que, al momento de pensionarse, elijan el sistema pensionario de la Ley vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73; pues ellos, conforme lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y undécimo transitorios de la Ley vigente, tienen derecho a elegir aquella ley que mayores beneficios les genere. La Ley vigente permite a los trabajadores que han cotizado bajo los dos sistemas pensionarios elegir aquél que mayores beneficios les genera, esto se refiere al procedimiento para calcular la pensión que corresponda, pero necesariamente con base en el salario que han cotizado hasta el momento en que se presenta la contingencia, pues es hasta entonces cuando se materializa su derecho de escoger. Por lo que, la aplicación de esta Jurisprudencia contravendría a los beneficios ya generados por los trabajadores que ya estén cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

V. La Jurisprudencia es desafortunada, pues no considera que las pensiones se solicitan y se otorgan cuando se presenta la contingencia respectiva (cesantía, retiro), no la existente al 30 de junio de 1997; máxime que de acuerdo con el artículo segundo transitorio del Decreto publicado el 21 de noviembre de 1996, y el artículo veinticinco transitorio de la Ley del Seguro Social en vigor, el tope salarial para el cálculo de las cuotas correspondientes a los ramos de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, se incrementó cada año con el propósito de llegar a un tope general de 25 SMGDF de la siguiente manera:

Fecha	**Aumento del tope salarial**
al 30 de junio de 1998	15 veces el SMGDF
al 30 de junio de 1999	16 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2000	17 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2001	18 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2002	19 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2003	20 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2004	21 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2005	22 veces el SMGDF
al 30 de junio de 2006	23 veces el SMGDF

al 30 de junio de 2007	24 veces el SMGDF
A partir del 1 de julio de 2008	25 veces el SMGDF

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, recogiendo la inquietud que ha generado entre la clase trabajadora pensionaria del país, externa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su preocupación por la definición de la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 85/2010, que establece un límite superior al salario base de cotización de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal aplicable en el cálculo de las pensiones por otorgar, que puede perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de julio de 2010.

PRIMERA COMISIÓN

DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO:

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN Y AL CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES A IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RELACIONADAS CON LA ERRADICACIÓN MUNDIAL DEL SARAMPIÓN EN EL 2015.

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen con punto de acuerdo, respecto a la implementación de las estrategias adoptadas por la OMS relacionadas con el sarampión.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 16 de junio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud , al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a implementar en cuanto antes, las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), relacionadas con el Sarampión, mismas que tendrán que culminarse en el año 2015, suscrita por la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 16 de junio de 2010, la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud , al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a implementar en cuanto antes, las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), relacionadas con el Sarampión, mismas que tendrán que culminarse en el año 2015.

II.- La Presidencia de la Comisión Permanente en la misma fecha acordó turnarlo a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La promovente señala en el documento en estudio que la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, alertó sobre un grave rebrote del sarampión que, sin rápidas medidas de control, podría causar medio millón de muertes anuales a partir de 2012 y acabar con 18 años de esfuerzos internacionales para erradicar esta enfermedad.

Así mismo la Senadora dentro del cuerpo de su documento, señala que en dicha asamblea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó objetivos concretos para enfrentar cualquier amenaza relacionada con el virus del sarampión, los cuales tendrán que ser culminados en el año 2015.

Entre las principales estrategias destaca, alcanzar una cobertura del 90% en las campañas de inmunización a nivel nacional y del 80% en cada distrito, lo que reduciría los casos de sarampión a menos de 5 por un millón y la mortalidad en un 95% comparado con los niveles del año 2000.

Para sustentar lo anterior, los funcionarios manifestaron que desde principios de 2009 hasta ahora, se ha registrado un resurgimiento a gran escala del sarampión en treinta países africanos, aunque también señalaron brotes graves en Asia (Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), así como en Bulgaria y uno menor en el Reino Unido.

Zimbabue, Chad y Nigeria son los países más afectados en el continente africano, donde desde el pasado junio se han reportado mil 100 muertes por sarampión y más de 64 mil casos.

En Bulgaria ha habido 8 mil casos, principalmente de niños inmigrantes que no estaban vacunados y que viven hacinados. En el Reino Unido hubo algunos casos de transmisión de sarampión que se atribuyen a un nivel de vacunación inferior al 90%.

Asimismo, se confirmaron cuatro contagios de sarampión en el sur de Estados Unidos, cuyas personas afectadas no tenían antecedentes de vacunación.

Ante ello, manifiesta que funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se mostraron preocupados al informar que este retroceso es resultado de niveles de vacunación insuficientes, de sistemas de vigilancia sanitarios que no funcionan.

SEGUNDO.- De acuerdo al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el sarampión es que es una enfermedad aguda, muy contagiosa, causada por un virus de la familia paramixovirus. ¿Cómo se presenta? Inicia con fiebre, malestar general, catarro, ojos rojos (conjuntivitis), tos seca y pueden aparecer en la boca puntos blancos y pequeños (manchas de Koplik). Por lo general al tercer día aparecen ronchas pequeñas de color rojo (exantema) en la cara, posteriormente se extienden al tronco y extremidades, mientras empiezan a desaparecer de la cara.

Se transmite al inhalar pequeñas gotas de secreciones expulsadas de una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Se puede transmitir desde tres días antes de iniciar la fiebre y la tos, y hasta cuatro días después de que aparecen las ronchas o exantema.

Las complicaciones que pudiesen llegar a tener son en general es de curso benigno, pero pueden ocurrir: infecciones del oído, neumonía, diarrea, ceguera, o un sarampión hemorrágico que causa sangrados generalizados e inflamación del cerebro (encefalitis).

El diagnóstico debe realizarlo un médico, quien identifica los signos y síntomas característicos de la enfermedad y lo confirma por laboratorio mediante muestras de sangre, orina y muestra de la garganta (exudado faríngeo)

Es importante tomar muestras de laboratorio porque hay diversas enfermedades que pueden confundirse con sarampión y la forma de confirmar el diagnostico, es mediante muestras de sangre, orina o exudado faríngeo.

No hay tratamiento específico, los cuidados se encaminan al control de la fiebre y la tos, que son síntomas constantes de la enfermedad, evitando la ingesta de aspirina y jarabes con codeína en niños menores de 12 años. Deben administrarse líquidos abundantes, reposo y una alimentación adecuada que ayude al paciente a sentirse mejor. Se recomienda consultar al médico antes de administrar cualquier medicamento

Las recomendaciones que se tienen que seguir para no contagiarse son evitar el contacto con personas que presentan este tipo de erupción, taparse la boca al toser o estornudar, lavado frecuente de manos y no acudir a lugares concurridos en caso de presentar erupción.

Las personas que deben vacunarse cuando hay casos de sarampión son:

Niños: de 6 a 11 meses con una dosis de vacuna de sarampión-rubéola (doble viral o SR) preliminar haciendo énfasis que se debe de aplicar la dosis del esquema al año de edad; niños de 1 a 6 años que no han sido vacunados debe aplicarse vacuna sarampión-rubéola-parotiditis (Triple Viral o SRP) y a los de 7 a 39 años que no cuenten con antecedente de vacunación a partir del año 2000, se le aplicará sarampión-rubéola (doble viral o SR).

Así como a los trabajadores de: turismo, tianguis, mercados, de salud, del magisterio y alumnos de secundarias, preparatorias y profesionales que vivan o laboren alrededor de las áreas de riesgo.

TERCERO.- Los antecedentes que tenemos es que el sarampión en México se caracterizó por una elevada ocurrencia de casos en la época previa a la introducción de la vacuna. La frecuencia de esta enfermedad ha disminuido significativamente, a lo largo de los últimos años, debido principalmente a las altas tasas de vacunación y al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, lo que ha permitido obtener las cifras anuales de casos de sarampión más bajas en el país, la última epidemia en nuestro país fue en 1989 y 1990 con más de 86,000 casos y más de 6,000 defunciones.

En correspondencia con lo anterior, se ha dispuesto que la eliminación del sarampión es una meta a conseguir a corto plazo, por lo que la vigilancia epidemiológica del sarampión ha enfocado sus estrategias en la consolidación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica eficaz que involucra a todas las instituciones de salud y permita el estudio de todos los casos probables.

El sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata, porque la vigilancia epidemiológica de dicha enfermedad se debe llevar a cabo en todas las unidades de salud de los sectores público y privado. La vigilancia epidemiológica se realiza mediante la notificación inmediata de casos probables y la revisión periódica de los certificados de defunción. Las instituciones de salud cuentan también con mecanismos especiales de vigilancia epidemiológica que permiten estudiar y dar seguimiento a todos los casos probables de sarampión y a los casos de enfermedad febril exantemática (EFE) que se detectan en las unidades de salud, lo que permite realizar un estudio exhaustivo clínico y epidemiológico de los mismos para la identificación de factores de riesgo y las probables fuentes de infección, así como implementar las medidas de prevención y control alrededor de los casos.

TERCERA.- Como lo señala la legisladora, desde el 2007 no se tiene registrado casos graves de contagio de sarampión en nuestro país, los últimos brotes registrados datan del 2006, año en que hubo 22 contagios, mismos que se han sido atribuidos a importaciones del virus.

Sin embargo el virus del sarampión está presente a nivel mundial, aunque la incidencia de la enfermedad tiende a ser muy variable. En particular en los países en desarrollo, siempre habrá epidemias de sarampión locales con una elevada morbilidad y mortalidad. Según estimaciones de la OMS en 2000, el sarampión era responsable de casi la mitad de los 1,7 millones de muertes prevenibles por vacunación en los niños, causado un estimado de 30 a 40 millones de casos de sarampión al año.

Además es importante recordar, que México es un país que está abriendo sus fronteras cada vez más, con la celebración de tratados internacionales, esto provoca un pujante tráfico de mercancías, de personas y un mayor auge turístico proveniente de todo el mundo,

Por lo que los integrantes de esta comisión dictaminadora apoyan la intención de la promovente de que se mantenga un monitoreo en los principales lugares de afluencia, entendiendo a estos como en hospitales públicos y privados, escuelas, aduanas, puertos y aeropuertos, así como que se implementen las medidas aprobadas por los Estados miembros de la OMS para la erradicación del sarampión.

Ante las disposiciones expuestas esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a implementar en cuanto antes, las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con la erradicación mundial del sarampión en el 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de sus dependencias correspondientes, realice un estricto monitoreo en hospitales públicos y privados, escuelas, aduanas, puertos y aeropuertos, con la finalidad de detectar focos epidemiológicos y evitar la propagación del virus del sarampión.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los **veinte y siete** días del mes de julio del dos mil diez.

SEGUNDA COMISIÓN

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN Y RECHAZO A LOS ACTOS COMETIDOS EN CONTRA DE NUESTROS CONNACIONALES POR UNA ORGANIZACIÓN EN UTAH, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DENOMINADA "CIUDADANOS PREOCUPADOS POR ESTADOS UNIDOS".

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen con Punto de Acuerdo en relación a hechos ocurridos en Utah.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA, con fecha 14 de julio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que manifieste su rechazo respecto de los actos ocurridos en el Estado de Utah en Estados Unidos de America, suscrita por el Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

También con fecha 21 de julio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores a fin de que solicite al Gobierno de Estados Unidos de America realice una investigación respecto a los hechos ocurridos en el Estado de Utah, suscrita por la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 14 de julio de 2010, el Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que manifieste su rechazo respecto de los actos ocurridos en el Estado de Utah en Estados Unidos de América.

II.- La Presidencia de la Comisión Permanente en las mismas fechas acordó turnarlos a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 21 de julio de 2010, la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores a fin de que solicite al Gobierno de Estados Unidos de América realice una investigación respecto a los hechos ocurridos en el Estado de Utah.

IV.- La Presidencia de la Comisión Permanente en las mismas fechas acordó turnarlos a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta dictaminadora al realizar un estudio de las proposiciones considera realizar un solo proyecto de dictamen, toda vez que ambas proposiciones versan sobre un mismo tema.

SEGUNDA.- Para los integrantes de esta Comisión es de sumo interés el tema de los documentos en estudio, así como las inquietudes de los promoventes, acerca de los distintos acontecimientos suscitados en las últimas semanas en contra de los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos de América independientemente de su calidad migratoria.

Los legisladores en sus respectivas proposiciones señalan; que el pasado 13 de julio se da a conocer por una cadena de noticias que en el Estado de Utah se presentó de manera anónima en el mes de abril una lista de más de 1300 personas de origen hispano, con nombres, apellidos, teléfonos y en algunos casos hasta datos de sus hijos, que presuntamente son indocumentados y de los cuales piden su deportación.

Las personas que generaron esta información se dicen llamar "Ciudadanos preocupados por Estados Unidos" (Concerned Citizens of the United States), cabe mencionar que la mayoría de los nombres que incluye la lista son de origen hispano con predominancia de mexicanos. También contiene información privada como sus números de seguridad social, fechas de nacimiento y lugar de empleo.

La lista fue acompañada de una carta en la que se reclama la deportación de las personas señaladas y, en la que se asegura, que algunos de los nombres figuran en otro listado enviado a la oficina de Salt Lake City del servicio de Inmigración y Aduanas en abril pasado.

TERCERA.- Este tipo de acciones están generando posturas racistas y xenófobas radicalizadas por la Ley de Arizona que podría entrar en vigor en unos días más.

En días pasados el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama interpuso un juicio en contra de la entrada en vigor de la ley SB1070, no obstante el Partido Demócrata ha solicitado a la Casa Blanca retirar la impugnación a la Ley SB1070.

De acuerdo a los medios de comunicación fueron dos empleados del Departamento de Servicios Laborales de Utah los que distribuyeron la citada lista.

El gobernador de este Estado, Gary Herbert dijo que los empleados trabajan para el Departamento de Servicios Laborales, el cual administra programas de cupones de alimentos y otros beneficios. Los funcionarios ya fueron suspendidos de sus funciones.

Sin embargo en días posteriores Kristen Cox, directora de esta oficina gubernamental, informó que la persona despedida era un empleado temporal que estaba a cargo del mantenimiento de la base de datos de la agencia estatal.

Un empleado del departamento de Servicios Laborales de Utah fue despedido, otro lo será próximamente y ocho están siendo investigados por la difusión de una lista con datos personales de mil 300 inmigrantes hispanos para pedir su deportación por su supuesta situación irregular en Estados Unidos, sin embargo no han sido revelados los nombres de estas personas.

En declaraciones a los medios de Salt Lake City, Kristen Cox explicó que las investigaciones continuarán hasta que se determine cómo se compiló la información personal de 1.300 inmigrantes hispanos que luego se distribuyó el 12 de julio en un documento de 29 páginas enviado a los medios de comunicación, agencias de seguridad y legisladores.

La ley de Utah especifica que el dar a conocer de manera intencional información privada es un delito que puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión y con una multa de hasta 1.000 dólares.

El caso quedará en manos de la oficina del procurador de justicia estatal para determinar si se presentarán cargos adicionales contra los implicados y si se infringieron leyes federales.

Es importante recalcar que el fiscal general de Utah, Mark L. Shurtleff, manifestó que el estado de no está investigando a las personas incluidas en la lista de supuestos indocumentados, distribuida a oficinas de

Sheriff y medios de comunicación locales. Cito “Quiero dejar esto muy claro. No se les está investigando y no lo haremos en el futuro”.

CUARTA.- Ahora bien, en otro orden de ideas, para el 20 de julio siete países latinoamericanos se unieron a México para acudir a los tribunales en Estados Unidos y apoyar una demanda civil contra la nueva ley migratoria de Arizona.

Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes, aunque muy similares en su contenido, para apoyar el argumento legal de México que respalda la demanda interpuesta por grupos en pro de los derechos civiles a nivel federal y otras organizaciones de activistas.

Otra acción es que en Ginebra a petición de México once países firmaron una declaración en la que muestran su preocupación y condena por la Ley Arizona, la cual consideran que tiene un "espíritu racista, xenófobo y contrario a la inmigración de cualquier tipo".

A iniciativa de México, once delegaciones y el presidente de la Asamblea Parlamentaria de Europa, el turco Mevlüt Çavusoglu, firmaron el documento, que insta a la comunidad internacional "a alzar su voz contra la ley Arizona y cualquier otra medida discriminatoria".

Los países signatarios fueron, además de México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Turquía, Senegal, Micronesia y Chile.

Por lo que con esta información podemos dar por atendida el segundo resolutivo de la legisladora.

Sin embargo esta Comisión considera necesario manifestar su preocupación por los actos que se están realizando en contra de los derechos humanos de los connacionales, por lo que se emite el siguiente dictamen.

Por las disposiciones antes mencionadas esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de La Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, manifiesta su preocupación y rechazo a los actos cometidos en contra de nuestros connacionales, por una organización en Utah, Estados Unidos de América denominada “Ciudadanos preocupados por Estados Unidos” (Concerned Citizens of the United States).

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que envíe una nota diplomática en la que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América se investiguen los hechos ocurridos en el Estado de Utah y se tomen las acciones pertinentes.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que se han tomado respecto a la protección de los Derechos Humanos de los connacionales que se encuentran en el Estado de Utah, Estados Unidos de América.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los **veinte y siete** días del mes de julio del años dos mil diez.

SEGUNDA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA EN EL PERÍODO 2007-2009.

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita informe de los resultados obtenidos por el programa escuela segura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA, con fecha 7 de Julio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar un diagnostico que permita identificar la problemática que enfrentan los jóvenes por zonas especificas con el fin de que sean integrados al Programa Escuela Segura, así como para que rinda un informe sobre los resultados de dicho programa en el periodo 2007-2009, suscrita por el Senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 7 de Julio de 2010, el Senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar un diagnostico que permita identificar la problemática que enfrentan los jóvenes por zonas especificas con el fin de que sean integrados al Programa Escuela Segura, así como para que rinda un informe sobre los resultados de dicho programa en el periodo 2007-2009

II.- La Presidencia de la Comisión Permanente en la misma fecha acordó turnarlo a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Para esta comisión, es claro que la educación es el mecanismo más importante para concretar el proceso de desarrollo de las personas ya sea de forma individual, o en la relación con su comunidad.

Así mismo la educación es un proceso de socialización en las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, un fin de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte.

Como lo señala en el documento en estudio, en los últimos años ha venido aumentando el ambiente de violencia dentro y fuera de los planteles educativos, ante tal suceso el Gobierno Federal tuvo a bien crear el "Programa Escuela Segura", el cual se puso en marcha en febrero de 2007, dicho programa incluye acciones contra la violencia, y de la misma forma evitar que los jóvenes sean presa fácil de las drogas.

El (PES) intenta proporcionar a las comunidades educativas las herramientas psicosociales y pro-sociales que las apoyen en el fortalecimiento de la convivencia interna y la resolución pacífica de conflictos.

SEGUNDA.- Dentro del Objetivo General del Programa Escuela Segura, esta consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos, esta última orientada a la convivencia democrática, la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad, la participación social y la resolución no violenta de conflictos.

Así mismo dentro de sus objetivos específicos encontramos los siguientes:

- Promover el desarrollo de competencias para la convivencia democrática y el ejercicio de los derechos humanos como una vía para fortalecer la cultura de la prevención en las escuelas.

- Favorecer la convivencia democrática, solidaria y respetuosa en la comunidad escolar, con la participación de maestros, padres de familia y alumnos, para la generación de ambientes seguros.

- Impulsar acciones que favorezcan la seguridad en la comunidad escolar y la protección ante riesgos potenciales del entorno comunitario, en colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales, así como con organizaciones de la sociedad civil.

- Impulsar una cultura de paz en las comunidades escolares sustentada en el desarrollo de competencias ciudadanas orientadas hacia la prevención y el autocuidado ante situaciones de riesgo social como la violencia, las adicciones y la delincuencia.

- Potenciar la formación ciudadana que se brinda a los alumnos a través del currículo de educación básica en las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Cultura de la Legalidad y de otras que contemplan aspectos del cuidado de la salud, la prevención del consumo de sustancias adictivas, la negociación y el diálogo para resolver conflictos, la toma de decisiones y el desarrollo de un plan de vida identificado con el mejoramiento de la convivencia social.

- Orientar, monitorear y evaluar las experiencias generadas en las escuelas, zonas escolares y entidades para la construcción de ambientes democráticos y seguros en las escuelas.

El Programa Nacional de Escuela Segura es una oportunidad para desarrollar, en los educandos, herramientas para la prevención las cuales los hacen competentes para la convivencia ciudadana al promover en ellos un alto sentido de responsabilidad hacia sí mismos y hacia quienes les rodean.

Además el programa centra su atención en aquellas situaciones que representan riesgos para el bienestar y la convivencia escolar, es así que, el Programa representa una contribución al desarrollo de competencias ciudadanas, las cuales implican un aprovechamiento de los aprendizajes que se promueven, la resolución no violenta de conflictos, la autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad, y la participación social. De este modo, las acciones del programa implican la identificación y el establecimiento de formas de convivencia donde prevalezca el respeto, la solidaridad, la reciprocidad, el buen trato, la responsabilidad, la colaboración y la justicia.

TERCERA.- La violencia escolar, se entiende como la acción u omisión que se genera premeditadamente perjudicial, la cual es ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce bien dentro de los espacios físicos (instalaciones escolares), y también en los alrededores de las escuelas, ya que existen peligros para los menores, como son la presencia de pandillas, venta y consumo de drogas y alcohol.

El Programa Escuela Segura está dirigido a las escuelas de educación básica ubicadas en los 150 municipios con mayor índice delictivo, habiendo iniciado en las 10 ciudades que presentan el mayor índice de violencia y comisión de delitos.

El promovente señala, que una de las críticas que se le hacen al (PES) es que no contó con un diagnóstico previo que sirviera de base para determinar las acciones que atendieran la problemática de los jóvenes en general y por zona.

No obstante esta Dictaminadora coincide con el legislador al señalar que la situación reviste gran importancia, porque no solamente se trata de la seguridad de nuestros niños y adolescentes, sino también la falta de valores y capacidad para relacionarse de manera pacífica con sus compañeros y en general con la comunidad que los rodea, por lo que es procedente se solicite un informe de los resultados obtenido por el citado programa.

Ante las consideraciones antes citadas, esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, proporcione un informe detallado sobre los resultados obtenidos del Programa Escuela Segura en el período 2007-2009.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que considere realizar un diagnóstico con el fin de identificar los problemas que afectan a los jóvenes por zonas específicas y sean integrados dentro del Programa Escuela Segura.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veinte y siete días del mes de julio del año dos mil diez.

SEGUNDA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA, A TRAVÉS DE UN NÚMERO NACIONAL ÚNICO, PARA ATENDER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; Y SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INTEGRAR EN SUS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ.

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a establecer un número nacional único para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA, con fecha 9 de junio de 2010, fue turnada para su análisis una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a crear el protocolo nacional de atención vía telefónica para la intervención en crisis por violencia y/o discriminación hacia la niñez y a crear un numero nacional único de tres dígitos para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y/o discriminación, suscrita por la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

I. Análisis de la propuesta

Los suscritos integrantes de esta Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta, que en su parte fundamental señala:

> ***PRIMERO.-*** *Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que con apoyo de los órganos que considere pertinentes, cree el Protocolo Nacional de Atención vía telefónica para Crisis por Violencia y/o Discriminación hacia la niñez, así como, un número nacional único de tres dígitos para atender a niñas y niños víctimas de violencia y/o discriminación.*
>
> ***SEGUNDO.-*** *Se exhorta a todas las Entidades Federativas para que integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y la creación de centros especializados de atención a la violencia y discriminación contra la niñez.*

En sus consideraciones, la proponente señala que a lo largo de la historia, el reconocimiento de niñas y niños como personas ha tenido que pasar por un largo, controvertido y difícil proceso. Si bien los primeros esfuerzos formales por reconocerles como tales y por tanto con derechos, se remiten a 1959, año en que fue proclamada la Declaración de los Derechos del Niño, fue hasta 1989 cuando vio la luz la *Convención sobre los Derechos del Niño (*CDN), tratado sin precedentes que a la fecha destaca por ser el más ampliamente firmado por los países del mundo.

Agrega que la Convención implicó un parteaguas en la historia de la humanidad, al concebirse por vez primera a niñas y niños como sujetos de derechos y establecer la trascendencia de orientar acciones en pro de ellos, considerando como principio rector su interés superior.

Recalca que al firmar la CDN, los Estados parte se comprometen a garantizar a la niñez todos y cada uno de sus derechos. Buscando hacer realidad lo anterior, uno de los temas que más ha generado preocupación en el mundo entero es la violencia y discriminación de que son objeto niños y niñas, situación que se ha convertido

en un grave problema social y que por su trascendencia fue abordado en años recientes a través de un estudio propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y encabezado por el experto independiente Paulo Sergio Pinheiro.

El propósito del mismo, fue presentar un panorama detallado sobre la naturaleza, el alcance y las causas de la violencia contra la infancia, y proponer recomendaciones claras sobre cómo actuar para impedirla y responder ante ella.

La investigación concluye que la violencia contra la niñez tiene lugar en todos los lugares y en todos los países. Por otra parte, identifica cinco espacios en los que de manera prioritaria se violenta a niñas y niños: el hogar y la familia; las escuelas y los entornos educativos; las entidades asistenciales y judiciales; el lugar de trabajo y la comunidad. El estudio advierte que la violencia contra la infancia se da tanto a nivel físico como psicológico, a manera de insultos y humillaciones, discriminación, abandono y malos tratos. Reconoce que aunque las consecuencias pueden variar según la naturaleza y gravedad de la violencia infligida, las repercusiones a corto y largo plazo para los niños y niñas, y para el conjunto de la sociedad, suelen ser graves y perjudiciales.

Por lo que se refiere a México, la legisladora agrega que nuestro país suscribió la CDN en el año de 1990 y a partir de ello ha llevado a cabo adecuaciones legislativas, así como acciones tendientes a asumir el compromiso con la infancia, mismo que compete por igual al gobierno que a todas las personas que conforman la sociedad. Sin embargo, considera, los esfuerzos han resultado insuficientes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta datos en los que refiere los distintos tipos de maltrato, mismos que se enlistan de acuerdo al porcentaje de denuncias: físico, emocional, omisión de cuidados, negligencia, abandono, abuso sexual, explotación laboral, explotación sexual comercial.

Considerando la magnitud de la problemática, la legisladora concluye que los casos no denunciados abundan, además de que solamente el 2.2 % de las denuncias son atendidas. Niñas y niños victimizados quedan perdidos en el silencio y reciben constantes agresiones que merman su calidad de vida.

Por lo anterior considera urgente abrir espacios para la recepción de denuncias de casos de maltrato infantil, lo cual permitirá conocer con precisión la magnitud de la problemática y partir de ello para generar las políticas públicas conducentes.

II. Consideraciones de la Comisión

1. Los legisladores integrantes de la SEGUNDA COMISIÓN coincidimos con el contenido de la propuesta. Como señala la proponente el estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños proporciona un panorama amplio de la naturaleza, extensión y causas de la violencia contra los menores de edad y propone medidas concretas a fin de prevenirla y reducirla.

De acuerdo con el propio Paulo Sérgio Pinheiro, en América Latina hay un inmenso desequilibrio entre los compromisos que han asumido los países en el contexto internacional y la realidad vivida por los niños, niñas y adolescentes[49]

Señala que las investigaciones en distintos países han detectado que la vulnerabilidad de los niños a la violencia está frecuentemente ligada a su edad y sexo. Los niños y niñas más jóvenes son más vulnerables a la violencia física, y la violencia sexual afecta predominantemente a los adolescentes.

Factores como las actitudes discriminatorias, los estereotipos sobre los roles de cada género contribuyen a la violencia. Así como también es sabido que muchas veces la desigualdad económica, la inestabilidad política, los conflictos armados son factores que contribuyen a aumentar los riesgos de violencia.

Agrega que el fin de la violencia no se conquista con discursos “mano dura”. La violencia no va a terminar si todos los esfuerzos que hacemos están dirigidos a aumentar penas y castigar indiscriminadamente. El

[49] *http://www.unicef.org/lac/media_6865.htm*

combate a la violencia es un largo trabajo que combina las medidas represivas con medidas preventivas que efectivamente cambien el escenario en que se produce la violencia.

El experto destaca siete recomendaciones generales que considera los países deben incorporar de manera amplia e inmediata en el diseño de las políticas públicas:

a) Prohibir toda forma de violencia contra los niños en todos los contextos, inclusive el castigo físico dentro de las casas y escuelas. Pues, señala, las leyes no son artefactos mágicos que cambien la realidad, pero reconoce que difícilmente la realidad cambia sin el amparo de leyes.

b) Propiciar a la prevención de la violencia contra los niños abordando sus causas y considerando los factores de riesgo, así como prevenir la violencia antes de que ocurra. En términos de costo para el Estado, invertir en políticas de prevención es más efectivo que invertir en las consecuencias graves de la violencia.

c) Promover valores no violentos. Los Estados y la sociedad civil deben contribuir para transformas las actitudes que aceptan o consideran normal la violencia contra los niños, incluida la aceptación de los castigos corporales y las prácticas tradicionales dañinas. Los medios de comunicación deben ser cautelosos para evitar glorificar la violencia.

d) Crear sistemas de registro de denuncias y servicios accesibles y adecuados para los niños. Las líneas telefónicas de ayuda mediante los cuales los niños, niñas y adolescentes pueden denunciar los abusos, hablar con un asesor capacitado de manera confidencial y pedir apoyo son iniciativas que han tenido éxito.

e) Invertir en el apoyo de la víctima y también en la recuperación del agresor es fundamental para romper el ciclo de la violencia.

f) Poner fin a la impunidad. La impunidad, principalmente en los casos en que la violencia es cometida por funcionarios del Estado, es un terrible combustible para más violencia.

g) Mejorar los sistemas de datos e información. Sólo con un sistema eficiente se pueden planificar de forma efectiva las políticas públicas y hacer un seguimiento de los progresos alcanzados. El mínimo para cualquier política de protección a la niñez eficiente es tener registros universales sobre nacimientos, defunciones y matrimonios.

2. En otro orden de ideas, esta Comisión desea resaltar la importancia de los números telefónicos de emergencia, los cuales son sistemas de respuesta cuya implementación se basa en la necesidad de una dependencia encargada de impulsar las acciones para atender a llamados de auxilio provenientes de la ciudadanía, y a las que la policía o personal capacitado debe responder con la mayor rapidez posible. Cabe recordar que el primer experimento con número de teléfono de emergencia nacional fue producido en el Reino Unido en 1937, utilizando el número 999.

La primera ciudad en América del Norte en utilizar un número de emergencia (en 1959) fue la ciudad canadiense de Winnipeg, Manitoba, en Canadá, utilizando el 999 como número de emergencia. En los Estados Unidos, el impulso para el desarrollo de un teléfono de emergencias llegó en 1957 cuando la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos recomendó que se utilizara un sólo número en los avisos de incendio. En 1968, se acordó copiar el concepto de Canadá pero adoptando el número 9-1-1, breve, fácil de recordar y que podía ser marcado con facilidad (incluso en la oscuridad) en el sistema de disco que, entonces, era utilizado.

Este sistema, desde entonces hasta la fecha ha resultado práctico y muy útil para la comunidad.

En nuestro país contamos con los números telefónicos 066 de EMERGENCIA y 089 de DENUNCIA ANÓNIMA. Ambos números fueron activados con la idea fundamental de que la ciudadanía participe y unifique esfuerzos con las dependencias de seguridad pública para combatir la delincuencia. Por otra parte, entre los números de emergencia, se cuenta con números telefónicos para otros distintos servicios: bomberos, ambulancias, emergencias médicas, Cruz Roja Mexicana, Cruz Verde.

En diversos países, además de los arriba mencionados, existen números exclusivos para emergencias o denuncias por abuso:

Argentina	102	Ayuda al niño
Chile	147	Fononiños
España	016	Teléfono contra los malos tratos (violencia de género).

3. En este sentido, esta Comisión hace el llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social, a fin de que considere la pertinencia de implementar un número único nacional, con el propósito de atender a niños víctimas de violencia, con el objetivo de prevenir y reducir este fenómeno.

Asimismo, en el punto propuesto, se hace referencia a violencia y discriminación. La SEGUNDA COMISIÓN, para efectos de este dictamen, considera la discriminación en sí misma como un acto violento, pues aún cuando no sea violencia física, la discriminación agrede y ofende, por lo cual en el resolutivo que al final se propone, se considera a la violencia en todas sus formas.

En mérito de lo antes expuesto, la SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a establecer un sistema de atención vía telefónica, a través de un número nacional único de tres dígitos, para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas a que integren en sus planes y programas de trabajo la prevención y atención de la violencia contra la niñez.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a **veinte y siete días** de julio del dos mil diez.

SEGUNDA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD UN INFORME SOBRE LA NEGATIVA DE DIVERSOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD A REALIZAR LA PRUEBA DE DIABETES GESTACIONAL A MUJERES EMBARAZADAS.

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen relativo a evitar la diabetes en el embarazo.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 7 de julio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita inicie una campaña para evitar la diabetes en el embarazo, suscrita por el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 7 de julio de 2010, el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita inicie una campaña para evitar la diabetes en el embarazo.

II.- La Presidencia de la Comisión Permanente en la misma fecha acordó turnarlo a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El promovente señala que alrededor del 8.2 % de la población entre 20 y de 69 años padece diabetes y que cerca del 30 % de los individuos afectados, desconoce que la tiene. Esto significa que en nuestro país más de cuatro millones de personas enfermas de las cuales poco más de un millón no han sido diagnosticadas.

Menciona que la mortalidad por esta la diabetes muestra un incremento sostenido durante las últimas décadas, hasta llegar a ocupar los primeros lugares de mortalidad en general.

SEGUNDA.- La diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, esta traduce una insuficiente adaptación a la insulino resistencia que se produce en la gestante.

Es la complicación más frecuente del embarazo y su frecuencia es variable según los distintos estudios, poblaciones y criterios diagnósticos utilizados.

Su importancia radica en que aumenta el riesgo de diversas complicaciones obstétricas como ser el sufrimiento fetal, macrosomía y problemas neonatales, entre otros

Existen algunas complicaciones que se generan a raíz de la diabetes gestacional:

· Maternas:
- Descompensación metabólica aguda: cetoacidosis diabética, siendo mortal para la madre y el feto.
- Infecciones urinarias recidivantes que agravan la evolución de la diabetes.
- Preclampsia/eclampsia, que aumenta el riesgo de morbimortalidad materno/fetal.5
- DG en embarazos posteriores y diabetes mellitus tipo 2: por lo general la diabetes gestacional desaparece después del embarazo, pero una vez que se ha tenido DG hay posibilidad de que dos de cada tres mujeres presente nuevamente esta enfermedad en futuros embarazos. Hasta un 30 a 40% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollan una diabetes mellitus manifiesta dentro de 5 a 10 años. El riesgo puede incrementar si la obesidad está presente.11 Datos recientes apuntan a un mayor riesgo de hipertensión, dislipidemia, y enfermedad cardiovascular.

· Fetales:
- Macrosomía: Peso excesivo para la edad gestacional, constituye el atributo más característico de la diabetes gestacional. Se la ha considerado como una consecuencia del hiperisulinismo fetal en respuesta a las altas concentraciones de glucosa materno/fetal.12 Existen complicaciones relativas a la macrosomía fetal, llevando a un aumento de la tasa de partos por cesárea, mayor riesgo de tocotraumatismos y aumento de la neomortalidad.
- Malformaciones congénitas pueden ocurrir, ya que no siempre se trata diabetes que aparece por primera vez en el embarazo, pero si es diagnosticada en esta ocasión.5
- Problemas respiratorios: Enfermedad de la membrana hialina por inmadurez pulmonar, ya que el hiperinsulinismo fetal, interfiere en la acción madurativa de las catecolaminas y corticoides endógenos.
- Hiperbilirrubinemia: es significativamente mas frecuente e intensa, tanto por la prematuridad como por la policitemia secundaria a una mayor secreción de eritropoyetina por hipoxias leves en úteros.
- Hipocalcemia: se presenta a los dos o tres días del nacimiento, cuya causa es la reducción transitoria de la secreción de Paratohormona.
- Hipoglucemia: es frecuente, especialmente en los neonatos macrosomicos.

TERCERA.- Para el diagnostico, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en su apartado establece que:

10. Diagnóstico

10.1 Se establece el diagnóstico de diabetes, si cumple cualquiera de los siguientes criterios: presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual >200 mg/dl (11,1 mmol/l); glucemia plasmática en ayuno >126 mg/dl (7 mmol/l); o bien glucemia >200 mg/dl (11,1 mmol/l) a las dos horas después de carga oral de 75 g de glucosa disuelta en agua. En ausencia de hiperglucemia inequívoca, con descompensación metabólica aguda, el diagnóstico debe confirmarse repitiendo la prueba otro día.

10.2 Se establece el diagnóstico de glucosa anormal en ayuno, cuando la glucosa plasmática o en suero es >110 mg/dl (6,1 mmol/l) y <126 mg/dl (6,9 mmol/l).

10.3 Se establece el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, cuando la glucosa plasmática, a las dos horas poscarga, es >140 mg/dl (7,8 mmol/l) y <200 mg/dl (11,1 mmol/l).

10.4 Diabetes Gestacional.

10.4.1 Antes de efectuar la prueba de tolerancia a la glucosa, se deberá realizar la prueba de detección en toda embarazada entre las semanas 24 y 28 de gestación. Si una hora después de una carga de 50 g de glucosa por vía oral, se encuentra una glucemia plasmática >140 mg/dl, se efectuará la prueba diagnóstica.

10.4.2 Se establece el diagnóstico de diabetes gestacional, si durante las semanas 24 a 28 del embarazo se presentan dos o más de los siguientes valores: en ayuno >105 mg/dl; y, después de una carga de glucosa en

ayuno de 100 g, valores superiores a 190 mg/dl a la hora poscarga, 165 mg/dl a las dos horas poscarga y 145 mg/dl a las tres horas.

CUARTA.-Esta dictaminadora considera válida la preocupación del iniciante al considerar que la Diabetes Gestacional es una entidad que genera mayor riesgo feto-neonatal, teniendo como característica ser sintomática en la madre. Por esta razón es importante el conocimiento de los factores de riesgo para realizar la detección y diagnóstico de DG y poder de esta manera instaurar el tratamiento y seguimiento multidisciplinario de la mujer embarazada, a fin de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal.

Cabe resaltar la importancia de este tema, ya que un porcentaje de mujeres tienen mayor probabilidad a desarrollar diabetes gestacional en el próximo embarazo y predisposición en el futuro de desarrollar diabetes mellitas tipo II, razón por la cual se insiste en el seguimiento de dichas pacientes.

Además el senador, comenta que de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Perinatología existen nosocomios en distintos estados que no aplican la prueba de detección a mujeres embarazadas, por lo que esta Comisión considera oportuno solicitar un informe a la Secretaria del Ramo para conocer apropiadamente la situación antes mencionada.

Ante las disposiciones expuestas esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud remita a esta soberanía un informe sobre la negativa de diversos hospitales y centros de salud a realizar la prueba de diabetes gestacional a mujeres embarazadas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud analice la implementación de campañas de difusión con el fin de que las mujeres embarazadas soliciten las pruebas de diabetes gestacional en los hospitales y centros de salud respectivos.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veinte y siete días del mes de julio del dos mil diez.

SEGUNDA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD UN INFORME ANTES DE QUE INICIE EL CICLO ESCOLAR 2010-2011 SOBRE LAS ACCIONES QUE TOMARÁN PARA REDUCIR LOS CASOS DE PADECIMIENTO AUDITIVOS EN NIÑOS.

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública.

Dictamen relativo a padecimientos en el oído en estudiantes

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 21 de julio de 2010, fue turnada para su análisis una Proposición con Punto de Acuerdo para afrontar el padecimiento del oído en estudiantes, suscrita por el Senador Javier Orozco Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión pública celebrada por la Comisión Permanente el día 21 de julio de 2010, el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento una Proposición con Punto de Acuerdo para afrontar el padecimiento del oído en estudiantes.

II.- La Presidencia de la Comisión Permanente en la misma fecha acordó turnarlo a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El promovente hace alusión en su documento en estudio a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) que se realizo en el 2008, por parte de la Secretaria de Salud y la Secretaría de Educación Pública.
El objetivo general fue describir el estado de salud, educación y condiciones de vida de los estudiantes de escuelas públicas, de nivel primaria y secundaria de la República Mexicana e identificar los principales factores de riesgo a la salud a los que están expuestos.

La metodología utilizada fue la aplicación de una encuesta nacional, probabilística y por conglomerados con representatividad estatal, en escolares a nivel primaria y secundaria de escuelas públicas del país. El tamaño de la muestra a escala nacional se estimó en 80,000 escolares. Para la determinación del tamaño de muestra se consideró que este debería permitir el cálculo de estimadores con error relativo de hasta 25% y confianza del 95% para cada uno de los dominios de estudio.

Se determinó un tamaño de muestra de 1500 alumnos por estado para primarias y de 1000 por estado para secundarias. Se obtuvo información por medio de dos cuestionarios, aplicados en computadora, acerca de aspectos socio demográficos, de educación, estilos de vida, composición del hogar y aspectos de salud de los escolares. Además, se preguntó sobre el conocimiento de temas de prevención de enfermedades; también se realizaron pruebas de agudeza visual y auditiva.

SEGUNDA.-Los resultados de la ENSE con relación a las pruebas de agudeza visual y auditiva destacan los siguientes:

1.- De acuerdo a las pruebas de agudeza visual en el ámbito nacional, el 15.8% de los estudiantes de primaria y el 15.5% de los que asisten a secundaria, presentaron alguna alteración en la función visual en al menos un ojo. Cabe destacar que el 6.9% de los niños que acuden a la primaria utilizan lentes, y que de acuerdo a las pruebas realizadas en la ENSE, el 39.9% de los que utilizan anteojos tienen problemas de agudeza visual en alguno de sus ojos. En los estudiantes de secundaria, el 41.1% usa anteojos y cerca del 11.4% de los que los utilizan, tienen problemas de agudeza visual en algún ojo.

2.- De acuerdo a las pruebas de agudeza auditiva, poco más de una tercera parte de los escolares de primaria (33.0%) y 36.0% de los estudiantes de secundaria presentaron falla auditiva en al menos un oído.
La prevalencia de dolor de oído en las dos semanas previas al levantamiento de la encuesta fue de 9.2% en los escolares menores de 10 años y de 10.4% en los de 10 años y más.
Del total de estudiantes que presentaron dolor de oído, el 67.9% de los escolares menores de 10 años y el 40.2% de los estudiantes de 10 años y más, utilizó medicamentos para controlar el dolor. El 18.3% y el 17.8% de los menores de 10 años y de los de 10 años y más, respectivamente, utilizaron algún remedio casero. En contraste, el 12.5% de los escolares menores de 10 años y cerca del 40.0% de los de 10 años y más manifestaron que no hicieron nada para controlar el dolor.

Los resultados de la Encuesta referida muestran un panorama general de la situación de salud en los escolares del nivel primaria y secundaria del país.

Cabe resaltar que la Encuesta de Salud en Escolares en México, 2008 (ENSE) permitió por primera vez en nuestro país, contar con información relacionada a la salud de los niños y de los adolescentes que asisten a escuelas públicas en México.

Además establece las bases para dirigir acciones generales para la prevención y promoción de la salud que fomenten el rendimiento escolar y la calidad de vida de la población escolarizada que son el futuro inmediato en nuestro país.

TERCERA.- Como lo refiere el legislador los problemas visuales y auditivos en los escolares interfieren con su habilidad de aprendizaje de manera efectiva. El aprendizaje eficiente requiere la integración de los sentidos, por lo que se han documentado que para obtener una optima formación académica es importante tener un proceso visual y auditivo eficiente y preciso.

Por lo que esta dictaminadora coincide en garantizar el Derecho Constitucional de la educación establecido en el art. 3, así como la inquietud manifestada por el promovente al querer proporcionar una educación de calidad para todos, por lo que se aprueba solicitar un informe a la Secretaria del ramo a fin de que proporcione las acciones que realizarán ante esta situación de salud en los niños.

Por las disposiciones antes mencionadas esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud un informe antes de que inicie el ciclo escolar 2010-2011 sobre las acciones que tomarán para reducir los casos de padecimiento auditivos en niños, y que este informe sea ampliamente difundido.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte y siete días del mes de julio del año dos mil diez.

DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO:

POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE LA TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE AL SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL DIRECTOR GENERAL DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL 11 Y AL DIRECTOR DEL ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES PARA QUE INFORMEN Y EXPLIQUEN LOS ALCANCES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ONCETV MÉXICO Y EL ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES.

DICTAMEN DE PUNTOS DE ACUERDO QUE CITAN A COMPARECER AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO A LOS DIRECTORES DE XEIPN CANAL 11, Y DEL ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES, EN RELACIÓN A LOS TÉRMINOS Y ALCANCES JURÍDICOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, ONCE TV MÉXICO, Y EL ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES.

TERCERA COMISION:
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fueron turnados para su estudio y elaboración del dictamen respectivo:

A. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores María del Socorro García Quiroz, Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo y Arturo Escobar y Vega, por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, al Director General de la estación de televisión XEIPN canal 11, Fernando Sariñana Márquez; y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, Alejandro Ordoño Pérez, para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales; y

B. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Carlos Sotelo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para citar a comparecer a los ciudadanos Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública y Director General del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen sobre los términos y alcances jurídicos del Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Politécnico Nacional, Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2010, los Senadores María del Socorro García Quiroz, Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo y Arturo Escobar y Vega, presentaron un punto por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, al Director General de la estación de televisión XEIPN canal 11, Fernando Sariñana Márquez; y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, Alejandro Ordoño Pérez, para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

2. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2010, el Senador Carlos Sotelo García, presento punto de acuerdo para citar a comparecer a los ciudadanos Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública y Director General del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen sobre los términos y alcances jurídicos del Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Politécnico Nacional, Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

3. Los puntos de acuerdo descritos anteriormente, fueron turnados a la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

4. Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estimamos procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

De los Senadores María del Socorro García Quiroz, Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo y Arturo Escobar y Vega:

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Gobernación, al C. Director General de la estación de televisión XEIPN Canal 11, Fernando Sariñana Márquez; y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, Alejandro Ordoño Pérez, para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, anunciado recientemente por el Presidente de la República; así como se les exhorta enviar a la brevedad el contenido íntegro de dicho convenio de colaboración firmado."

Del Senador Carlos Sotelo García:

"Primero. En el marco del principio de división de poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los ciudadanos Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública y Director General del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen en detalle sobre los términos y alcances jurídicos del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Politécnico Nacional, Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, el 12 de julio de 2010.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a las Direcciones Jurídicas de ambas Cámaras para que realicen un estudio a fondo del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Politécnico Nacional, Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, el 12 de julio de 2010, y en caso de considerarlo procedente propongan la interposición de la correspondiente controversia constitucional."

6. Las proposiciones en estudio sustentan lo siguiente:

De los Senadores María del Socorro García Quiroz, Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo y Arturo Escobar y Vega:

A. Que de acuerdo a la naturaleza jurídica y características de ONCETV, tenemos que la Ley Orgánica del IPN vigente, establece en su artículo 10 que "La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal" es un Órgano de Apoyo Dependiente del IPN, el cual a su vez depende de la Secretaría de Educación Pública, y se rige por esta Ley y demás disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.

B. Que con fecha 31 de marzo del 2010, se publicó el decreto de creación del organismo descentralizado denominado "Organismo Promotor de Medios Audiovisuales", con personalidad jurídica y patrimonio propio; el cual está sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Su objeto consiste en generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales, ya sea por sí mismo o coadyuvando con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como prestar el servicio de radiodifusión.

C. Que mediante comunicado oficial de la Presidencia de la República de fecha 12 de julio del presente, se informó la firma del convenio de colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, a través del cual se amplía la cobertura de ONCETV México.

D. Que no existe claridad en la naturaleza jurídica y objeto del convenio de colaboración firmado entre los dos entes mencionados.

Del Senador Carlos Sotelo García:

A. Que con la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales para presuntamente ampliar la señal del canal a ciudades como Guadalajara, Morelia, Veracruz, Los Mochis y Torreón, el Titular del Ejecutivo pretende concretar su estrategia de controlar y maniatar los medios de comunicación gubernamentales hoy existentes, para convertirlos en simples extensiones de la oficina de comunicación social de la Presidencia de la República.

B. Que el organismo descentralizado denominado "Organismo Promotor de Medios Audiovisuales" es totalmente dependiente del Poder del Ejecutivo, dada su naturaleza. Es creado sin una estructura orgánica que garantice la independencia editorial, la intención es que en su funcionamiento se convierta efectivamente en una extensión de las oficinas de comunicación social dependientes del Ejecutivo Federal e incorpore en esta dinámica a los medios gubernamentales existentes.

C. Que conforme a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; el artículo 10 de la misma Ley define la naturaleza jurídica del Canal Once como un órgano de apoyo dependiente del Instituto Politécnico Nacional. Y para que el Canal Once pudiera desincorporarse válidamente del IPN, tendría que darse una reforma a su Ley Orgánica.

CONSIDERANDOS

1. Que según la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, una institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación.

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con órganos de apoyo dependientes de él, como la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, cuya función sustancial, es la de difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y la idiosincrasia, respecto del extranjero.

Por ello, y en cumplimiento de una de las funciones del IPN, su Director General, en uso de sus atribuciones, podrá celebrar convenios de cooperación tecnológica, asesoría técnica, prestación de servicios y de intercambio de experiencias, con otros centros educativos, dependencias del gobierno Federal, entidades federativas, municipios y en general, con organismos de los sectores público, social y privado.

2. Por otro lado, el Gobierno Federal, publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2010, el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Cuyo objeto será la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal.

3. Por lo anterior, esta Comisión comparte la preocupación de los autores del punto de acuerdo, en el sentido de que se desconoce el contenido del Convenio, así como sus alcances y efectos jurídicos. Por ello, la razón de solicitar las comparecencias de los funcionarios competentes, para que expliquen el contenido y alcances de dicho Convenio en aras de satisfacer los objetivos públicos de transparencia y rendición de cuentas.

4. Esta Comisión estima pertinente señalar, que en entrevista del Subsecretario de Normatividad de Medios, de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, afirmó que *"el Canal Once seguirá perteneciendo al IPN, pero ahora tendrá una amplia posibilidad de llegar a más personas a través de la televisión abierta, que con el convenio, tendrá más cobertura con la misma calidad, con la misma independencia, con la misma vocación cultural que hoy por hoy tiene, simplemente va a enriquecer eso."*

5. Por todo, consideramos de suma importancia conocer el contenido, así como efectos y alcances jurídicos del Convenio de Colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, en razón de que en la actualidad los medios de comunicación constituyen herramientas indispensables para el cumplimiento de tan importante función social que desempeña el Instituto Politécnico Nacional.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Tercera Comisión de esta Representación Ciudadana, al Subsecretario de Normatividad de Medios de la

Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de esta, al Director General de la estación de televisión XEIPN Canal 11; y al Director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen y expliquen los alcances del convenio de colaboración entre ONCETV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, anunciado recientemente por el Presidente de la República.

Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobernación se sirva enviar a esta Soberanía, antes de la celebración de la comparecencia, el contenido íntegro de dicho convenio de colaboración firmado.

SEGUNDO.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva de la misma, concertar la comparecencia señalada en el punto primero a efecto de que esta se realice dentro de los diez días naturales siguientes a la aprobación de esta.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.

TERCERA COMISIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A APLICAR EL MARCO LEGAL VIGENTE EN TORNO A LA EXISTENCIA DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN QUE OPERAN SIN PERMISO Y/O CONCESIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, TAL COMO ES EL CASO ESPECÍFICO DE LA ESTACIÓN ILEGAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, UBICADA EN EL 102. 3 DE FM.

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE APLIQUEN EL MARCO LEGAL VIGENTE EN TORNO A LA EXISTENCIA DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN QUE OPERAN SIN PERMISO Y/O CONCESIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, TAL COMO ES EL CASO ESPECÍFICO DE LA ESTACIÓN ILEGAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, UBICADA EN EL 102.3 DE FM. ASIMISMO SE LES SOLICITA ENVIAR A LA BREVEDAD LAS CIFRAS OFICIALES Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE SE TENGAN RESPECTO DE DICHAS ESTACIONES ILEGALES.

TERCERA COMISION:
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que apliquen el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el Estado de Querétaro, ubicada en el 102.3 de FM; asimismo se les exhorta a enviar a la brevedad las cifras oficiales y demás especificaciones que se tengan respecto de dichas estaciones ilegales.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 21 de julio de 2010, la Senadora María del Socorro García Quiroz, presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que apliquen el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el Estado de Querétaro, ubicada en el 102.3 de FM; asimismo se les exhorta a enviar a la brevedad las cifras oficiales y demás especificaciones que se tengan respecto de dichas estaciones ilegales.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, dentro de sus facultades y atribuciones, apliquen el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102. 3 de FM; así como se les exhorta a enviar a la brevedad las cifras oficiales y demás especificaciones que se tengan respecto de dichas estaciones ilegales."

5. La proposición en estudio sustenta lo siguiente:

A. Que toda estación de radio o televisión tiene como condición previa, la existencia de una concesión o un permiso otorgado por autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Toda señal de radiodifusión que sea transmitida sin previa concesión o permiso, es ilegal.

B. Que el ilícito que se comete al establecer una estación radiodifusora "pirata" o ilegal es el "usar, aprovechar o explotar un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente". La ley que señala este supuesto es la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 150, la cual sanciona esta conducta con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo.

C. Que la Secretaría de Gobernación es competente para "Imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones y denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de esta ley". Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no es la única facultada para denunciar la comisión de este ilícito, ya que al no requerirse la presentación de una "querella", por ser el ofendido el interés público, este delito es perseguido de oficio, y cualquiera que tenga conocimiento del mismo puede denunciarlo.

D. Que no se conocen cifras oficiales de las estaciones de radio y televisión que operan en la ilegalidad, sin embargo se tiene conocimiento a nivel local en las comunidades, e inclusive a nivel autoridades, de la existencia y ubicación de las mismas, tal es el caso de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102.3 de FM (cuyos contenidos son de los llamados "brujos" quienes la manejan, sus contenidos hablados son sobre remedios, hechizos y de corte musical).

E. Que dicha estación ha sido denunciada ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Querétaro, denuncia que no ha sido ratificada por las autoridades que deben de tener el mayor interés en que este tipo de ilícitos se castiguen y dejen de afectar el interés público: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La participación de estas autoridades en la materia es sumamente importante, ya que, en el caso de la primera, es la facultada para llevar a cabo el cierre y aseguramiento de los bienes utilizados para la operación ilegal; y la segunda tiene la capacidad técnica y operativa para apoyar en la localización de su ubicación.

CONSIDERANDOS

1. Que respecto de las concesiones o permisos para el uso de los bienes, cuyo dominio directo le corresponde a la Nación, entre los que se encuentran las frecuencias para prestar servicios de radio y televisión, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado cuenta con las facultades para señalar las condiciones a las que deben sujetarse los particulares.

Esta Comisión Dictaminadora, considera que la comunicación a través de la radio y la televisión es una actividad de interés público, por lo cual, son servicios que deberán prestarse en las mejores condiciones tecnológicas, considerando que se trata de actividades que están dirigidas a resolver necesidades que tiene la población en las diversas regiones del país.

2. Se estima pertinente señalar que el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 2007-2012, entre sus objetivos están "*impulsar la ampliación de la cobertura de las redes públicas de telecomunicaciones, así como fomentar una mayor diversidad de servicios prestados por los diferentes operadores, a través de la modificación u otorgamiento de concesiones y permisos.*" Y "*promover el crecimiento de estaciones de radiodifusión de naturaleza educativa, cultural o indígena para incrementar la cobertura de estos servicios.*"

En este orden de ideas, una de las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es "*otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y servicios de comunicación inalámbrica por telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento remoto de datos, estaciones radio experimentales, culturales y de aficionados y estaciones de radiodifusión comerciales y culturales; así como vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas, servicios y estaciones;*"

Asimismo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, es la encargada de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para dictar sus resoluciones.

Es de mencionarse, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá practicar las visitas de inspección que considere pertinentes, a las estaciones. Dichas visitas tendrán por objeto comprobar que su operación se ajuste a la potencia, frecuencia, ubicación, normas de ingeniería y demás requisitos fijados en la concesión o el permiso, en la ley y los reglamentos, o para determinar si su servicio es satisfactorio y se presta con las especificaciones señaladas.

3. Así, para el otorgamiento de concesiones o permisos de las estaciones de radio, las autoridades competentes, en este caso las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, deberán otorgarlos de conformidad con la legislación vigente aplicable, y en caso, de que alguna concesión o permiso contravenga la Ley, podrán hacer uso de sus atribuciones, para aplicar las sanciones que correspondan.

4. Por ello, esta Comisión, coincide con la autora del punto de acuerdo en sus planteamientos, en el sentido de que si actualmente se encuentran operando estaciones de radio que no cumplen con los requisitos de Ley para su operación, además de estar violando los ordenamientos jurídicos correspondientes, estarían explotando un bien del dominio público, sin la retribución correspondiente y por tanto atentando contra la Nación.

5. La Comisión, se pronuncia a favor de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que en ejercicio de sus facultades, apliquen el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, dentro de sus facultades y atribuciones, apliquen el marco legal vigente en torno a la existencia de estaciones de radiodifusión que operan sin permiso y/o concesión de autoridad competente, tal como es el caso específico de la estación ilegal en el estado de Querétaro, ubicada en el 102. 3 de FM. Asimismo se les solicita enviar a esta Soberanía, en un término de quince días naturales a partir del día siguiente a la aprobación del presente punto, las cifras oficiales y demás especificaciones que se tengan respecto de dichas estaciones ilegales, de existir irregularidades, se dé el conocimiento necesario a la Procuraduría General de la República.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.

TERCERA COMISIÓN

EN TORNO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6 DE NACIONAL FINANCIERA, SNC., RELATIVO AL FONDO DE JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES FERROCARRILEROS JUBILADOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, ACTUALMENTE EN LIQUIDACIÓN.

DICTAMEN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6.

TERCERA COMISION:
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo:

A. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados Francisco Hernández Juárez, Rigoberto Salgado Vázquez, Enrique Torres Delgado y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011 incluya una partida para capitalizar el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.

B. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Silvio Lagos Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y aporte los recursos actuarialmente necesarios para cubrir el déficit financiero del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de junio de 2010, los Diputados Francisco Hernández Juárez, Rigoberto Salgado Vázquez, Enrique Torres Delgado y Armando Ríos Piter, presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011 incluya una partida para capitalizar el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.

2. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 21 de julio de 2010, el Diputado Silvio Lagos Galindo, presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atender las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación y aporte los recursos actuarialmente necesarios para cubrir el déficit financiero del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.

3. Dichos puntos de acuerdo fueron turnados a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

4. Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estimamos procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito, que a la letra señalan:

De los Diputados Francisco Hernández Juárez, Rigoberto Salgado Vázquez, Enrique Torres Delgado y Armando Ríos Piter:

> *"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2011 incluya una partida para capitalizar el Fideicomiso FerronalesJub 5012-6, a efecto de garantizar el pago de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación."*

Del Diputado Silvio Lagos Galindo:

> *"ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que atendiendo las recomendaciones que ha formulado la Auditoria Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados, dentro de las revisiones a la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2004 y 2007, aporte los recursos actuarialmente necesarios al patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC., relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en Liquidación, para cubrir su déficit financiero y de esta forma este Fondo esté en condición de cumplir con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones por el protegidas."*

6. Las proposiciones en estudio sustentan lo siguiente:

De los Diputados Francisco Hernández Juárez, Rigoberto Salgado Vázquez, Enrique Torres Delgado y Armando Ríos Piter:

> *A. Que Ferrocarriles Nacionales de México, ahora en liquidación, otorgaba a su personal un plan de jubilación de pensiones vitalicias que estaba plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.*
>
> *B. Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento del programa jubilatorio se constituye en Nacional Financiera, S.N.C., el Fideicomiso Ferronalesjub, con recursos que serían proporcionados por la venta de las empresas ferroviarias concesionarias. El patrimonio inicial del convenio ascendió a 13 mil 530 millones de pesos para 53 mil 348 jubilados en ese momento.*
>
> *C. Que la situación financiera del fideicomiso es crítica. Al 31 de diciembre de 2009 el fideicomiso contaba con sólo 3 mil 869 millones de pesos para cubrir sus obligaciones. De acuerdo a un estudio actuarial de diciembre de 2008, el valor presente de las obligaciones del fideicomiso asciende a 21 mil 800 millones 735 mil pesos. En caso de que el Gobierno Federal no cuente con recursos para fondear las*

obligaciones, para el año venidero no existirán recursos suficientes para enfrentar el pago de las obligaciones del fideicomiso.

D. Que el artículo 4º del Decreto por el que se extingue Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, establece que el Gobierno Federal debe garantizar el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Del Diputado Silvio Lagos Galindo:

A. Que el artículo 4º del Decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, así como con el artículo quinto transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que señala la obligación a las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de dicha Ley, de no afectar los derechos de jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

B. Que el Gobierno Federal a fin de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, aportó conforme a los estudios actuariales realizados los recursos económicos necesarios para que Ferrocarriles Nacionales de México constituyera, mediante contrato de fecha 19 de noviembre de 1997, el Fideicomiso FERRONALESJUB número 5012-6 ante Nacional Financiera, S.N.C., modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el Fondo de Jubilaciones.

C. Que el monto de los recursos del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 eran suficientes para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

D. Que de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso, en el marco de la revisión a la Cuenta Pública relativa a los ejercicios fiscales 2004 y 2007 se formularon por dicha instancia fiscalizadora recomendaciones al Fideicomitente Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación y al Gobierno Federal, este último como garante permanente de que el Fondo de Jubilaciones en cuestión cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo y se aporten al fideicomiso los recursos necesarios, para cubrir el déficit financiero que presentaba su patrimonio.

CONSIDERANDOS

1. Que derivado de la reforma en 1995, al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo por objeto sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Dicha Ley establece que los particulares podrán operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria y prestar el servicio público de transporte ferroviario, mediante concesión y que Ferrocarriles Nacionales de México continuaría administrando y operando los ferrocarriles mexicanos, y que en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, otorgará concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas.

Es por lo anterior, que en el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, S.N.C., un fideicomiso, que se denominó FERONALESJUB 5012-6 con una aportación inicial de 13,529.75 millones de pesos. Fideicomiso que tiene como finalidad, garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados.

2. Como parte de dicho proceso de reestructuración, el 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, en el que se establecen una serie de disposiciones, a través de las cuales se llevará a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.

Es de suma importancia para esta Tercera Comisión, señalar que en el artículo 4º, y el Segundo Transitorio de dicho Decreto, se establece lo conducente a los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, que a la letra señalan:

> *"Artículo 4o.- Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la Ley, serán respetados. En toda época, el Gobierno Federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente."*
>
> *"Segundo.- El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial."*

3. Esta Comisión Dictaminadora coincide con los autores de los puntos de acuerdo, en el sentido de que el Fideicomiso FERONALESJUB 5012-6, debe garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados, y para ello, deberá contar los recursos suficientes para cumplir con su finalidad y así salvaguardar los derechos de los trabajadores en cuestión.

Ante tal situación, resulta preocupante que el Fideicomiso no cuente con los recursos suficientes para cumplir con su obligación, como lo han afirmado los autores de las propuestas, porque afectaría los derechos que tienen los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, de recibir su pago.

4. Es importante señalar, que como resultado de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, al Fideicomiso FERONALESJUB 5012-6, determinó dos recomendaciones *"de naturaleza preventiva y que deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación."*

Al respecto, es conveniente especificar las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación:

> *"Se recomienda que Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, realice las acciones que se requieran ante las instancias correspondientes, para que se lleve a cabo un inventario de los activos remanentes de su propiedad susceptibles de enajenarse, previo avalúo, a fin de que los recursos líquidos que se obtengan estén disponibles para atender la situación deficitaria que previsiblemente tendrá el fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB. Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión."*
>
> *"Se recomienda que Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, fideicomitente del fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB realice periódicamente a través del Comité*

Técnico de ese fideicomiso, los estudios actuariales que sean necesarios para determinar un posible déficit del patrimonio fideicomitido para cubrir a los fideicomisarios o sus beneficiarios los conceptos previstos en el contrato, y con esta base prever un programa de restitución de los capitales constitutivos faltantes para afrontar el déficit estimado, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima octava, tercer párrafo, del convenio modificatorio. Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión."

5. La Comisión Dictaminadora, estima conveniente, que el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC., atienda las recomendaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación, para recobrar recurso líquido y así estar en condiciones de cumplir con su principal función que es la de realizar el pago a los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México.

Debemos recordar, que en todo caso el Gobierno Federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, según lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atienda las recomendaciones que ha formulado la Auditoria Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados, dentro de las revisiones a la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2004 y 2007. Asimismo a que aporte los recursos actuarialmente necesarios al patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC., relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en Liquidación, para cubrir su déficit financiero y de esta forma este Fondo esté en condición de cumplir con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones por el protegidas.

De la atención al presente punto de acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará llegar un informe a esta representación soberana, en un término de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su aprobación.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.

TERCERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE COORDINEN ESFUERZOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA CANALIZAR LOS APOYOS NECESARIOS Y ATENDER LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA ONDA TROPICAL NÚMERO 12, QUE HA PROVOCADO DAÑOS EN LAS REGIONES COSTA Y SOCONUSCO DE DICHA ENTIDAD.

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A QUE COORDINEN LOS ESFUERZOS NECESARIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA ONDA TROPICAL NÚMERO 12, QUE HA PROVOCADO DAÑOS EN LA RED CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CULTIVOS EN LAS REGIONES COSTA Y SOCONUSCO DE DICHA ENTIDAD.

TERCERA COMISION:
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que coordinen los esfuerzos necesarios con el Gobierno del Estado de Chiapas para atender las afectaciones causadas por la onda tropical número 12, que ha provocado daños en la red carretera, caminos rurales y cultivos en las regiones Costa y Soconusco de dicha Entidad.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2010, la Senadora María Elena Orantes López, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que coordinen los esfuerzos necesarios con el Gobierno del Estado de Chiapas para atender las afectaciones causadas por la onda tropical número 12, que ha provocado daños en la red carretera, caminos rurales y cultivos en las regiones Costa y Soconusco de dicha Entidad.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a los titulares de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que coordinen esfuerzos con el Gobierno del Estado de Chiapas para canalizar los apoyos necesarios y atender las afectaciones causadas por la Onda Tropical número 12, que ha provocado daños en la red carretera, caminos rurales y cultivos en las regiones Costa y Soconusco de dicha entidad."

5. La proposición en estudio sustenta lo siguiente:

A. Que las intensas lluvias ocasionadas por la Onda Tropical número 12 ocurridas en estos últimos días, han provocado daños en la red carretera, en caminos rurales, así como en los cultivos de las regiones Costa y Soconusco, en el Estado de Chiapas.

B. Que las autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas han comenzado a realizar recorridos de inspección de las zonas afectadas y de la condición actual de los ríos de la región, a fin de tomar las decisiones adecuadas para salvaguardar la integridad de las familias en la región.

C. Que el Gobierno del Estado de Chiapas tiene contemplado además, evaluar los riesgos para las familias de la zona, elaborar un proyecto que resuelva de manera definitiva el riesgo causado por los constantes deslizamientos de laderas.

D. Que las contingencias climatológicas han causado en diversas ocasiones severos daños a la infraestructura básica de diversas comunidades en el Estado de Chiapas, ya que muchas de ellas se encuentran vulnerables a las inclemencias del tiempo, debido entre otras cosas, a la marginación y las condiciones de sobreexplotación de bosques y selvas que forman una barrera natural a la hora de que diversos meteoros tocan tierra en las costas, lo que provoca desgajamientos por el reblandecimiento de la tierra.

CONSIDERANDOS

1. La Comisión Dictaminadora coincide con la propuesta de la autora del punto de acuerdo, en razón de que el inició de la temporada de lluvias ha ocasionado severos daños, no sólo en el Estado de Chiapas, sino también en muchos más de la República Mexicana. Las afectaciones se han dado sobre todo en la infraestructura carretera, caminos rurales, viviendas y cultivos.

El boletín meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua, manifestó que la Onda Tropical 12 *"podría causar precipitaciones intensas para el estado de Chiapas, que por tal motivo el Sistema Estatal de Protección Civil, mantiene un alertamiento por lluvias en toda la Entidad para que se mantengan los monitoreos correspondientes a través de las Unidades Municipales de Protección Civil y Supervisiones Regionales. Adicionalmente se emitieron recomendaciones a la población consistentes en mantenerse al pendiente de las lluvias en sus propias localidades, alejarse de cauces de ríos o de zonas inundadas, acudir a un refugio temporal si es necesario así como, mantenerse al pendiente de los medios de comunicación donde se emitirán los avisos de las autoridades."*

2. Por su parte, Protección Civil estatal indicó que *"las lluvias de los últimos días causaron más de 79 derrumbes que dejaron incomunicadas o inundadas al menos nueve comunidades."*

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que las lluvias registradas en las últimas horas en Chiapas, han causado afectaciones en algunos tramos pertenecientes a cuatro carreteras federales. En entrevista, el Director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Ernesto Jáuregui Asomoza, dijo que *"la infraestructura carretera federal ha sufrido derrumbes y escurrimientos de material arcilloso. Añadió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja para el total restablecimiento de la comunicación terrestre en la entidad."*

En lo relacionado a cultivos, Jorge Ventura Aquino, Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dijo que los cultivos de maíz, frijol, soya, caña de azúcar y plátano son los primeros afectados por las intensas lluvias que se han presentado en la región Costa de la entidad. Añadió, que *"una vez que se cuente con el padrón de productores y superficies elegibles afectadas, se realizarán las gestiones necesarias para la entrega de apoyos los más pronto posible de acuerdo a la normatividad vigente del Programa de Apoyos a Contingencias Climatológicas, destinado al sector agropecuario y pesquero."*

Añadió que *"el objetivo del programa es apoyar a productores de bajos ingresos que no cuentan con servicios de aseguramiento público o privado; para reincorporarlos a sus actividades productivas ante la ocurrencia de fenómenos climatológicos como huracanes y/o ciclones, sequía e inundación que afecten a las unidades de producción de la población rural y pesquera."*

3. Frente a esto, es de mencionarse que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, tiene atribuciones en materia de protección civil, como:

"Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;

Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Protección Civil para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones."

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe *"construir y conservar caminos y puentes federales por sí, o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los particulares."*

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ejercicio de sus atribuciones deberá *"promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores*."

4. Esta Comisión, coincide con la autora del punto de acuerdo, en la conveniencia de solicitarles a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en el ejercicio de sus atribuciones, y reforzando sus acciones ya

emprendidas, coordinen esfuerzos con el Gobierno del Estado de Chiapas para canalizar los apoyos necesarios y atender las afectaciones causadas por la Onda Tropical número 12.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que coordinen esfuerzos con el Gobierno del Estado de Chiapas para canalizar los apoyos necesarios y atender las afectaciones causadas por la Onda Tropical número 12, que ha provocado daños en la red carretera, caminos rurales y cultivos en las regiones Costa y Soconusco de dicha Entidad.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.

TERCERA COMISIÓN

POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INFORME DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE LAS SIERRAS MIXTECA, NORTE Y NEGRA DEL ESTADO DE PUEBLA.

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A QUE DESARROLLEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE TRAMOS CARRETEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN LAS SIERRAS MIXTECA, NORTE Y NEGRA DEL ESTADO DE PUEBLA.

TERCERA COMISION:
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, activen un programa de prevención y mitigación de desastres naturales, así como la implementación de proyectos de rehabilitación y mejoras de tramos carreteros que se encuentran en zonas de alto riesgo en las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2010, la Diputada María del Carmen Izaguirre Francos, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes, a que activen un programa de prevención y mitigación de desastres naturales, así como la implementación de proyectos de rehabilitación y mejoras de tramos carreteros que se encuentran en zonas de alto riesgo en las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

"Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobernación, para que a través del área de Protección Civil, informe de los programas y proyectos de prevención y mitigación de los sitios peligrosos en las zonas de alto riesgo de las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla. En dicho documento señalará los convenios de coordinación que se hayan suscrito con el Estado de Puebla, en materia de prevención y atención de desastres naturales para enfrentar la temporada de lluvias de este año 2010.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fortalecer los mecanismos de prevención y mitigación de los desastres naturales en la zona de alto riesgo del Estado de Puebla, suministrando la asignación de los recursos que se requieran del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Segundo.- Se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe sobre los programas, proyectos y estudios técnicos de rehabilitación y mejora de los tramos carreteros ubicados en las zonas de alto riesgo ubicadas en las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla, y en caso de no contar con ellos, proceder al diseño y ejecución de los mismos. Así como, se exhorta al área correspondiente de mencionada secretaria, a que implemente una participación coordinada entre las autoridades estatales y municipales del Estado de Puebla, para enfrentar con prontitud, rapidez, y eficacia, cualquier contingencia que se presente en el Estado con motivo de un desastre natural."

5. La proposición en estudio sustenta lo siguiente:

A. Que el huracán Alex, ocasionó severos daños en las entidades federativas de Nuevo León, y Tamaulipas, así como, las intensas lluvias han ocasionado daños al estado de Coahuila, dejando pérdidas incontables.

B. Que con respecto al Estado de Puebla, es preciso señalar que las Sierras Negra, Mixteca y Norte cuentan con zonas de alto riesgo.

C. Que los desastres naturales de este tipo pueden ser prevenidos si las autoridades gubernamentales de nivel federal se coordinaran con las autoridades locales y municipales para implementar una estrategia de prevención de desastres que atienda con prioridad las advertencias de las poblaciones cercanas a las zonas sobre la identificación de sitios de riesgo y determinar los lugares prioritarios para atenderlos técnicamente mediante la detección del tipo de falla geológica y la mecánica de suelos.

CONSIDERANDOS

1. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos y propuestas de la autora del punto de acuerdo, en razón de que el inicio de la temporada de lluvias ha ocasionado severos daños, no sólo a la infraestructura carretera, sino también a viviendas y afectaciones en zonas de muy alto riesgo como lo son las Sierras Mixteca, Negra y Norte del Estado de Puebla.

Dichas zonas de alto riesgo han sido consideradas así por la inestabilidad que las caracteriza así como por los deslaves ocasionados por las lluvias. Se puede citar lo ocurrido en 2009, durante la temporada de lluvias en Puebla, que fue una de las más trágicas en los últimos años al registrarse doce muertos, así como más de 500 casas afectadas, lo que ocasionó al menos 2 mil damnificados, según la Secretaría de Gobernación.

2. Con las fuertes lluvias de los últimos días, se han generado daños en distintos puntos de la carretera de la Sierra norte y en la Sierra negra del Estado de Puebla, según lo informó Sergio Sánchez Rivera, Subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatal.

Asimismo, el Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla y la Comisión Nacional del Agua alertaron sobre el riesgo que viven por lluvias 6 mil familias en las regiones de la Sierra Norte, Nororiental, Negra y la Mixteca poblana, por lo que sugirieron a las autoridades locales y comités de Protección Civil, adoptar medidas de prevención ante la temporada de lluvias y huracanes que se enfrentarán de mayo a noviembre, indicaron.

3. Frente a esto, es de mencionarse que la Secretaría de Gobernación en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones en materia de protección civil, como:

"XXIV. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;"

Dicha Secretaría cuenta con una Coordinación General de Protección Civil, la cual tiene como misión: *"Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Protección Civil para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones."* Y sus atribuciones en materia de prevención son:

"Proponer e impulsar el establecimiento de un marco legal que dé sustento a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en casos de desastre;

Promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la acción, peligros, riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, propiciando la formación de nuevos grupos de investigación en los tres órdenes de gobierno;

Impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Información para la Protección Civil, para facilitar a las autoridades e instituciones competentes la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en la prevención de desastres;

Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y con base en la suscripción de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o delegaciones, así como con instituciones de carácter social y privado;

Promover con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a sustentar los mecanismos de prevención, auxilio y apoyo;"

4. También es conveniente señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene entre sus atribuciones establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, *"construir y conservar caminos y puentes federales por sí, o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los particulares, o bien otorgar concesiones o permisos."*

5. De lo anteriormente señalado, se puede afirmar que tanto las autoridades federales, como locales y municipales tienen las atribuciones, ya sea por sí o en coordinación, para programas y proyectos de prevención y mitigación de los sitios peligrosos en las zonas de alto riesgo de las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla, así como los programas, proyectos y estudios técnicos de rehabilitación y mejora de los tramos carreteros ubicados en dichas zonas.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Coordinación General de Protección Civil, informe de los programas y proyectos de prevención y mitigación en las zonas de alto riesgo de las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla. En dicho documento señalará los convenios de coordinación que se hayan suscrito con el Estado de Puebla, en materia de prevención y atención de desastres naturales para enfrentar la temporada de lluvias de este año 2010.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, fortalezcan los mecanismos de prevención y mitigación de los desastres naturales en la zona de alto riesgo del Estado de Puebla, suministrando con prontitud los recursos que puedan requerirse, cuando así sea el caso, del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta Soberanía sobre los programas, proyectos y estudios técnicos de rehabilitación y mejora de los tramos carreteros ubicados en las zonas de alto riesgo ubicadas en las Sierras Mixteca, Norte y Negra del Estado de Puebla, y en caso de no contar con ellos, proceder al diseño y ejecución de los mismos. Así como, se exhorta al área correspondiente de la mencionada Secretaría, a que implemente una participación coordinada entre las autoridades estatales y municipales del Estado de Puebla, para enfrentar con prontitud, rapidez, y eficacia, cualquier contingencia que se presente en el Estado con motivo de un desastre natural.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de julio de dos mil diez.

TERCERA COMISIÓN

CONTINÚA TOMO II


Programa de Austeridad y Protección del Medio Ambiente
El Senado de la República usa papel reciclado y el papel de desecho lo dona para la elaboración de libros de texto gratuito
SENADO DE LA REPÚBLICA